

TeseoPress (Buenos Aires).

Mercado de trabajo, políticas sociales y condiciones de vida. La reproducción de los hogares en la Argentina (2003-2014).

Santiago Poy Piñeiro.

Cita:

Santiago Poy Piñeiro (2019). *Mercado de trabajo, políticas sociales y condiciones de vida. La reproducción de los hogares en la Argentina (2003-2014)*. Buenos Aires: TeseoPress.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/santiago.poy/43>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pPhP/Cak>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Lista de siglas

AAFF	Asignaciones Familiares
AFIP	Administración Federal de Ingresos Públicos
AFJP	Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
AME	Average Marginal Effects (Promedio de Efectos Marginales)
ANSES	Administración Nacional de la Seguridad Social
AUE	Asignación Universal por Embarazo
AUH	Asignación Universal por Hijo
CBA	Canasta Básica Alimentaria
CBT	Canasta Básica Total
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
DCS	Déficit de capacidades de subsistencia
DCS-L	Déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales
ENAPROSS	Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social
EPH	Encuesta Permanente de Hogares
ICE	Inversa del Coeficiente de Engel
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
IPC	Índice de Precios al Consumidor
ISI	Industrialización por Sustitución de Importaciones.
ITF	Ingreso total familiar
ITF-L	Ingreso total familiar de fuente laboral
JYP	Jubilaciones y Pensiones
MTEYSS	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
OEDE	Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial
PASD	Programas de asistencia social directa
PFIS	Plan Familias por la Inclusión Social
PIB	Producto Interno Bruto
PIP	Plan de Inclusión Previsional
PJJHD	Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
PPD	Programas de protección al desempleo
PPP	Programas de Protección contra la Pobreza
PRIST-AT	Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”
PROGRESAR	Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina
PSH	Principal Sostén del Hogar
SCE	Seguro de Capacitación y Empleo
SIJP	Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
SIPA	Sistema Integrado Previsional Argentino
SMVM	Salario Mínimo, Vital y Móvil

Presentación

Este libro constituye la publicación de mi tesis doctoral realizada en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), defendida y aprobada en noviembre del 2018. La preparación del manuscrito implicó hacer algunas modificaciones menores a la redacción original, con la intención de aligerar la lectura e incorporar los señalamientos realizados por el jurado durante la defensa. Agradezco a la Facultad de Ciencias Sociales (en especial a la Secretaría de Estudios Avanzados) y a la Editorial Teseo esta posibilidad de publicación

La investigación de la cual resulta la tesis se interesó por los procesos recurrentes de empobrecimiento que atraviesan al capitalismo periférico argentino. El objetivo general es describir los modos de participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional y en los sistemas de política social, y evaluar sus cambios durante la posconvertibilidad en la Argentina (2003-2014). Al estudiar conjuntamente la participación en los mecanismos de distribución primaria y secundaria del ingreso, la investigación se propuso contribuir al estudio de las transformaciones en los modos de reproducción socioeconómica de los hogares –en particular, de los más vulnerables– y aportar evidencias acerca de las rearticulaciones verificadas en la relación entre la “heterogeneidad estructural” y las formas de intervención social del Estado en la Argentina. Recogiendo una tradición basada en el estructuralismo y el pensamiento crítico latinoamericano, consideramos que este análisis permite evaluar el grado en que las sociedades periféricas consiguen superar dinámicas estructurales generadoras de exclusión social.

El libro reúne evidencias que indican que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional, los procesos de segmentación del mercado de trabajo y la dinámica de la marginalidad económica constituyen instancias estrechamente asociadas con una pauta relativamente rígida de desigualdad sociolaboral. Esta pauta condiciona las capacidades de reproducción de los hogares e inhibe la convergencia socioeconómica: mientras que una parte de los hogares argentinos participa de sectores económicos dinámicos y mercados regulados, otra amplia franja permanece ligada a ocupaciones en microunidades, sin protección laboral y con ingresos que, o bien no garantizan la satisfacción de necesidades, o bien los dejan expuestos al riesgo de no hacerlo. Este aspecto estructural constituye un factor crucial para comprender los procesos recurrentes de empobrecimiento que atraviesan a la sociedad argentina: las fases de estancamiento y las abruptas contracciones económicas, encuentran a

una amplia franja de hogares muy cerca del límite de la pobreza. Si bien la investigación revela que la política social adquiere creciente relevancia en la cobertura de los hogares peor posicionados en la estructura económico-ocupacional y los ingresos por transferencias constituyen un nuevo componente de su balance reproductivo, en condiciones de baja integración económica sistémica (derivada de la heterogeneidad estructural), la política social no es suficiente para garantizar la convergencia en las condiciones de vida.

Agradezco a las instituciones académicas que contribuyeron a esta investigación. La tesis fue posible gracias al sistema de becas internas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Agradezco al Programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA por la oportunidad de acceder a la formación doctoral. La tesis fue realizada en el marco del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (de la Universidad Católica Argentina) y se inscribe en el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social (del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires), ambos bajo la dirección académica de Agustín Salvia. Quiero agradecer al Observatorio de la Deuda Social, por brindarme un espacio de formación e investigación y un lugar apropiado donde realizar mis actividades cotidianas, a mis compañeros de trabajo y, muy especialmente, a Agustín Salvia, quien fue director de la tesis. Por último, parte de la tesis se benefició de las estancias de investigación en el *Centre for Enterprise and Economic Development Research* (CEEDR) de *Middlesex University* (Reino Unido) y en el *Grup de Recerca en Educació i Treball* (GRET), de la Universitat Autònoma de Barcelona (España), en el contexto de la Red INCASI, un proyecto europeo financiado por el programa “Horizon 2020” de la Unión Europea bajo la coordinación de Pedro López-Roldán.

Introducción

Para decirlo de modo muy directo: la pobreza, en América Latina, es en gran medida expresión de la desigualdad, de la alta concentración del ingreso en capas minoritarias de la sociedad. Sin embargo, esta asociación fundamental (...) entre pobreza y desigualdad está sospechosamente ausente de muchos de los diagnósticos sobre la pobreza; tal vez porque (...) obliga a reconocer que una estrategia eficaz de superación de la pobreza exige cambios y transformaciones mucho más profundos que la puesta en práctica de unas cuantas acciones específicas. (Vuskovic, 1993: 12)

Presentación

En la Argentina, los niveles, las tendencias y los factores asociados a los procesos de empobrecimiento y a la desigualdad de las condiciones de vida suscitan amplio interés y despiertan intensos debates en el ámbito académico y en la esfera pública. Un elemento que aviva este interés surge de la constatación de un particular proceso cíclico que, bajo cambiantes escenarios sociopolíticos, parece producir y reproducir niveles de empobrecimiento más elevados que los que se habían logrado alcanzar hace cuatro décadas, durante el modelo de industrialización sustitutivo de importaciones (ISI)¹. En este libro consideramos relevante tratar de comprender algunos de los factores estructurales que explican este singular derrotero y su variabilidad histórica.

Durante la primera década de los años 2000, en el marco de un fuerte crecimiento económico ligado a un escenario mundial favorable, tanto en la Argentina como en la mayor parte de los países de América Latina disminuyó la desigualdad distributiva y se recompusieron las condiciones de vida, lo que se tradujo en la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Esta evolución contrasta con lo ocurrido durante gran parte de los noventa, cuando las políticas de ajuste fiscal y reforma estructural condujeron –con notorias diferencias según los países– a un amplio deterioro socioeconómico y a un incremento de las desigualdades².

¹ Las cifras comparables exhiben dos rasgos: por un lado, un incremento tendencial de la proporción de personas bajo la línea de pobreza y, por otro lado, expansiones súbitas asociadas a crisis severas. En 1974, durante el mejor momento distributivo de la ISI, 4,4% de los habitantes del Gran Buenos Aires eran pobres. Durante la década siguiente, el índice nunca fue inferior a 14%; incluso, en la crisis de 1989, alcanzó al 47,3% de la población. En los noventa, tras una importante recuperación, la proporción de personas bajo la línea de pobreza no fue inferior al 17%; en el 2002, luego de la crisis, trepó al 54,3%. Entre el 2003 y el 2014, si bien se verificó una nueva recomposición, la incidencia de la pobreza no cayó por debajo del 17%. La serie de datos y las fuentes empleadas para su construcción se exhiben en el capítulo I.

² Si bien existieron diferencias según los países, de acuerdo con los datos del banco estadístico de CEPAL, el coeficiente de Gini en la región (como promedio ponderado) pasó de 0,563 en 1990 a 0,506 en 2015. Por su parte, la tasa de pobreza se redujo de 46,2% a 28% en el mismo lapso (véase: <<http://estadisticas.cepal.org>>).

¿Interrumpe este nuevo ciclo de crecimiento, entonces, la tendencia prevaleciente? ¿Acaso alcanzó la región –y nuestro país– un sendero de desarrollo capitalista virtuoso capaz de promover mayores niveles de convergencia económica e integración social?

Desde una perspectiva ortodoxa, se argumenta que las reformas implementadas durante la década previa habrían cimentado el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y de la desigualdad. La apertura a la inversión extranjera y al comercio internacional habrían permitido aprovechar las oportunidades brindadas por el mercado mundial a los países con ventajas comparativas en recursos naturales. La expansión educativa y la difusión tecnológica habrían reducido las primas salariales de los trabajadores más calificados. De este modo, las sociedades latinoamericanas se habrían tornado más fluidas y se habría incrementado el peso de las clases medias. Asimismo, una serie de nuevas políticas sociales estarían permitiendo garantizar las funciones de cohesión que el mercado no logra alcanzar (Birdsall, Lustig y McLeod, 2010; De Ferranti et al., 2003; Ferreira et al., 2013; López-Calva y Lustig, 2010; Lustig, López-Calva y Ortiz-Juárez, 2012; Perry et al., 2006).

Por otra parte, desde el enfoque neodesarrollista latinoamericano se señala que la performance socioeconómica alcanzada por la región también se habría fundado en el esfuerzo puesto en alcanzar el superávit fiscal y promover las exportaciones. Asimismo, habría jugado un papel relevante la mayor orientación de los recursos hacia la inversión en infraestructura, la promoción del mercado interno y de los sistemas de innovación. Finalmente, también se subraya la relevancia adquirida por el gasto público social, no sólo en educación y salud, sino en materia de pensiones y transferencias condicionadas a los grupos vulnerables (Bárcena y Prado, 2016; Cecchini et al., 2015; CEPAL, 2010, 2011, 2014; Filgueira, 2015; Infante y Gerstenfeld, 2013; Ocampo y Gómez-Arteaga, 2017).

A partir de una perspectiva crítica hacia ambas posturas, y apoyándonos en las contribuciones teóricas del estructuralismo clásico y del pensamiento crítico latinoamericano, este libro se organiza en torno a algunas preguntas de investigación acerca del caso argentino reciente: ¿qué capacidad tuvo la dinámica de crecimiento bajo políticas heterodoxas³ para promover cambios sustantivos en los patrones de desigualdad emergentes de la “heterogeneidad estructural”⁴ de los mercados de trabajo? ¿Qué rol desempeñaron las “políticas sociales”⁵ – dadas las condiciones socio-ocupacionales y productivas vigentes– sobre las capacidades de

³ Utilizamos la noción de “políticas heterodoxas” en el sentido que propusimos en investigaciones previas, al incluir “las políticas ‘neo-desarrollistas’ de reactivación y pro-mercado interno” (Salvia, Poy y Vera, 2017: 225) implementadas a partir de la salida del régimen de convertibilidad cambiaria. El término se propone enfatizar el contraste entre las reglas macroeconómicas de los años 2000 y las vigentes en los noventa.

reproducción económica de las unidades domésticas, en especial, de las más vulnerables? En suma, ¿de qué modos se rearticuló la relación entre heterogeneidad estructural –con sus implicaciones sobre la desigualdad sociolaboral– e intervención social del Estado –en tanto mecanismo de redistribución y regulación social– con respecto a las condiciones de reproducción y el nivel de vida de las unidades domésticas?

De acuerdo con la evidencia disponible, el crecimiento económico experimentado durante la “posconvertibilidad”⁶ –período que coincide, casi en su totalidad, con los gobiernos kirchneristas– habría dependido estrechamente de la expansión de un sector exportador especializado, concentrado y con rasgos extractivos, antes que de un desarrollo endógeno equilibrado (Castells y Schorr, 2015; Félix, 2015; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; Piva, 2015; Svampa y Viale, 2014; Wainer, 2017; Wainer y Schorr, 2014a, 2014b, 2015). En ausencia de un cambio estructural de la matriz económico-productiva, un modelo de estas características puede reproducir la concentración del progreso técnico y la existencia de brechas socio-productivas entre sectores y segmentos laborales.

En este sentido –sin desconocer las mejoras advertidas en diversos indicadores socioeconómicos–, desde el enfoque teórico propuesto sostenemos como tesis central que el crecimiento económico puede resultar insuficiente para disolver las desigualdades en las condiciones de reproducción de las unidades domésticas en tanto no se modifique el patrón de especialización y concentración productiva, el desarrollo desigual y se mantenga la heterogeneidad estructural. Incluso en un marco de alto crecimiento, políticas sociales activas y un mayor esfuerzo económico-reproductivo de las unidades domésticas, el patrón de heterogeneidad estructural impondría límites a tales procesos de convergencia social. De acuerdo con este enfoque, la “distribución primaria” condicionaría estrechamente a la “distribución secundaria”⁷ tanto en términos de recursos como de resultados, aun

⁴ El concepto de “heterogeneidad estructural”, propuesto por el estructuralismo latinoamericano (Pinto, 1976; Prebisch, 1967 [1963], 1984 [1981]) remite a la existencia de ostensibles brechas de productividad en la estructura económica. En este libro recogemos la centralidad de esta noción para comprender las transformaciones de la estructura social en la fase abierta tras las reformas neoliberales (Salvia, 2007, 2012, 2015).

⁵ Seguimos la distinción propuesta por Danani (2009) entre dos formas principales de la intervención social del Estado: la “política laboral” y la “política social”. Ésta moldea las condiciones de vida de distintos grupos mediante la distribución secundaria del ingreso (Danani, 2009: 31-32).

⁶ Apelamos al término “posconvertibilidad”, ampliamente difundido en la literatura especializada (v.g., Félix y Pérez, 2007; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; Lindenboim y Salvia, 2015, entre otros), para referirnos al período político-económico abierto tras la salida del régimen de convertibilidad (que se había instalado durante los noventa).

considerando las externalidades que los mecanismos de redistribución pueden implicar para los hogares más vulnerables en términos socio-ocupacionales.

El *objetivo general* de la investigación es describir los modos de participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional y en los sistemas de política social, y evaluar sus cambios durante el ciclo de políticas heterodoxas en la Argentina (2003-2014). A partir del estudio articulado de la participación en los mecanismos de distribución primaria y secundaria del ingreso, nos proponemos contribuir al estudio de las transformaciones en los modos de reproducción socioeconómica de las unidades domésticas y aportar nuevas evidencias acerca de las rearticulaciones verificadas en la relación entre heterogeneidad estructural y las formas de intervención social del Estado en la Argentina con respecto a las condiciones de vida.

Entendemos que la perspectiva propuesta –centrada en la reproducción económica de las unidades domésticas⁸– constituye una “ventana estratégica” para abordar una serie de cambios más generales de la relación entre heterogeneidad estructural y política social: desde allí podemos observar simultáneamente procesos económico-ocupacionales y los efectos distributivos y de bienestar que introduce la intervención social del Estado. Esta articulación invita a develar la existencia de distintos patrones de reproducción que permanecen o se modifican a la luz del peso diferencial que adquieren los dos mecanismos básicos de obtención de ingresos de los que disponen las unidades domésticas –el mercado de trabajo y las transferencias del sistema de política social–; en especial, entre los hogares más vulnerables desde el punto de vista socio-ocupacional. Asimismo, nos permite considerar los comportamientos o “mediaciones” que los propios integrantes de las unidades domésticas despliegan con el propósito de optimizar sus condiciones de vida.

La *hipótesis general* es que la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación –y su correlato en la incapacidad de los sectores más dinámicos de la economía para absorber al conjunto de la fuerza de trabajo– habría dado lugar a dinámicas persistentes de desigualdad económico-ocupacional y de exclusión o marginalidad, con amplias consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica y el bienestar material de los hogares, restringiendo los procesos de convergencia socioeconómica entre el 2003 y el 2014. Sin embargo, estas

⁷ Recurrimos a esta habitual distinción entre distribución “primaria” y “secundaria” con fines analíticos. La primera remite a la distribución del ingreso relacionada con el proceso de producción y los comportamientos de mercado. La segunda se vincula con la acción redistributiva estatal (Danani, 2009; Isuani, 1991).

⁸ Las “unidades domésticas” son entendidas como un grupo de personas, unidas o no por lazos de parentesco, que organizan en común su reproducción cotidiana. Para facilitar la exposición, utilizaremos los conceptos de “unidad doméstica”, “hogar” y “grupo familiar” como sinónimos, pese a que reconocen distintos referentes empíricos. Un detalle de los alcances de cada concepto y de sus diferencias se ofrece en el capítulo II.

dinámicas no habrían impactado de forma directa sobre las condiciones de vida debido a una mediación, de relevancia variable según el momento político-económico del ciclo, de la política social y de los propios comportamientos microsociales de los hogares. Tales elementos habrían desempeñado un papel compensador –aunque limitado, dadas las condiciones estructurales prevalecientes– sobre las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas.

Mediante el tratamiento de esta hipótesis, nos proponemos aportar herramientas analíticas y nuevas evidencias empíricas a la discusión sobre los factores estructurales que organizan la desigualdad de las condiciones de vida de las unidades domésticas, específicamente de aquellos relativos a la configuración de los mercados de trabajo en una formación social periférica como la argentina. Asimismo, aspiramos a identificar la capacidad que tiene la intervención social estatal, en las condiciones estructurales vigentes, para incidir sobre esa pauta de desigualdad y propender a una mayor convergencia socioeconómica⁹.

Herramientas teóricas y antecedentes empíricos

La investigación científica construye sus objetos mediante teorías que permiten organizar un campo determinado de hechos (Bunge, 1999). En nuestro caso, la construcción del problema de investigación implicó la articulación de tres líneas conceptuales y el diálogo con una serie de antecedentes empíricos que discurren por distintos andariveles¹⁰.

(i) Desde una perspectiva amplia que se interesa por las características de un “régimen social de acumulación” –entendido como entorno social, político e institucional en el que tiene lugar la acumulación de capital (Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982])–, tematizamos las condiciones de vida a partir de aportes teóricos sobre la reproducción social y la reproducción de la fuerza de trabajo en sociedades concretas. Seguimos aquí una tradición de la sociología latinoamericana que otorga un rol central a las unidades domésticas en el proceso de reproducción (Borsotti, 1981; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982])¹¹. Así,

⁹ Retomamos aquí una línea de preocupaciones planteada en investigaciones anteriores (Salvia, 2012, 2015; Salvia, Poy y Vera, 2016, 2018) que, siguiendo una tradición estructuralista, propone el análisis articulado de procesos económico-ocupacionales y de la política social.

¹⁰ Aquí esbozamos sucintamente los principales argumentos teóricos que sustentan al problema de investigación, los cuales son sometidos a un escrutinio detallado en el capítulo II de este libro.

¹¹ Tras haber tenido amplia difusión en las ciencias sociales latinoamericanas (Borsotti, 1981; Cortés y Cuéllar, 1990; Cortés y Rubalcava, 1991; Duque y Pastrana, 1973; Eguía y Ortale, 2004; García, Muñoz y Oliveira, 1982; Gutiérrez, 2004; Hintze, 1989; Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 1989, 2000; Torrado, 2006 [1982]), la cuestión de la reproducción social de los hogares perdió relevancia en la agenda de investigación. En los últimos años, la economía feminista favoreció un “redescubrimiento” de la cuestión de la reproducción social al subrayar la centralidad sistémica que tiene el trabajo reproductivo en el capitalismo (Bhattacharya, 2017; Carrasco, 2013;

entendemos la “reproducción social de las unidades domésticas” (Oliveira y Salles, 1989) como conjunto de procesos materiales y simbólicos que implica el solapamiento de un ciclo cotidiano y otro generacional. En particular, nos centramos en la dimensión material o económica de este proceso de reproducción, que se asocia con la satisfacción de necesidades¹².

En sociedades de mercado, la disponibilidad de recursos económicos es crucial, en tanto posibilitan el acceso a satisfactores que se encuentran mercantilizados; es decir, la reproducción descansa en un “nexo monetario” [*cash-nexus*] (Esping-Andersen, 1999). Por consiguiente, las capacidades de reproducción económica pueden estudiarse a partir de los recursos materiales de los que disponen los hogares para sufragar los satisfactores de necesidades que requieren de acuerdo con su composición y ciclo vital. Asimismo, desde este enfoque se considera clave la capacidad de los integrantes de las unidades domésticas para optimizar sus condiciones de vida, de manera que el estudio de la reproducción económica involucra el análisis de tales comportamientos (Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]).

Recogemos una serie de valiosos antecedentes que, para el caso argentino, han tratado la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción social de las unidades domésticas. Algunos de estos estudios han tematizado explícitamente la relación entre procesos económicos estructurales, estratificación social, modalidades de intervención del Estado (en especial, mediante el “salario social”) y dinámicas de reproducción de la fuerza de trabajo en un determinado régimen o modelo de acumulación (Cortés y Marshall, 1991; Marshall, 1984; Torrado, 1992, 2010). Estas investigaciones pioneras se desarrollaron cuando la perspectiva de una amplia asalarización en un mercado laboral formal era dominante. Estudios posteriores se dirigieron a examinar en profundidad –a partir de distintos marcos teórico-metodológicos– las condiciones de reproducción socioeconómica y las estrategias de supervivencia de los hogares en condiciones de pobreza y marginalidad económica (Comas, 2012; Eguía y Ortale, 2004; Eguía y Sotelo, 2007; Feijóo, 2001;

Picchio, 2009; Rodríguez Enríquez, 2015). Al mismo tiempo, el enfoque de la reproducción económica nos pareció más adecuado que otras nociones como “bienestar” o “manejo de riesgos” (v.g., Esping-Andersen, 1990; Wood y Gough, 2006), en tanto permite inscribir la dinámica de las condiciones de vida en el seno de los procesos estructurales que las organizan.

¹² La noción de “reproducción de los grupos domésticos” es asimilable pero no se confunde con la de “reproducción de la fuerza de trabajo” (Margulis, 1989). Si bien para la amplia mayoría de los hogares estos procesos se solapan, preferimos apelar a una noción más abarcadora para incluir al conjunto de las unidades

Geldstein, 1994; Gutiérrez, 2004; Hintze, 1989; Mallimacci y Salvia, 2005; Salvia, 2012, 2016; Salvia y Pla, 2008)¹³.

En este punto, cabe reconocer diferentes investigaciones que se dedicaron a analizar –en particular, desde fines de los ochenta– la incidencia y las características de la pobreza (Beccaria, Groisman y Maurizio, 2009; Golovanevsky, 2007; Lo Vuolo et al., 1999; Minujin y López, 1994; Murmis y Feldman, 1992). Algunos de estos estudios permitieron advertir que la situación de pobreza se encontraba ligada ya no sólo a situaciones de desempleo, sino también a ciertos tipos de ocupaciones. Investigaciones posteriores mostraron la relevancia del mercado laboral en la determinación de la situación de pobreza y en las “transiciones” desde o hacia ella (Beccaria y Groisman, 2005; Beccaria et al., 2015; Paz, 2005). Asimismo, durante los últimos años proliferaron diversos estudios sobre la magnitud y los alcances de la pobreza monetaria en la posconvertibilidad, aunque sin abordar, en general, sus determinantes (Arakaki, 2016; Calvi, 2017; CESO, 2014; CIFRA, 2015; ODSA, 2014, 2015)¹⁴.

Por último, recogemos aproximaciones recientes que abordan la reproducción de la fuerza de trabajo desde el marxismo (Águila y Kennedy, 2015; Graña, 2012; Graña y Kennedy, 2008; Jaccoud et al., 2015; Kornblihtt, Seiffer y Villanova, 2014). Esta línea de estudio ofrece interesantes aportes al reponer el vínculo de la reproducción económica con aspectos estructurales del proceso de acumulación. Tales investigaciones destacan el carácter deprimido del salario real con posterioridad a los años setenta y comprenden tal tendencia como una fuente de “compensación” del rezago productivo de los capitales locales a expensas de las condiciones de vida de los trabajadores.

(ii) En segundo lugar, insertamos la cuestión de la reproducción económica de las unidades domésticas en el contexto más general de los procesos que generan desigualdad en las sociedades periféricas. En este sentido, el enfoque de la heterogeneidad estructural resulta sugerente para comprender la dinámica económico-ocupacional en un contexto de

domésticas, en especial, tomando en cuenta las peculiaridades de la estructura social de los países periféricos, en los que una parte de la fuerza de trabajo no se encuentra asalariada (Pérez-Sáinz y Mora-Salas, 2004).

¹³ En este punto, cabe señalar que, si bien en esta investigación nos interesan los comportamientos que despliegan las unidades domésticas, no nos centramos en las “estrategias” familiares. Ello hubiera requerido un tipo de abordaje teórico-metodológico distinto al aquí planteado. Al respecto, véanse Eguía y Ortale (2004), Gutiérrez (2004) y Gutiérrez y Mansilla (2016), entre otros.

¹⁴ Esta diversidad de estudios para los años recientes se asocia con la carencia de datos oficiales consensuados y creíbles a partir de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el 2007. El problema de las fuentes de datos para nuestro estudio atravesó toda la investigación y se trata en el capítulo III.

globalización¹⁵. Desde la perspectiva estructuralista, tal heterogeneidad remite a la existencia de brechas de productividad entre sectores y ramas, derivadas de la desigual capacidad de absorber y promover el cambio técnico (Fajnzylber, 1996 [1990]; Pinto, 1976; Prebisch, 1967 [1963]; Rodríguez, 2001). Los sectores económicos más productivos no absorben al conjunto de la fuerza laboral, de allí la relevancia que adquiere un sector de microunidades (el “sector informal”) y el autoempleo de subsistencia (Mezzerá, 1987; Pérez-Sáinz, 1995, 2000; Tokman, 1987, 2006; Salvia, 2012, 2015, 2016). En el extremo, la heterogeneidad estructural se traduce en la generación de excedentes absolutos de fuerza de trabajo bajo la forma de una “marginalidad económica” (Nun, 2003 [1969]; Salvia, 2007, 2016) o “informalidad de subsistencia” (Pérez-Sáinz, 1995). En tanto tiene su origen en un patrón de especialización productiva e inserción internacional, sin una modificación de estos determinantes el crecimiento económico puede recrear la heterogeneidad estructural (Prebisch, 1984 [1981])¹⁶.

Articulamos este enfoque con otros procesos que explican la desigualdad sociolaboral, como la “segmentación” del mercado de trabajo (Doeringer y Piore, 1970; Reich, Gordon y Edwards, 1973) y la “precariedad” laboral o el empleo atípico (Feldman y Galín, 1990; Marshall, 1992; Mora Salas, 2010; Standing, 2011). En general, los procesos de segmentación se realimentan con la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional: las unidades de menor productividad que emplean fuerza laboral asalariada lo hacen en condiciones de precariedad. Cabe argumentar que estos procesos de desigualdad ocupacional tienen amplias consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas a las que pertenecen los trabajadores, tanto por los montos de ingreso laboral que reportan como por las condiciones de estabilidad que proveen.

Distintos estudios abordaron el comportamiento del mercado laboral, la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional, la informalidad y la marginalidad económica durante la última década en la Argentina. En términos agregados, existe consenso en destacar una recomposición del nivel de empleo y una reducción de la incidencia de la precariedad laboral en comparación con los noventa. Basándose en estos indicadores, algunos investigadores

¹⁵ Este concepto ha sido extensamente empleado por los diferentes estudios, individuales y colectivos, que hace años lleva adelante el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto Gino Germani (de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA) bajo la dirección de Agustín Salvia. La presente investigación se inscribe en ese marco de reflexión sobre la desigualdad social.

¹⁶ De acuerdo con Kessler (2014), la tesis de la heterogeneidad estructural constituye uno de los elementos más sugerentes acerca de la matriz de la desigualdad contemporánea en la Argentina. En el contexto de la globalización, este enfoque hace inteligible el crecimiento de sectores modernos y la persistencia de un segmento de baja productividad ligado a un refugio ocupacional.

remiten al surgimiento de un nuevo “régimen de empleo” durante la posconvertibilidad (Novick, 2006; Palomino, 2007; Palomino y Dalle, 2012; Panigo y Neffa, 2009). Otros estudios, si bien destacan la relevancia de una serie de activas políticas laborales, también reconocen la segmentación del mercado como un rasgo duradero que penaliza a los ocupados no registrados (Beccaria y Groisman, 2009, 2015; Beccaria y Maurizio, 2012; Groisman, 2013; Mario y García, 2013; Maurizio, 2012)¹⁷. Por último, otras investigaciones enfatizan los rasgos de continuidad que presenta el mercado de trabajo en comparación con la década previa, en particular, con respecto a una extendida precariedad (Arakaki, 2015; Jaccoud et al., 2015; Danani y Lindenboim, 2016; Poy, 2017a; Salvia, et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Salvia, Vera y Poy, 2015; Vera, 2011) y a la persistencia de brechas de ingresos que no derivan de los atributos personales de los trabajadores sino de las características de los establecimientos en los que se desempeñan (Arakaki, 2015; Poy, 2017a; Salvia, Robles y Fachal, 2016).

Dentro de esta línea, algunos estudios aportan insumos para comprender cómo incide la dinámica del mercado laboral en las unidades domésticas. Distintas investigaciones del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social de la UBA dan cuenta de la heterogeneidad estructural del sistema ocupacional, de la relevancia del empleo en sectores de muy baja productividad y de la existencia de procesos de marginalidad económica (Comas, 2012; Gutiérrez Ageitos, 2015; Poy, 2016, 2017a, 2017b; Salvia, 2007, 2012, 2016; Salvia et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Salvia, Vera y Poy, 2015; Vera, 2016). Algunos de estos trabajos señalan que la heterogeneidad estructural habría mantenido significación en la configuración de clivajes en la desigualdad distributiva (evaluada a través del coeficiente de Gini). El sector de baja productividad seguiría concentrando una proporción elevada del empleo total y un reducido nivel de ingresos, lo que se traduciría en el patrón de desigualdad (Salvia, 2012; Salvia y Vera, 2013; Vera, 2011)¹⁸. En este campo, también son sugerentes algunos antecedentes que, para algunos períodos puntuales de la posconvertibilidad, han encontrado una relación positiva entre informalidad y pobreza (Beccaria y Groisman, 2009; García Díaz y Woyecheszen, 2011; Mario y García, 2013; Maurizio, 2012)¹⁹.

¹⁷ Por su parte, los estudios sobre la morfología de las clases sociales han destacado la recomposición de la clase trabajadora más calificada, la expansión de las clases medias y de las “estructuras de oportunidades” de movilidad social (Benza, 2016; Chávez Molina y Sacco, 2015; Dalle, 2012, 2016, Dalle et al., 2015; Maceira, 2016).

¹⁸ Los efectos de la heterogeneidad estructural en la estructura de clases socio-ocupacionales han sido abordados por Chávez Molina y Sacco (2015) y por Chávez Molina, Solís y Cobos (2019, en prensa), entre otros.

(iii) En tercer lugar, reponemos la centralidad de la “intervención social del Estado” con respecto a las condiciones de vida en sociedades capitalistas. Una amplia tradición la ha relacionado con los problemas del lazo social y la solidaridad (Castel, 2003; Donzelot, 2007 [1985]). Sin embargo, aquí recuperamos una perspectiva de “economía política” y enfatizamos el rol de tales intervenciones con respecto a la regulación de la reproducción de la fuerza de trabajo y del conflicto social (Boyer, 2007; Cortés y Marshall, 1991; Danani, 2009; Gough, 1979; Kotz, 1994; McDonough, Reich y Kotz, 2010; O’Connor, 2009 [1977]; Offe, 1984). Las políticas sociales pueden entenderse en términos de su capacidad de “desmercantilización” (Esping-Andersen, 1990; Offe, 1984); por consiguiente, constituyen un recurso clave de la reproducción económica de los hogares. Con la globalización se ha iniciado una nueva matriz de política social que involucra tanto instrumentos clásicos (jubilaciones y pensiones) como nuevas formas de transferencias condicionadas, muchas de las cuales se inscriben en el paradigma de la “activación” de grupos vulnerables a partir de la lógica de la corresponsabilidad (Adelantado, 2017). En este punto, resulta sugerente evaluar qué capacidad tienen estos instrumentos para garantizar la reproducción económica de las unidades domésticas en contextos de heterogeneidad laboral²⁰.

Retomamos aquí una serie de investigaciones recientes que identificaron modificaciones de los marcos institucionales que rigen la intervención social del Estado. Si bien existe consenso en cuanto a la expansión del gasto público social y a la vigencia de nuevos instrumentos de política social, es materia de discusión el sentido y los alcances de tales procesos. Algunos autores sugieren la vigencia de un nuevo “modelo de ciudadanía social”, la tendencia a la “universalización” –como contraste de la focalización dominante en los años noventa– o la reedición del “Estado social” tanto en la Argentina como en América Latina (Andrenacci,

¹⁹ Por su parte, los estudios sobre la distribución del ingreso laboral (Arakaki, 2015; Beccaria y Maurizio, 2012; Cruces y Gasparini, 2009; Groisman, 2014; Judzik, Trujillo y Villafaña, 2017) suelen destacar una reducción de la desigualdad a partir de los 2000. Señalan el efecto positivo que habría tenido la reducción de las “primas” educativas a los trabajadores más calificados. También destacan la relevancia de la demanda de fuerza de trabajo de baja calificación –ligada a actividades orientadas al mercado interno– con posterioridad a la salida de la convertibilidad (Beccaria y Maurizio, 2012). Ello explicaría una mejora distributiva derivada de una recomposición de los estratos intermedios de la estructura ocupacional.

²⁰ La relación entre política social y estructura ocupacional puede entenderse en términos de “recursividad” (Adelantado et al., 1998). La intervención del Estado produce el mercado de trabajo y las condiciones de heterogeneidad estructural limitan el margen de acción de tal intervención (Tokman, 2006). Si se incrementase la acción de desmercantilización que produce la política social (por ejemplo, bajo la forma de un generoso seguro de desempleo), la oferta excedente de fuerza de trabajo podría reducirse y, por consiguiente, el sector de baja productividad perdería volumen en la estructura de empleo. Puede pensarse que, en contrapartida, el volumen del excedente de fuerza laboral –derivado de una insuficiente absorción por parte de los estratos más productivos– y la baja proporción de aportantes a la seguridad social resultante refuerzan los límites de las políticas de transferencia estatal.

2012; Cecchini et al., 2015; Filgueira, 2015; Grassi, 2016). Otros estudios plantean que dicha expansión no necesariamente remite a la universalización sino a un aumento de coberturas diferenciales (Danani y Hintze, 2014). Asimismo, otras investigaciones destacan la existencia de “brechas de bienestar”, para marcar desigualdades en el sistema de políticas sociales (Messina 2014, 2015; Pautassi y Gamallo, 2016) o remiten a un proceso de “asistencialización” persistente (Seiffer, 2013).

De especial relevancia consideramos los estudios sobre los efectos distributivos de la política social. Numerosas investigaciones analizan los efectos de estas intervenciones sobre las condiciones de vida y la desigualdad. Suelen destacar la expansión de las transferencias de ingresos a partir de la crisis de la convertibilidad, en especial, desde el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD). Estos estudios encuentran efectos positivos de los distintos instrumentos de política social sobre los niveles de ingresos, en el abatimiento de la pobreza y la indigencia, y sobre la desigualdad distributiva (Bertranou, 2010; Garganta y Gasparini, 2018; Gasparini et al., 2017; Judzik, Trujillo y Villafañe, 2017; Maurizio y Vázquez, 2014; Maurizio y Monsalvo, 2017; Poy y Vera, 2017; Rofman y Oliveri, 2012; Salvia, Poy y Vera, 2016, 2018; Trujillo y Villafañe, 2011). En general, estos análisis no permiten observar la correlación entre política social y estructura socio-ocupacional, más allá del abordaje de la posición de los hogares en la estructura decílica de ingresos (v.g., Bertranou, 2010; Cetrángolo et al., 2017; Poy, Vera y Salvia, 2015).

(iv) En la intersección de estas líneas teóricas y de los antecedentes empíricos revisados, surgen algunos interrogantes particulares. ¿De qué maneras y mediante qué procesos se traducen en los hogares las heterogeneidades de los mercados de trabajo urbanos? ¿Qué implicancias tienen tales clivajes sobre los niveles de reproducción económica y sobre la probabilidad de no satisfacer sus necesidades materiales? ¿Qué capacidad tienen las propias unidades domésticas –a través de la fuerza de trabajo de la que disponen– para “moderar” los efectos de desigualdad estructural provenientes de los mercados laborales? ¿En qué medida y bajo qué modos la intervención social estatal brinda recursos que amortiguan o “compensan” la desigualdad de las condiciones de vida resultante de procesos económico-ocupacionales? ¿En qué grado tales ingresos alteran el “balance reproductivo” de los hogares? ¿Qué diferencias (en términos de incidencia y efectos) registra tal intervención según las distintas posiciones económico-ocupacionales en las que se insertan las unidades domésticas a través de sus miembros?

Este libro se propone aportar evidencias novedosas acerca del patrón de reproducción económica de los hogares mediante el tratamiento articulado de los modos en que los cambios en la distribución primaria y secundaria del ingreso incidieron sobre las condiciones de vida. La mayor parte de las investigaciones se han enfocado en el mercado de trabajo a nivel individual o bien, si han considerado a los hogares, no han hecho explícito su rol en la optimización de sus condiciones de vida. En general, los estudios sobre los cambios distributivos en la Argentina han analizado el papel de las políticas sociales desde una mirada agregada, sin tomar en cuenta la inserción económico-ocupacional de los integrantes de los hogares y, por consiguiente, el disímil rol que desempeñan tales instrumentos a lo largo de la estructura social. Al avanzar sobre estos aspectos, buscamos aportar nuevas evidencias acerca de los cambios en la relación entre el régimen de desigualdad laboral –resultante de la heterogeneidad económico-ocupacional– y los modos de regulación social²¹ en clave a las condiciones de vida de los hogares.

La posconvertibilidad: ciclos, coyunturas y dinámicas estructurales durante un período de políticas heterodoxas²²

A nivel regional, la primera década de los años 2000 estuvo marcada por la confluencia inédita de dos procesos. Por un lado, el crecimiento de la demanda global (asociada a los países asiáticos) condujo al *commodities boom*, que se plasmó en un incremento del ingreso disponible, la reducción del desempleo, la pobreza y la expansión del espacio fiscal de los Estados latinoamericanos. Por otro lado, en distintos países de la región se verificó una activa intervención estatal, que tuvo como rasgo general un aumento de las políticas laborales y sociales redistributivas, lo que contrastó con las iniciativas ortodoxas dominantes en los noventa.

Luego del deterioro socioeconómico sin precedentes que había caracterizado a los últimos años del régimen de convertibilidad, la sociedad argentina accedió a un renovado ciclo de mejora distributiva. Tras un largo período de reformas estructurales, liberalización y abierta predominancia de los mercados, pareció abrirse una fase caracterizada por un alejamiento con respecto a la ortodoxia económica neoliberal. Al igual que en otros países de la región, la posconvertibilidad se caracterizó por el crecimiento del ingreso promedio y del empleo

²¹ Apelamos a estos conceptos, difundidos por la escuela francesa de la regulación (Boyer, 2007), puesto que vinculan un “modelo” de acumulación con una forma de intervención estatal en términos de su incidencia sobre las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

²² Aquí presentamos las principales coordenadas del período histórico, las cuales serán analizadas con detalle en el capítulo I.

registrado, por la reducción de la pobreza y de la desigualdad, y por un incremento sostenido del gasto público social (Beccaria y Maurizio, 2012; Groisman, 2013; Judzik, Trujillo y Villafañe, 2017; Kessler, 2014; Novick, 2006; Palomino, 2007; Palomino y Dalle, 2012; Salvia, Poy y Vera, 2016).

Diferentes estudios destacan que, junto con estos cambios de coyuntura, habrían permanecido los componentes estructurales del régimen de acumulación argentino. Se apunta a aquellos rasgos que caracterizaron a la reestructuración económica de los noventa, tales como la especialización productiva, el extractivismo y la dualidad estructural (Castells y Schorr, 2015; Félix, 2013, 2015; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; Katz, 2016; Piva, 2015; Svampa y Viale, 2014; Wainer y Schorr, 2014a). Estas investigaciones coinciden con las que destacan el persistente rezago productivo argentino con respecto a la frontera tecnológica internacional y la necesidad de fuentes de compensación como el endeudamiento externo, la renta agraria, pesquera, minera e hidrocarburífera y la retracción del salario real (Águila y Kennedy, 2015; Graña, 2012; Graña, 2015; Jaccoud et al., 2015; Kennedy, 2015).

La reconfiguración de los principales vectores que organizan las condiciones de vida de los hogares –relacionados con la distribución primaria y secundaria del ingreso– brinda un escenario apropiado para el estudio de los cambios en los modos de reproducción económica de las unidades domésticas. Permite evaluar la capacidad del crecimiento económico y de las políticas heterodoxas para alterar una lógica de reproducción social asociada a la heterogeneidad estructural; a la vez que la expansión de los instrumentos de política social invita a indagar acerca de su capacidad para promover mayores niveles de convergencia en los niveles de bienestar material.

Abordamos el estudio de los modos de reproducción económica de los hogares durante la posconvertibilidad en relación con la aplicación de políticas heterodoxas de corte “neodesarrollista”. En términos generales, éstas propugnan la orientación exportadora, el tipo de cambio competitivo, la promoción de industrias ligadas a ventajas comparativas y la integración a cadenas globales de valor (Bresser-Pereira, 2017). El neodesarrollismo promueve el aprovechamiento de las ventajas de los países periféricos: sus recursos naturales y el bajo costo de la fuerza de trabajo; de allí la acentuación de las características “extractivas” en los modelos de desarrollo dependientes durante los 2000 (Félix, 2013, 2015; Katz, 2016; Svampa y Viale, 2014). Coincidimos con diversos autores que plantean que la implementación de este tipo de políticas es inescindible del particular contexto político-

institucional que caracterizó a la salida del régimen de convertibilidad. La crisis económica de fines de los noventa implicó también una crisis de legitimidad política que entró en contradicción con los requerimientos de la acumulación; por consiguiente, la resolución de la crisis requirió tanto una nueva dinámica de acumulación como un nuevo modelo de intervención social (Félix, 2013; López, 2015; Piva, 2015). La posconvertibilidad fue así escenario de nuevas reglas macroeconómicas y de un nuevo andamiaje de intervención social del Estado, si bien se habría sustentado sobre los pilares del régimen social de acumulación constituido en las décadas previas.

No obstante, más allá de algunos rasgos generales, consideramos que, en términos analíticos, el período no puede considerarse homogéneo. Por ello diferenciamos dos momentos.

(i) Luego de atravesar una profunda recesión, el modelo de convertibilidad cambiaria condujo a una aguda crisis económica, política e institucional. El abandono del modelo de paridad fija, el *default* de la deuda externa y la devaluación, permitieron un ciclo sostenido de recuperación económica. Entre el 2003 y el 2008 situamos un período de “crecimiento posdevaluación”. Durante este período, el crecimiento estuvo liderado por exportaciones, el uso de la capacidad instalada y el bajo costo de la fuerza de trabajo. Este régimen se caracterizó por la retracción de la desocupación, el incremento del empleo registrado y por un conjunto de activas políticas laborales y de ingresos.

(ii) A partir del 2008, reconocemos un período de “crisis, reactivación y estancamiento”. Dos crisis sucesivas interrumpieron el modelo de crecimiento prevaleciente. Por una parte, la derrota del gobierno ante las patronales agropecuarias, en el 2008, impidió expandir la base de financiamiento del modelo económico (vía retenciones a las exportaciones) y desacoplar los precios internos de los externos. Por otra parte, la crisis internacional del 2009 condujo a la implementación de medidas para sostener el nivel de actividad, en especial, mediante un mayor esfuerzo fiscal. La apuesta expansiva condujo a un incremento del déficit de las cuentas públicas, que realimentó la inflación y deterioró el tipo de cambio. La pérdida de reservas internacionales (acentuada por la fuga de capitales y el déficit energético) llevó a una profundización de la “restricción externa”. Así, luego de inducir un nuevo *boom* de crecimiento (en especial, en el bienio 2010-2011), el ciclo entró en una etapa de estancamiento y ajuste (en el 2014). Por ello, subdividimos este segundo período en dos fases: una de crisis y reactivación (2008-2011) y otra de estancamiento (2011-2014).

Objetivos particulares, hipótesis de trabajo y estructura del libro

Para abordar el objetivo general planteado, nos propusimos una serie de *objetivos específicos* que formalizamos a continuación.

- 1) Describir las características de la participación económico-ocupacional de los hogares a partir de la inserción de sus integrantes en distintos sectores y segmentos de empleo, prestando especial atención a la capacidad de combinar posiciones ocupacionales (lo que remite a la homogeneidad / heterogeneidad laboral interna de los hogares).
- 2) Explorar las características, la evolución, el volumen y la composición de los hogares cuyos miembros participan en actividades laborales informales de subsistencia o de marginalidad económica.
- 3) Examinar los modos en que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y los procesos de segmentación laboral inciden sobre las capacidades de reproducción económica, evaluando la participación de las unidades domésticas (mediante su fuerza de trabajo disponible) en la distribución del ingreso laboral y enfatizando en los procesos microsociales que intervienen en los niveles de retribución obtenidos.
- 4) Describir y comparar los niveles de cobertura de los instrumentos de política social y sus efectos sobre las capacidades de reproducción económica según la posición de los hogares en la estructura económico-ocupacional.

En la investigación seguimos un abordaje metodológico cuantitativo con un diseño de estática comparada. La principal fuente son los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Empleamos las bases correspondientes al cuarto trimestre de 2003 a 2014. La EPH es adecuada para estudiar la participación laboral y las estrategias económicas de los hogares (INDEC, 2003), pero tiene restricciones para identificar las transferencias provenientes de políticas sociales. Para resolver esta dificultad, apelamos a estrategias que procuran aproximarse a su identificación y que han sido empleadas por otros investigadores (Bustos y Villafañe, 2011; Maurizio y Vázquez, 2014; Rofman y Oliveri, 2012). Además, la investigación requirió de un conjunto de insumos usualmente provistos por los organismos públicos de estadística, pero dada su conocida falta de credibilidad a partir del año 2007

(Lindenboim, 2015) y la discontinuación de dichos insumos, los reconstruimos a partir de un conjunto de fuentes alternativas²³.

Las *hipótesis particulares* que se evalúan son las siguientes:

- 1) Durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014), la participación laboral de la fuerza de trabajo de los hogares habría permanecido estrechamente ligada a las condiciones de heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y de segmentación del mercado de trabajo. Si bien se habría evidenciado una recomposición de las oportunidades de empleo en los sectores más dinámicos e intermedios durante los primeros años de la posconvertibilidad (2003-2008), habría sido restringida, en ausencia de cambios estructurales de la economía. Durante el ciclo de crisis, reactivación y estancamiento (2008-2014), los hogares habrían enfrentado una estructura rígida en términos de oportunidades económico-ocupacionales en los sectores más modernos. Aun cuando en el seno de los hogares pueden coexistir posiciones económico-ocupacionales, una parte de éstos sólo habría conseguido acceder a ocupaciones en el sector informal, en el segmento precario o a posiciones abiertamente marginales, como correlato de las limitaciones estructurales de la demanda de empleo en los sectores más productivos.
- 2) La heterogeneidad del sistema ocupacional habría condicionado la pauta de distribución del ingreso laboral y, por consiguiente, las capacidades de reproducción económica de los hogares. Durante todo el ciclo (2003-2014), los hogares con trabajadores del sector microinformal o del segmento precario habrían experimentado las condiciones más desventajosas en términos distributivos. Un mayor esfuerzo económico por parte de las unidades domésticas, en especial durante la etapa de mayor crecimiento (2003-2008), habría desempeñado un papel de “mediación” sobre estos resultados. Sin embargo, aquellos hogares habrían quedado expuestos, con mayor probabilidad, al riesgo de experimentar capacidades de subsistencia deficitarias a partir de sus ingresos laborales, aun considerando su propio esfuerzo económico-reproductivo.
- 3) Durante la posconvertibilidad (2003-2014), la expansión de la intervención estatal bajo políticas sociales se habría plasmado en el crecimiento de la cobertura de los hogares con trabajadores ubicados en el sector microinformal, en empleos precarios o en posiciones

²³ Nos referimos a insumos tales como índices de precios, la valorización de las canastas empleadas para determinar capacidades de subsistencia (Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total). Apelamos a índices de precios provinciales, el IPC-9 Provincias del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y el IPC-GB (elaborado por ex técnicos del INDEC)

marginales. Los ingresos provenientes de este tipo de fuente habrían adquirido una mayor injerencia en los presupuestos de los hogares situados en tales posiciones económico-ocupacionales, en particular durante el período de menor dinamismo económico (2008-2014). Sin embargo, habrían sido limitados para excluir a tales hogares del riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia.

La estructura del libro se compone de la presente introducción, seis capítulos, las conclusiones y cinco anexos. Los primeros tres capítulos presentan el contexto, el marco conceptual y la estrategia metodológica. Los capítulos cuarto, quinto y sexto exponen los principales resultados empíricos.

En el primer capítulo reconstruimos los principales cambios en el contexto macroeconómico, en el mercado de trabajo y en el sistema de políticas sociales a partir de la crisis de la convertibilidad. Proponemos insertar a la posconvertibilidad en una perspectiva de larga duración, atendiendo a los cambios en el régimen social de acumulación que favorecieron la expansión de la economía argentina durante la primera década de los años 2000. En este capítulo reponemos las principales transformaciones del mercado de trabajo y los cambios en la intervención estatal a través de la política laboral y la política social.

En el segundo capítulo presentamos el esquema conceptual que nos permitió construir el objeto de estudio. Tal esquema resulta de la articulación de tres grandes líneas ya mencionadas. En primer lugar, recuperamos la tradición de estudios sobre la reproducción de las unidades domésticas, desde la cual analizamos las condiciones de vida y el rol de mediación desplegado por el esfuerzo económico de los integrantes de los hogares. En segundo lugar, planteamos un recorrido teórico para el abordaje de la estructura económico-ocupacional, retomamos los enfoques de la heterogeneidad estructural, de la segmentación laboral y de la marginalidad económica. Por último, recogemos distintos enfoques sobre la intervención social del Estado, pero enfatizamos aquellos que la relacionan con las condiciones estructurales de las sociedades latinoamericanas.

En el tercer capítulo presentamos el diseño teórico-metodológico. Precisamos los modos en que tradujimos los principales conceptos en variables susceptibles de ser observadas empíricamente. Adicionalmente, describimos las características de la fuente de datos y, dados los mencionados problemas de confiabilidad que enfrentó la información oficial a partir del 2007, explicamos las decisiones que debimos tomar para construir los insumos necesarios para el estudio de las capacidades de reproducción económica de los hogares.

En el cuarto capítulo abordamos las características que asumió la inserción económico-ocupacional de los hogares durante la posconvertibilidad, examinada a partir de la posición del principal sostén y del conjunto de la fuerza de trabajo activa. Aquí tratamos la primera hipótesis específica. El capítulo considera la distribución sectorial económico-ocupacional del principal sostén del hogar y en qué medida, en el seno de las unidades domésticas, se registra una combinación de posiciones laborales mediante distintos integrantes. Asimismo, examinamos la evolución, el volumen y la composición de los hogares que tenían integrantes en actividades informales de subsistencia o de marginalidad económica.

En el quinto capítulo abordamos el papel que desempeñaron los ingresos laborales en las condiciones de vida de los hogares según su posición en la estructura económico-ocupacional (a la que evaluamos, operativamente, a partir de la inserción del principal sostén). En este capítulo analizamos la segunda hipótesis específica. Se abordan las brechas de desigualdad laboral y el papel del mercado y de los integrantes de las unidades domésticas (a través de su mayor esfuerzo laboral) en el cambio en los ingresos laborales. A su vez, se evalúa la probabilidad de que los hogares experimenten capacidades deficientes de subsistencia a partir de sus ingresos laborales de acuerdo con su posición en la estructura económico-ocupacional. Ello aporta elementos para evaluar la incidencia de la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y los procesos de segmentación laboral sobre las condiciones de vida de los hogares, considerando simultáneamente otros factores sociodemográficos, educativos y residenciales.

El sexto capítulo aborda los niveles de cobertura de los instrumentos de política social según la posición económico-ocupacional de los hogares (evaluada, como indicamos, mediante la posición de su principal proveedor). Aquí tratamos la tercera hipótesis específica. Evaluamos la desigual evolución que tuvo la cobertura de políticas sociales y el tipo de instrumentos al que accedieron las unidades domésticas. En este capítulo se examina el papel que desempeñaron los ingresos de política social en el cambio del ingreso familiar. Asimismo, consideramos el grado en que estos instrumentos les permitieron a los hogares alcanzar a cubrir sus necesidades reproductivas. Este capítulo examina la presencia de una renovada función de la política social en las capacidades de reproducción económica de los hogares más desaventajados en términos ocupacionales.

Capítulo I

El contexto del estudio. De la expansión neodesarrollista al estancamiento económico. Patrones de crecimiento y política social durante la posconvertibilidad

Introducción

El propósito de este capítulo es presentar las principales coordenadas históricas en el contexto de las cuales estudiamos la reproducción económica de los hogares. Por las características de nuestro objeto de estudio, describimos aquí los rasgos más sustantivos del patrón de crecimiento económico junto con las modalidades predominantes de intervención social del Estado durante el ciclo de políticas heterodoxas en la Argentina.

Así como el programa político-económico implementado en los noventa expresó un caso nacional de la aplicación de medidas neoliberales a escala latinoamericana, la posconvertibilidad se encuadra dentro de la nueva coyuntura internacional y regional iniciada en los años 2000. En materia económica, el ciclo regional reciente estuvo sustentado por el aprovechamiento de las ventajas naturales, la capacidad exportadora y la mejora de los términos de intercambio. En su dimensión sociopolítica, se caracterizó por una mayor presencia estatal en términos distributivos. De este modo, en algunos países latinoamericanos las crisis de fin de siglo propiciaron la implementación –con notables diferencias nacionales– de medidas de política económica de orientación neodesarrollista y una renovada intervención social y laboral²⁴.

A su vez, el ciclo posconvertibilidad se inscribe en una línea de larga duración de la historia argentina reciente. No podría comprenderse al margen de las transformaciones estructurales ocurridas desde los setenta (y profundizadas en los noventa) en el régimen social de acumulación ni de los efectos de la crisis político-institucional que caracterizó a los años finales del régimen de convertibilidad. Por lo tanto, el “giro” advertido en los años 2000 fue resultado de la crisis en un doble sentido: producto de las posibilidades ofrecidas por el patrón de acumulación neoliberal y respuesta político-económica a la crisis. Esta lectura ofrece algunas claves sobre las especificidades históricas del ciclo pero también sobre los elementos estructurales que lo sustentaron y, eventualmente, limitaron.

²⁴ De allí el surgimiento de diversos términos para describir el período reciente. Entre otros, se remite a un ciclo de “gobiernos progresistas” (Svampa, 2011), a un período “posneoliberal” (Kessler, 2016; Pérez-Sáinz, 2016), a una fase “neodesarrollista” (Félez, 2013; Katz, 2016), o a un nuevo modelo “estatal-exportador” (Filgueira, 2015)

El capítulo se divide en dos secciones. En la primera, examinamos algunos antecedentes y repasamos la crisis del régimen neoliberal. En la argumentación, son claves las transformaciones del régimen social de acumulación argentino a partir de mediados de los setenta. En particular, consideramos la configuración del mercado de trabajo, la estructura social y los cambios en el patrón de intervención redistributiva estatal. En la segunda sección ofrecemos una caracterización global de la posconvertibilidad, sus principales vectores político-económicos y presentamos la periodización que empleamos a lo largo de la investigación. Con el objetivo de brindar herramientas analíticas para estudiar las capacidades de reproducción de los hogares, ofrecemos los principales rasgos de los dos determinantes inmediatos de tales capacidades: por un lado, el funcionamiento del mercado de trabajo y la política laboral (que remiten al ámbito de la “distribución primaria” del ingreso) y, por otro lado, la intervención estatal en materia de políticas sociales redistributivas (que apuntan a la “distribución secundaria” del ingreso)²⁵.

1.1. Reformas estructurales y mutaciones del régimen de acumulación argentino en el contexto de la globalización

Como en otros países periféricos, en la Argentina la crisis del treinta estimuló un proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Hasta los cincuenta, la literatura reconoce una primera fase de sustitución “liviana” de bienes de consumo, a la que le sucedió una segunda etapa de sustitución de bienes intermedios que complejizó el entramado productivo (Canitrot, 1983; Mallon y Sourrouille, 1976). La coexistencia de un sector agropecuario con capacidad de generar divisas a partir de exportaciones y de un sector industrial sin suficiente competitividad para exportar, pero altamente demandante de divisas, configuró la “estructura productiva desequilibrada” argentina (Diamand, 1972). Así, el patrón de crecimiento se caracterizó por su inestabilidad y por los recurrentes “estrangulamientos externos”, dando lugar a ciclos de tipo *stop and go* (Basualdo, 2010; Braun y Joy, 1968; Gerchunoff y Llach, 2008).

No obstante, es una idea aceptada que, hasta mediados de los setenta, la sociedad argentina había alcanzado –al menos en comparación con el resto de América Latina– una significativa modernización económica y amplios procesos de integración y movilidad social. El modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) fue capaz de generar una situación

²⁵ Cabe recordar que esta distinción entre distribución primaria y secundaria es analítica, y la empleamos para poner de relieve la acción redistributiva estatal en la esfera de la distribución secundaria frente al carácter dominante de los mecanismos de mercado que operan en la distribución primaria.

próxima al pleno empleo urbano (Llach, 1978; Marshall, 1978), una baja dispersión de las remuneraciones entre los trabajadores (Cimillo, 2000) y una participación incremental de los asalariados en la distribución funcional del ingreso (Kennedy, 2012), así como una heterogeneidad estructural “moderada” en relación con otros países de la región (Di Filippo y Jadue, 1976; Pinto, 1976).

En paralelo, desde mediados de siglo se había configurado en la Argentina la versión local del “Estado social”. El sistema de jubilaciones y pensiones fue uno de sus principales componentes; de allí que el modelo predominante de protección se basara en la regulación estatal de las relaciones laborales y en la expansión del mercado asalariado formal (Cortés y Marshall, 1991; Danani, 2005; Falappa y Andrenacci, 2008; Soldano y Andrenacci, 2005)²⁶. Otro pilar redistributivo fue la expansión del sistema de “asignaciones familiares”, una suma de dinero por cada menor de edad a cargo del trabajador²⁷. Finalmente, durante esta etapa también se consolidaron amplias prestaciones en materia de educación y vivienda, y más segmentadas en el campo de la salud (Cortés y Marshall, 1991). Este modelo de bienestar mantuvo un componente “asistencial” reducido, dirigido a quienes no accedían al mercado de trabajo formal (Soldano y Andrenacci, 2005). Por ello, fue descrito como un caso paradigmático de la “universalización estratificada” de los regímenes de bienestar, estructurados en torno a la capacidad contributiva individual y con una impronta corporativa (Barba-Solano, 2007; Mesa-Lago, 1998).

La articulación de procesos globales –en especial, la crisis internacional de mediados de los setenta y la contracción de los precios de las exportaciones– y nacionales –en particular, el creciente conflicto social–, indujo una ruptura con respecto al patrón precedente. En este sentido, el programa político-económico de la dictadura cívico-militar encarnó la primera tentativa de redefinir el funcionamiento del capitalismo argentino en sintonía con la nueva ola de “neoliberalización” a escala global (Harvey, 2007)²⁸.

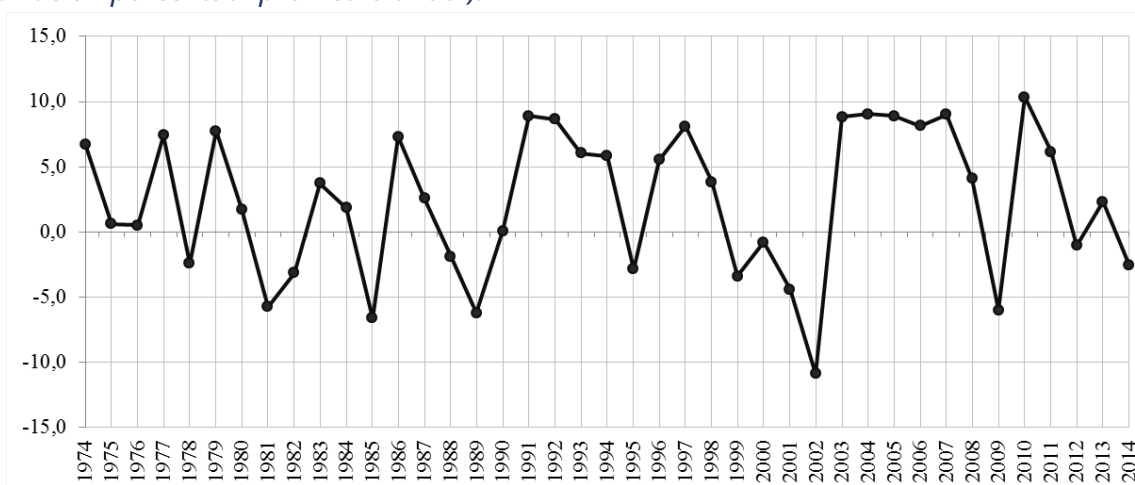
²⁶ A principios del siglo XX, los únicos trabajadores que contaban con un sistema de jubilaciones y pensiones eran los de la administración pública nacional (militares, maestros y administrativos). Entre 1943 y 1954 la cobertura previsional de los asalariados se multiplicó por diez y se homogeneizó el sistema de cotizaciones. La centralización de las cajas previsionales llegó en 1958 y su consolidación en 1968, cuando se creó el Sistema Nacional de Previsión Social (Arza, 2010; Curcio y Beccaria, 2011).

²⁷ El sistema de asignaciones familiares tiene su primer antecedente en 1934, pero se consolidó en 1957 con la extensión de beneficios y la creación de cajas compensadoras. Progresivamente, fueron recibiendo este tipo de beneficio los trabajadores de distintas ramas. En 1973, se extendió a los jubilados y pensionados. Hasta 1991, las Cajas de Subsidios Familiares tuvieron a su cargo la administración de estos beneficios (Hintze y Costa, 2011).

²⁸ Cabe comprender estas transformaciones en el contexto más general de la nueva “división internacional del trabajo” –según la clásica denominación de Fröbel, Heinrichs y Krays (1980)– a partir de los setenta, que

En primer lugar, el congelamiento salarial y la liberación de precios produjeron una fuerte traslación de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas (Basualdo, 2010). En segundo lugar, el cambio en las regulaciones del comercio exterior implicó el progresivo pasaje a una economía “abierta” (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2004). En tercer lugar, la “reforma financiera” de mediados de 1977 interrumpió el ciclo de financiamiento industrial a partir de la tasa de interés real negativa que había primado en la posguerra (Canitrot, 1983; Iñigo Carrera, 2007). Este programa se complementó con la apertura comercial, a partir de 1978, cuyo propósito era hacer converger los precios internos con la inflación internacional.

Gráfico 1.1. Tasa de variación del Producto Interno Bruto (PIB). Argentina, 1974-2014 (*variación porcentual promedio anual*).



Fuente: elaboración propia a partir de INDEC (año base 2004 y revisión 2016).

Estas reformas provocaron una reconversión industrial y un aumento del endeudamiento externo (Schvarzer y Tavonanska, 2008). A partir de entonces, la insuficiencia de divisas para solventar el pago de los compromisos externos condicionó el funcionamiento macroeconómico²⁹. Durante los ochenta, el volumen de la deuda, la alta inflación y el déficit fiscal limitaron los alcances de los sucesivos programas de estabilización³⁰. Entre mediados de los setenta y fines de los ochenta, el carácter errático del crecimiento del Producto Interno

implicó relocalizaciones del capital a escala global y modificaciones en los procesos productivos. A su vez, supuso un creciente protagonismo del capital financiero y una acentuación de los procesos de desarrollo desigual (Harvey, 2007). En América Latina, esta renovada globalización impactó en las estructuras productivas y, por consiguiente, en el funcionamiento de los mercados laborales (Pérez-Sáinz, 2016).

²⁹ Esta situación se vio agravada en 1982, cuando el gobierno militar dispuso que empresas privadas y bancos pagaran sus obligaciones a una tasa de interés por debajo de la inflación esperada. Ello redundó en la licuación de sus pasivos y en una estatización de hecho de la deuda privada (Gerchunoff y Llach, 2008).

³⁰ En la estructura del déficit fiscal jugaban un rol destacado los subsidios que el gobierno otorgaba al capital concentrado local –los “capitanes de la industria”– en materia de regímenes de promoción y exenciones impositivas (Ortiz y Schorr, 2006).

Bruto (PIB), que había prevalecido en la Argentina desde la posguerra, se volvió declinante y primaron las tendencias al estancamiento (Gráfico 1.1). En una economía mundial cada vez más globalizada al ritmo de la expansión del capital financiero y la nueva división internacional del trabajo, la Argentina enfrentaba los límites de su modelo industrial sustitutivo y no lograba financiar su reconversión (Neffa, 1998)³¹.

Fue en este marco que la hiperinflación de finales de los ochenta viabilizó la implementación de un amplio conjunto de medidas que terminaron de reconfigurar el régimen social de acumulación (Bonnet, 2007; Cantamutto y Wainer, 2013; Piva, 2015). Se abrieron paso las reformas estructurales de inspiración neoliberal inscriptas en los requerimientos del “Consenso de Washington”³². En primer lugar, se iniciaron las privatizaciones de empresas públicas, las cuales abrieron una plataforma para las inversiones extranjeras y el gran capital concentrado local. En segundo lugar, se redujeron los regímenes de promoción industrial, se terminaron las preferencias en las compras estatales hacia las empresas locales y se redujo el empleo público. Estas reformas implicaron un ajuste drástico de lo que aún quedaba del modelo ISI; sin embargo, no lograron iniciar un nuevo ciclo de crecimiento ni doblar la inflación (Cantamutto y Wainer, 2013; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014). De allí que se apelara a una medida más drástica: un régimen de paridad cambiaria fija con el dólar y un esquema de caja de conversión –conocido como “plan de convertibilidad”–, por medio del cual el Estado estaba impedido de ampliar la base monetaria sin respaldo en reservas internacionales (Gerchunoff y Llach, 2008). La apertura comercial y el tipo de cambio fijo debían disciplinar los precios internos al hacerlos converger con la inflación estadounidense.

El régimen macroeconómico fue exitoso en sus metas de corto plazo. Indujo un ciclo de crecimiento del PIB (Gráfico 1.1), un aumento de la inversión y un cambio técnico que “modernizó” parcialmente al capitalismo argentino (Piva, 2015). Sin embargo, tuvo consecuencias relevantes. En términos generales, penalizaba a los sectores productores de bienes transables y beneficiaba al sector de servicios (Fernández Bugna y Porta, 2008). Por ello, una parte de las empresas no pudo enfrentar el patrón de economía abierta, lo que implicó quiebras y centralización de capitales (Salvia, 2012); mientras que las que se

³¹ De hecho, en 1987 y 1988 el gobierno radical llevó adelante las primeras privatizaciones de una aerolínea estatal (Austral), del transporte aéreo interprovincial, la telefonía celular y la transmisión de datos (Cantamutto y Wainer, 2013: 25).

³² El Consenso de Washington constituyó un decálogo de “recomendaciones” dirigidas a los países en desarrollo. Según la perspectiva neoliberal dominante, el objetivo era terminar con las trabas al crecimiento impuestas por las crisis fiscales y los problemas en el sector externo (Castellani, 2002: 90).

adaptaron a la situación apelaron a estrategias de mayor explotación laboral (Piva, 2015). Ello favoreció la consolidación de tres rasgos centrales de la dinámica laboral: en primer lugar, una baja elasticidad empleo-producto, que se plasmó –aun en contextos de crecimiento económico– en el incremento de la subutilización global de fuerza de trabajo (Beccaria y Maurizio, 2012; Groisman, 2013); en segundo lugar, un sesgo de la demanda laboral hacia trabajadores altamente calificados, lo que estimuló el incremento de sus ingresos, favoreció la desigualdad y profundizó la heterogeneidad estructural, es decir, las brechas de ingresos asociadas a diferenciales de productividad (Salvia, 2012); en tercer lugar, un crecimiento del segmento secundario y marginal del empleo (Poy, 2017a, 2017b; Salvia, 2012). Esta dinámica impactó en las condiciones de vida de los hogares a través de un aumento de la pobreza y la indigencia (Beccaria y Groisman, 2009; Salvia, 2012).

A su vez, el régimen macroeconómico era vulnerable desde el punto de vista externo. En tanto no hubiera un salto de productividad o de la capacidad exportadora de la economía, el modelo seguiría dependiendo de la entrada de capitales que compensaran el déficit generado por la apreciación cambiaria (Cantamutto y Wainer, 2013; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014). En 1995, luego de la crisis mexicana, la economía argentina entró en un ciclo recesivo que impactó sobre las condiciones de vida de la población. Si bien esta coyuntura se atravesó gracias a una nueva ola de financiamiento externo, una segunda fase de crisis en los países “emergentes” llevó a una nueva recesión a partir de 1998, de la que el modelo de caja de conversión ya no consiguió salir.

Las reformas estructurales de los noventa supusieron, además de un importante cambio macroeconómico, una transformación del modelo de intervención social que algunos autores caracterizaron como el pasaje hacia un Estado “subsidiario”, “neoclásico” o “neoliberal asistencialista” (Belmartino, 2010; Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Soldano y Andrenacci, 2005). Estos cambios pueden agruparse en tres niveles. En primer lugar, la fragmentación del sistema previsional a partir de la generación de un sistema privado de capitalización que se instaló junto con el clásico sistema público de reparto (Curcio y Beccaria, 2011). Durante toda la década del noventa, tuvo lugar una sistemática reducción de la cobertura previsional de la población mayor de 65 años y un deterioro de la prestación estatal (Arza, 2010)³³. En segundo

³³ En 1994 se sancionó la Ley de Reforma Previsional (ley 24.241), que dividió al sistema en dos partes, lo que originó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Curcio y Beccaria, 2011). Por un lado, se conformó un sistema privado regido por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones; y por otro, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), encargada del sistema público de reparto. En paralelo, se extendió la edad de retiro, que pasó de 55 a 60 años en las mujeres y de 60 a 65 años en los varones, a la vez que el requisito de contribución pasó de 20 a 30 años. De esta manera, quedó conformado un sistema de

lugar, en el contexto de un aumento del empleo no registrado, el sistema de asignaciones familiares fue perdiendo cobertura y capacidad de protección³⁴. En tercer lugar, ante el incremento de la desocupación abierta, se consolidaron los programas de “lucha contra la pobreza”. Durante los años noventa, la mayoría de estos programas fueron de tipo *workfare*, es decir, asociados a la activación laboral (Cruces et al., 2008; Salvia, Poy y Vera, 2016)³⁵.

De esta manera, el nuevo esquema macroeconómico impactó en la dinámica ocupacional y la intervención social del Estado acompañó un proceso socialmente regresivo. La política laboral estimuló la flexibilización de las relaciones laborales y el deterioro de los ingresos; la política social profundizó la estratificación prevaleciente, en tanto la cobertura asistencial cobró un renovado papel. Ello estuvo acompañado por una profundización de los mecanismos de coerción a medida que el deterioro socioeconómico alimentaba el conflicto social (Piva, 2015). En este marco, la recesión iniciada en 1998 y la negativa de los organismos internacionales a seguir brindando financiamiento (Gerchunoff y Llach, 2008) forzaron el abandono del régimen convertible en el contexto de la mayor crisis político-económica de la historia argentina contemporánea³⁶.

“dos pilares”: por un lado, un sistema estatal que abonaba la Prestación Básica Universal; y, por otro, dos regímenes alternativos: el de reparto, que abonaba la Prestación Adicional por Permanencia y un régimen de capitalización individual que pagaba la Jubilación Ordinaria basada en la evolución de la capitalización individual. Este conjunto de cambios llevó a que la cantidad de beneficiarios se redujera casi 10% entre 1996 y 2002 (Danani y Beccaria, 2011: 114).

³⁴ En 1996 hubo una importante reforma del régimen de Asignaciones Familiares que puso tope a quienes podían cobrar el beneficio del salario familiar y estableció rangos decrecientes del monto según niveles salariales. Ello contribuyó a reducir el alcance de este instrumento (Hintze y Costa, 2011; Rofman y Oliveri, 2012).

³⁵ Un primer antecedente fue el Programa Alimentario Nacional (PAN), implementado a partir de mayo de 1984, que consistía en la entrega de una caja de alimentos y llegó a abarcar a 1.400.000 familias (Aguirre, 2010). En 1993 se puso en marcha el primer programa de tipo *workfare*, llamado “Programa intensivo de trabajo”, que generó unos 200.000 empleos (Cruces et al, 2008). A partir de 1996 comienza el llamado Programa “Trabajar”, dirigido a jefes de hogar desocupados (Rofman y Oliveri, 2012), que se continuó con el Programa “Trabajar II” (1997-1998) y “Trabajar III” (1998-2002), llegando a tener 130 mil beneficiarios en 1997 (Cruces et al., 2008: 15). En el año 1996 se lanzó también el “Programa de Atención a Grupos Vulnerables” (PAGV), que era independiente de las características laborales del hogar, y por ende, más localizado en la lógica del alivio a la pobreza. Por último, entre 1999 y 2001 se pusieron en marcha otros programas de lucha contra la pobreza, como el “Programa de Emergencia Laboral”, que apoyaba iniciativas de autoempleo (Golbert, 2004), y “Solidaridad”, que intentaba emular el PROGRESA mexicano. Este último programa no se pudo aplicar por problemas de diseño (Cruces et al., 2008).

³⁶ Cabe recordar que en diciembre del 2001, tras la renuncia del presidente De la Rúa, se inició una prolongada crisis institucional. El gobierno provisional de Duhalde tampoco pudo llegar a su término y debió convocar a elecciones. En mayo del 2003 asumió el presidente Kirchner, con 22,3% de los votos, la cifra más baja de la historia democrática argentina posterior a 1983.

1.2. Cambio y persistencia durante la posconvertibilidad: reglas macroeconómicas, mercado laboral e intervención social del Estado

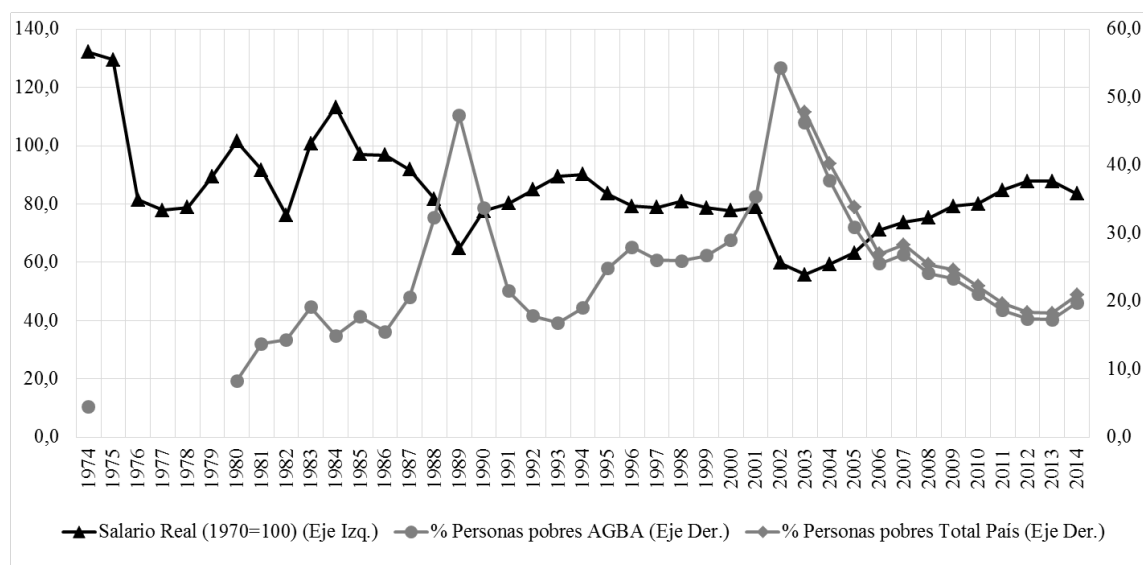
Durante los noventa se consolidaron tres rasgos relevantes del nuevo régimen de acumulación más concentrado y globalizado que se abrió tras la crisis de la ISI. Estos rasgos desempeñarían un papel relevante tras la salida de la convertibilidad al sustentar, pero también limitar, el nuevo ciclo de acumulación de capital.

En primer lugar, la irrupción de transformaciones productivas en el sector agropecuario – mediante la incorporación de nuevas tecnologías, modelos de gestión y de producción– cambió la fisonomía y la composición socioeconómica del sector rural (Giarracca y Teubal, 2010; Kulfas, 2016). Ello se inscribió en la profundización del “extractivismo”³⁷, asociado a una mayor dependencia del capitalismo argentino con respecto a la apropiación de renta agraria, pesquera, minera e hidrocarburífera (Kennedy, 2015; Svampa y Viale, 2014). Durante los años 2000, estos procesos favorecieron el aprovechamiento de las condiciones externas, en especial, el *boom* de los *commodities*.

En segundo lugar, se acentuó “...un perfil de especialización productiva basado en la provisión de recursos naturales y/o la exportación de *commodities* fabriles (...) en detrimento de la producción de manufacturas con mayor valor agregado y contenido tecnológico” (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014: 62). Este proceso estuvo ligado a la profundización de la extranjerización y la concentración del capital. A su vez, implicó una acentuada desindustrialización (entendida como la pérdida de relevancia del sector industrial en el PIB) y la consolidación de una matriz productiva con bajo grado de diversificación. Este perfil intensificó la heterogeneidad estructural del sistema económico y redundó en una débil absorción de fuerza laboral por parte de los estratos más productivos del sistema económico (Castells y Schorr, 2015; Chena, 2010; Infante y Gerstenfeld, 2013; Lavopa, 2008; Salvia, 2012; Wainer y Schorr, 2014a). Durante la posconvertibilidad, estos procesos condicionaron el patrón de crecimiento, al limitar el cambio estructural y propiciar la reaparición de la restricción externa.

³⁷ El extractivismo remite a un “patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales –en gran parte no renovables– así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como ‘improductivos’” (Svampa y Viale, 2014: 16).

Gráfico 1.2. Evolución del salario real promedio y de la incidencia de la pobreza^(a). Argentina, 1974-2014 (en base 1970=100 y en porcentaje de personas).



Nota: (a) se presentan dos series de incidencia de la pobreza: la primera, para el Área Gran Buenos Aires y la segunda para el total de aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

Fuentes: (a) salario real: Jaccoud et al. (2015) / (b) Tasa de pobreza: para el Área Gran Buenos Aires, entre 1974 y 2006, se reportan datos oficiales del INDEC. Entre el 2003 y el 2014, la serie fue construida a partir de datos de CIFRA (2015) aplicando un coeficiente de empalme para obtener datos del Gran Buenos Aires. Para el total de aglomerados urbanos, entre 2003 y 2006 se reportan datos oficiales del INDEC. Entre el 2003 y el 2014, los datos provienen de CIFRA (2015).

En tercer lugar, durante los noventa se consolidó un patrón de mayor explotación de la fuerza de trabajo y una distribución funcional del ingreso más regresiva que la verificada hasta mediados de los setenta (Águila y Kennedy, 2015; Félix, 2015; Lindenboim, Graña y Kennedy, 2010). Tal patrón quedó expresado en un incremento de la precarización laboral, la consolidación de niveles salariales históricamente bajos y mayores niveles de empobrecimiento (Gráfico 1.2). Durante los primeros años de la posconvertibilidad, el bajo nivel salarial fue un componente clave que apuntaló el proceso de crecimiento. En contrapartida, favoreció estrategias de acumulación “trabajo-intensivas” (Lo Vuolo, 2009) que limitaron los incrementos de la productividad global de la economía argentina³⁸.

Ahora bien, un rasgo característico de la posconvertibilidad fue la aplicación de una serie de políticas heterodoxas³⁹ que contrastaron con las implementadas en los noventa. Coincidimos

³⁸ En este sentido, cabe señalar que, de acuerdo con datos de Jaccoud et al. (2015: 87), el rezago de la productividad argentina con respecto a la de Estados Unidos se intensificó a partir de mediados de los setenta: mientras que representaba alrededor del 15% de la productividad norteamericana, en el 2013 se ubicaba en torno al 13%.

³⁹ Apelamos a esta noción para subrayar el papel que desempeñaron medidas tales como la reestructuración de la deuda externa, el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo y, especialmente, las políticas expansivas destinadas a sostener el nivel de actividad (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013; Kulfas, 2016; Manzanelli y Basualdo, 2016). Este último aspecto contrastó con las políticas ortodoxas que promovían la austeridad fiscal durante los noventa (Salvia, 2012).

con Piva (2015: 67) en que esta reorientación no puede entenderse como un fenómeno exclusivamente económico, sino que debe interpretarse como parte de “... una estrategia general de reconstrucción y reproducción del poder político”, que implicó acentuar la dimensión consensual (y no ya la coercitiva) de la intervención del Estado tras la crisis. Ello se plasmó en diferentes esferas de la intervención estatal, principalmente en la política laboral y en la política social.

Este conjunto de intervenciones puede inscribirse en el ideario neodesarrollista (Bresser-Pereira, 2017; FGV, 2010). El neodesarrollismo se articula con los supuestos teóricos del neoestructuralismo⁴⁰. Desde esta perspectiva, el Estado debe focalizarse menos en la redistribución del ingreso y más en la promoción de industrias básicas, de un “núcleo endógeno” de innovación y en el eslabonamiento de grandes empresas con pequeñas y medianas para incrementar globalmente la competitividad (Fajnzylber, 1996 [1990]; Sunkel, 1991). A su vez, los países periféricos deben aprovechar sus ventajas comparativas y adecuar los patrones de consumo a los niveles de competitividad alcanzados⁴¹. Para el neoestructuralismo, el mercado mundial ofrece oportunidades que pueden aprovecharse mediante una “transformación productiva con equidad” (Fajnzylber, 1996 [1990]: 66). En el planteo neodesarrollista, las dos ventajas principales de los países periféricos son el bajo costo de la fuerza de trabajo y la disponibilidad de recursos naturales (Bresser-Pereira, 2017). En este punto, adquiere relevancia la intervención social del Estado: la promoción de la competitividad sistémica debe acompañarse de políticas de redistribución que garanticen la “cohesión social” en un contexto de cambio estructural (Fajnzylber, 1996 [1990]: 66).

Distintos elementos del planteo neodesarrollista adquirieron centralidad en la Argentina tras la crisis del régimen de convertibilidad. En esta investigación diferenciamos dos etapas del ciclo de políticas heterodoxas. Una primera fase, de “crecimiento posdevaluación” (2003-2008), se caracterizó por el crecimiento económico liderado por exportaciones, el bajo costo de la

⁴⁰ El enfoque neoestructuralista partió de la constatación de las limitaciones de la ISI en América Latina (Sztulwark, 2005). De acuerdo con el nuevo enfoque, la ISI falló en compatibilizar crecimiento con distribución (el dilema del “casillero vacío”) (Fajnzylber, 1996 [1990]: 66). Asumiendo un cambio en el sistema mundial y una menor contraposición entre bienes primarios e industriales, el problema de América Latina pasó a girar en torno al “desarrollo *desde dentro*” en contraposición al planteo estructuralista clásico de “desarrollo *hacia adentro*” (Sunkel, 1991).

⁴¹ Como señaló Sunkel: “un verdadero desarrollo nacional y regional tendrá que basarse primordialmente en *la transformación de los recursos naturales* que América Latina posee en relativa abundancia; en el aprovechamiento mesurado y eficiente de la infraestructura y capital acumulados; en la incorporación del esfuerzo de toda su población –especialmente aquella que está relativamente marginada–, y en la adopción de *estilos de vida y consumo, técnicas y formas de organización más apropiadas a ese medio natural y humano*” (1991: 22; énfasis agregado).

fuerza de trabajo y el uso de la capacidad instalada ociosa, en un contexto dominado por un tipo de cambio “alto”. Por consiguiente, resultaron cruciales tanto las condiciones coyunturales ofrecidas por la crisis del régimen de convertibilidad como las modificaciones estructurales ocurridas en las décadas previas. Esta primera fase se entronca directamente con los principales postulados neodesarrollistas referidos. Durante esta etapa, se consolidó un bloque político (sostenido en una convergencia de intereses) que permitió superar la crisis político-institucional a la que había conducido el régimen de convertibilidad.

Sin embargo, los principales pilares que vehiculizaron esa primera etapa comenzaron a agotarse hacia 2007-2008. La “bisagra” entre las fases reconocidas fue la crisis agropecuaria (2008) y la crisis mundial (2009), que bloquearon el estilo de crecimiento inicial. Así, identificamos una segunda etapa, que denominamos de “crisis, recuperación y estancamiento” (2008-2014). Este período estuvo caracterizado por crecientes obstáculos macroeconómicos y la emergencia de contradicciones del propio régimen de crecimiento neodesarrollista. La política económica se orientó a sostener el nivel de actividad, incentivar el consumo y limitar el alcance de los estrangulamientos externos. A su vez, la política social cobró una renovada centralidad en la agenda de intervención estatal, lo que puede comprenderse a la luz del carácter global del ciclo como proceso de recomposición político-institucional.

Cuadro 1.1. Principales indicadores económicos, sociales y distributivos de la posconvertibilidad. Argentina, 2003-2014.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INDICADORES ECONÓMICOS												
Var % PIB^a	8,8	9,0	8,9	8,1	9,0	4,1	-6,0	10,4	6,1	-1,1	2,3	-2,6
Inflación (Var % IPC)^b	13,4	4,4	9,6	11,5	17,1	26,7	16,3	22,2	22,2	24,0	26,9	38,0
Inversión (% PIB)^a	14,3	18,0	18,3	19,9	21,3	22,1	17,0	21,2	23,1	19,8	20,2	18,7
Deuda Pública (% PIB)^c	125,3	116,0	64,3	60,0	50,0	40,0	45,0	38,5	34,0	34,0	33,0	39,1
Resultado Financiero Sector Público (% PIB)^d	2,9	3,7	1,0	1,4	0,8	0,2	-2,2	-0,2	-3,6	-2,2	-2,5	-3,8
Balance de cuenta corriente (% PIB)^e	6,4	1,8	2,4	3,0	2,2	1,7	2,2	-0,3	-0,8	-0,2	-1,9	-1,5
Balance comercial (% PIB)^f	10,4	7,0	5,9	5,6	4,4	3,7	5,0	2,9	1,7	1,9	-0,1	0,4
Exportaciones (% PIB)^f	24,1	23,8	23,2	22,9	22,6	22,0	19,5	18,8	18,3	16,2	14,6	14,3
Importaciones (% PIB)^f	13,6	16,8	17,3	17,3	18,2	18,3	14,4	16,0	16,7	14,2	14,7	13,9
Sector industrial (% PIB)^a	-	18,9	18,7	18,9	18,6	18,5	18,3	18,4	18,7	18,3	18,2	17,7
Consumo (% PIB)^a	75,9	75,4	74,7	75,9	76,0	78,1	79,8	80,0	82,0	84,0	85,2	84,5
INDICADORES SOCIALES												
Tasa de actividad^g	46,3	44,4	45,0	45,6	45,2	46,0	46,2	45,5	45,8	46,1	45,3	44,8
Tasa de empleo^g	37,0	38,8	40,4	41,6	41,7	42,6	42,3	42,1	42,7	42,9	42,4	41,7
Tasa de desempleo^g	20,1	17,4	13,5	10,6	8,6	7,8	8,7	8,0	7,4	7,4	7,1	7,9
Salario real (Base 1970=100)^h	55,8	59,3	63,3	71,1	73,7	75,3	79,2	80,1	84,8	87,7	87,8	83,6
Población bajo línea de pobrezaⁱ	49,7	41,6	35,4	28,2	27,2	25,5	24,9	22,5	20,1	18,8	18,0	20,6
Población bajo línea de indigenciaⁱ	22,8	15,6	12,7	9,6	8,4	7,8	7,3	6,2	5,0	4,5	4,3	5,0
Coefficiente de Gini^c	0,535	0,502	0,493	0,483	0,474	0,463	0,453	0,445	0,436	0,425	0,423	0,427

(a) Fuente: elaboración propia con base en INDEC-MECON (año base 2004 y revisión 2016). Los datos de 2003 se obtuvieron por empalme con la serie de 1993.

(b) Fuente: 2003-2006 INDEC-MECON / 2007-2014: IPC-GB.

(c) Fuente: Manzanelli y Basualdo (2016)

(d) Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto-MECON.

(e) Fuente: Banco Mundial (<<http://datos.bancomundial.org>>).

(f) Fuente: CEPAL (<<http://estadisticas.cepal.org>>)

(g) Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC. Excluye planes de empleo.

(h) Fuente: Kennedy (2012, 2015). Para 2012-2014, empalme con CIFRA (2016) a partir de tasas de variación.

(i) Fuente: CIFRA (2015: 3).

1.2.1. El ciclo de crecimiento posdevaluación (2003-2008)

El deterioro socioeconómico que caracterizó a los últimos años del régimen de convertibilidad condujo a niveles crecientes de conflicto social. Ello originó una contradicción cada vez más fuerte entre las necesidades de la acumulación y las de legitimación del sistema político-económico (Félicz, 2015; Félicz y López, 2012; López, 2015; Piva, 2015). La salida de la crisis “... requería recomponer las condiciones para la valorización del capital y, simultáneamente, canalizar y contener las demandas de las distintas fracciones subalternas” (López, 2015: 99-100)⁴².

Mientras que el capital extranjero consolidado en el sector de servicios privatizados era partidario de avanzar hacia una “dolarización” como salida a la crisis, distintas fracciones del capital concentrado –con capacidad exportadora–, sectores industriales y el capital financiero local eran partidarios de la salida “devaluatoria”. Una parte del movimiento obrero apoyaba esta última variante, en tanto consideraba que permitiría una fase expansiva en materia de empleo (Basualdo, 2010; Cantamutto y Wainer, 2013). Así se conformó un nuevo “bloque” sociopolítico que apoyó la salida del modelo de convertibilidad, posibilitó la implementación de políticas de inspiración neodesarrollista y permitió la normalización institucional. En términos sociopolíticos, el nuevo consenso alentó un “modelo de crecimiento con inclusión social” en contraste con los noventa (Arroyo, 2004; Narodowski y Panigo, 2010).

La intensa crisis económica condujo a declarar el *default* de la deuda externa y, a comienzos del 2002, se llevó a cabo la salida del régimen de convertibilidad mediante una fuerte devaluación del tipo de cambio⁴³. En lo inmediato, la nueva situación generó un colapso económico, caracterizado por la pérdida de empleos, ingresos y una aguda retracción del PIB (Gráfico 1.1). Sin embargo, a fines del 2002, los efectos más severos de esta crisis comenzaron a revertirse.

Las condiciones a través de las cuales se abandonó el régimen de convertibilidad originaron un nuevo ciclo de crecimiento económico. Al encarecer las importaciones, la devaluación favoreció al sector productor de bienes y estimuló una incipiente sustitución de importaciones

⁴² Este proceso se evidenció también en distintos países de América Latina. Como señalan Seoane y Algranati: “se abrió así un nuevo período en el terreno de la conflictividad social regional que llamamos de crisis de hegemonía del régimen neoliberal. Dicha crisis se expresó (...) en la capacidad destituyente conquistada por las clases y grupos subalternos (...) También la crisis se manifestó en la emergencia de mayorías electorales críticas a las políticas aplicadas en los noventa” (2013: 47).

⁴³ A partir de la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del régimen cambiario (2002), el gobierno de Duhalde llevó adelante la salida de la convertibilidad.

en algunas ramas (Fernández Bugna y Porta, 2008; Schorr, 2012). De allí el papel relevante que desempeñó la industria y la producción de bienes en la recuperación económica (Manzanelli y Basualdo, 2016). Todo ello fue posible por la convergencia de dos circunstancias excepcionales. Por una parte, la crisis de finales de los noventa había dejado una significativa capacidad instalada ociosa (Félicz, 2013). Tal situación permitió una rápida recuperación del nivel de actividad ante la alteración del régimen macroeconómico. Por otra parte, la devaluación implicó una caída de los ingresos reales, en especial, de los asalariados: en mayo del 2003, el salario real alcanzó su nivel más bajo desde 1970 (Kennedy, 2012). A diferencia de lo ocurrido en los noventa, el abaratamiento relativo de la fuerza de trabajo viabilizó que la absorción de mano de obra en actividades trabajo-intensivas coexistiera con un aumento de la tasa de ganancia empresaria (CENDA, 2010).

Al mismo tiempo, la devaluación del tipo de cambio favoreció al sector exportador (Damill, Frenkel y Rapetti, 2015). También contribuyó una modificación del escenario global: la mayor demanda agroalimentaria de países asiáticos estimuló un alza de los precios de los *commodities* y permitió una modificación de los términos de intercambio (Manzanelli y Basualdo, 2016)⁴⁴. Las transformaciones productivas del sector agroexportador que se habían extendido en los noventa permitieron aprovechar las nuevas condiciones externas (Kulfas, 2016). Al igual que en etapas expansivas previas de la historia económica, el flujo de renta agraria tuvo una injerencia clave en la dinámica de la acumulación (Jaccoud et al., 2015)⁴⁵.

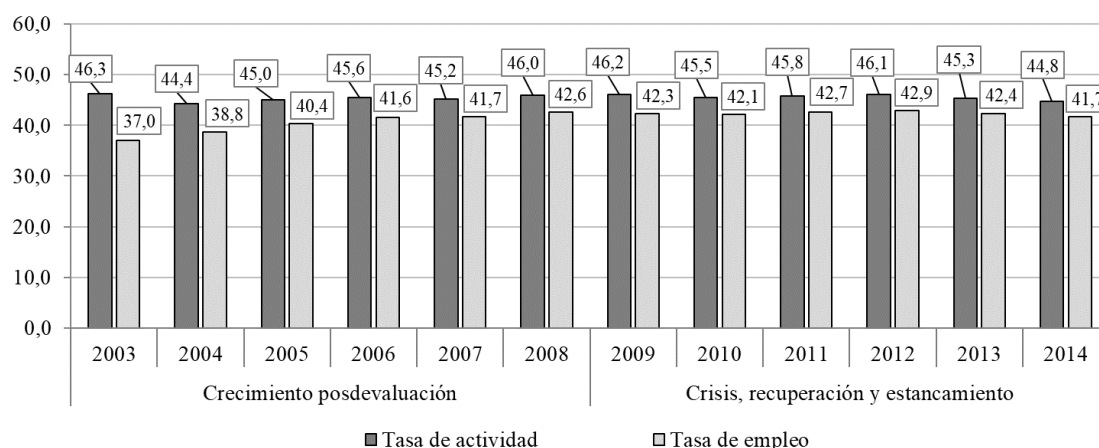
El deterioro distributivo, así como los niveles de empobrecimiento y desocupación sin precedentes, limitaron los efectos inflacionarios de la devaluación (Beccaria y Maurizio, 2012). En el mismo sentido contribuyó la implementación de retenciones impositivas a las exportaciones, al desacoplar parcialmente los precios internos de los externos. Además, estos tributos ampliaron la base de recursos fiscales con los que contaba el Gobierno, que de esa manera consiguió equilibrar las cuentas públicas (Cuadro 1.1). A partir de entonces, con superávit fiscal y comercial, se encaró la reestructuración de la deuda externa en *default* (Damill, Frenkel y Rapetti, 2015).

⁴⁴ Svampa (2011) destacó esta paradoja de los gobiernos “progresistas” de la región: la aceptación de los elementos estructurales del “consenso de los *commodities*” –según el cual, la región es proveedora de materias primas– lo que consolida procesos de desposesión. Tal división del trabajo, basada en la especialización productiva, estaba implícita en las medidas del Consenso de Washington.

⁴⁵ Sin embargo, de acuerdo con Jaccoud et al. (2015: 95, Gráfico 2), fue fundamentalmente a partir del 2007 cuando la masa de renta de la tierra incrementó de manera significativa su volumen con respecto a los noventa. Ello se debió al *boom* de los precios de los *commodities* que se registró desde entonces.

Los distintos elementos mencionados configuraron el “ciclo de oro” de crecimiento posdevaluación. Entre el 2003 y el 2008, el PIB y el PIB per cápita se expandieron a tasas de 8,8% y 7,8% promedio por año, respectivamente. Las exportaciones mantuvieron una incidencia relevante durante todo el período y, junto con la inversión, dinamizaron el crecimiento del PIB (Manzanelli y Basualdo, 2016). A diferencia de los años de recesión de fines de los noventa, en esta etapa se expandió la demanda laboral, se recuperaron los ingresos reales, y se redujeron la pobreza y la indigencia (Cuadro 1.1 y Gráfico 1.2).

Gráfico 1.3. Tasas de actividad y de empleo^(a). Total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

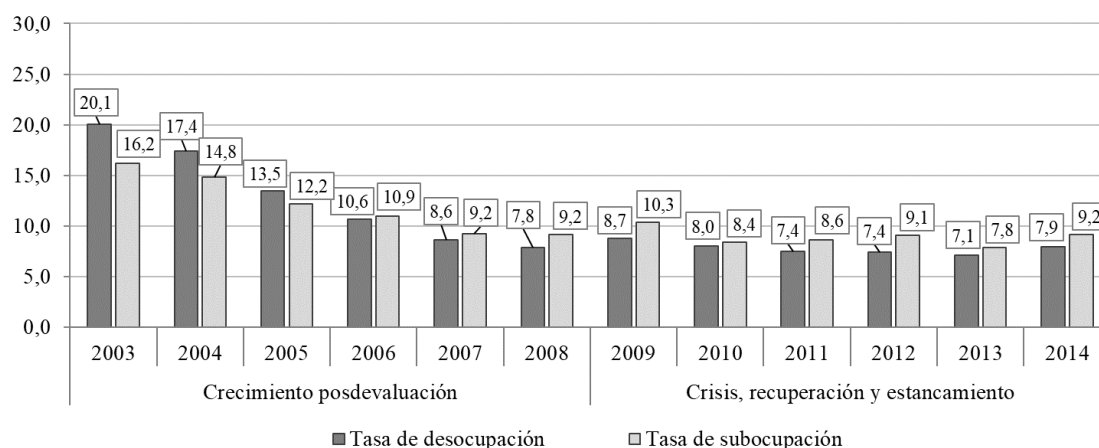


Nota: (a) excluye ocupados en planes de empleo.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes a los cuartos trimestres de cada año.

La dinámica macroeconómica se plasmó en el funcionamiento del mercado laboral. En primer lugar, al inducir la sustitución de importaciones y abaratar el costo laboral, la devaluación propició una recuperación de la demanda de fuerza de trabajo. En este contexto, creció la tasa de empleo y se retrajeron las tasas de desocupación y subocupación horaria (Gráficos 1.3 y 1.4). En segundo lugar, esta demanda fue más intensa con respecto a trabajadores de calificación media y baja, en ramas como construcción, servicios y en algunas actividades manufactureras como las textiles (Beccaria y Maurizio, 2012). Ello habría favorecido una menor desigualdad en la estructura de remuneraciones (Gasparini, Cruces y Tornarolli, 2016; Salvia, Vera y Poy, 2015). En tercer lugar, un rasgo característico de esta fase fue la expansión del empleo asalariado registrado en la seguridad social (Beccaria y Maurizio, 2012; Novick, 2006; Palomino y Dalle, 2012; Poy, 2017a; Salvia, Vera y Poy, 2015) (Gráfico 1.5).

Gráfico 1.4. Tasas de desocupación y de subocupación horaria. Total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes a los cuartos trimestres de cada año.

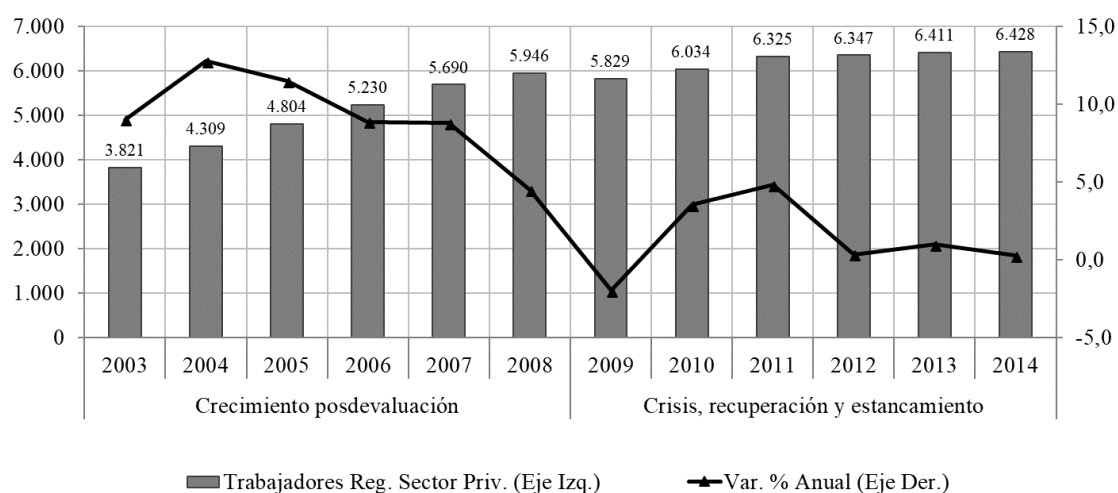
Algunos investigadores señalan que estos cambios también se plasmaron en la estructura de clases sociales. Destacan una expansión de las posiciones de “clases medias” (Benza, 2016; Dalle, 2012; Dalle et al., 2015; Maceira, 2016) derivada de una mayor presencia de empleados administrativos y técnicos. Asimismo, señalan un cambio de composición en la clase trabajadora a partir de la expansión de más calificadas en detrimento de otras marginales (Benza, 2016; Dalle, 2012). Dalle (2012: 91) ha sintetizado estos cambios refiriéndose a la existencia de “indicios de recomposición social” durante la posconvertibilidad.

Ahora bien, aun cuando los cambios en el régimen macroeconómico favorecieron un rápido proceso de crecimiento (en especial, por el abaratamiento de fuerza de trabajo y el encarecimiento de las importaciones), no habrían bastado para propiciar un “cambio estructural” de la matriz productiva del capitalismo argentino. En efecto, durante el período, se consolidó el perfil de especialización basado en la exportación de *commodities* agroindustriales de bajo contenido tecnológico, en la explotación de recursos naturales y, en consecuencia, se mantuvo limitada la incidencia de la industria en el PIB (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; Kulfas, 2016). Ello no podría desligarse de la mayor extranjerización de la economía, con consecuencias sobre el estilo de crecimiento, las prioridades de inversión y la disponibilidad de divisas, dada la remisión de utilidades (Wainer y Schorr, 2014a, 2014b)⁴⁶. Por su parte, la reactivación manufacturera, favorecida por el tipo de cambio alto, la

⁴⁶ De acuerdo con Wainer y Schorr (2014b), las empresas extranjeras pasaron de representar 33,8% del valor bruto de la producción de las 500 empresas argentinas más grandes en 1993, a 69% en el 2001 y a 75,3% en el 2008. Como destacan estos autores, una consecuencia de la mayor extranjerización es la creciente exposición de la economía a la remisión de utilidades (y, por tanto, a la restricción de divisas) y a la inflación.

capacidad ociosa y la reducción del costo laboral, se sustentó en una estructura modelada en los noventa (Castells y Schorr, 2015; Fernández Bugna y Porta, 2008; Wainer y Schorr, 2014a, 2014b). En este sentido, el bajo peso alcanzado por la inversión (Cuadro 1.1), la relevancia de estrategias de acumulación trabajo-intensivas, la escasa diversificación de la canasta exportadora y el débil cambio tecnológico en el segmento de pequeñas y medianas empresas serían factores que limitaron la transformación estructural del patrón de desarrollo argentino (Acosta, 2010; Bekerman y Vázquez, 2016; Félix, 2015; Piva, 2015; Wainer y Schorr, 2014a). En otras palabras, serían factores del modelo de acumulación “que traban el desarrollo de las fuerzas productivas en el nivel nacional” (Wainer y Schorr, 2014a: 141).

Gráfico 1.5. Trabajadores asalariados registrados del sector privado. Argentina, 2003-2014^(a) (miles de trabajadores y variación porcentual anual).



Nota: (a) corresponde a datos del segundo semestre de cada año.

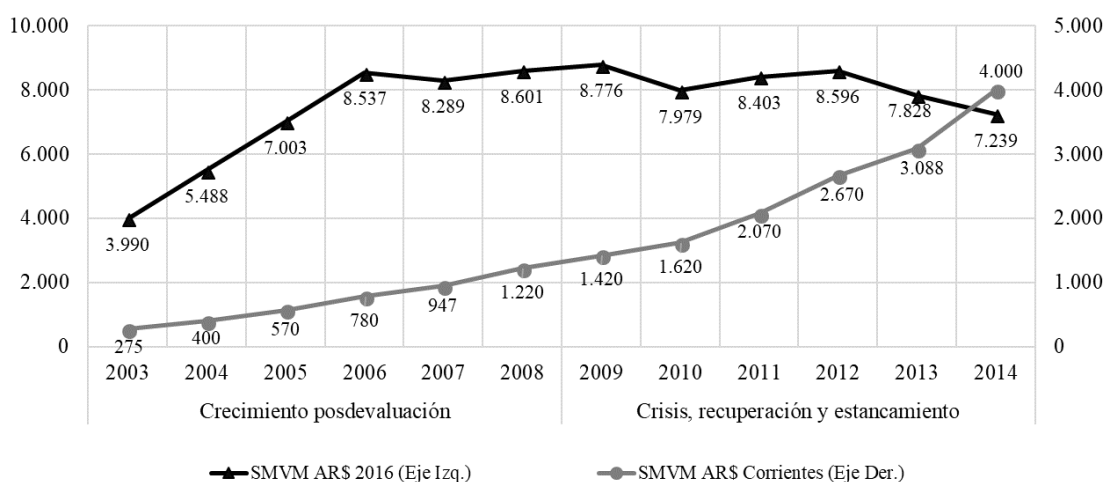
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEYSS), con base en información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Durante esta etapa de crecimiento posdevaluación, se registró una reorientación de la intervención social del Estado mediante políticas laborales y sociales, dirigida a la recomposición del orden sociopolítico que había entrado en crisis junto con el régimen de convertibilidad. La política laboral⁴⁷ se orientó a morigerar el “efecto potencialmente desestabilizador” de los niveles alcanzados por la precariedad laboral en los noventa (Félix, 2015: 105). Con respecto a las políticas orientadas a promover el empleo registrado, Panigo y Neffa (2009: 28) destacan una confluencia de factores: la simplificación del registro de

⁴⁷ Si bien no tenemos pretensión de ser exhaustivos, abordamos la política laboral a partir de tres ejes ordenadores: políticas relacionadas con el registro laboral y el fomento del empleo, iniciativas relacionadas con ingresos y salarios, y políticas dirigidas a grupos específicos de trabajadores.

nuevos puestos de trabajo, la recomposición de la función de contralor por parte del Estado y una normativa especial dirigida a las pequeñas y medianas empresas⁴⁸. Junto con el alto ritmo de crecimiento económico, estas medidas favorecieron la generación de empleo registrado en la seguridad social.

Gráfico 1.6. Evolución del salario mínimo, vital y móvil promedio anual. Argentina, 2003-2014 (en pesos corrientes y pesos del cuarto trimestre de 2016).



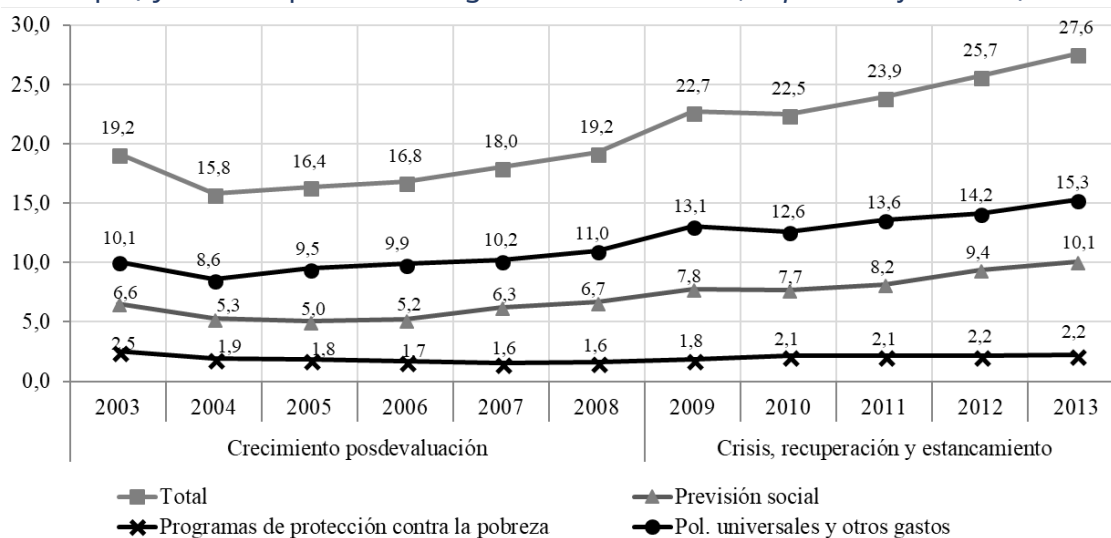
Fuente: elaboración propia a partir del Boletín Oficial de la República Argentina.

Con respecto a las políticas de ingresos, diferenciamos dos aristas. Por una parte, la Ley 25.877 implicó la reactivación de las negociaciones salariales colectivas sectoriales (Palomino y Trajtemberg, 2006). Estas iniciativas favorecieron la recomposición de ingresos de los trabajadores registrados durante la salida de la crisis y propiciaron una estructura de salarios más equitativa (Lanari, 2015). Por otra parte, uno de los principales mecanismos de intervención estatal sobre el mercado de trabajo remite al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La restauración del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (Decreto N° 1095/04) implicó que, en los años posteriores, esta institución laboral pasase a definir anualmente la evolución del SMVM (Gráfico 1.6)⁴⁹.

⁴⁸ En el 2004 se derogó la ley de “Reforma Laboral” (Ley 25.250), de flexibilización del mercado de trabajo, y se sancionó la ley de “Ordenamiento del Régimen Laboral” (Ley 25.877), que permitió la simplificación registral de trabajadores. En el mismo año se lanzó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, orientado a recuperar la fiscalización laboral y centralizar la actividad de contraloría (Tomada, 2014). El 2 de junio del 2005, el MTEYSS y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzaron las resoluciones N° 440 y N° 1887 y crearon el “Programa de Simplificación y Unificación en materia de inscripción laboral y de la seguridad social”. Estas iniciativas se complementaron con una reducción de las contribuciones patronales por parte de pequeñas y medianas empresas (Panigo y Neffa, 2009: 31)

⁴⁹ Entre 1993 y el 2003, el SMVM había quedado establecido en un valor fijo (\$ 200). En julio del 2003 se elevó la remuneración mínima de manera escalonada (Decreto N° 388). Entre ese año y el 2005, el Gobierno dispuso la incorporación de “sumas fijas” (remunerativas y no remunerativas) a los salarios básicos de los trabajadores del sector público y privado, que también alcanzaron a los programas de empleo vigentes (Panigo y Neffa, 2009:

Gráfico 1.7. Evolución del gasto público social consolidado (nivel nacional, provincial y municipal) y sus componentes. Argentina, 2003-2013 (en porcentaje del PIB).



Notas: (a) previsión social: incluye pensiones no contributivas / (b) programas de protección contra la pobreza: incluye programas de empleo y seguro de desempleo contributivo, promoción y asistencia directa. Se suma la proporción de AUH y AUE a partir del informe de Lombardía y Domeniconi (2015: 18).

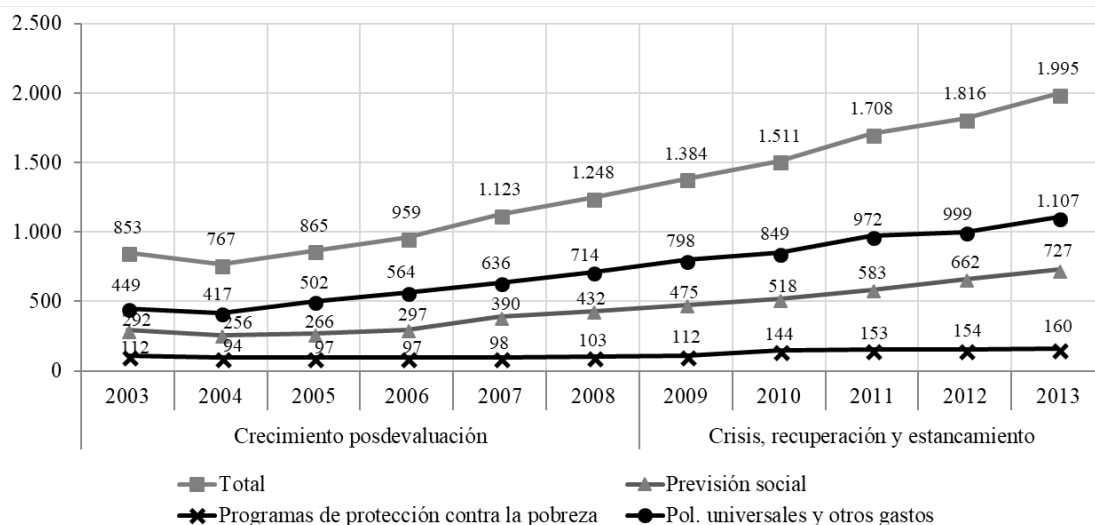
Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía de la Nación, Serie de Gasto Público Consolidado.

Finalmente, la política laboral también se orientó a la implementación de marcos regulatorios específicos para determinados grupos de trabajadores. Un aspecto relevante está asociado a los trabajadores de casas particulares. En noviembre del 2005, la Ley 26.063 instituyó la obligatoriedad de aplicación del régimen especial de seguridad social de los trabajadores del servicio doméstico. Ello permitió que las personas físicas pudieran deducir del impuesto a las ganancias un monto para la registración de trabajadores domésticos (Panigo y Neffa, 2009: 35).

Con respecto a la intervención social del Estado por medio de políticas sociales, en esta primera etapa de la posconvertibilidad el gasto público social permaneció estable como porcentaje del PIB (Gráfico 1.7). Sin embargo, en un contexto de significativa expansión, el gasto público social se incrementó sistemáticamente en términos reales durante todo el período (Gráfico 1.8).

24). También se estableció la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que comenzó a regular el salario de distintas actividades rurales.

Gráfico 1.8. Evolución del gasto público social consolidado (nivel nacional, provincial y municipal) y sus componentes. Argentina, 2003-2013 (*en cientos de millones de pesos del 2004*).



Notas: (a) previsión social: incluye pensiones no contributivas / (b) programas de protección contra la pobreza: incluye programas de empleo y seguro de desempleo contributivo, promoción y asistencia directa. Se suma la proporción de AUH y AUE a partir de partir del informe de Lombardía y Domeniconi (2015: 18).

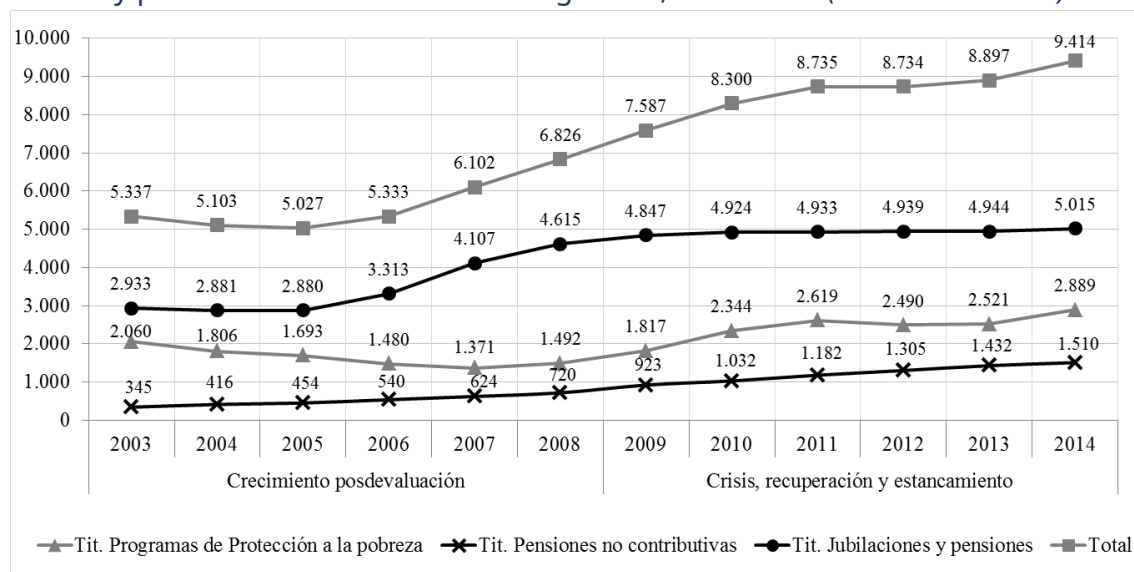
Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía de la Nación, Serie de Gasto Público Consolidado.

En este sentido, uno de los elementos relevantes fue la expansión de la cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones y las modificaciones en los haberes. A partir del 2005, quienes tenían edad para jubilarse pero no cumplían con los años de aportes exigidos pudieron acceder a un haber jubilatorio mediante la “moratoria previsional” (Rofman y Oliveri, 2012)⁵⁰. Este encuadre institucional permitió que el número de titulares de jubilaciones y pensiones se incrementara de forma intensa (Gráfico 1.9). De manera paralela, se produjo una recuperación de los haberes; en especial, de la parte más baja de la pirámide previsional. Tras la devaluación, el Gobierno lanzó una serie de medidas para incrementar la jubilación mínima: entre el 2003 y el 2007 aumentó 250% en términos nominales y 80% en términos reales, lo que redujo las distancias dentro de la pirámide (Agú, 2015; Rofman y Oliveri, 2012). Otro de los elementos característicos de estos cambios fue el aumento de la cobertura de las pensiones no contributivas, especialmente de aquellas destinadas a personas con situaciones de discapacidad o invalidez y a madres de siete o más hijos⁵¹ (Gráfico 1.9).

⁵⁰ El denominado “Plan de Inclusión Previsional” (PIP) entró en vigor en enero del 2005 a partir de la Ley 25.994 y el Decreto 1454/05.

⁵¹ Hasta el 2003 existía una restricción cuantitativa del número de pensiones no contributivas que el Estado podía entregar. Hasta entonces, sólo podían darse altas cuando se registraba una baja. La eliminación de ese “cupó” permitió la expansión de este tipo de transferencias económicas.

Gráfico 1.9. Titulares de jubilaciones y pensiones^(a), programas de protección contra la pobreza^(b) y pensiones no contributivas. Argentina, 2003-2014 (miles de titulares)^(c).



Notas: (a) Sólo incluye a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino / (b) Incluye titulares de PASD (Familias por la Inclusión Social, AUH y otros programas) y de PPD (PJJHD, Seguro de Capacitación y Empleo, Argentina Trabaja y otros; no incluye seguro de desempleo). En el 2009, no se contabilizaron los titulares de AUH para evitar el posible registro duplicado con beneficiarios del Plan Familias por la Inclusión Social / (c) Dado que la información proviene de distintas fuentes, no se trata de titulares únicos.

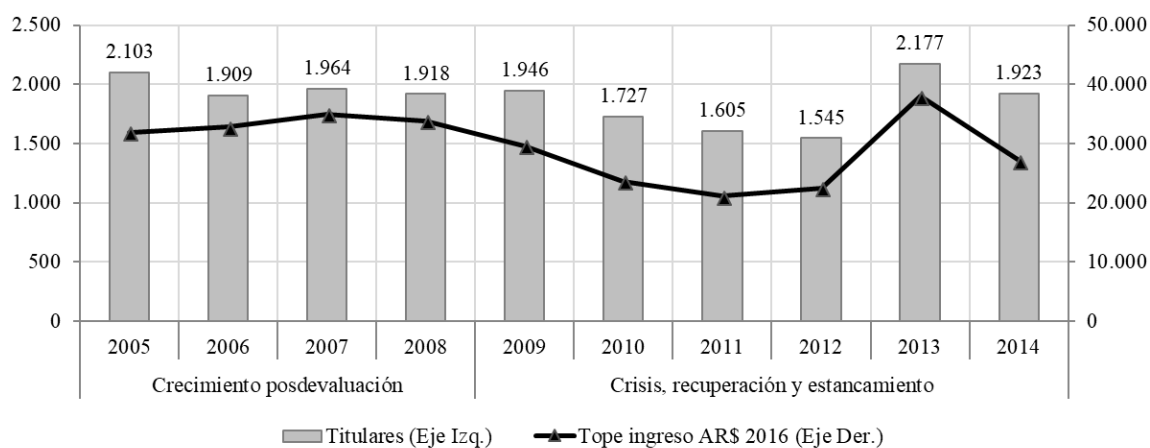
Fuentes: (a) Jubilaciones y pensiones: elaboración propia a partir del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2017) / (b) Transferencias de ingresos: Plan Jefas y Jefes de Hogar (2003-2007): Cruces et al. (2008: 22). Para 2008, datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social / Familias por la Inclusión Social (2003-2007), Cruces et al. (2008), p. 22. Para 2008 y 2009, CEPAL, Base de datos de Programas de Protección Social no contributiva. Datos disponibles en: <<https://dds.cepal.org/bpsnc/#es>> / Otros Programas de Empleo: Seguro de capacitación y empleo (2003-2007), Cruces et al. (2008: 22). Para 2008, Dirección de Análisis del Gasto Público y Programas Sociales (2008) y datos proporcionados por Secretaría de Empleo MTEySS / Asignación Universal por Hijo: Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Datos disponibles en: <<http://www.transparencia.anses.gob.ar>> / (c) Pensiones no contributivas: Boletín Estadístico de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012). Para 2012-2014, datos especialmente suministrados por la Comisión Nacional de Pensiones.

La crisis del régimen de convertibilidad había conducido a una expansión del gasto asociado a la “lucha contra la pobreza”. A partir del 2002, se ampliaron los programas de transferencias monetarias condicionadas asociados al empleo, es decir, que exigían una contraprestación laboral. Durante la crisis, la intervención social del Estado estuvo destinada a contener el conflicto social derivado del proceso de empobrecimiento. El caso más paradigmático fue el “Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados” (PJJHD). A diferencia de los programas preexistentes, el PJJHD tuvo un alcance masivo: llegó rápidamente a casi dos millones de beneficiarios (Cruces et al., 2008; Rofman y Oliveri, 2012; Trujillo y Villafañe, 2011). Con posterioridad, comenzó una modificación paulatina de este componente del régimen de políticas sociales. Una parte de los hogares beneficiarios del PJJHD fueron transferidos al “Plan Familias por la Inclusión Social” (PFIS), un programa de tipo *welfare*, mientras que

otros pasaron al “Seguro de Capacitación y Empleo” (SCE), que se mantuvo en la lógica del *workfare* y de la promoción de la “empleabilidad”⁵² (Gráfico 1.9).

En contraste, el régimen de asignaciones familiares (AAFF) tuvo un comportamiento distinto (Bertranou, 2010; Rofman y Oliveri, 2012). Si bien durante el período posconvertibilidad hubo un notorio crecimiento del empleo registrado, la evolución del número de titulares de asignaciones familiares fue errática, y tuvo períodos de retracción en términos absolutos (Gráfico 1.10). Ello fue así debido al atraso en la actualización de los tope que permitían acceder al beneficio como resultado de la inflación.

Gráfico 1.10. Titulares de Asignaciones Familiares por Hijo^(a) y tope de ingreso para acceder al beneficio^(b). Argentina, 2005-2014 (*miles de titulares y pesos de diciembre de 2016*).



Notas: (a) Sólo se incluyen beneficios correspondientes a Asignación Familiar por hijo (excluyendo siempre que fue posible Asignación prenatal, por nacimiento, maternidad, hijo con discapacidad, matrimonio, adopción y ayuda escolar) / (b) En pesos de diciembre de 2016. A partir del cambio de normativa en 2012, el ingreso reportado corresponde al monto máximo por cada cónyuge.

Fuente: elaboración propia en base a ANSES, CIFRA-CTA y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social / Para los años 2005-2007: se estimó el número de beneficios otorgados en el período 2005-2007 a partir de un informe de CIFRA (2012), que presenta la evolución en número índice hasta 2012. Dada la relativa estabilidad del número de beneficios por titular, al número de asignaciones se lo dividió por un coeficiente y se obtuvo el número de titulares. / Para los años 2008-2009: el total de beneficios pagados surge de los Boletines Estadísticos de la Seguridad Social correspondiente a esos años (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008, 2009). Nuevamente, el número de beneficios se dividió por el número promedio de asignaciones por titular. / Para los años 2010-2014: Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Datos disponibles en: <<http://www.transparencia.anses.gob.ar>>

⁵² El PJJHD alcanzó su número máximo de cobertura en el 2003, cuando fue cerrado a nuevos beneficiarios. A partir de entonces, el “Plan Familias para la Inclusión Social” (PFIS), iniciado en el 2002, y que incluía a antiguos beneficiarios del “Programa de Atención a Grupos Vulnerables”, se amplió a partir de 2006, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social para recibir a los beneficiarios “vulnerables” del PJJHD. Este Plan otorgaba un beneficio por tiempo indeterminado, tomando en cuenta el número de niños en el hogar, y planteando condicionalidades en salud y educación. Por otro lado, el “Seguro de Capacitación y Empleo” (SCE), dirigido a los beneficiarios “empleables” del PJJHD, brindaba un beneficio monetario a cambio de la participación en un sistema de capacitación (Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez, 2014).

1.2.2. La fase de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2014)

Tras inducir un rápido crecimiento económico, los fundamentos de las políticas neodesarrollistas mostraron contradicciones y signos de agotamiento. Una nueva fase de la posconvertibilidad se inició a partir del 2008, cuando el escenario político-económico comenzó a modificarse.

El crecimiento de la posdevaluación se basó principalmente en el uso de la capacidad ociosa preexistente y en la incorporación extensiva de fuerza de trabajo, antes que en incrementos de la productividad (Féliz, 2015; Piva, 2015). La sistemática reducción de la tasa de desempleo y las activas políticas en materia de ingresos generaron un progresivo incremento de los salarios reales (Cuadro 1.1). Ello debilitó uno de los fundamentos que habían sostenido a las políticas neodesarrollistas implementadas en la primera fase: el deterioro de los ingresos de los asalariados. En ausencia de un salto de la inversión en tecnología e infraestructura, sin políticas activas en materia de fomento y articulación industrial (Castells y Schorr, 2015), y ante estrategias deliberadas de remarcación para trasladar los aumentos salariales a precios (Féliz, 2015), se inició un ciclo de mayor inflación. Ello atacó otro de los pilares del modelo posdevaluación, al promover la apreciación del tipo de cambio.

La dependencia estructural con respecto a los precios de los *commodities* –cuyos saltos condicionan el nivel de actividad interno– también desempeñó un papel relevante en el cambio de escenario (Katz, 2016). A partir del 2007, los precios internacionales de los bienes primarios se incrementaron con mayor intensidad. Por un lado, ello renovó uno de los pilares fundamentales del modelo económico en tanto permitió disponer de un inédito flujo de renta de la tierra (Jaccoud et al., 2015: 99). Por otro lado, este nuevo *boom* también contribuyó a acelerar la inflación doméstica (Cuadro 1.1) y, por consiguiente, a horadar el tipo de cambio alto y competitivo (Schorr, 2012).

En el 2008, el Gobierno buscó enfrentar el cambio en la coyuntura mediante un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones. A partir de alícuotas móviles, buscaba desacoplar los precios internos de los externos y reducir el efecto inflacionario (CENDA, 2010; Katz, 2016). Sin embargo, este proyecto se topó con la oposición de las patronales agropecuarias y no pudo concretarse⁵³. Con posterioridad, en el 2009, la economía debió enfrentar los efectos

⁵³ Entre el 11 de marzo y el 18 de julio del 2008 se extendió por todo el país una medida de protesta organizada por cuatro entidades patronales agropecuarias (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina) contra la Resolución N°125 que establecía el nuevo esquema impositivo. El conflicto involucró la renuncia del ministro que firmó la medida y concluyó cuando el Senado de la Nación rechazó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

de la crisis internacional. La retracción de los flujos de comercio exterior (exportaciones e importaciones) impactó de forma pronunciada sobre el nivel de actividad local (Cuadro 1.1) (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013).

Estos episodios configuraron una “bisagra” de la posconvertibilidad, tanto en términos políticos como económicos. En términos sociopolíticos, como indicamos, la fase posdevaluación había hecho posible una articulación de condiciones que permitió recomponer el orden en crisis (Félicz, 2015; Piva, 2015)⁵⁴. Sin embargo, como advierte Schorr (2015), la recomposición de la situación económica y la aproximación al pleno uso de los recursos horadaron la convergencia de intereses sociales prevaleciente. Este cambio de coyuntura puede comprenderse a la luz de la historia económica argentina, en la cual los ciclos de restricción estructural (*stop and go*) condicionaban la estabilidad sociopolítica (Canitrot, 1983). Durante la posconvertibilidad, a partir del bienio 2009-2009 se abrió una etapa de transición, marcada por un mayor enfrentamiento del gobierno con distintas fracciones sociales, que evidenció un reacomodamiento del bloque político conformado tras la crisis del 2001 (Félicz, 2015; López, 2015; Manzanelli y Basualdo, 2016; Varesi, 2011)⁵⁵.

La política económica se orientó, de manera predominante, a sostener la demanda interna y la redistribución del ingreso (Kulfas, 2016). El crecimiento estuvo liderado por el sector de servicios, en tanto la industria y la producción de bienes perdieron relevancia (Manzanelli y Basualdo, 2016). El Gobierno implementó una política de gasto crecientemente expansiva destinada a apuntalar los niveles de consumo en el mercado interno. La reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), en el 2008, aumentó los recursos disponibles para sostener las políticas contracíclicas (Kulfas, 2016). Al mismo tiempo, para contener los efectos inflacionarios de las políticas implementadas, se apeló a dos mecanismos: se intensificó la apreciación cambiaria (Jaccoud et al., 2015), y se evitó la actualización de las tarifas de servicios públicos (en especial energéticos) lo que incrementó la incidencia de los subsidios en el gasto. Si bien este conjunto de medidas permitió utilizar el

⁵⁴ Piva (2015) plantea que el hecho de que hayan sido los sectores más concentrados del capital productivo los que lideraron el proceso, frente a un menor protagonismo del sector financiero y de servicios (en contraste con lo ocurrido en los noventa), permitió una mayor capacidad de “universalización” de los intereses del bloque dominante.

⁵⁵ En general, desde distintas perspectivas se acepta que en esta fase se incrementó la “autonomía relativa” del Estado con respecto a las distintas fracciones sociales. Algunos autores aluden a la configuración de una nueva “forma” de Estado “nacional y popular” (Manzanelli y Basualdo, 2016); otros remiten a una etapa de “radicalización reformista” (Félicz, 2015), “radicalización progresista” (Varesi, 2011) o un ensayo de “social-desarrollismo” (Katz, 2016).

gasto público como factor dinámico del crecimiento, provocó la reaparición del déficit fiscal (Cuadro 1.1).

Estos elementos permitieron atravesar la crisis y motorizar un nuevo ciclo de expansión. Por ello, identificamos un primer subperíodo dentro de la segunda fase de la posconvertibilidad (2008-2011). Luego de una retracción absoluta del PIB en el 2009⁵⁶, entre el 2010 y el 2011 la expansión alcanzó niveles similares a los de la primera fase de la posdevaluación; en consecuencia, entre el 2009 y el 2011, el PIB y el PIB per cápita crecieron a tasas de 3,5% y 2,6% promedio por año, respectivamente. El salario real volvió a subir y se redujeron nuevamente las tasas de pobreza e indigencia (Cuadro 1.1).

Sin embargo, la expansión de los niveles de consumo y del gasto público, junto con la apreciación cambiaria, condicionaron la disponibilidad de divisas y, por lo tanto, realimentaron las tensiones preexistentes. En este sentido, la reaparición de la “restricción externa” (Bekerman y Vázquez, 2016; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; Manzanelli y Basualdo, 2016) –elemento característico de las estructuras productivas desequilibradas– condicionó al conjunto del período y manifestó los límites estructurales del patrón de crecimiento posconvertibilidad.

La exposición de la economía a la remisión de utilidades, la tendencia estructural a la fuga de capitales, la existencia de déficit comercial industrial y la decisión de sostener actividades deficitarias en términos de balanza comercial (como por ejemplo el ensamble de productos tecnológicos) explican la reaparición del estrangulamiento externo (Wainer, 2017; Wainer y Schorr, 2014). A ello se añadieron nuevos condicionamientos, como el creciente déficit en la balanza comercial energética (Manzanelli y Basualdo, 2016)⁵⁷. Como destacan Wainer y Schorr (2014a: 141), la reaparición de la restricción externa puso en evidencia “la existencia de diversos problemas de insolvencia que remiten a cuestiones estructurales que no fueron resueltas en la posconvertibilidad”, principalmente relacionadas con la ausencia de cambios sustantivos en el “perfil de especialización productiva y el carácter ‘divisa-dependiente’ de la industria local” y en “la fisonomía y el desempeño de los actores económicos predominantes”.

⁵⁶ Existe una controversia en cuanto a la magnitud de la retracción del PIB en el 2009 a partir de la revisión de la serie estadística llevada adelante por el INDEC en el 2016. El tratamiento de esta cuestión excede los alcances de este trabajo. Al respecto, véase Manzanelli y Basualdo (2016: 14 y ss.).

⁵⁷ Si bien a lo largo de la historia económica argentina fueron frecuentes estos episodios de estrangulamiento externo, durante la posconvertibilidad se habrían articulado algunos aspectos más recientes, como un incremento de la fuga de capitales que, a diferencia de lo ocurrido durante los noventa, no se financió con endeudamiento externo sino con el saldo de comercio exterior (Manzanelli y Basualdo, 2016: 35).

Agravada la fuga de capitales, y sin posibilidades de recurrir al financiamiento internacional por un adverso contexto externo derivado del *default* del 2002⁵⁸, la política económica profundizó su apuesta proteccionista. A partir del 2011 identificamos un segundo subperiodo dentro de la fase de crisis, reactivación y estancamiento económico (2011-2014). Durante este subperiodo se establecieron mayores restricciones a las importaciones y se limitó el acceso al mercado de divisas a través de mecanismos de control de cambios (Kulfas, 2016). El Gobierno debió continuar con la expansión de la base monetaria para sostener el nivel de actividad y para financiar sus erogaciones (Gerchunoff, 2013)⁵⁹. A su vez, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, en el 2012, permitió que la autoridad monetaria volviera a financiar al Tesoro y, por su intermedio, se sostuviera el gasto y el esquema de subsidios económicos⁶⁰. En contrapartida, la implementación del control de cambios alentó la brecha cambiaria, incrementó la especulación financiera y retrajo la inversión privada, sobre todo en sectores de la economía que operaban con bienes sujetos al valor de las divisas (Kulfas, 2016). Así, en el 2014, el Gobierno debió implementar un “ajuste heterodoxo” (Félicz, 2017), bajo la forma de una fuerte devaluación monetaria.

De esta manera, entre el 2012 y el 2014 se registró un virtual proceso de estancamiento económico. Si bien el año 2013 fue un año de expansión, durante este período el PIB decreció, en promedio, a una tasa de 0,3% anual; y el PIB per cápita se retrajo 1,3% promedio por año. La devaluación del 2014 provocó, por primera vez en el ciclo, una caída del salario real y un empeoramiento de los indicadores distributivos (Cuadro 1.1).

En suma, los cambios político-económicos habrían coexistido con límites más generales del régimen de acumulación argentino, asociados con el patrón de inserción internacional del país y con las mutaciones del entramado productivo (en particular, del sector industrial) iniciadas en los setenta que, más allá de eventuales recomposiciones, habrían persistido. En esta línea,

⁵⁸ En junio del 2014, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió no considerar el recurso presentado por la Argentina que apelaba un fallo de primera instancia, dictado en el 2012 y ratificado por la corte neoyorquina en 2013. Ello avaló el reclamo de los llamados “fondos buitres” y otros acreedores minoristas al pago de la deuda acumulada sobre los bonos argentinos en *default* que no habían entrado en las reestructuraciones de la deuda del 2005 y del 2010.

⁵⁹ El sostenimiento del gasto público requirió también una mayor presión tributaria. Uno de sus componentes fue la recaudación del “Impuesto a las Ganancias” cuarta categoría, que grava a las personas físicas. La desactualización de los topes no imposables, en contexto de inflación, llevó a que un creciente número de trabajadores quedaran alcanzados por el tributo (CIFRA, 2015). Entre otras razones, ello hizo que una parte de los sindicatos retiraran su apoyo al Gobierno.

⁶⁰ La Carta Orgánica del Banco Central se había modificado a comienzos del gobierno de Menem para asegurar que éste dejaría de financiar al Tesoro y, de este modo, el déficit de las cuentas públicas. Fue un pilar más de las políticas sugeridas por los organismos internacionales en los noventa.

Piva (2015: 59) sintetiza tales límites en términos de una persistente “dualidad estructural” durante la posconvertibilidad, en particular, “entre un sector moderno, altamente concentrado, con altos niveles de productividad internacional y un sector atrasado, de baja productividad”, lo cual remite a los desequilibrios persistentes de la estructura económica argentina.

Con respecto al mercado de trabajo, a partir del 2008, la dinámica expansiva anterior perdió intensidad a la luz de las transformaciones macroeconómicas. Beccaria y Maurizio (2012: 217) señalan que la veloz expansión del empleo durante la fase posdevaluación se derivó de la amplia capacidad ociosa del sistema productivo y que la posterior ralentización fue consecuencia de un agotamiento de las condiciones iniciales. La crisis del 2009 abrió un ciclo más moderado con respecto a la evolución del mercado de trabajo. Una vez superada la crisis, el desempleo volvió a reducirse, pero a un ritmo inferior al precedente (Jaccoud et al., 2015). Hacia el 2014, se verificó una retracción de la tasa de actividad, producto del aumento del “desaliento” (Gráficos 1.3 y 1.4). Paralelamente, el ritmo de crecimiento del empleo privado registrado también mostró una desaceleración significativa: entre el 2003 y el 2008 se expandió a un ritmo de 9,2% anual, mientras que desde ese momento hasta el 2014 creció a una tasa de 1,3% por año (Gráfico 1.5).

En esta etapa, la política laboral conservó los principales rasgos que había adquirido en la posdevaluación. Durante la crisis económica del 2009, estuvo dirigida principalmente a preservar puestos de trabajo⁶¹. Asimismo, se mantuvo la promoción del empleo registrado a través de diferentes iniciativas⁶². En materia de política de ingresos, las negociaciones paritarias fueron centrales en la definición salarial de los trabajadores registrados; sin embargo, en un contexto inflacionario, la recomposición de ingresos fue más limitada. Por otra parte, si el SMVM tuvo una clara tendencia incremental hasta el 2006, a partir de entonces presentó oscilaciones y se estancó. De hecho, a partir del 2012, los incrementos nominales no alcanzaron para cubrir el aumento del nivel de precios (Gráfico 1.6)⁶³.

⁶¹ Se implementó el procedimiento preventivo de crisis y se amplió el “Programa de Recuperación Productiva” (REPRO), que brindaba subsidios directos para pagar parte del salario de las empresas afectadas (Lanari, 2015).

⁶² En el 2014, se estableció un nuevo sistema público en el que figuran los empleadores con sanciones por incumplir la normativa laboral (el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, REPSAL), mediante la Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral (Ley 26.940). Por otra parte, en abril del 2013 se sancionó un nuevo “Régimen de Trabajo en Casas Particulares”, que estableció un nuevo sistema de licencias y brinda seguro por riesgos de trabajo (Tomada, 2014: 78).

⁶³ La evidencia ha señalado que este instituto laboral tuvo efectos positivos sobre los trabajadores registrados, aunque no produjo ningún impacto regulatorio sobre los no registrados (Groisman, 2013: 34).

En contraste, se registró una intensificación de la intervención estatal en materia de política social. El gasto público social se expandió en términos reales hasta alcanzar una cifra récord – en relación con la serie histórica iniciada en 1980– de 27,6% sobre el PIB en el 2013 (Gráfico 1.7). Esta evolución se explica por la convergencia de un mayor gasto en funciones de previsión social, en programas de protección contra la pobreza y también del gasto público en funciones universales. El crecimiento del gasto no sólo involucró una mayor incidencia sobre el PIB sino un incremento en términos reales (Gráfico 1.8).

Si consideramos la intervención estatal que involucra ingresos, las principales transformaciones se expresaron en el sistema previsional y en las políticas de transferencias monetarias⁶⁴. En el 2008 se derogó el régimen de capitalización (AFJP) y se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que constituyó una estatización del sistema previsional y el retorno al tradicional esquema de reparto (Danani y Beccaria, 2011). En el 2014, la ampliación de la “moratoria” previsional volvió a incrementar la cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones⁶⁵. Al mismo tiempo, se expandió sostenidamente el número de beneficiarios de pensiones no contributivas: en el 2014, alrededor de 1,5 millones de personas recibían este tipo de transferencias (Gráfico 1.9). En conjunto, todas estas acciones explican el incremento del gasto en funciones de previsión social (Gráfico 1.7 y Gráfico 1.8)

Por otra parte, en el marco de la recesión del 2009, se lanzó un nuevo régimen de transferencias monetarias condicionadas denominado “Asignación Universal por Hijo” (AUH), dirigida a los hijos de trabajadores informales o desocupados⁶⁶. La AUH es una prestación dirigida a los hijos/as de trabajadores informales y desocupados, monotributistas

⁶⁴ En cambio, el número de titulares de asignaciones familiares mantuvo los rasgos prevalecientes. Recién a partir del 2013, cuando se modificaron los topes mínimos no imponibles, se advirtió una expansión del número de titulares (Gráfico 1.10).

⁶⁵ La Ley 26.425, sancionada en noviembre del 2008, dio marco a la estatización del sistema previsional. En septiembre del 2014, a través de la Ley 26.970, se extendió el plazo aceptado para regularizar la falta de aportes previsionales.

⁶⁶ El programa implica una serie de condicionalidades que deben cumplir los titulares del beneficio, como el control sanitario, el plan de vacunación (hasta niños de 4 años) y la asistencia a la escuela (desde los 5 años hasta los 17). Más allá de la existencia de un tope en los ingresos para acceder a la prestación, resulta difícil corroborarlos (Mazzola, 2014). Diversas investigaciones han destacado el papel positivo de este programa en el desarrollo humano de la infancia (Salvia, Tuñón y Poy, 2015) y en las condiciones de vida de los hogares (Garganta y Gasparini, 2017; Maurizio y Monsalvo, 2017; Maurizio y Vázquez, 2014, entre otros). A su vez, algunos estudios han señalado que no produce un efecto de “desaliento” sobre la participación laboral (Maurizio y Monsalvo, 2017; Maurizio y Vázquez, 2014).

sociales y empleados de servicio doméstico. En años posteriores, se implementaron nuevos programas de transferencias condicionadas dirigidos a poblaciones específicas⁶⁷.

Además de tener una mayor cobertura, los montos percibidos por estos programas aumentaron durante esta fase, luego de que los ingresos provenientes de algunos de ellos se desactualizaran debido a la inflación y a la ausencia de mecanismos de ajuste. Cabe observar dos consecuencias de estas iniciativas. En primer lugar, el gasto público social en funciones de protección contra la pobreza era, en términos reales, 44% más alto en el 2013 que en el 2003, es decir, en el punto inmediato de salida de la crisis. En segundo lugar, esta expansión se plasmó en el crecimiento sostenido de la población que recibía algún tipo de transferencia monetaria estatal (Gráfico 1.9).

⁶⁷ A partir del 2011, la AUH se extendió a las mujeres embarazadas sin protección social. Por otra parte, a partir del 2014 se puso en marcha el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) dirigido a jóvenes de 18 a 24 años cuyas familias se encuentran en la economía informal o tienen un ingreso inferior a tres salarios mínimos.

Capítulo II

El recorrido teórico Reproducción de las unidades domésticas, heterogeneidad estructural e intervención social del Estado

Introducción

Aquí presentamos los principales elementos conceptuales a partir de los cuales construimos nuestro objeto de estudio. Proponemos una intersección entre los estudios del trabajo y las investigaciones sobre intervención social del Estado a partir de un eje vertebrador: la reproducción de los hogares. Dada la complejidad de este objeto –en tanto involucra dimensiones materiales y simbólicas–, nos limitamos a su dimensión económica, estrechamente vinculada con los procesos de distribución primaria y secundaria del ingreso monetario. El estudio de la reproducción económica de los hogares constituye así una instancia sugerente para abordar la relación entre heterogeneidad estructural y políticas sociales durante el ciclo de políticas heterodoxas en la Argentina.

La articulación propuesta se vuelve inteligible en el contexto de una determinada “estructura” o “régimen social de acumulación” que involucra las dimensiones económicas, políticas, sociales e institucionales que inciden en el proceso de acumulación de capital (Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]; Kotz, 1994; McDonough, Reich y Kotz, 2010)⁶⁸. La premisa de esta perspectiva es que la acumulación de capital “no puede tener lugar ni en el vacío ni en el caos”, sino en un determinado contexto social e institucional (Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]: 41). El régimen de acumulación abarca una estructura del mercado laboral y una forma de intervención social del Estado que participa en la reproducción de la fuerza de trabajo y procura minimizar el impacto del conflicto social sobre el proceso de acumulación (Gillespie, 2014; Kotz, 1994). Las unidades domésticas también son relevantes en tanto garantizan la reproducción material y simbólica de la fuerza de trabajo. Por ello, articulamos este argumento con la amplia tradición latinoamericana que destacó los efectos no anticipados que tienen los comportamientos de los hogares sobre el régimen económico.

Partimos de la centralidad que adquiere la participación en el mercado de trabajo –entendido, en sentido amplio, como ámbito de compraventa de fuerza de trabajo o de

⁶⁸ Existen distintas variantes de esta noción: los “modelos de acumulación” de los regulacionistas franceses (Boyer, 2007), las “estructuras sociales de acumulación” (Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]) y los “conjuntos de crecimiento” (Storper y Walker, 1989). Nun (1987) propuso el concepto de “régimen social de acumulación” en un sentido similar al de Gordon et al. (1986 [1982]). En la Argentina, Torrado (2006 [1982], 1992, 2010) –a partir de la noción de “modelo” o “estilo de desarrollo”– sugirió la potencialidad de este andamiaje conceptual para estudiar las condiciones de vida familiares.

inserción mediante el autoempleo— para la amplia mayoría de los hogares. Por lo tanto, en el estudio de las condiciones de vida otorgamos prioridad a las características que asume la demanda de fuerza de trabajo en una estructura social de acumulación. Por añadidura, es ampliamente reconocido el papel que desempeñan en la determinación de las condiciones de vida otros recursos de los que disponen los hogares; al respecto, es crucial el rol del Estado y su intervención en materia de redistribución⁶⁹.

En este capítulo exponemos las principales líneas conceptuales que atravesaron la construcción de nuestro objeto de estudio. En la primera sección se repasa la perspectiva desde la que abordamos las capacidades de reproducción económica de los hogares. En la segunda, presentamos los principales argumentos conceptuales para abordar la estructura ocupacional en la que participan los miembros de los hogares. Se revisan especialmente tres aspectos: 1) la cuestión de la heterogeneidad estructural, 2) la generación de excedentes de población, la tesis de la “marginalidad económica” y la persistencia de un sector de microunidades (o sector informal), 3) la segmentación de los mercados de trabajo. Por último, la tercera sección considera las características de la intervención del Estado en relación con las condiciones de vida; en particular, buscamos enfatizar las “nuevas” formas de política social en la etapa de globalización y su relación con la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional.

2.1. Acerca de la reproducción social, la reproducción de los grupos domésticos y su dimensión económica

En esta investigación estudiamos las condiciones de vida a partir de aportes teóricos sobre la reproducción social y la reproducción de la fuerza de trabajo. En particular, recogemos una tradición de la sociología latinoamericana que otorga un rol central a las unidades domésticas en el proceso de reproducción. Dado que se trata de procesos complejos y multidimensionales, aquí nos enfocamos en la reproducción económica (o material) de los grupos domésticos. En tanto la reproducción se asocia con la satisfacción de necesidades y en la medida que, en sociedades capitalistas, los satisfactores están mercantilizados, adquiere relevancia la participación de los hogares en la distribución primaria y secundaria del ingreso.

⁶⁹ Cabe recordar los valiosos antecedentes de este tipo de abordaje propuestos en Marshall (1985), Cortés y Marshall (1991) y Torrado (1992), que analizaron el “salario social” como mecanismo de redistribución para los asalariados y el papel del Estado en la regulación de la reproducción de la fuerza de trabajo. Como advertimos en la Introducción, estos estudios se desarrollaron cuando la perspectiva de una amplia asalarización en el mercado laboral formal era dominante y son previos al surgimiento de una “nueva marginalidad” (Salvia, 2007). Aquí adoptamos una perspectiva más amplia centrada en la participación estatal por medio de transferencias económicas sobre el conjunto de los hogares.

Al respecto, enfatizamos que tal participación es inescindible de los propios comportamientos que aquéllos despliegan para optimizar sus condiciones de vida.

2.1.1. Reproducción social y reproducción de las unidades domésticas

La reproducción social constituye un tema central de la economía política clásica. La noción de “subsistencia” –atravesada por dimensiones históricas, culturales y normativas– desempeñó un papel crucial, al relacionar las condiciones de vida con un sistema más amplio de producción y reproducción social (Picchio, 2009). Cabe recordar que Marx y Engels (2005 [1844]: 19) señalaron que la “primera premisa” de la historia humana era la existencia de individuos vivientes y que ello suponía la producción de medios de subsistencia, la reproducción física y la reproducción de todo un “modo de vida”. Desde esta perspectiva, la reproducción se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción de necesidades mediante la producción de los medios requeridos para ello (Marx y Engels, 2005 [1844]: 28)⁷⁰.

Históricamente, el mecanismo principal para la satisfacción de necesidades ha sido el proceso de trabajo, en tanto “actividad orientada a (...) la producción de valores de uso” (Marx, 2008 [1867]: 223). Sin embargo –como fuera destacado por Marx y, de un modo distinto, por Polanyi (2011 [1944])–, este proceso adquiere una forma particular en sociedades capitalistas: el proceso de trabajo interesa sólo en tanto proceso de valorización y el trabajador sólo ingresa en él en tanto portador (es decir, vendedor) de su fuerza de trabajo. Ahora bien, aun cuando la fuerza de trabajo alude al “conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad (...) que él [el ser humano] pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole (...) *quien dice capacidad de trabajo no dice trabajo*” (Marx, 2008 [1867]: 203-211; énfasis agregado). Por lo tanto, en sociedades capitalistas, en la medida que la reproducción de la vida depende de la venta de la fuerza de trabajo, surge un “riesgo” de orden estructural: que el trabajador no halle comprador, de allí que siempre sea un “pobre virtual” [*virtual pauper*] (Denning, 2010)⁷¹.

⁷⁰ Consideramos que esta tradición repone la unidad entre instancias históricamente (y epistemológicamente) separadas, tales como la producción y la reproducción. De allí que una de las principales contribuciones de la teoría feminista –en especial, en los años recientes– haya sido destacar la dinámica global de la reproducción social y su ligazón con las condiciones de vida (véanse, desde diferentes perspectivas, Bakker y Gill, 2003; Bhattacharya, 2017; Carrasco, 2013; Picchio, 2009).

⁷¹ Esto no significa que otras formas sociales no enfrentaran riesgos de hambrunas, pestes, desastres naturales, con consecuencias sobre la reproducción de la vida; pero el desempleo masivo y la insuficiencia de ingresos son rasgos históricamente específicos de las sociedades de mercado (Esping-Andersen, 1999). Este elemento “contingente” no se presentaba de igual modo en sociedades organizadas alrededor de la producción de valores de uso (Mészáros, 2001). Pero bajo relaciones capitalistas, el proceso de intercambio se da entre productores privados, en términos del tiempo de trabajo necesario utilizado para la producción de tales mercancías y a través del dinero. El dinero, que constituye la expresión general (abstracta) del trabajo humano, opera como mediación

Así, la reproducción de la fuerza de trabajo adquiere centralidad en el modelo analítico de Marx e implica la disponibilidad de un conjunto de medios de vida que permitan la reconstitución cotidiana del trabajador y sus capacidades, su mantenimiento en la etapa de retiro de la vida activa y su reposición generacional. Este último aspecto supone que entre los medios de subsistencia deben incluirse los requeridos para satisfacer las necesidades del grupo familiar del trabajador (Marx, 2008 [1867]). El valor de la fuerza de trabajo está dado por el valor correspondiente de los “medios de vida” necesarios para la reproducción cotidiana y generacional del trabajador y la unidad familiar a la que pertenece y se expresa en el salario. Cabe resaltar que tales satisfactores de necesidades no remiten a una dimensión natural sino, antes que nada, histórico-cultural: “... hasta el volumen de las llamadas necesidades imprescindibles, así como la índole de su satisfacción es un producto histórico y depende por tanto en gran parte del nivel cultural de un país” (2008 [1867]: 208).

Llegados a este punto, recogemos una tradición de la sociología latinoamericana que procura enriquecer este abordaje de la reproducción al aplicarlo a formaciones sociales concretas, integrando procesos de nivel macro y microsocioal (la dinámica demográfica, los estilos de desarrollo y las estrategias familiares) e incorporando el estudio de diversos grupos sociales en sociedades en las que persiste una amplia franja de la población no asalariada (Borsotti, 1981; Cortés y Cuéllar, 1990; Duque y Pastrana, 1973; Eguía y Ortale, 2004; García, Muñoz y Oliveira, 1982; Gutiérrez, 2004; Hintze, 1989; Jelin, 1984; Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 1989, 2000; Torrado, 2006 [1982]). Esta perspectiva articula, por una parte, los constreñimientos que representan las condiciones estructurales –en especial, el proceso de acumulación de capital y sus especificidades en la región– sobre las opciones disponibles para los agentes sociales y, por otra parte, la capacidad de éstos para influir en los procesos de cambio y permanencia de la sociedad (Oliveira y Salles, 2000; Przeworski, 1982; Torrado, 2006 [1982])⁷².

Siguiendo a estos autores, aquí entendemos la “reproducción social de la vida” como un conjunto de procesos materiales y simbólicos –situados al nivel de la sociedad en su conjunto– que intervienen en el mantenimiento y el cambio de clases, familias e individuos (Borsotti, 1981; Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 2000; Oliveira y Ariza, 2000). Un rasgo

del proceso de metabolismo social y, por consiguiente, permite participar (o no) en éste (Marx, 2008 [1867]).

⁷² En sus orígenes se estudiaron los procesos de reproducción de los grupos sociales más desaventajados. De allí que se enfocara en la “supervivencia” de tales colectivos (Duque y Pastrana, 1973). El concepto de “reproducción de la vida” permitió trascender la noción de “supervivencia” y describir los procesos de reproducción de distintos estratos sociales (Hintze, 1989; Margulis, 1989; Torrado, 2006 [1982]).

compartido entre los diferentes enfoques referidos es la centralidad otorgada a las “unidades domésticas” en el proceso de reproducción social de la vida. En general, aquéllas son definidas como un grupo de personas, unidas o no por lazos de parentesco, que organizan en común su reproducción cotidiana (Oliveira y Salles, 1989)⁷³. En este sentido, se destaca el papel de los grupos domésticos al desplegar tanto comportamientos demográficos y económicos como prácticas culturales y simbólicas que garantizan la reproducción biológica, la socialización y la optimización de las condiciones materiales de existencia de sus integrantes (Torrado, 2006 [1982])⁷⁴.

La “reproducción de los grupos domésticos” se diferencia de la reproducción social en general. Debe cubrir el desgaste físico y psicológico de los integrantes de la unidad y garantizar su reposición generacional (Oliveira y Salles, 1989). Al mismo tiempo, la reproducción de los grupos domésticos remite a “la recreación en lo cotidiano de elementos ideológicos, culturales, afectos y de las relaciones de autoridad entre géneros y generaciones” (Oliveira y Salles, 1989: 31). De este modo, puede ser comprendida a partir del solapamiento de dos ciclos: uno generacional y otro cotidiano (Borsotti, 1981; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]). La primera dimensión se refiere a la reproducción biológica, psicológica y cultural del grupo. Por consiguiente, remite tanto al reemplazo generacional de los individuos como a la transmisión de sistemas de valores y creencias que garantizan –en términos agregados– la reproducción simbólica de la sociedad (Borsotti, 1981: 167). Por su parte, el ciclo cotidiano alude al mantenimiento de la existencia de los miembros en un momento histórico determinado; se asocia con la manutención, esto es, la satisfacción de necesidades de alimentación, vestido, vivienda, transporte, salud, entre otros (Oliveira y Salles, 2000: 629).

⁷³ A menudo se confunde a las unidades domésticas con el concepto de “familia”; sin embargo, ésta constituye un caso particular de aquellas y expresa otro campo de fenómenos al involucrar lazos de parentesco entre los individuos. Por otra parte, suele denominarse a las unidades domésticas como “hogares”, lo que supone adoptar el indicador utilizado por los sistemas estadísticos (Salvia, 2012). Ello confunde la unidad residencial con la unidad doméstica, que abarca “redes de relaciones” que van más allá de la unidad residencial. Sin embargo, a los fines de facilitar la exposición, apelamos a las nociones de “unidad doméstica”, “grupo familiar” y “hogar” como sinónimos.

⁷⁴ Distintas perspectivas teóricas otorgan centralidad a las unidades familiares en la reproducción social. En América Latina fue influyente la investigación de Chayanov (1974) sobre las unidades económicas campesinas rusas y su “lógica” de reproducción; la de Meillasoux (1981 [1977]) sobre el trabajo productivo y reproductivo; y la propuesta de Bourdieu (2011), que articuló el espacio de capital económico, cultural y simbólico dentro de la noción de “estrategias de reproducción social”. El enfoque estadounidense sobre el curso de vida también enfatizó en la noción de “estrategias familiares” (Hareven, 1990). Por último, la perspectiva neoclásica desarrolló una teoría sobre la familia que consideraba la maximización de los recursos y la elección racional (Becker, 1981).

Como señalamos, en las sociedades en las que el modo de producción capitalista es dominante, tal satisfacción de necesidades asume una forma peculiar: descansa en un “nexo monetario” [*cash nexus*] (Esping-Andersen, 1999). Ello se debe a que los satisfactores suelen encontrarse mercantilizados y la amplia mayoría de los hogares sólo disponen de un activo: la fuerza de trabajo de sus integrantes (Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]). En este sentido, la reproducción de las unidades domésticas se asocia –aunque no se confunde– con la reproducción de la fuerza de trabajo antes aludida. Es que, en efecto, para la amplia mayoría de los hogares, la reproducción de la fuerza de trabajo “es condición para la reproducción de la unidad [doméstica] (...) ya que (...) el *eje material* sobre el que reposa aquélla es la utilización para la producción de ingresos de la fuerza de trabajo con que cuenta la unidad” (1989: 191-192; énfasis agregado).

Dado que la reproducción de las unidades domésticas está vinculada con la capacidad de obtener ingresos monetarios, ello otorga centralidad a la utilización de la fuerza de trabajo de sus integrantes y a sus diferentes formas de inserción laboral (en especial, mediante la venta de fuerza de trabajo a cambio de un salario o a través del autoempleo). Sin embargo, el proceso de reproducción no se agota allí: involucra tanto el “trabajo doméstico” requerido por la producción de valores de uso para el autoconsumo como la realización de labores necesarias para el consumo de bienes adquiridos en el mercado (Singer, 1980; Torrado, 2006 [1982]). Al mismo tiempo, la reproducción de los grupos domésticos supone una intensa actividad afectiva relacionada con la socialización y el aprendizaje (Jelin, 2010)⁷⁵.

En esta investigación nos concentramos en una de las dimensiones de la reproducción social de las unidades domésticas: la disponibilidad de ingresos monetarios para sufragar la reproducción de sus integrantes. Ello implica centrarse en las condiciones de “reproducción económica” o material, lo cual concierne a la utilización de la fuerza de trabajo disponible, a la diversificación de fuentes de ingreso y a los niveles de ingreso obtenidos. Asimismo, supone considerar en qué grado tales ingresos permiten la satisfacción de las necesidades de

⁷⁵ La naturaleza del “trabajo reproductivo” como conjunto de actividades no remuneradas que se desarrollan en las unidades domésticas y permite la reproducción de la fuerza de trabajo fue extensamente discutida por la literatura feminista (para una síntesis, véase Rodríguez y Cooper, 2005). Como señala Esquivel (2011), mientras la idea de “trabajo doméstico” suponía que las mujeres eran explotadas por los varones y, por ende, era necesaria su abolición, el concepto de “trabajo reproductivo” da cuenta de un requisito sistémico del capitalismo y su identificación apunta más hacia su visibilización que a su eliminación. Recientemente, la recuperación de esta tradición se plasmó en el concepto de “cuidado” (Esquivel, Faur y Jelin, 2012; Razavi, 2007). Como señala Carrasco “... el trabajo y la gestión realizada desde los hogares reproduce y cuida a toda la población y, en particular, reproduce la fuerza de trabajo diaria y generacional necesaria para la subsistencia del sistema de producción capitalista” (2013: 44).

los integrantes de la unidad en función de sus particulares requerimientos demográficos, lo que remite a las capacidades de subsistencia que logran alcanzar. En palabras de García, Muñoz y Oliveira, “la participación económica (...) puede entenderse como un *mecanismo* que utilizan los integrantes de las unidades [domésticas], en forma armoniosa o conflictiva, para proveerse de mayores ingresos con los cuales hacer frente a sus necesidades para sobrevivir y reproducirse” (1982: 180; énfasis agregado).

En esta tradición teórico-metodológica, se ha puesto énfasis en la noción de “balance reproductivo” entre necesidades de las unidades domésticas y satisfactores (Cortés y Rubalcava, 1991; Cuéllar, 1990). Este concepto apunta al grado en que la utilización de la fuerza de trabajo disponible en la unidad permite obtener los satisfactores para garantizar la reproducción de la unidad. En sociedades capitalistas, ello se asocia a la utilización de la fuerza de trabajo en el mercado para obtener ingresos que, a su vez, permitan acceder a tales satisfactores.

El balance reproductivo de las unidades domésticas puede ser positivo, neutro o negativo. En este último caso, será de esperar una mayor actividad económica por parte de la unidad, ya sea aumentando el número de ocupados o intensificando su trabajo hasta alcanzar un balance adecuado (Cuéllar, 1990: 31-32). Al respecto, también cabe incluir otros comportamientos orientados a mejorar el balance reproductivo, relativos a la propia estructura demográfica o a la diversificación de fuentes de ingresos. Por una parte, los hogares pueden reducir su tasa de dependencia económica tanto incrementando su número de perceptores como reduciendo su número de consumidores. Ello da lugar a cambios en la composición de la unidad, estrategias de allegamiento residencial, migración o economías de escala (Salvia, 1995). Por otra parte, los hogares pueden ampliar las fuentes de ingreso de las que disponen. En este punto, resultan claves las transferencias estatales y también las redes familiares que garantizan ingresos no laborales a las unidades domésticas (Oliveira y Salles, 2000).

2.1.2. Los hogares como espacio articulador de procesos micro y macrosociales
Según la perspectiva planteada, los hogares constituyen el espacio que “articula” la reproducción cotidiana y generacional de los individuos y sus capacidades. Ahora bien, ello no implica que nos aproximemos a su estudio como si fueran unidades colectivas que operan sin conflicto entre sus integrantes. Aquí retomamos la idea de que las unidades domésticas se encuentran atravesadas por clivajes de género y generación; por lo tanto, por relaciones que

involucran tanto cooperación como conflicto (Oliveira y Salles, 2000)⁷⁶. En este sentido, el tratamiento del hogar como unidad de análisis supone asumir que son “cuerpo” –resultado de un esfuerzo siempre renovado por parte de sus miembros para constituir una unidad– y “campo” –de conflictos más o menos abiertos entre sus integrantes (Bourdieu, 1997).

Los desafíos para objetivar a las unidades domésticas se derivan de que en ellas se amalgaman dos conjuntos distintos de relaciones (Cuéllar, 1990; Salvia, 1995). Por una parte, las relaciones “entre los individuos” dentro de las unidades domésticas plantean cuestiones como la solidaridad, el conflicto o el afecto; estas relaciones pueden solaparse –o no– con lazos de parentesco. Por otra parte, las relaciones entre “la unidad doméstica y la sociedad global” ponen de manifiesto cuestiones relacionadas con la participación económica, los modos de obtener recursos para sufragar la reproducción y la movilidad social de alguno de sus integrantes o de todos. El primer par de relaciones apunta a la dinámica “hogar-individuos”, mientras que el segundo remite a la relación “hogar-sociedad” (Salvia, 1995).

Desde la perspectiva que asumimos, nos concentramos exclusivamente en este segundo par de relaciones. Sin embargo, debemos aclarar que ello no implica atribuir una racionalidad explícita a las unidades domésticas con respecto a sus condiciones de vida. La conceptualización de las “estrategias” familiares de vida, de reproducción o de supervivencia emergió en oposición a los enfoques funcionalistas dominantes en la sociología (Oliveira y Ariza, 2000; Salvia, 1995). Específicamente, se procuraba resaltar el papel de “agencia” desempeñado por los hogares frente al rol reproductor asignado por el funcionalismo. Sin embargo, la noción misma de “estrategia” parece enfatizar la racionalidad de los comportamientos domésticos. Al respecto, coincidimos con Salvia, quien señala que “parece (...) insuficiente, y en parte cuestionable, explicar los comportamientos reproductivos de las familias y los grupos domésticos como resultado exclusivo de la emergencia *unívoca* y *mecánica* de arreglos económico-estratégicos” (1995: 157. énfasis agregado). Esta insuficiencia se torna aún más relevante en contextos familiares en los cuales son limitadas las posibilidades de optar entre diferentes cursos de acción.

Por ello, en esta investigación consideramos más adecuado remitir a la idea de “comportamientos domésticos” relativos a la participación económica sin plantear la existencia de una racionalidad deliberada por parte de las familias. En todo caso, el carácter estratégico de tales comportamientos debe resultar del descubrimiento o la imputación de una

⁷⁶ La crítica feminista contribuyó a poner de relieve el “altruismo” implícito en distintos abordajes acerca de las unidades domésticas. En especial, se destacan las críticas al planteo chanayoviano y neoclásico (Harris, 1986).

“lógica subyacente” en un contexto social determinado (Eguía y Ortale, 2004; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]). Este abordaje tiene una ventaja: permite explicar por qué unidades domésticas ubicadas en posiciones sociales similares tienen comportamientos diferentes (Przeworski, 1982) y enfatiza el rol que los hogares desempeñan en la reproducción social.

Es en el seno de las unidades domésticas donde se gestan, elaboran, despliegan y realizan una serie de estrategias económicas y logros afectivos compartidos, fundamentalmente orientados a la reproducción biológica del grupo, la socialización y protección de los miembros y la movilidad social de todos o alguno de sus componentes. A la vez que, *en la medida en que se despliegan estas prácticas, los hogares participan, en calidad de agentes económicos y sociales no estratégicos, de un proceso mucho más amplio de producción y reproducción del sistema social.* (Salvia, 2012: 132; énfasis agregado)

Estos comportamientos pueden ser vistos en relación con el aprovechamiento de las “estructuras de opciones” disponibles (Przeworski, 1982: 66)⁷⁷. Tales estructuras remiten a dinámicas derivadas de la distribución del ingreso e interactúan con las propias “redes de relaciones” en las que las unidades domésticas participan (Oliveira y Salles, 2000). En la intersección de procesos micro y macrosociales tiene lugar la reproducción de los individuos y sus capacidades.

2.2. Heterogeneidad productiva y procesos de desigualdad estructural: demanda de empleo, sector microinformal y segmentación laboral

Dado que las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas se encuentran asociadas a la disponibilidad de ingresos monetarios, se revela crucial comprender las modalidades de participación de sus integrantes en el mercado de trabajo. Aquí retomamos un enfoque que otorga prioridad a la “demanda laboral” para caracterizar las condiciones de reproducción (Cortés y Cuéllar, 1990). Con ese propósito, recogemos el estudio de las condiciones de heterogeneidad productiva que caracteriza a los países de la región y sus efectos con respecto a la generación de “desigualdades estructurales”⁷⁸ en la distribución del ingreso. El modo en que se configura el sistema productivo en una formación social es un

⁷⁷ En un sentido similar, Filgueira y Kaztman utilizan el concepto –más difundido– de “estructuras de oportunidades” para referirse a “las probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades. Estas oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos” (1999: 9). Sin embargo, el marco teórico propuesto por estos autores (que retoma a Moser, 1998) enfatiza los “activos” que ponen en movimiento los grupos más desfavorecidos o “vulnerables” para mejorar sus condiciones de existencia. El éxito de tal movilización depende del ajuste entre activos y estructuras de oportunidades disponibles.

⁷⁸ La noción de “desigualdad estructural” fue empleada por Fitoussi y Rosanvallon (2003) para describir aquellas desigualdades categoriales principalmente relacionadas con la estructura de clases sociales. Durante la modernización globalizada (Pérez-Sáinz, 2016), emergen nuevas “desigualdades dinámicas” o intracategoriales que se superponen a las anteriores.

elemento clave para entender el funcionamiento del mercado de trabajo (Fine, 2003). Por consiguiente, procuramos describir de qué manera la heterogeneidad productiva configura una determinada estructura ocupacional en la que participan los hogares.

2.2.1. Las raíces teóricas de la “heterogeneidad estructural”

Durante la posguerra, la existencia de países pobres y ricos condujo a la teoría económica dominante a formular diversas explicaciones sobre el crecimiento económico. Dos supuestos cruciales del abordaje ortodoxo sobre los procesos de desarrollo son el “dualismo” y la tendencia al equilibrio (Rashid, 2014; Ros, 2014). El primer aspecto remite a una coexistencia de sectores económicos atrasados y avanzados que reproduce “trampas de crecimiento” y ciclos de pobreza; el segundo alude a la convergencia como resultado del crecimiento económico⁷⁹.

Entre los diferentes autores que procuraron explicitar los mecanismos que promovían tal convergencia, uno de los enfoques más difundidos es el de Lewis (1954). Según su planteo, las sociedades subdesarrolladas son duales en tanto un sector moderno capitalista coexiste con otro de subsistencia. Este último está caracterizado por una nula productividad del trabajo y un excedente de población; por ello, la fuerza de trabajo está disponible para el sector moderno a cambio de un salario de subsistencia⁸⁰. Ello permitiría que el sector dinámico se expandiera sin que aumenten correlativamente los salarios –dada la “oferta ilimitada” de fuerza de trabajo–, lo que produciría un aumento de los beneficios y mayor inversión. Una vez agotada la reserva de fuerza de trabajo, el sector capitalista enfrentaría los límites de la oferta laboral y debería comenzar el incremento de salarios. En ese momento, el dualismo cesaría y el sistema económico tendería a la convergencia y a una mayor igualdad (Lewis, 1954: 449)⁸¹.

En el plano internacional, el análisis ortodoxo también enfatizó los procesos de convergencia y el *catch up* de los países atrasados a los avanzados (Weeks, 2001). El principal anclaje es la

⁷⁹ Una de las teorías más difundidas en la posguerra fue la del “desarrollo por etapas” de Rostow. Se asumía que todas las sociedades pasaban de una situación “tradicional” al “despegue” [*take-off*] y la “madurez”. Para ello, debían abrirse al comercio exterior (Hidalgo, 1998). Esta teoría se asoció con el paradigma de la “modernización” y fue influyente en las ciencias sociales de los sesenta y setenta.

⁸⁰ Pese a muchas interpretaciones, Lewis es explícito en cuanto a que este sector de subsistencia no debía asumirse como exclusivamente agrario, sino que incluía al pequeño comercio urbano, ocupaciones ocasionales y redundantes y al servicio doméstico (1954: 448).

⁸¹ El enfoque dualista también es utilizado para explicitar los mecanismos que harían posible que la desigualdad de la distribución del ingreso tenga el comportamiento de “U invertida”, tal como planteara Kuznets. Se asume que el incremento de la desigualdad inicial favorece la acumulación de capital mientras la remuneración de la fuerza de trabajo permanece a niveles de subsistencia. Agotada esa fase, los salarios aumentan y se reduce la desigualdad (Therborn, 2015).

ley de los costos comparativos internacionales de David Ricardo (Ros, 2000) y su posterior actualización por parte de Heckscher-Ohlin (Shaikh, 2007 [1991]). De acuerdo con este marco analítico, un país debe especializarse en la producción del bien o servicio en el que es relativamente más eficiente. En condiciones de comercio libre, el intercambio es regulado por el principio de la “ventaja comparativa”. En caso de que un país sólo exporte y el otro sólo importe, el ingreso de dinero al primero de ellos haría subir los precios hasta que, llegado cierto punto, el país importador pueda encontrar una “ventaja comparativa” en el comercio del bien en cuya producción era relativamente menos ineficiente (Shaikh, 2007 [1991]). De este enfoque se desprendía un conjunto de medidas de política económica orientadas a remover las barreras al libre comercio con el propósito de acelerar la convergencia económica⁸².

El estructuralismo latinoamericano clásico⁸³ ofrece una perspectiva crítica ante los supuestos de convergencia del pensamiento ortodoxo, al destacar el carácter desigual y desequilibrado del desarrollo de los países periféricos. El estructuralismo apuntó al proceso histórico: el carácter tardío de la inserción internacional y la especialización en la producción y exportación de bienes con poco valor agregado, que constituía un rasgo clave del subdesarrollo (Furtado, 1971 [1961]; Pinto, 1976; Prebisch, 1949, 1967 [1963], 1970, 1984 [1981]). Asimismo, tal asimetría se profundizaba a partir del “deterioro de los términos de intercambio”⁸⁴. De esta forma, para el pensamiento estructuralista, algunos rasgos recurrentes del desempeño económico periférico (baja tasa de ahorro interno, crisis externa, sobreabundancia de fuerza de trabajo) no constituían anomalías o elementos transitorios sino expresiones de un “patrón de funcionamiento” (Prebisch, 1967 [1963], 1973, 1984 [1981]; Rodríguez, 2001).

Un elemento central de este patrón de funcionamiento remite a una “insuficiencia absorbente” (Prebisch, 1967 [1963], 1970, 1984 [1981]). Tal insuficiencia se originaba tanto en las peculiaridades históricas como en una constelación de factores económicos, políticos y

⁸² Este planteo inspiró las recomendaciones de reformas del “Consenso de Washington”. El supuesto era que el capital se desplazaría hacia los países donde fuera más escaso y pudiera obtener una mayor rentabilidad, y algo similar ocurriría con el “exceso” de fuerza de trabajo. En este contexto, los países más pobres iban a crecer a tasas más elevadas, lo que promovería la convergencia económica (Salvia, 2012).

⁸³ El estructuralismo se asocia principalmente a los trabajos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a partir de los cincuenta bajo la dirección de Prebisch. Hacia mediados de los sesenta, el fracaso de la política desarrollista de la CEPAL impulsó la emergencia de planteos estructuralistas críticos más ligados a la corriente de la dependencia (Palma, 2014: 131).

⁸⁴ Esta tesis, también llamada “Prebisch-Singer”, fue una corroboración empírica que remitía a la pérdida progresiva de poder de compra de bienes industriales por unidad exportada de bienes primarios (Prebisch, 1949). De esta forma surgió una “asimetría estructural” entre países centrales y periféricos.

sociales. Por una parte, en América Latina la penetración del progreso técnico por inducción externa se concentró en actividades de exportación; por ello, sólo se desarrollaron algunos sectores y, además, las técnicas productivas propiciaron el ahorro de fuerza de trabajo (Furtado, 1971 [1961]; Prebisch, 1967 [1963]). Por otra parte, la baja tasa de inversión tenía su origen en una elevada concentración de la renta y en el peso significativo que asumía el consumo suntuario e improductivo de los grupos de altos ingresos (Furtado, 1971 [1961]).

De este modo, la crítica estructuralista se dirige a un elemento central del modelo de convergencia: la falta de garantías del proceso de “reinversión” de utilidades implícito en el modelo lewisiano, entre otras razones por la posición subordinada de los países periféricos en el escenario mundial (Nun, 2003 [1999]). En conjunto, ello explica el carácter “desequilibrado” de las estructuras económicas latinoamericanas: un sector tiene productividad para participar del mercado mundial, exportando bienes de bajo valor agregado, mientras que el resto de la economía no tiene tal capacidad y es demandante de bienes importados para el mercado interno. Ello se plasma en crisis cíclicas del balance de pagos (Furtado, 1971 [1961]; Prebisch, 1967 [1963], 1970)⁸⁵.

Un rasgo distintivo de los países latinoamericanos remite a su patrón de desarrollo desigual y desequilibrado. Precisamente, a ello apunta la noción de “heterogeneidad estructural” (Pinto, 1976): la desigual penetración del progreso técnico –en especial, su concentración en actividades de exportación o con ventajas naturales– conduce a un tipo de estructura productiva y ocupacional característica del subdesarrollo.

La heterogeneidad estructural alude a una primera característica de las economías periféricas: la existencia de actividades y/o ramas de la producción en las cuales la productividad media del trabajo es normal, en tanto relativamente próxima a la que permiten las técnicas disponibles (...); y la *presencia simultánea* de actividades tecnológicamente rezagadas en las cuales los niveles de productividad son muy reducidos, sustancialmente inferiores a los de aquellas otras actividades “modernas”. (Rodríguez, 2001: 42; énfasis agregado)

En tanto que en los países capitalistas centrales las innovaciones se difunden de manera más homogénea entre las distintas actividades económicas, en los países periféricos se concentran en algunas ramas (Cimoli y Porcile, 2011; Di Filippo y Jadue, 1976; Rodríguez, 2001)⁸⁶. La heterogeneidad estructural se revela en una insuficiente o débil absorción de fuerza de trabajo

⁸⁵ Desde las “teorías de la dependencia” también se enfatizó que las situaciones de desarrollo y subdesarrollo constituían dos aspectos de un mismo modo de funcionamiento del mercado internacional (Amin, 1997; Baran y Sweezy, 1968 [1966]; Gunder Frank, 1966; Marini, 2007 [1973]). En términos de Marini (2007 [1973]), la dependencia aludía a una subordinación entre países que se reproducía a sí misma. La inviabilidad del desarrollo económico periférico radicada en el “intercambio desigual” derivado de los precios monopólicos, que originaba una transferencia de riqueza.

por parte de los sectores más modernos de la economía: por consiguiente, se asocia con la consolidación de mano de obra redundante en actividades de baja productividad. En el planteo estructuralista clásico, allí radicaba la principal causa de la desigualdad dentro de los países subdesarrollados (Pinto, 1976).

Durante la ISI, en algunos países periféricos como la Argentina emergió un sector de productividad “intermedia”, asociado con el mercado interno y la sustitución de importaciones (Di Filippo y Jadue, 1976; Pinto, 1976). Este estrato involucraba actividades sin capacidad para participar en el mercado mundial mediante la exportación, de manera que su expansión dependía de las protecciones implementadas. En este sentido, el proceso de globalización habría propiciado una mayor heterogeneidad productiva de las economías latinoamericanas. Bajo el nuevo contexto de “modernización globalizada” (Pérez-Sáinz y Mora-Salas, 2004), la apertura económica y el ajuste estructural favorecieron la desarticulación de tales sectores con baja competitividad internacional, y redundaron en una menor integración de los tejidos productivos (Pérez-Sáinz y Mora-Salas, 2004; Mora-Salas, 2010; Salvia, 2012). Por consiguiente, la tendencia a la profundización del desarrollo desigual, propio de la lógica del capitalismo en su fase neoliberal (Harvey, 2007), se habría plasmado en un mayor desequilibrio de los sistemas económicos periféricos⁸⁷.

2.2.2. De la “marginalidad” al “sector informal”: las lógicas de funcionamiento de los mercados de trabajo periféricos

La constatación de un patrón de desarrollo desigual y desequilibrado y sus consecuencias sobre la dinámica socio-ocupacional fueron advertidas tempranamente por el “enfoque marxista de la marginalidad” (Kay, 1991) o enfoque de la “marginalidad económica” (Cortés, 2000a; Salvia, 2007)⁸⁸. En su formulación original, esta vertiente retomó y reinterpretó las

⁸⁶ Nohlen y Sturm (1982: 47) destacan acertadamente la conveniencia de considerar la heterogeneidad estructural como un “continuo”, en tanto la “homogeneidad” no sería más que un caso puro. Por consiguiente, en formaciones capitalistas avanzadas también es posible constatar brechas de productividad entre sectores y ramas; sin embargo, son menos ostensibles que en los países periféricos.

⁸⁷ Cabe notar que el neoestructuralismo no desconoce el carácter desequilibrado del desarrollo económico periférico, pero destaca los efectos positivos que puede implicar la participación en una economía crecientemente globalizada al destacar las “oportunidades” que ofrece el mercado mundial para los países periféricos, tanto en términos de especialización como de integración a las cadenas globales de valor (Katz, 2016).

⁸⁸ A partir de los sesenta, la cuestión de la “marginalidad” cobró notable impulso en las ciencias sociales de la región. La teoría sociológica incorporó el enfoque de la “modernización” en el llamado “proceso general de transición” (Germani, 1971). El proceso de desarrollo producía cambios económicos y lograba absorberlos como tales; mientras que la modernización social promovía el cambio de posiciones sociales y las personas desplazadas “incorporaban” valores asociados a sus nuevas posiciones (Germani, 1971). Sin embargo, los distintos subprocesos mencionados tenían ritmos diferentes; ello derivaba en “asincronías” y de allí surgía la marginalidad: “el hecho fundamental que genera la marginalidad (...) es el carácter asincrónico o desigual del

contribuciones de la teoría de Marx de la relación entre el modo de producción capitalista y la generación de población excedente. Por ello, el concepto de “masa marginal” se encuentra articulado con el de “superpoblación relativa” (Nun, Murmis y Marín, 1968; Nun 2003 [1969]). Debemos recordar que, en el capítulo XXIII de *El capital*, Marx señaló:

... *cuanto mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y por tanto, también, la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa o ejército industrial de reserva.* (2008 [1867]: 803; énfasis original)

De una reinterpretación de este postulado surgió el planteo de la “marginalidad” con base en el análisis de formaciones económico-sociales concretas. Este enfoque sugería una distinción entre la generación de una población excedente y su función como ejército de reserva. Partiendo de la constatación de un modo de producción capitalista que funcionaba a dos velocidades –uno en su fase “monopólica”, hegemónico, y otro en su etapa “competitiva”–, el enfoque de la marginalidad puso en duda el grado en que la población inserta en actividades de subsistencia constituía un “ejército industrial de reserva” al modelo capitalista hegemónico (Nun, 2003 [1969]).

En los países desarrollados, la acumulación de capital había determinado de forma endógena la absorción de fuerza de trabajo y las emigraciones masivas desempeñaron un papel central en el proceso de ajuste implícito en los modelos lewisianos. Ello configuró un mercado de trabajo “autónomo”. En cambio, en los países periféricos se había conformado un mercado de trabajo “dependiente”: se apelaba al uso de tecnologías ahorradoras de fuerza de trabajo en un contexto en que ésta era abundante, las decisiones de inversión se tomaban en otros ámbitos de acumulación y ello conducía a una dinámica diferente del mercado laboral:

Es a partir de esta idea de un ejército de reserva “excesivo” como función de un mercado de trabajo dependiente que nos parece posible fundar el concepto de *marginalidad* a nivel de las relaciones económicas (...) La mano de obra es *marginal* en la medida en que es rechazada por el mismo sistema que la crea. Y la especificidad del concepto se liga a la situación de dependencia del mercado. (Nun, Murmis y Marín, 1968: 28-30; énfasis original)

De acuerdo con el enfoque de la marginalidad, son los diferentes circuitos de acumulación de capital los que organizan un determinado tipo de demanda de fuerza de trabajo y, por lo tanto,

proceso de transición” (Germani, 1972: 20). De esta manera, eran marginales quienes no participaban en las estructuras de la sociedad moderna (Germani, 1967: 390); ello otorgaba a la marginalidad un rasgo “multidimensional”. Un enfoque similar tenía la DESAL en Chile (DESAL 1967; Vekemans y Venegas, 1966). Más recientemente, en el contexto de los países avanzados, Wacquant (2001) formuló la noción de “nuevo régimen de marginalidad avanzada”, para señalar la desarticulación de la relación salarial, el incremento de la desigualdad, la metamorfosis del Estado de Bienestar y la segregación espacial.

determinan la inserción ocupacional de los trabajadores. En consecuencia, los excedentes de fuerza de trabajo son un resultado de la estructura económico-productiva. Las “funciones” de la población excedente –que según Marx eran la regulación del salario y la provisión de fuerza laboral en las expansiones de la acumulación– se ligan con el proceso de acumulación tomado como referencia. En palabras de Nun (2003 [1969]: 87), los trabajadores marginales pasan a ser “esa parte afuncional o disfuncional de la superpoblación relativa” respecto del sector hegemónico. “La categoría implica así una doble referencia al sistema que, por un lado, genera este excedente, y por el otro, no precisa de él para seguir funcionando”⁸⁹.

Asimismo, la marginalidad apunta a las relaciones entre la población excedente y el sistema que la genera, y no a los individuos (Nun, 2003 [1969]: 88). Ello es relevante aun cuando el estudio empírico pueda dar cuenta de la mayor probabilidad de algunos agentes sociales de insertarse en posiciones marginales (por razones de género, edad o etnia). Por consiguiente, retomamos de este enfoque la preocupación por las condiciones que “producen” o recrean marginalidad.

Con posterioridad al enfoque de la marginalidad, la cuestión del tipo de demanda laboral y el subempleo se plasmaron en el concepto de “sector informal urbano”⁹⁰. Si bien distintas perspectivas procuraron definir esta noción, en América Latina estuvo influida por el planteo acerca de la heterogeneidad estructural. Una de las principales contribuciones del estructuralismo fue desarrollar la estrecha relación entre el patrón de desarrollo, la estructura productiva y su expresión a nivel ocupacional (Cimoli et al., 2005; Furtado, 1971 [1961]; Pinto, 1976; Rodríguez, 2001). Como destacó el Programa Regional de Empleo para América Latina (PREALC), “la heterogeneidad de la estructura económica *se traduce en una situación de heterogeneidad en el empleo*” (PREALC: 1978: 8; énfasis agregado). Esta heterogeneidad laboral implica la coexistencia de una porción de la fuerza de trabajo que se desempeña en los

⁸⁹ En el debate europeo sobre la “exclusión social” se han hecho algunos aportes significativos que buscaron vincular este fenómeno con las condiciones económicas del capitalismo en la actualidad, que recogen aspectos tempranamente señalados por la teoría de la marginalidad. Bauman (1998) plantea que los excluidos son una superpoblación que no cumple ninguna función en el capitalismo contemporáneo. Por su parte, en discusión con Byrne (2005), para quien los excluidos forman un nuevo “ejército industrial de reserva”, Kennedy (2005: 102) destaca que la conformación de una sobrepoblación obrera y su rol como ejército industrial de reserva son, desde el punto de vista teórico, dos tendencias distintas. La sobrepoblación relativa puede exceder su función como ejército industrial de reserva en determinados momentos históricos.

⁹⁰ El concepto de “sector informal” tuvo su punto de partida en el trabajo de Keith Hart en Ghana, quien introdujo la noción de ingresos “informales” para remitir a las variadas formas de empleo no asalariado. Una misión posterior de la OIT en Kenia retomó esta investigación y propuso el concepto de “sector informal” (Salas, 2003), que se generalizó en América Latina a partir de los estudios del Programa Regional de Empleo (PREALC) de la OIT (PREALC, 1978).

estratos más modernos de la estructura productiva, con altos niveles de ingresos, mientras que el resto se ocupa “en los estratos intermedios o de subsistencia con correspondientes niveles de productividad” (ídem).

De acuerdo con la formulación original, el sector informal constituye una respuesta por parte de la fuerza de trabajo que no encuentra ocupación en el sector moderno capitalista; es decir, se trata de una consecuencia de la insuficiencia absorbente planteada por el estructuralismo. Por lo tanto, el concepto de sector informal apunta principalmente a un modo de organizar la producción y no al carácter de las relaciones laborales (Tokman, 1987: 514 y ss.)⁹¹. Al describir las unidades económicas del sector informal, Tokman señala:

... su requisito más importante es la *facilidad de entrada al sector*, la que a su vez determina las características con respecto a la organización de la producción y a la inserción en el mercado. Dicha *organización es rudimentaria*, sin una clara división del trabajo ni de la propiedad de los medios de producción; en realidad hay muy poco capital comprometido y se requieren escasas habilidades. En cuanto a la inserción en el mercado, hay facilidad de entrada en los mercados competitivos y en la base de los mercados concentrados, y en ellos la posibilidad de competencia determina que *el ingreso promedio sea la variable de ajuste*. (1987: 514-515; énfasis agregado)

En esta investigación entendemos al sector informal en los términos de un “sector microempresario”⁹². Para conceptualizar cómo se organiza la producción en las unidades del sector informal, se apela a algunos rasgos que permiten describir tales actividades: la propiedad familiar de los emprendimientos, la pequeña escala de la producción, el uso intensivo de la fuerza de trabajo, la baja dotación de tecnología y, en general, un solapamiento entre el patrimonio de la unidad productiva y el de la unidad familiar (OIT, 1972)⁹³. El sector informal incluye unidades que ocupan mano de obra remunerada –o no–, así como unidades individuales. Entre las primeras, un rasgo frecuente alude a la utilización de fuerza de trabajo

⁹¹ Así, puede suponerse que una parte del sector informal expresa actividades relacionadas con un modo de producción “mercantil simple” (Moser, 1978). Se trata de pequeños productores independientes ubicados en actividades de la producción y la comercialización, que establecen relaciones de intercambio entre sí y con agentes del sector más dinámico pero que, en general, no tienen capacidad de acumulación (Torrado, 1992: 110-111).

⁹² Desde esta perspectiva de análisis, es posible suponer que el sector microempresario, si bien constituye el estrato de más baja productividad a nivel de la estructura ocupacional, no es el único. En una economía capitalista, la competencia y la innovación conducen a la existencia de capitales líderes y rezagados. A su vez, la existencia de una demanda residual o de ciertas características de los mercados pueden explicar la supervivencia de las empresas más rezagadas (Graña, 2015). En definitiva, los procesos de “concentración” y “centralización” habilitan el desarrollo desigual y la existencia de capitales de distinta capacidad de acumulación (Shaikh, 2007 [1991]; Weeks, 2001).

⁹³ El contraste con las actividades del sector formal también se situó en su lógica predominante. Mientras que en las unidades capitalistas dominaría la lógica de la maximización de la tasa de ganancia, en las unidades del sector informal el objetivo sería maximizar el ingreso total y la reproducción de la unidad doméstica (Souza, 1980, cit. en Tokman, 1987: 515).

familiar, aunque también existen unidades “cuasi-capitalistas” que disponen de fuerza de trabajo asalariada. Entre las segundas, se distinguen trabajadores individuales según se desempeñen –o no– en hogares particulares como servicio doméstico (Tokman, 1987: 515).

El concepto de sector informal apunta a un rasgo básico de la estructura económico-ocupacional de las economías periféricas. Sin embargo, nos interesa destacar algunas contribuciones que permitieron disolver el “dualismo” implícito en su formulación. De acuerdo con Cacciamali (2000), podrían derivarse dos posiciones: por un lado, concebir el sector informal como un conjunto de unidades de formación reciente que pueden alcanzar un proceso de acumulación; por otro lado, el sector informal puede considerarse subordinado al movimiento de la acumulación del capital más concentrado. En esta investigación recuperamos esta última perspectiva, porque permite describir no sólo el sector informal sino la manera en que aquél se reajusta a los nuevos requerimientos en la actual etapa de globalización (Cacciamali, 2000: 158)⁹⁴.

De este modo, el sector informal tiene un carácter “intersticial”: participa en los ámbitos económicos que deja el sector dinámico de la producción capitalista (Bienefeld, 1975; Moser, 1978). Estos intersticios surgen tanto por las características de determinados mercados (las grandes empresas pueden no encontrar rentabilidad en determinadas actividades por razones de escala) como por la existencia de una demanda “residual” que no consigue ser satisfecha por las unidades económicas de mayor tamaño. En cualquier caso, sobresale el carácter subordinado del sector informal: una expansión del capital más concentrado condiciona sus posibilidades de existencia en determinadas actividades, restringe sus capacidades de mantener ingresos y la acumulación de capital (Cacciamali, 2000). En otras palabras, a medida que el capital más concentrado avanza sobre una actividad, restringe la capacidad de supervivencia del sector informal. Dado que el ingreso obtenido es la “variable de ajuste” del sector (Tokman, 1987), en condiciones altamente competitivas o de incremento del desempleo por reestructuración del sector moderno, el sector informal puede saturarse y empobrecerse.

A su vez, el sector informal se encuentra vinculado –de diferentes maneras– con el formal (Breman, 1976; Cacciamali, 2000; Moser, 1978; Portes, 2000). Algunos autores destacan el papel del sector informal al proveer bienes y servicios de bajo costo que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo ocupada en el sector formal (Gerry, 1987; Portes, 2000).

⁹⁴ Tokman (2001 [1978]: 34) propuso la idea de “subordinación heterogénea” para referirse a la situación del sector informal. Distingue aquellas actividades que operan en mercados oligopólicos de aquellas que no lo hacen. Dado que las primeras están subordinadas, tienden a perder mercados; en cambio, hay otras que aún pueden crecer al operar en mercados más “competitivos”.

La cuestión del vínculo entre el sector informal y el formal se tornó más relevante a partir de la reestructuración del capital y el avance de la globalización. Diferentes autores han subrayado que algunas microempresas son funcionales a los procesos de desverticalización y tercerización iniciados por las grandes compañías (Pérez-Sáinz, 1995, 2000; Portes, 2000).

Estos elementos apuntan a un rasgo característico del sector microinformal: su heterogeneidad interna. En este punto, recobra relevancia la noción de “marginalidad económica”: en formaciones económicas heterogéneas, la delimitación de posiciones laborales que no son “funcionales” al proceso de acumulación supone adoptar un criterio complejo que considere tanto las unidades productivas del sector moderno como aquellas del sector informal. Por ello aquí caracterizamos las posiciones económicas marginales en términos de “informalidad de subsistencia” o “de supervivencia” (Pérez-Sáinz, 1995; Portes y Haller, 2004)⁹⁵, para diferenciarlas de aquellas posiciones en el sector informal o cuasi-formal. La informalidad de subsistencia constituye una “economía de la pobreza”: se trata de un conjunto de actividades que constituyen el último escalón de la estructura laboral y del sector informal⁹⁶. Son actividades de muy baja productividad, relacionadas con situaciones de desempleo persistente, que típicamente pueden involucrar al conjunto de las unidades domésticas y dan cuenta de estrategias de supervivencia de los grupos familiares (Comas, 2012; Salvia, 2012). Para el caso argentino, Salvia señala el carácter renovado de esta marginalidad económica – tras los cambios del régimen de acumulación a partir de los setenta–, que ya no abarca excedentes transitorios para un proceso de modernización, sino que involucra “sectores sobrantes” para los procesos de acumulación hegemónicos en un contexto de globalización (2011: 109).

En suma, otorgamos centralidad a la heterogeneidad productiva para comprender la desigualdad estructural de las condiciones de reproducción de las unidades domésticas. Aquí el sector informal designa, como hemos explicado, al “último eslabón” de la heterogeneidad estructural, es decir, corresponde al estrato de productividad más bajo de una economía

⁹⁵ Portes y Haller (2004: 13) presentan una tipología de actividades informales que, además de las mencionadas “economías informales de supervivencia” (actividades de baja productividad tradicionales generadoras de ingresos), incluyen a las “economías informales de explotación dependiente” (que involucran procesos de tercerización o subcontratación por parte de las grandes empresas) y a las “economías informales de crecimiento” (aquellas que aprovechan relaciones de solidaridad para acumular capital).

⁹⁶ Pérez-Sáinz (1995) señala que la informalidad de subsistencia no tiene su origen sólo en procesos “ahorradores” de fuerza de trabajo, sino que incluso en la globalización es posible constatar procesos trabajo-intensivos, pero poco encadenados (por ejemplo, la maquila mexicana), lo que hace que “la base acumulativa sea restringida y que, por tanto, el volumen de fuerza laboral absorbido sea también reducido” (1995: 39).

heterogénea (Tokman, 2001 [1978])⁹⁷. Agrupa a un conjunto de unidades productivas caracterizadas principalmente por su baja productividad y su capacidad de absorción de fuerza de trabajo, ya sea porque son formas de autoempleo, o porque desenvuelven actividades de bajo contenido tecnológico. Por sus características, las microempresas operan en actividades de “fácil entrada”, esto es, en mercados donde no se requiere una gran dotación de capital para operar o las regulaciones son menos desarrolladas; ello explica que puedan funcionar como “refugio” frente al desempleo abierto. Su funcionamiento se encuentra supeditado a la dinámica general de la acumulación de capital en los sectores modernos. En el extremo, la heterogeneidad productiva genera excedentes de población que se ubican en posiciones laborales de marginalidad económica. Tales inserciones remiten a una informalidad de subsistencia o “economía de la pobreza”.

2.2.3. La segmentación de los mercados de trabajo

La noción de “informalidad” adoptada destaca las formas de participación de la fuerza de trabajo en distintos tipos de unidades productivas. Ello constituye un elemento clave de la inserción laboral, relacionado directamente con las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. No obstante, al nivel del mercado de trabajo existen otros determinantes significativos de las modalidades de inserción que remiten a la “calidad” de las relaciones laborales.

Los cambios de magnitud y las características del “sector informal” se pueden derivar principalmente del estilo de desarrollo y los programas macroeconómicos implementados. En contraste, sin negar la centralidad de las estrategias de acumulación, las transformaciones en la calidad del empleo tienen otros determinantes inmediatos que remiten a la institucionalidad laboral (es decir, las formas de regulación de las relaciones laborales) y al papel de contraloría del Estado (Neffa, 2008; Weller, 2011).

Actualmente, se utiliza el concepto de “informalidad” en un sentido más amplio que el adoptado aquí. Se busca dar cuenta de un proceso que atraviesa a las economías capitalistas a nivel global, en las que ocupa un papel destacado el surgimiento de nuevas formas de empleo que contrastan con las que se habían consolidado durante la posguerra (Husmanns, 2004). Sin embargo, los referentes empíricos a los que estas nociones se asocian son claramente

⁹⁷ Aquí podríamos incluir otras perspectivas sobre la “informalidad”. Desde un enfoque neoclásico, De Soto (1987) enfatizó que los informales son “emprendedores” a quienes las excesivas regulaciones obligan a trabajar en condiciones irregulares desde el punto de vista legal. Otra perspectiva –asociada con el Banco Mundial– destaca que la informalidad tiene un componente “voluntario” significativo, debido a las oportunidades de flexibilidad que brinda (Maloney, 2004; Perry et al., 2006).

diferentes: mientras que el concepto de “sector informal” alude a las unidades productivas en que se ocupa la fuerza de trabajo, el “empleo informal” remite a las características contractuales de la relación laboral, al cumplimiento de las normas legales vigentes y, por lo tanto, al tipo de vínculo laboral (Cortés, 2001).

Aquí tematizamos la cuestión de la calidad de los empleos a partir de la noción de “segmentación de los mercados de trabajo” (Fernández-Huerga, 2010; Neffa, 2008; Solimano, 1988). En términos generales, estos enfoques se desarrollaron en oposición a la concepción neoclásica según la cual los mercados laborales tienden a funcionar de un modo homogéneo y con tendencia al equilibrio⁹⁸. Las diferentes perspectivas teóricas identificaron distintos criterios de segmentación. La vertiente institucionalista se centró en la existencia de mercados “internos” y “externos” a las empresas, con diferentes formas de contratación y regulación del precio de la fuerza de trabajo (Doeringer y Piore, 1970). Los economistas radicales pusieron el acento en el modo en que los patrones de acumulación en determinados períodos originan procesos de segmentación laboral y definen los mercados de trabajo “primarios” y “secundarios” (Reich, Gordon y Edwards, 1973).

Como señala Neffa (2008: 155), en tanto la perspectiva institucionalista acentúa un eje “microeconómico” (a nivel de las empresas), el enfoque de la economía radical enfatiza la dimensión “macroeconómica” (a nivel del mercado laboral en su conjunto). Aquí retomamos esta última aproximación.

[En] los *mercados primarios* (...) predominan (...) la estabilidad en el empleo con contratos de duración indeterminada, se exigen y desarrollan hábitos y comportamientos propios de mercados estables, las calificaciones profesionales y las competencias son elevadas y se adquieren en virtud del trabajo realizado; los salarios vigentes son relativamente altos comparados con el resto, las regulaciones internas para este grupo son abundantes y precisas, las condiciones y el medio ambiente de trabajo son relativamente satisfactorios, existen reales posibilidades de promoción y, en general, las personas permanecen en sus puestos hasta la promoción (...) En los *mercados secundarios*, los salarios son inferiores a los del primario (...). Habría entonces una diferencia entre los dos mercados en cuanto a la determinación del nivel salarial (...) [Además] los mercados secundarios están más afectados por la coyuntura. Los empleos tienen un estatuto social inferior que en el caso anterior, no tienen legalmente garantizada la estabilidad, poseen por lo general una duración determinada, son precarios e inestables. (Neffa, 2008: 155-156; énfasis agregado)

⁹⁸ Las diversas teorías de la segmentación de los mercados de trabajo recogen distintas tradiciones. Hasta mediados de los ochenta, las principales corrientes fueron el “institucionalismo”, iniciado con las investigaciones de Kerr (1950) y Dunlop (1958); el “neoinstitucionalismo”, de Doeringer y Piore (1970); y el marxismo de los “economistas radicales” Reich, Gordon y Edwards (1973). A partir de entonces, la escuela neoclásica comenzó a aceptar la segmentación de los mercados. En esta nueva aproximación, apelaron a la rigidez salarial y a la imposibilidad de ciertas empresas de ajustar a los “salarios de eficiencia” (Fernández-Huerga, 2010).

Nos interesa puntualizar la estrecha asociación entre la heterogeneidad productiva y la segmentación del mercado laboral, es decir, entre el sector económico de inserción y el tipo de empleo. La capacidad de acumulación de las unidades económicas desempeña un papel clave en el tipo de empleos generado (Coatz, García Díaz y Woyecheszen, 2010; Salvia, 2012). A su vez, en las condiciones impuestas por la globalización económica de las últimas décadas, la segmentación de los mercados de trabajo adquirió nuevas connotaciones. En particular, se destacan las estrategias de reducción del costo laboral en el marco de la mayor apertura comercial, lo que conduce al surgimiento de novedosas formas de ocupación (Cacciamali, 2000; Mora Salas, 2010; Pérez-Sáinz, 1995). En este marco, el concepto de “precariedad laboral” adquirió relevancia para definir un conjunto de empleos atípicos, alejados de las modalidades consolidadas desde la posguerra (Feldman y Galín, 1990; Marshall, 1992). Precisamente, este concepto alude a los empleos que no pertenecen al segmento “primario” del mercado de trabajo (Standing, 2011). Aquí entendemos el empleo precario a partir del “... alejamiento de los principales rasgos del empleo típico (también regular, normal o protegido), para lo cual se consideran dos elementos básicos de la relación laboral: *estabilidad en el empleo y cobertura social*” (Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000: 142; énfasis agregado)⁹⁹.

El propósito de esta sección ha sido delimitar una perspectiva teórica que otorga prioridad al nivel de productividad de las unidades económicas en las que se insertan los trabajadores ocupados. De acuerdo con el planteo presentado en el primer apartado de este capítulo, se trata de un vector crítico para comprender los rasgos que asume la reproducción de las unidades domésticas en las que tales ocupados viven. La articulación entre un enfoque centrado en las características de las unidades económicas y la cuestión de la segmentación de las relaciones laborales permite construir un mosaico de modalidades de inserción económico-ocupacional y describir procesos de “desigualdad estructural”. Ésta surge cuando trabajadores con similar productividad potencial tienen un acceso diferencial a oportunidades salariales, de trabajo o entrenamiento, a raíz del tipo de posición, sector o segmento en el que se insertan. En este contexto, el nivel de ingresos está determinado por los puestos de trabajo, mientras que las características de los trabajadores sólo constituyen un criterio de selección para

⁹⁹ La precariedad del empleo no se agota en la ausencia de cumplimiento de las normas legales; los empleos precarios pueden cumplir la normativa vigente, pero su rasgo sobresaliente es la ausencia de estabilidad en la ocupación y las peores condiciones de contratación. Por ello, recientemente se ha enfatizado la asociación entre la precariedad y la pobreza y se define a tales ocupados como “trabajadores pobres” [*in-work poverty*] (Fraser et al., 2011).

determinar las chances de participación en el mercado laboral (Salvia, 2012: 125). Estas desigualdades estructurales se derivan de las complejas características que asumen los mercados laborales en el actual contexto de globalización económica y condicionan los procesos de reproducción económica de los hogares.

2.3. Políticas sociales y heterogeneidad estructural

Aun cuando asignamos centralidad a las modalidades de inserción laboral de la fuerza de trabajo en la reproducción económica de las unidades domésticas, su abordaje no puede escindirse de las formas que asume la intervención estatal en términos de la redistribución secundaria del ingreso. Este apartado aborda dos temas relacionados. Por un lado, consideramos la relación entre la intervención social del Estado y la reproducción de los hogares. Por otro lado, caracterizamos la relación que existe entre la heterogeneidad estructural y las formas que asume la política social en los países periféricos, en particular, en el contexto de la actual globalización económica.

2.3.1. La intervención social del Estado en sociedades capitalistas: más allá de la ciudadanía social

Es frecuente señalar que todas las formas de Estado han desplegado alguna “política social” (Esping-Andersen, 1990). No obstante, en las sociedades capitalistas, en las que los mecanismos de mercado son dominantes, la política social asume formas históricas particulares. En este sentido, existen abordajes diversos a partir de los cuales estudiar la intervención estatal y su injerencia sobre las condiciones de vida¹⁰⁰.

Distintas vertientes teóricas ubican a la intervención social del Estado en clave a los problemas de la “integración” o la “cohesión social”. Para el estructural-funcionalismo la intervención social estatal se vincula con un rasgo específico del desarrollo histórico y la diferenciación funcional de las sociedades industriales (Mishra, 1981). Los sistemas sociales se vuelven más complejos, surgen nuevas funciones y aparecen “problemas de integración”. En este contexto, las instituciones tradicionales como la familia, la comunidad local y la

¹⁰⁰ En los países centrales, una parte significativa de esta literatura surgió durante la etapa de desarrollo, expansión y crisis de los “Estados de bienestar” (Adelantado et al.,1998; Mishra, 1981; Picó, 1990). Existen distintas formas de clasificar las explicaciones acerca del origen y la expansión de las formas de intervención social del Estado durante el siglo XX. Esping-Andersen (1990: 13-16) distingue dos posiciones: por un lado, una vertiente estructuralista, incluye tanto al funcionalismo clásico (y su enfoque de la complejidad de la “sociedad industrial”) como al marxismo; por otro lado, el enfoque institucionalista. Gough (1979) distingue cuatro posturas: el funcionalismo, las teorías económicas neoclásicas que generalizan la función de bienestar; el enfoque “pluralista” que analiza instituciones políticas; y el marxismo. Finalmente, Picó (1990) distingue entre enfoques liberales (próximos a los funcionalistas), socialdemócratas (incluyendo autores clásicos como Marshall y Titmuss) y marxistas. Aquí proponemos una lectura que articula estas clasificaciones.

religión pierden su capacidad de generar integración social: de allí surge un “requisito funcional” para el surgimiento de instituciones específicas que generen instancias de integración. En este marco, las instituciones de política social y bienestar (los sistemas de *welfare*) fueron vistas como instancias de integración en contextos de cambio y diferenciación social.

Desde un enfoque institucionalista, Polanyi (2011 [1944]) consideró a la política social como un mecanismo de “protección” de la sociedad ante los efectos disgregadores del mercado que comprometen la reproducción de la vida humana. En sus términos:

Si se permitiera que el mecanismo del mercado fuese el único director del destino de los seres humanos y de su entorno natural (...) *se demolería la sociedad*. La supuesta mercancía llamada ‘fuerza de trabajo’ no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente o incluso dejarse ociosa, *sin afectar también al individuo humano que sea el poseedor de esta mercancía peculiar* (...) Ninguna sociedad podría soportar los efectos de tal sistema de ficciones burdas (...) si su sustancia humana y natural, al igual que su organización empresarial, no estuviesen *protegidas* contra los excesos de este molino satánico (Polanyi, 2011 [1944]: 124; énfasis agregado).

La tradición francesa abreva en un enfoque similar al recoger distintos elementos del lenguaje durkheimiano y situar a la política social en relación con la configuración del “lazo social” (Castel, 2003; Donzelot, 2007 [1985]). Existiría una “falla estructural” en las sociedades capitalistas que contrapone el ideario liberal de la igualdad a la realidad desigual de las relaciones de mercado. Este hiato –al que Donzelot (2007 [1985]) definió como “cuestión social”– hace visible la siempre posible fractura del vínculo social. El lenguaje de la solidaridad como modo de “suturar” la escisión social entre desigualdad real e igualdad formal se expresó en el derecho, a través de la ciudadanía y, específicamente, de la ciudadanía social (Castel, 2003; Donzelot, 2007 [1985])¹⁰¹. Por consiguiente, dentro de esta perspectiva, la cuestión del lazo social y la integración se resuelven en la participación en algunos de los mecanismos de protección ofrecidos por el Estado en el marco de los derechos sociales¹⁰².

¹⁰¹ En este sentido, se comprende que una parte central del desarrollo teórico sobre la integración social haya quedado asociada a la cuestión de la “exclusión social”. Si la integración social (el lazo social) se apoya en la participación en el sistema de derechos sociales, la ausencia (o presencia “parcial” y distorsionada) de tales derechos asociada a algunas de las nuevas modalidades laborales que imperan en el capitalismo contemporáneo, se expresaría como “exclusión social” (Castel, 2003).

¹⁰² La idea de una sociedad de individuos diferenciados y carentes de las protecciones que brindaban las relaciones comunitarias y de proximidad conformó uno de los nudos problemáticos de la teoría sociológica clásica (García Raggio, 1998: 20-21). Durkheim veía en el “Estado Social” el instrumento eficaz para articular jurídica y normativamente el lazo social en un contexto de individualización creciente: frente a la posibilidad de anomia y disgregación latente en la sociedad industrial, el Estado Social organizaba jurídicamente las relaciones entre individuos diferenciados y establecía los límites de lo justo y lo injusto. De esta manera, el Estado Social aparecía como articulación colectiva en la que los individuos podían realizar su individualidad y como espacio

Aquí proponemos una lectura en clave de “economía política” de la política social que repone su posición con respecto a los procesos de subsistencia y reproducción social en formaciones económico-sociales concretas (Gough, 1979). Se ha señalado que, en las sociedades capitalistas, estas intervenciones tienen la particularidad de incidir antes o después de los efectos producidos por el funcionamiento de los mercados; por ende, la intervención estatal involucra una función distributiva crucial (Korpi, 1980). Por consiguiente, recuperamos distintas vertientes del marxismo y del neomarxismo que, para abordar las características de la intervención estatal, la vinculan con los rasgos más generales del régimen social de acumulación (Gough, 1979; Kotz, 1994; Offe, 1984; O’Connor 2009 [1977]).

Dentro de esta perspectiva, suelen enfatizarse dos elementos¹⁰³. En primer término, el rol de la política social con respecto a los requisitos de la reproducción del sistema global. Se destaca la provisión de bienes y servicios de carácter universal que permiten la conformación y reproducción de una oferta de fuerza de trabajo adecuada al régimen de acumulación. Suele argumentarse que la competencia entre empresarios individuales conduciría a niveles extremos de explotación de la fuerza de trabajo –con un efecto pernicioso sobre la reproducción del sistema económico en el largo plazo– por lo cual la intervención estatal desempeña un rol crucial en términos de regulación social. En segundo término, se enfatiza el papel que desempeña la intervención social del Estado con respecto a la dominación política y la regulación del conflicto social. Se pone el foco en la injerencia de la intervención estatal para garantizar y reforzar la legitimidad del sistema político-económico vigente (Fleury, 1997; Kotz, 1994; Lippit, 2010).

De esta manera, las intervenciones del Estado por medio de políticas sociales pueden ser comprendidas en el marco de una estructura social de acumulación, con respecto a su participación en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la regulación¹⁰⁴ de los efectos del conflicto social sobre el proceso de acumulación (Gillespie, 2014; Kotz, 1994). Desde este enfoque, se enfatizan las “funciones” del Estado capitalista con respecto a la acumulación del capital y en relación con la legitimación político-institucional (O’Connor, 2009 [1977]). El

de protección, a la vez que ponía límites y regulaba posiciones cada vez más diferenciadas (García Raggio, 1998).

¹⁰³ En rigor, las aportaciones del marxismo y el neomarxismo acerca de la política social no están escindidas de las discusiones sobre la naturaleza del Estado capitalista. Para una síntesis, véase Jessop (1980 [1977]).

¹⁰⁴ La idea de regulación de los comportamientos de los agentes sociales y económicos está asociada a la escuela francesa de la regulación. Para esta corriente, un régimen de acumulación requiere de una estructura de regulación. El Estado participa en este proceso a través de sus instituciones (Boyer, 2007).

Estado interviene en el conjunto de la economía. Por ello, puede diferenciarse entre intervenciones dirigidas a promover la acumulación y la reestructuración del capital y otras orientadas a garantizar su función de legitimación (O'Connor, 2009 [1977]: 6-7). Esto último involucra la acción relacionada con el “gasto social” y las intervenciones de redistribución (sistemas de seguros, pensiones o protección al desempleo). No obstante, argumentamos que el correlato entre este papel de la intervención social del Estado y los requerimientos de la acumulación no son inmediatos, sino que puede haber “desplazamientos”. Éstos se derivan del hecho de que el Estado es, antes que nada, un sistema de dominación política y no un “instrumento” (Jessop, 1980 [1977])¹⁰⁵.

La “política social” cobra sentido en el contexto históricamente situado de un régimen de acumulación. En términos amplios, se refiere a todas las intervenciones de regulación que el Estado despliega y que alteran (ya sea para mejorar o para empeorar) las condiciones de vida de individuos y grupos (Gough, 1979: 4). En las sociedades capitalistas, la política social remite principalmente a la “gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo [y] encuentra, en la dinámica de la acumulación capitalista, su condición de posibilidad, pero también su límite” (Fleury, 1997: 55)¹⁰⁶. Uno de los aspectos centrales tiene que ver con la transformación del trabajo no asalariado en trabajo asalariado: de acuerdo con Offe (1984: 94-95) tal transformación es cubierta por la política social, al implicar mecanismos de represión, socialización (educación, política de salud e higiene, etcétera) y la colectivización de algunos riesgos en áreas de la vida social que no se subsumen a mecanismos de mercado. Al mismo tiempo, la política social participa en el “control cuantitativo” del proceso de proletarización (Offe, 1984: 98).

Por consiguiente, el Estado participa directamente en las condiciones de vida y reproducción de las unidades domésticas. Retomamos el planteo de Danani (2009) para delimitar los alcances que tienen las políticas sociales al respecto. Es posible diferenciar entre la “política laboral” y la “política social” dentro de las intervenciones sociales del Estado que se dirigen a

¹⁰⁵ La posibilidad de un “desacople” entre las formas de intervención estatal –relacionada con los requerimientos de legitimación– y los requerimientos de la acumulación fue tematizada por distintos autores. En el campo del marxismo, las principales controversias remiten al ajuste entre la intervención estatal, los requisitos de la acumulación del capital y el grado en que tales intervenciones se separan de ese rol “funcional” para responder a las necesidades de la dominación política en sociedades de clases. Jessop (1980 [1977]: 189) es explícito al destacar que “el poder del Estado puede ser más o menos capitalista según la situación”.

¹⁰⁶ Esta mirada, como nos advierte Fleury (1997) no desconoce el conflicto social a la manera de las perspectivas “funcionalistas” o “instrumentalistas” del Estado. Analizar las políticas sociales en un sentido “sistémico” –a partir de su lugar en la reproducción de fuerza de trabajo y en la regulación del conflicto social– no sugiere un contexto de armonía social ni una deliberada intencionalidad. Supone reconocer la existencia de determinadas “afinidades electivas”, ciertas limitaciones en su desarrollo, y también la posibilidad de un desacople.

incidir en las condiciones de vida. La “política laboral” actúa “de manera directa e inmediata (...) en la relación capital-trabajo (...) [y] puede ser considerada el eje organizador del conjunto de intervenciones sociales del Estado (...). La política laboral *regula directamente las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo*” (Danani, 2009: 31. Énfasis original). De allí que la que participe en la “distribución primaria” del ingreso, al operar de manera directa en la distribución funcional, especialmente a través de la política salarial. Por otra parte, la “política social” remite a “aquellas intervenciones sociales del Estado que producen y moldean *indirectamente* las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales” (Danani, 2009: 32. Énfasis original).

En una sociedad capitalista, en la cual los satisfactores de necesidades se encuentran mercantilizados, la política social constituye un mecanismo de “desmercantilización” (Esping-Andersen, 1990, 1999; Fleury, 1997; Offe, 1984). La desmercantilización remite “al grado en el que los individuos o las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el mercado”; sin embargo, se trata de una cuestión de grados, pues en el extremo equivaldría a la “desproletarización” (Esping-Andersen, 1990: 60). En este sentido, es posible distinguir dos formas (o facetas) diferentes de desmercantilización: por una parte, las políticas sociales desmercantilizan necesidades cuando permiten el acceso a ciertos bienes y servicios que constituyen satisfactores de aquéllas; por otra parte, desmercantilizan personas cuando éstas pueden reducir su dependencia con respecto al mercado de trabajo (Danani, 2009: 38).

La provisión de servicios remite a la desmercantilización de necesidades, mientras que las políticas de ingresos, las transferencias monetarias y los subsidios implican la desmercantilización de las personas (Danani, 2009: 38-39). En esta investigación nos centramos en el segundo de los ejes planteados. Por consiguiente, en términos “microsociales”, las políticas sociales pueden comprenderse como un recurso más que los hogares incorporan a su balance reproductivo; en términos “macrosociales”, se relacionan con la reproducción de la fuerza de trabajo y con los modos de regulación social.

2.3.2. Las políticas sociales en América Latina: de la falta de ajuste de los modelos “clásicos” a las nuevas políticas en la era de la globalización

La evolución de la política social en los países capitalistas desarrollados durante el siglo XX estuvo estrechamente asociada a la expansión del “Estado de bienestar” (Esping-Andersen, 1990, 1999; Gough, 1979). Esping-Andersen (1990) distinguió tres “mundos” distintos del

Estado de bienestar: en primer lugar, los regímenes “liberales”, en los cuales la política social adquirió un rol residual, fomentando la cobertura de riesgos sociales a través de mecanismos de mercado y con prestaciones mínimas; en segundo lugar, los regímenes “conservadores” o “corporativos”, en los cuales el bienestar tendió a estar estratificado según el tipo de inserción laboral y a depender, en gran parte, de la institución familiar; y, en tercer lugar, los regímenes “socialdemócratas” en los cuales el acceso al bienestar tendió a ser universal, de acuerdo con un principio de ciudadanía (Esping-Andersen, 1990)¹⁰⁷.

Más allá de sus diferencias, estos modelos dependen de una serie de características compartidas: el modo de producción dominante es capitalista y la relación asalariada está extendida a la mayoría de la población; y el medio principal para asegurarse la subsistencia es a través del empleo en mercados de trabajo formales (Wood y Gough, 2006). En los países desarrollados, el modelo de política social se basó en el pleno empleo y en un modelo de “solidaridad sistémica” que garantizaba protección a quienes no lograban insertarse, provisoriamente, en el mercado de trabajo (Tokman, 2006). Uno de los principales mecanismos por medio del cual la política social reguló el carácter cuantitativo de la participación en el mercado de trabajo fue la expansión de los seguros de desempleo, que hizo posible la desmercantilización relativa de fuerza de trabajo según el nivel de sustitución de ingresos que propiciaran (Esping-Andersen, 1999).

En América Latina, las condiciones de desarrollo histórico supusieron una evolución diferente y un desajuste con estos modelos predominantes (Andrenacci, 2012; Filgueira, 2015; Tokman, 2006). La heterogeneidad estructural y la generación de excedentes de fuerza de trabajo condicionaron el patrón de intervención social del Estado en la región. De acuerdo con Tokman (2006), dos razones principales explican este desajuste¹⁰⁸. En primer lugar, las características de las inserciones laborales en los países periféricos. Tanto el empleo en condiciones de baja productividad en el sector informal como las estrategias de autoempleo suelen ir acompañados de una falta de contribución a los mecanismos de seguridad social tradicionales. En contextos de elevada incidencia del subempleo, “...la existencia de cobertura contra el desempleo hubiera transformado el subempleo [i.e., el empleo de baja

¹⁰⁷ Esta tipología se extendió rápidamente y dio origen a discusiones acerca de otras formas de clasificación (Barba-Solano, 2007). Con posterioridad, Esping-Andersen (1999) pasó a referirse a “regímenes de bienestar”, para incluir tanto el rol de la familia (hogares) como la participación del mercado en la provisión de bienestar.

¹⁰⁸ En rigor, Tokman (2006) también incluye una dimensión demográfica derivada de una transición más lenta que en los países centrales. Pero no queda claro que ello invalide la sustentabilidad de las políticas sociales, en tanto también podría entenderse como parte del “bono demográfico” de la región.

productividad] en desempleo [abierto] y multiplicado las necesidades de recursos” (Tokman, 2006: 12). En segundo lugar, el menor nivel de desarrollo económico y los altos niveles de concentración del ingreso derivados de la heterogeneidad estructural implicaron menores recursos para financiar los sistemas de bienestar (Tokman, 2006)¹⁰⁹. En este sentido, como destacan Bárcena y Prado (2016: 24), las desigualdades estructurales derivadas de la heterogeneidad productiva se “recrean” en el régimen de bienestar predominante, al condicionar el acceso a los mecanismos de protección social. Por consiguiente, la heterogeneidad estructural es el “primer eslabón de la cadena de generación de la desigualdad”, cuyo principal mecanismo de transmisión es el mercado laboral (Bárcena y Prado, 2016: 37).

De esta manera, durante el siglo XX en América Latina se configuraron “regímenes de bienestar” diferentes a los de los países desarrollados (Andrenacci, 2012; Barba Solano, 2004; Martínez Franzoni, 2008)¹¹⁰. El modelo de política social tuvo un carácter “segmentado”, con prestaciones estratificadas de acuerdo con las diversas modalidades de inserción ocupacional. A su vez, las formas de intervención estatal implementadas incluyeron aspectos no contemplados en los países desarrollados: subsidios al consumo, reformas agrarias y microcréditos (Barba Solano, 2004: 14). Por otra parte, las relaciones doméstico-familiares adquirieron un rol preponderante en la satisfacción de necesidades y en la provisión de bienestar, lo que dio un carácter “familiarista” a los regímenes vigentes (Martínez Franzoni, 2008)¹¹¹.

A partir de los ochenta, la intervención social del Estado comenzó a estar dominada ya no por la expansión de sistemas de “seguros sociales” (como las pensiones, los seguros de desempleo o las asignaciones familiares), sino por el “combate a la pobreza” y la vulnerabilidad social derivadas de la implementación de reformas estructurales (Barba Solano, 2004; Barba Solano y Cohen, 2011; Soldano y Andrenacci, 2005). En términos generales, la intervención social del Estado se orientó hacia la subsidiariedad o el “Estado mínimo”: incentivó los mecanismos

¹⁰⁹ Se trata de un aspecto crucial en tanto que el desarrollo de los Estados de bienestar europeos estuvo ligado a coaliciones distributivas entre diferentes fracciones sociales (Esping-Andersen, 1990).

¹¹⁰ Existen significativas diferencias según los países. Como detallamos en el capítulo I, en la Argentina había tomado forma un régimen extendido de protección basado en el empleo asalariado formal, aunque con un carácter estratificado. En general, la literatura destaca que los países del Cono Sur (junto con Costa Rica) son los que más se aproximaron al “modelo” europeo corporativista (Barba Solano, 2004).

¹¹¹ Con posterioridad a los primeros análisis sobre desmercantilización, la perspectiva de género permitió añadir otra dimensión al análisis de la política social: la “desfamiliarización”. Este concepto apunta al grado en que la política social satisface necesidades –en especial, de cuidados– que, en determinado momento, son cubiertas por las familias (Esping-Andersen, 1999; Martínez Franzoni, 2008).

mercantiles de bienestar y se focalizó en la población pobre (Soldano y Andrenacci, 2005). De allí la referencia a un Estado “neoliberal”, “asistencial” o “neoclásico” (Belmartino, 2010; Grassi, Hintze y Neufeld, 1994).

De acuerdo con la concepción dominante de quienes formularon las reformas, dado que los procesos de desregulación y apertura ocasionarían en lo inmediato la destrucción de empleos, era preciso atender de manera transitoria a los nuevos desempleados (Barrientos y Hulme, 2008). Surgió así un nuevo entramado de formas intervención dirigidas a grupos vulnerables¹¹². Éstas no constituyen derechos permanentes, sino que las poblaciones beneficiarias reciben del Estado una ayuda económica mientras se cumplan las condiciones de elegibilidad. Uno de sus propósitos principales es dotar de “activos” –en términos de “capital social” y “humano”– a las poblaciones objeto de beneficios, para promover su integración a las relaciones de mercado (Perry et al., 2006). Estas nuevas modalidades de intervención se inscriben en un nuevo paradigma de política social, centrado en la “activación”, que acentúa la responsabilidad de los individuos en el abandono de situaciones de privación¹¹³.

Así, las últimas dos décadas se caracterizaron por una “revolución de la asistencia social” (Ferreira y Robalino, 2010: 5), en especial en los países periféricos, centrada en la expansión de políticas de transferencias de ingresos a grupos vulnerables. Como señalamos, algunos autores inscriben estas transformaciones en un contexto más general de reconfiguración de la intervención social estatal. Remiten a la vigencia de un nuevo “modelo de ciudadanía social”, destacan una tendencia a la “universalización” o la reedición del “Estado social” (Andrenacci, 2012; Cecchini et al., 2015; Filgueira, 2015; Grassi, 2016).

Recuperando la perspectiva aludida –centrada en la economía política de tales formas de intervención– abordamos estas iniciativas en los términos de su papel en la reproducción y la regulación social en condiciones de heterogeneidad estructural. Desde esta perspectiva, se

¹¹² Nos referimos a las políticas surgidas con el apoyo de organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) que implicaron nuevos programas de transferencia de ingresos, entre ellos los subsidios para el cuidado de la alimentación y la salud, los sistemas de pensiones no contributivas, los programas de empleo y capacitación y las transferencias condicionadas de ingresos. Como apunta Barba Solano (2004), los organismos multilaterales implementaron una auténtica “división del trabajo” en el período de reformas estructurales: mientras que el FMI encabezó la intervención macroeconómica incentivando las medidas de ajuste fiscal y reforma del Estado, el Banco Mundial y el BID promovieron la instalación de la nueva agenda social (incluyendo las modificaciones en los sistemas de pensiones).

¹¹³ En términos de Adelantado (2017), a escala global se asiste a un cambio de “paradigma de la política social”. Un componente central son las políticas de activación laboral, destinadas a mejorar la “empleabilidad”. También son relevantes las políticas destinadas a la mejora del capital humano o hacia poblaciones específicas (en especial, la infancia). Esta nueva modalidad de intervención ha sido descripta bajo diversas denominaciones, como “Estado posibilitador”, “Estado schumpeteriano” o “Estado de Bienestar Inversor” (Adelantado, 2017).

trata de formas de intervención en las que predomina una lógica de “regulación estática” de la pobreza y la vulnerabilidad social. No suelen dirigirse a la superación de las razones estructurales de tales situaciones, sino que emerge la necesidad de “gestionarlas”, “...a fin de que quede resguardado el principio de organización social y el ‘resto de la sociedad’ en su conjunto” (Soldano y Andrenacci, 2005: 29). Se trataría de intervenciones que adquieren un papel crecientemente “compensatorio” de las condiciones de reproducción de individuos y grupos en las condiciones impuestas tras la reestructuración neoliberal (Lo Vuolo et al., 1999). En este contexto, se constituyen en políticas que “subsidian” (Saad-Filho, 2015) la reproducción social de aquellos individuos y hogares que participan en el sector informal, de baja productividad, o en condiciones abiertamente excedentarias¹¹⁴.

Tales políticas participan en la regulación del conflicto y de los modos de integración en el contexto de una determinada formación económico-social. La tendencia a generar excedentes absolutos de fuerza de trabajo, propia del desarrollo desigual del capitalismo periférico, indica –en términos de Nun– bajos niveles de “integración del sistema”. Su solución “organiza *modos de integración social* compatibles con el mantenimiento de la matriz de relaciones vigente” (2001 [1972]: 240; énfasis agregado)¹¹⁵. En otras palabras, la insuficiencia absorbente reintroduce –de manera peculiar en los países periféricos– la cuestión de la gestión sociopolítica de esta matriz socioeconómica.

... la política social del Estado –en tanto encargado de regular los mercados y garantizar el control (cohesión) social–, así como las estrategias de aprovechamiento de recursos productivos propios y comunitarios que movilizan los hogares, asumen bajo el actual modelo económico [de globalización] un *papel central en la gestión social de los excedentes de población*. (Salvia, 2011: 127; énfasis agregado)

Por consiguiente, la política social puede comprenderse en el marco de los atributos peculiares del capitalismo periférico. No obstante, su injerencia no puede dissociarse del propio esfuerzo desplegado por las familias en procura de optimizar sus condiciones de vida y disponer de los recursos desplegados por la acción estatal. En esta compleja trama, se organiza la reproducción económica de las unidades domésticas.

¹¹⁴ Al mismo tiempo, las políticas de transferencias de ingresos abrieron una oportunidad para la expansión del capital financiero y el microcrédito en la región. Ello se tradujo en un creciente endeudamiento por parte de los hogares (Lavinias y Simões, 2017).

¹¹⁵ Nun (2001 [1972]: 240 y ss.) recoge una distinción, formulada por Lockwood, entre “integración social” e “integración del sistema”. La primera apunta a la existencia de relaciones armónicas o conflictivas entre actores de un sistema social; la segunda, a aquellas relaciones entre las partes del sistema. Desde este lenguaje, la estabilidad y preservación del sistema puede basarse en inhibir la integración sistémica para reducir el conflicto social: “en determinadas circunstancias, una cierta fragmentación del conjunto es la única estrategia unitaria posible. De esta manera, se a-funcionaliza la no funcionalidad de la masa marginal” (2001 [1972]: 241).

Capítulo III

El diseño teórico-metodológico de la investigación

Introducción

Este capítulo describe los principales componentes del diseño teórico-metodológico a través del cual desarrollamos la investigación. El propósito es hilvanar el marco conceptual presentado en el capítulo anterior, el contexto político-económico previamente analizado y las hipótesis de trabajo. De esta forma, el capítulo procura llevar adelante la operativización del problema de investigación y presentar los conceptos mediadores o empíricos utilizados para su abordaje. Asimismo, se consideran las principales características de la fuente de datos utilizada en la investigación, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esta investigación analiza la participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional y en los sistemas de política social durante un período de políticas heterodoxas. Mediante este objetivo, procuramos abordar los cambios en los modos de reproducción económica de las unidades domésticas y en las pautas de desigualdad de las condiciones de vida familiares. Así, nos proponemos aportar elementos empíricos novedosos acerca de la rearticulación que experimentó la relación entre heterogeneidad estructural y política social durante la posconvertibilidad en la Argentina.

Desde la perspectiva analítica propuesta, la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación se habría plasmado en un patrón de desigualdad sociolaboral que inhibiría la convergencia de las condiciones de vida familiares. Este patrón habría tenido amplias consecuencias sobre la reproducción económica de las unidades domésticas. Sin embargo, la intervención del Estado mediante políticas sociales y los propios comportamientos domésticos habrían desempeñado un papel de mediación sobre tales resultados.

El patrón identificado se habría mantenido durante toda la década, pero sus componentes habrían registrado distintos ritmos de variación e intensidad de acuerdo con el contexto político-económico. Durante el período de mayor crecimiento económico (2003-2008) se habría registrado una tendencia a la recomposición de las condiciones de vida estrechamente asociada con procesos del mercado de trabajo, incluyendo un mayor esfuerzo económico-productivo de los hogares. En contraste, en los años de menor ritmo de crecimiento (2008-2014), la intervención social del Estado habría adquirido una mayor relevancia, aunque

limitada, sobre las capacidades de reproducción económica de los hogares, en un marco sociolaboral menos dinámico.

El capítulo está organizado en torno a tres secciones. En la primera presentamos el modelo de análisis, reintroducimos los objetivos de investigación y las hipótesis asociadas a ellos. Recogemos allí elementos empíricos planteados en el capítulo I y argumentos teóricos señalados en el capítulo II. En la segunda sección se presentan los principales conceptos y las definiciones operativas a través de las cuales avanzamos en los próximos capítulos empíricos. Aquí presentamos algunas nociones claves que permiten una aproximación operativa a las formas de inserción laboral de los hogares, a las políticas sociales y a los comportamientos económicos de las unidades domésticas. Por último, la tercera sección caracteriza la fuente de datos utilizada, sus ventajas y sus limitaciones. En particular, señalamos cómo obtuvimos los principales insumos requeridos para evaluar las condiciones de vida en un contexto peculiar con respecto a la disponibilidad de información oficial fidedigna.

3.1. Modelo teórico, objetivos e hipótesis de la investigación

El enfoque conceptual de esta investigación abreva en la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, el estructuralismo, y el marxismo. La tesis central plantea que la heterogeneidad productiva y laboral articula procesos de desigualdad estructural en sociedades periféricas con amplias consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica familiares. Este planteo adquiere singular relevancia en sociedades como la argentina, que se “abrieron” al mercado internacional, desarticularon parte del entramado productivo conformado durante la ISI, adquirieron un perfil de especialización y quedaron expuestas a los ciclos financieros mundiales. Distintos estudios económicos recogidos previamente dan cuenta de la persistencia, durante la posconvertibilidad, de una “dualidad estructural” en el proceso de acumulación y de un perfil productivo altamente especializado y dependiente de los precios externos. Tal continuidad alude a una configuración de larga duración en el patrón de acumulación que se habría mantenido bajo un contexto de políticas heterodoxas, en el marco de una estrecha dependencia con respecto a los mercados externos y con una débil integración del entramado productivo doméstico.

El enfoque teórico esbozado sugiere que la heterogeneidad estructural reproduce bajos niveles de convergencia en términos de capacidades de reproducción económica¹¹⁶. Con ello

¹¹⁶ La apelación al concepto de “heterogeneidad estructural” para comprender la dinámica de la desigualdad fue extendiéndose en los últimos años. De acuerdo con Kessler, entre las explicaciones en disputa acerca de los cambios en el patrón de desigualdad en la Argentina, “el punto más álgido por sus implicancias políticas y

procuramos recoger una lógica de funcionamiento que abarca a sistemas socioeconómicos débilmente encadenados (más allá de sus vinculaciones recíprocas y de la “subordinación heterogénea” del sector microinformal por parte del sector formal) y mercados de trabajo segmentados. Estas condiciones estructurales limitarían la difusión de ciertas características socioeconómicas que favorecerían la convergencia social. En efecto, según este planteo teórico, las condiciones de heterogeneidad estructural segmentarían la demanda laboral y reproducirían ostensibles brechas de productividad y remuneraciones. Una porción de la fuerza de trabajo se desempeñaría en actividades de mediana y alta productividad, en procesos productivos integrados a las cadenas mundiales de valor y con relaciones laborales reguladas; por otra parte, el sistema socioeconómico generaría una población excedentaria, ubicada en un heterogéneo y diverso sector microinformal, en el segmento secundario del empleo o en condiciones de abierta marginalidad económica.

No obstante, según la perspectiva teórica presentada, la incidencia de estos procesos sobre la reproducción económica no podría dissociarse de la función de “mediación” de los hogares y de las transformaciones que registra la intervención social del Estado. Por una parte, los hogares despliegan comportamientos en procura de optimizar sus condiciones de vida que, eventualmente, pueden amortiguar (por ejemplo, a través de una combinación de posiciones ocupacionales) o profundizar las brechas generadas por la dinámica socioeconómica. Por otra parte, la expansión del gasto público en funciones de política social adquiere una significación particular. En un contexto de heterogeneidad productiva, segmentación laboral e informalidad de subsistencia, las políticas sociales –en especial, las de transferencias de ingresos no contributivas– adoptarían un renovado papel de “regulación estática” de la pobreza cuyas raíces se ubican en las condiciones estructurales antes aludidas. Tal forma de regulación apuntaría a un modo de “gestionar” los resultados desintegradores de la dinámica económica sin resolver sus causas¹¹⁷.

sociales es la hipótesis de la heterogeneidad estructural” (2014: 111). Ello es así pues la teoría permite explicar que el crecimiento de algunos sectores económicos (y sus efectos en términos de empleo y protección), coexista con la persistencia de un “polo” que incluye fuerza de trabajo excedente. Lo que posibilita estos resultados es el carácter desequilibrado del crecimiento.

¹¹⁷ Como hemos referido anteriormente, cabría reconocer una influencia de la intervención social del Estado sobre las condiciones de heterogeneidad estructural. En tanto se trata de intervenciones desmercantilizadoras, tienen capacidad de regular la oferta laboral y, por lo tanto, disminuir el subempleo –que constituye una estrategia de los hogares para procurarse ingresos– (Lavinias y Simões, 2017). No obstante, el alcance en tal dirección será una función de la capacidad de “sustitución de ingresos” que tenga la política social considerada y, por lo tanto, dependerá del espacio fiscal y del volumen del subempleo.

En el caso argentino, esta renovada función social de la intervención estatal habría ganado especial protagonismo en el contexto de la crisis político-institucional –con sus efectos de crisis de “legitimidad”– que dio origen al ciclo posconvertibilidad. Por consiguiente, durante este período se combinaría un rasgo estructural de las “nuevas” políticas sociales con un atributo coyuntural de la historia político-económica nacional.

En suma, postulamos la relevancia que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional tiene sobre el patrón de desigualdad de las condiciones de vida familiares y articulamos este planteo con las modalidades “sistémicas” de intervención social del Estado. De esta forma, el patrón de desigualdad se relaciona con el funcionamiento articulado de una “cadena” de procesos entre los cuales la heterogeneidad productiva desempeña un punto de partida fundamental (Bárcena y Prado, 2016: 37)¹¹⁸.

El *objetivo general* de esta investigación es describir los modos de participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional y en los sistemas de política social, y evaluar sus cambios durante el ciclo de políticas heterodoxas en la Argentina (2003-2014). De esta manera, nos proponemos contribuir al estudio de las transformaciones en los modos de reproducción socioeconómica de las unidades domésticas y aportar nuevas evidencias acerca de las rearticulaciones verificadas en la relación entre heterogeneidad estructural y las formas de intervención social del Estado en la Argentina.

Para abordar este objetivo, la investigación se organizó alrededor de cuatro *objetivos específicos*:

- 1) Describir las características de la participación económico-ocupacional de los hogares a partir de la inserción de sus integrantes en distintos sectores y segmentos de empleo, prestando especial atención a la capacidad de combinar posiciones ocupacionales (lo que remite a la homogeneidad / heterogeneidad laboral interna de los hogares).
- 2) Explorar las características, la evolución, el volumen y la composición de los hogares cuyos miembros participan en actividades laborales informales de subsistencia o de marginalidad económica.

¹¹⁸ En este sentido, cabe señalar que el enfoque de la heterogeneidad estructural ha sido empleado para describir el funcionamiento de la desigualdad económica y las brechas de productividad (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013; Bárcena y Prado, 2016; Chena, 2010; Cimoli et al., 2005; Coatz, García Díaz y Woyecheszen, 2010; Infante, 2011; Salvia, 2012); el funcionamiento de los mercados de trabajo (Salvia, 2007, 2012; Salvia et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Vera, 2013; Salvia, Vera y Poy, 2015; Comas, 2012; Poy, 2017a, 2017b); el comportamiento de las estructuras de clase (Chávez Molina y Sacco, 2015; Chávez Molina, Solís y Cobos, 2019, en prensa); y la desigualdad social en la región (Boyer, 2014; Lavinas, 2013; Lavinas y Simões, 2017; Salvia, 2007, 2012, 2016).

- 3) Examinar los modos en que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y los procesos de segmentación laboral inciden sobre las capacidades de reproducción económica, evaluando la participación de las unidades domésticas (mediante su fuerza de trabajo disponible) en la distribución del ingreso laboral y enfatizando en los procesos microsociales que intervienen en los niveles de retribución obtenidos.
- 4) Describir y comparar los niveles de cobertura de los instrumentos de política social y sus efectos sobre las capacidades de reproducción económica según la posición de los hogares en la estructura económico-ocupacional.

La *hipótesis general* postula que la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación –y su correlato en la incapacidad de los sectores más dinámicos de la economía para absorber al conjunto de la fuerza de trabajo– habría dado lugar a dinámicas persistentes de desigualdad económico-ocupacional y de exclusión o marginalidad, con amplias consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica y el bienestar material de los hogares, restringiendo los procesos de convergencia socioeconómica entre el 2003 y el 2014. Sin embargo, estas dinámicas no habrían impactado de forma directa sobre las condiciones de vida debido a una mediación, de relevancia variable según el momento político-económico del ciclo, de la política social y de los propios comportamientos microsociales de los hogares. Tales elementos habrían desempeñado un papel compensador –aunque limitado, dadas las condiciones estructurales prevalecientes– sobre las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas.

Esta hipótesis general puede sistematizarse a través de un conjunto de *hipótesis particulares* que se examinan en la investigación:

- 1) Durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014), la participación laboral de la fuerza de trabajo de los hogares habría permanecido estrechamente ligada a las condiciones de heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y de segmentación del mercado de trabajo. Si bien se habría evidenciado una recomposición de las oportunidades de empleo en los sectores más dinámicos e intermedios durante los primeros años de la posconvertibilidad (2003-2008), habría sido restringida, en ausencia de cambios estructurales de la economía. Durante el ciclo de crisis, reactivación y estancamiento (2008-2014), los hogares habrían enfrentado una estructura rígida en términos de oportunidades económico-ocupacionales en los sectores más modernos. Aun cuando en el seno de los hogares pueden coexistir

posiciones económico-ocupacionales, una parte de éstos sólo habría conseguido acceder a ocupaciones en el sector informal, en el segmento precario o a posiciones abiertamente marginales, como correlato de las limitaciones estructurales de la demanda de empleo en los sectores más productivos.

- 2) La heterogeneidad del sistema ocupacional habría condicionado la pauta de distribución del ingreso laboral y, por consiguiente, las capacidades de reproducción económica de los hogares. Durante todo el ciclo (2003-2014), los hogares con trabajadores del sector microinformal o del segmento precario habrían experimentado las condiciones más desventajosas en términos distributivos. Un mayor esfuerzo económico por parte de las unidades domésticas, en especial durante la etapa de mayor crecimiento (2003-2008), habría desempeñado un papel de “mediación” sobre estos resultados. Sin embargo, aquellos hogares habrían quedado expuestos, con mayor probabilidad, al riesgo de experimentar capacidades de subsistencia deficitarias a partir de sus ingresos laborales, aun considerando su propio esfuerzo económico-reproductivo.
- 3) Durante la posconvertibilidad (2003-2014), la expansión de la intervención estatal bajo políticas sociales se habría plasmado en el crecimiento de la cobertura de los hogares con trabajadores ubicados en el sector microinformal, en empleos precarios o en posiciones marginales. Los ingresos provenientes de este tipo de fuente habrían adquirido una mayor injerencia en los presupuestos de los hogares situados en tales posiciones económico-ocupacionales, en particular durante el período de menor dinamismo económico (2008-2014). Sin embargo, habrían sido limitados para excluir a tales hogares del riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia.

El enfoque teórico presentado en el capítulo II brinda elementos para hacer inteligibles estas hipótesis. Si bien la tesis de la heterogeneidad estructural fue desarrollada principalmente en la etapa de “crecimiento hacia adentro”, la lógica de funcionamiento del sistema ocupacional no es independiente del mayor o menor grado de apertura económica que se registre en un período determinado (Hernández Laos, 2005; Rodríguez, 2001; Salvia, 2012). Durante el ciclo de reformas estructurales, la teoría permitió predecir un comportamiento opuesto al que anticipaba el enfoque neoclásico de la “convergencia”. De acuerdo con Rodríguez (2001) y Salvia (2012), en condiciones de competitividad desventajosa por la existencia de brecha tecnológica y apertura económica podemos esperar tres procesos relacionados. En primer lugar, una reestructuración de los sectores más concentrados, expulsión de fuerza de trabajo o

un sesgo hacia aquellos trabajadores con alta calificación. En segundo lugar, las unidades productivas tecnológicamente rezagadas que operan en condiciones de “protección” arancelaria se deterioran, pierden mercados y expulsan fuerza de trabajo. En tercer lugar, una mayor presión sobre el sector informal y, por consiguiente, un proceso de empobrecimiento. A la mayor presión contribuye tanto el desempleo generado por los procesos anteriores –que “saturan” el sector de autoempleo–, como la pérdida de mercados derivada del abaratamiento de mercancías producidas por la apertura (por ejemplo, de bienes durables o tecnológicos) y las mayores necesidades de los hogares de proveerse ingresos (Rodríguez, 2001).

En contrapartida, bajo condiciones macroeconómicas “heterodoxas” que otorguen mayor dinamismo al mercado interno a través de la promoción del consumo, mediante un tipo de cambio alto o por la vía de protección arancelaria a ciertas actividades, podemos esperar que el sector cuasi-formal rezagado tecnológicamente incorpore fuerza laboral proveniente del sector informal o abiertamente excedente. Ello daría lugar a una recuperación de la demanda laboral y es posible que se incrementen los ingresos, incluso en el sector informal, como consecuencia de una menor presión de los excedentes de fuerza de trabajo (Rodríguez, 2001).

En el caso argentino bajo estudio, este proceso no habría sido homogéneo durante el período: en tanto que entre el 2003 y el 2008 el crecimiento económico fue intenso, basado en una amplia capacidad ociosa y en niveles muy deteriorados de ingresos, en el período subsiguiente las condiciones fueron más erráticas e incluso hubo períodos de retracción económica. Por consiguiente, cabe suponer que este proceso de recomposición haya sido limitado. En este sentido, dado que no cambió el perfil productivo del país y se mantuvo la “dualidad estructural” del régimen de acumulación –tal como señala la literatura recogida en el capítulo I–, postulamos que una parte significativa de los hogares habría permanecido asociada a ocupaciones en el sector de baja productividad. En tal contexto, la heterogeneidad productiva y laboral se habrían traducido en las condiciones de vida familiares.

En estas condiciones, las modalidades de intervención social del Estado habrían adquirido un rol renovado. La expansión del gasto público social y la implementación de nuevas iniciativas durante la posconvertibilidad habrían participado en la reconfiguración de las condiciones de vida. En las condiciones de menor crecimiento económico de la segunda fase del ciclo, habrían sido relevantes en la regulación estática de los procesos de empobrecimiento cuyo origen radica –según nuestro argumento– en las condiciones de heterogeneidad estructural. En

este sentido, cabe suponer un papel compensatorio en materia de capacidades de reproducción económica por parte de la intervención social del Estado.

3.2. Sobre los conceptos y las categorías de análisis

El propósito de esta sección es presentar una aproximación operativa a los principales conceptos de la investigación. En primer lugar, se señala nuestra aproximación a la heterogeneidad estructural a través de una “matriz económico-ocupacional”. En segundo lugar, describimos el abordaje de las condiciones de informalidad de subsistencia o marginalidad económica. En tercer lugar, precisamos las políticas sociales que serán objeto de estudio y su forma de captación. En cuarto lugar, señalamos el modo de abordaje de las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas y de los comportamientos microsociales que éstas despliegan en procura de optimizar sus condiciones de vida.

3.2.1. La “matriz económico-ocupacional” como aproximación a la heterogeneidad estructural del sistema ocupacional y la segmentación laboral

Nos aproximamos al estudio de los modos en que las desigualdades estructurales del mercado de trabajo participan en las capacidades de reproducción económica de los hogares a través de una perspectiva teórico-metodológica que caracteriza las inserciones económico-ocupacionales de sus miembros y su participación en la distribución del ingreso laboral –es decir, lo que denominamos la distribución primaria del ingreso–. Nuestra investigación está enfocada en la “demanda laboral”¹¹⁹ y, por consiguiente, tanto en los tipos de puestos a los que accedieron las unidades domésticas como en los ingresos reportados por tales posiciones. En este proceso, recuperamos los lineamientos teóricos presentados en el capítulo II y antecedentes de investigaciones previas llevadas adelante por el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social (Comas, 2012; Poy, 2016, 2017a, 2017b; Salvia, 2012; Salvia et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Vera, 2013).

Presentamos una tipología de inserciones económico-ocupacionales que da prioridad a la pertenencia a diferentes “estratos de productividad” –aspecto que es central en esta perspectiva– a las características de las unidades productivas en que se inserta la fuerza de trabajo y a la “categoría ocupacional” como aproximación a las diferentes modalidades que asumen las relaciones sociales de producción. Además, se considera –en el caso exclusivo de los asalariados– la pertenencia de la fuerza de trabajo a distintos “segmentos” del mercado laboral. La participación en distintos sectores económico-ocupacionales por parte de los

¹¹⁹ Cuéllar (1990) distinguió entre enfoques de “demanda” y de “oferta” en los estudios sobre reproducción social de las unidades domésticas y, más en general, en el contexto de la sociología del trabajo.

ocupados constituye un *proxy* para el estudio de la heterogeneidad estructural que ha revelado su fertilidad teórico-metodológica en investigaciones previas (Poy, 2017a; Salvia, 2012; Vera, 2013)¹²⁰.

La construcción de una “matriz económico-ocupacional” (Figura 3.1) en esta investigación involucró una serie de variables que describimos y justificamos a continuación.

- a) El “estrato de productividad”, al que nos aproximamos distinguiendo un sector económico-ocupacional (microempresa, sector privado formal o público formal), es un atributo clave de las unidades económicas desde la perspectiva teórica planteada¹²¹. La decisión de tomar al tamaño de establecimiento como aproximación de la productividad se funda en que, en general, existe una importante relación entre costos, escala de producción y productividad (Arakaki, 2015; Graña, 2015). A la vez, constituye la única variable disponible en la EPH para este tipo de análisis. En articulación con ello, se excluyeron por definición del sector microinformal a los ocupados en establecimientos de algunas ramas: las actividades financieras y empresariales, y las actividades de enseñanza y servicios de salud (Monza y López, 1995)¹²².
- b) La “calificación de la tarea” (profesional, técnica, operativa o no calificada) brinda una aproximación complementaria de los tipos de inserción, especialmente en el caso de los no asalariados. Esta variable permite distinguir entre trabajadores independientes profesionales, patrones profesionales y/o con otros niveles de calificación. Cabe destacar que tanto los trabajadores por cuenta propia profesionales

¹²⁰ El abordaje de la heterogeneidad estructural a partir de la estructura económico-ocupacional constituye una de las formas posibles de su tratamiento (Infante, 2011; Salvia, 2012) entre otras. Este tipo de estrategia resulta pertinente para el estudio de las desigualdades laborales y sus factores asociados. Otra estrategia, diferente de la aquí seguida, es estudiar la productividad por sectores económicos (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013; Chena, 2010). Sin embargo, este acercamiento, si bien hace visibles las dinámicas macroeconómicas, no favorece el estudio de la desigualdad dentro del mercado laboral que constituye una preocupación central de esta investigación.

¹²¹ Otros autores diferencian estratos de productividad “alta”, “intermedia” y “baja” (Infante, 2011), o estratos “modernos/desarrollados”, “medios/en vías de desarrollo” y “bajos/sector informal” (Coatz, García Díaz y Woyecheszzen, 2010).

¹²² Pérez-Sáinz (2000) plantea una crítica a la utilización del “tamaño de establecimiento” como *proxy* de la productividad. Argumenta que, en la actual etapa del desarrollo tecnológico, hay microempresas que pueden tener una elevada productividad (por ejemplo, en actividades como *software*, entre otras). Consideramos esta crítica pertinente y la exclusión de determinadas ramas apunta en esa dirección. Por lo demás, el análisis de composición del sector de microempresas revela la ínfima significación estadística de actividades intensivas en tecnología. Otro argumento relevante remite a la utilización de criterios de tamaño de establecimiento ajustados por rama. El MTEYSS define para cada una de ellas lo que debe considerarse una microempresa. En trabajos previos hemos ejercitado este punto y no se llega a resultados distintos en comparación con la estrategia aquí desarrollada (Poy, 2017a).

como los empleadores tal calificación son incorporados dentro del sector formal. De esta manera, la calificación permite una aproximación adicional a la productividad.

- c) La “categoría ocupacional” es utilizada para diferenciar posiciones en las relaciones sociales de producción. Ello nos permite distinguir entre patrones, trabajadores por cuenta propia y asalariados. De esta manera, es posible evitar considerar a los estratos de productividad como si fueran socialmente homogéneos (Salvia, 2012). En otras palabras, se trata de un criterio de distinción “horizontal” dentro de cada uno de los estratos identificados.
- d) La “jerarquía ocupacional” es utilizada para diferenciar posiciones dentro del universo de trabajadores asalariados del sector privado. Es decir, constituye un criterio de diferenciación “vertical” de posiciones económico-ocupacionales dentro de ocupados con la misma categoría ocupacional. Esto permite diferenciar posiciones de dirección de las demás entre los asalariados.
- e) Recuperamos la distinción de “segmentos” del mercado de trabajo. Ello remite al grado de regulación de las relaciones laborales en las que participan los trabajadores asalariados. Aquí diferenciamos entre un segmento primario de empleos registrados a la seguridad social y un segmento secundario de empleos no registrados¹²³.

¹²³ Cabe enfatizar dos cuestiones relativas a la segmentación. En primer término, entre los asalariados del sector público no se distingue según condición de registro con base en la constatación empírica de su baja incidencia estadística. En segundo término, el no registro a la seguridad social de ninguna forma agota lo que podría caracterizarse como modalidades “atípicas” de empleo. Existe un gradiente de circunstancias y se podrían incluir otros indicadores específicos. No obstante, el abordaje propuesto parece adecuado para dar cuenta del principal rasgo de la segmentación del mercado de trabajo argentino actual.

Figura 3.1. Matriz económico-ocupacional: tipos de inserción económico-ocupacional de la fuerza de trabajo y su definición operacional.

Sector	Inserción económico-ocupacional		Definición operativa
FORMAL PRIVADO	<i>No asalariados del sector formal privado</i>	Patrones y empleadores de establecimientos formales	Empleadores en establecimientos formales (más de 5 ocupados) o en micro-establecimientos (hasta 5 ocupados) pero con calificación profesional
		Directivos de establecimientos formales	Empleados en función de dirección en establecimientos privados
		Profesionales independientes	Trabajadores por cuenta propia con calificación profesional
	<i>Asalariados registrados del sector formal privado</i>	Asalariados registrados de establecimientos medianos y grandes	Asalariados registrados a la seguridad social en establecimientos de más de 40 trabajadores
		Asalariados registrados de establecimientos pequeños	Asalariados registrados a la seguridad social en establecimientos de entre 6 y 40 trabajadores
	<i>Asalariados no registrados del sector formal privado</i>	Asalariados no registrados de establecimientos medianos y grandes	Asalariados no registrados a la seguridad social en establecimientos de más de 40 trabajadores
Asalariados no registrados de establecimientos pequeños		Asalariados no registrados a la seguridad social en establecimientos de entre 6 y 40 trabajadores	
PÚBLICO	<i>Empleados del sector público</i>	Empleados del sector público	Asalariados en establecimientos del sector público
MICROINFORMAL^(a)	<i>No asalariados del sector microinformal</i>	Patrones de microempresas	Empleadores en establecimientos de hasta 5 ocupados sin calificación profesional
		Trabajadores por cuenta propia (TCP) informales	Trabajadores por cuenta propia sin calificación profesional
	<i>Asalariados registrados del sector microinformal</i>	Asalariados registrados de microempresas	Asalariados registrados a la seguridad social en establecimientos de hasta 5 trabajadores
		Trabajadores registrados del servicio doméstico	Trabajadores registrados a la seguridad social que prestan servicio doméstico en hogares particulares.
	<i>Asalariados no registrados del sector microinformal</i>	Asalariados no registrados de microempresas	Asalariados registrados a la seguridad social en establecimientos de hasta 5 trabajadores
		Trabajadores no registrados del servicio doméstico	Trabajadores registrados a la seguridad social que prestan servicio doméstico en hogares particulares.
DESOC. Y PLANES	<i>Desocupados y benef. de planes de empleo</i>	Beneficiarios de programas de empleo	Ocupados cuya ocupación principal es un plan de empleo
		Desocupados	Personas que declaran buscar activamente un empleo.

Nota: (a) se excluyó por definición del sector microempresario a algunas ramas de actividad (Monza y López, 1995): actividades financieras y empresariales, enseñanza y servicios de salud. Se consideró a los ocupados de tales ramas como pertenecientes al sector formal y se los asignó al grupo correspondiente según su categoría ocupacional y los demás atributos considerados.

Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

El análisis propuesto involucra también a los desocupados y a los ocupados que son beneficiarios de un programa de empleo¹²⁴. Por ello, se considera a las variables mencionadas como elementos que permiten aproximar diferentes formas y niveles de participación en la distribución del ingreso de los ocupados y, consecuentemente, de los hogares a los que pertenecen.

La tipología resultante nos permite dar cuenta de diferentes categorías de inserción económico-ocupacional y, por consiguiente, de la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional. Esta tipología no constituye una estratificación social en términos de clases o estratos sociales en, al menos, dos sentidos. En primer lugar, porque las categorías presentadas en el Figura 3.1 no dan cuenta de gradaciones jerárquicas tal como generalmente está implícito en cualquier estratificación de clases (Crompton, 1994). El criterio fundamental es la pertenencia a distintos estratos de productividad asociados a la heterogeneidad estructural. En segundo lugar, los estudios sobre clases sociales presuponen la “existencia sociológica real” de las clases así definidas (Germani, 1955). Es evidente que la construcción expuesta no puede albergar esa pretensión. Aclarado lo anterior y dado que la estratificación social remite a las “estructuras sistemáticas de la desigualdad” (Crompton, 1994: 17), en la medida que las distintas posiciones señaladas están asociadas a diferentes niveles de recursos materiales, puede pensarse como una tipología que da cuenta de distintos grupos en términos de niveles de bienestar material.

En este punto, un elemento clave remite a la forma de examinar la inserción de las unidades domésticas en sistema económico-ocupacional. La inserción de la fuerza de trabajo de los hogares en distintas posiciones económico-ocupacionales permite aproximarse a la injerencia de las desigualdades estructurales sobre la reproducción económica. Ahora bien, un aspecto singular que caracteriza a cualquier investigación empírica que tome como eje a las unidades domésticas es que un atributo individual debe ser “adjudicado” a una unidad colectiva (Torrado, 1992, 2006 [1982]).

¹²⁴ Los ocupados que reciben un programa de empleo son tratados aquí en conjunto con los desocupados. Esta decisión se basa en el interés por conocer los efectos de mercado laboral netos de aquellos originados en la política social. En particular, el control de este efecto nos permitirá, como señalamos más adelante, examinar de forma precisa cuál fue el papel cambiante de la política social durante el período.

La aplicación de atributos individuales a grupos o colectivos implica adoptar un criterio en base al cual llevar adelante esta adscripción. En este sentido, se abren diferentes posibilidades frente a las cuales el investigador debe definir cómo proceder (Torrado, 1992, 2006 [1982]). En las unidades domésticas en las cuales hay un único miembro ocupado o proveedor de ingresos, el criterio será asignar la posición en la estructura económico-ocupacional de dicho integrante al conjunto de los miembros del hogar. En cambio, en los hogares donde haya dos o más ocupados o proveedores de ingresos, las opciones son diversas. Es posible atribuir al conjunto de los integrantes la posición del jefe de hogar o del principal sostén del hogar (es decir, aquel que tiene los mayores ingresos). En los casos en que se emplean escalas ordinales, puede atribuirse a la unidad doméstica la posición del integrante que se encuentra mejor posicionado en comparación con los demás miembros (criterio de “dominancia”). Finalmente, se pueden definir situaciones “híbridas”, reconociendo las diferentes situaciones de los miembros del hogar (Torrado, 1992, 2006 [1982]).

En esta investigación, optamos por adscribir al hogar a la posición del principal sostén del hogar (PSH) en la tipología presentada. Dado el papel central que otorgamos a los ingresos en la determinación de las condiciones de vida, resulta razonable apelar a un criterio que priorice la posición económico-ocupacional de aquel miembro del hogar que contribuye con el mayor monto de ingreso¹²⁵.

Sin embargo, consideramos relevante examinar en qué medida las unidades domésticas tuvieron capacidad de participar en diferentes posiciones económico-ocupacionales a partir del conjunto de su fuerza de trabajo disponible. Recurrimos, para ello, al estudio de la “homogeneidad” o “heterogeneidad” ocupacional interna de los hogares. Al tomar en cuenta de modo simultáneo al principal proveedor y a los “trabajadores secundarios”¹²⁶, podemos definir distintos “tipos” de participación en la estructura social del trabajo. Planteamos cuatro modalidades¹²⁷:

¹²⁵ Este razonamiento descansa en un supuesto no comprobable en el contexto de esta investigación: que los diferentes miembros del hogar aportan la totalidad de sus ingresos a la unidad doméstica.

¹²⁶ A lo largo de la investigación entendemos como “trabajadores secundarios” a aquellos ocupados que no son el principal proveedor del hogar (Paz, 2001). En su origen, el concepto buscó enfatizar la “reserva laboral” presente en los hogares, como recurso pasible de ser movilizado durante las fases de contracción económica. Es decir que apunta a un modelo de familia de un único proveedor que, al enfrentar situaciones de crisis, debía desplegar una oferta adicional de fuerza de trabajo. Aquí lo usamos en un sentido estrictamente estadístico, para designar a trabajadores que no son principales proveedores económicos.

¹²⁷ Cabe notar que aquellos hogares que sólo disponen de un ocupado se ubicarán, dentro de esta tipología, en la posición que corresponda a su PSH.

- (a) Hogares en el sector formal público o privado: son hogares cuyos miembros ocupados son todos no asalariados del sector formal privado, asalariados del sector formal o empleados del sector público. Se excluye a los hogares con algún miembro desocupado o beneficiario de un programa de empleo.
- (b) Hogares con PSH en el sector formal y otros ocupados en el sector microinformal: son hogares cuyo PSH tiene un empleo en el sector formal. En estos hogares hay ocupados secundarios que se desempeñan en el sector microinformal, son beneficiarios de un programa de empleo o se encuentran desocupados.
- (c) Hogares con PSH en el sector microinformal y otros ocupados en el sector formal: se trata de hogares cuyo PSH tiene un empleo en el sector microinformal, es desocupado o beneficiario de un programa de empleo y hay otros ocupados secundarios en el sector formal público o privado.
- (d) Hogares con todos sus miembros en el sector microinformal: son hogares cuyo PSH tiene un empleo en el sector microinformal, es desocupado o beneficiario de un programa de empleo y todos los demás miembros ocupados están en el mismo tipo de inserciones ocupacionales.

En tanto que el primer y el cuarto grupo son homogéneos desde el punto de vista de su inserción sectorial económico-ocupacional, el segundo y el tercero son considerados “mixtos” (Figura 3.2). En esta tipología consideramos la inserción de la fuerza de trabajo de los hogares en diferentes sectores económico-ocupacionales (formal público, privado y microinformal); por consiguiente, se analiza la inserción “sectorial económico-ocupacional” de los hogares. Ello significa que esta tipología no ofrece información sobre la calidad de los empleos a los que acceden, lo cual remite al segmento ocupacional de la fuerza de trabajo asalariada de las unidades domésticas.

Figura 3.2. Tipos de inserción sectorial económico-ocupacional del hogar (considerando al conjunto de su fuerza de trabajo activa).

		POSICIÓN PRINCIPAL SOSTÉN DEL HOGAR	
		SECTOR FORMAL PRIVADO O SECTOR PÚBLICO	SECTOR MICROINFORMAL ^(a)
POSICIÓN OCUPADOS SECUNDARIOS	SECTOR FORMAL PRIVADO O SECTOR PÚBLICO	HOGARES EN EL SECTOR FORMAL	HOGARES CON POSICIÓN OCUPACIONAL MIXTA
	SECTOR MICROINFORMAL ^(a)	HOGARES CON POSICIÓN OCUPACIONAL MIXTA	HOGARES EN EL SECTOR MICROINFORMAL

Nota: (a) Incluye desocupados y beneficiarios de planes de empleo.

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, el universo de estudio de la investigación quedó conformado por los hogares cuyo PSH era activo, es decir, se encontraba ocupado o desocupado. Los hogares cuyo PSH era inactivo fueron excluidos en tanto no resultaba posible capturar la relevancia de la heterogeneidad ocupacional sobre las condiciones de vida de tales unidades.

3.2.2. Excedentes de población, marginalidad económica e informalidad de subsistencia

En términos conceptuales, un rasgo distintivo de un sistema socioeconómico sometido a una pauta de heterogeneidad estructural remite a la generación de excedentes de fuerza de trabajo. Dentro del estudio de las posiciones económico-ocupacionales a las que accede la fuerza de trabajo de los hogares, atribuimos especial relevancia a las modalidades de inserción más vulnerables. En su formulación inicial, la “marginalidad económica” quedó tematizada del siguiente modo:

[La masa marginal está compuesta por] a) una parte de la mano de obra ocupada por el capital industrial competitivo; b) la mayoría de los trabajadores que se refugian en actividades terciarias de bajos ingresos; c) la mayoría de los desocupados; y d) la totalidad de la fuerza de trabajo mediata o inmediateamente fijada por el capital comercial (...) No cabe duda que una proporción de esa masa marginal –correspondiente a los grupos b), c) y d)– es, a la vez, conceptualizable como ejército de reserva respecto del mercado de trabajo del capital industrial competitivo (...) En otras palabras, este concepto puede usarse en un sentido *amplio* o *restringido*. En el primer supuesto constituye su criterio de referencia el mercado de trabajo del capital industrial monopolístico. En el segundo, en cambio, el eje de análisis será el mercado de trabajo del capital industrial *tout court*. (Nun, 2003 [1969]: 134-135; énfasis original)

Una parte fundamental de los desafíos metodológicos –y de las críticas planteadas a este enfoque– se deriva de la cuestión de la “funcionalidad” de la fuerza de trabajo marginal en el contexto de modelos de acumulación heterogéneos¹²⁸. En efecto, la relevancia que asumen los sectores de baja productividad y sus eslabonamientos con el sector más estructurado (Cacciamali, 2000), implican que diversas actividades económicas consideradas marginales pueden ser subsidiarias del capital más concentrado, o “funcionales” al proveer bienes baratos a la fuerza de trabajo que se emplea en otras actividades productivas (Bienefeld, 1975). Por ello, resulta importante considerar un referente más “restringido” –en los términos de Nun (2003 [1969])– para localizar exclusivamente a aquella porción de la fuerza de trabajo que resulta redundante para un régimen de acumulación heterogéneo¹²⁹.

¹²⁸ A este punto se dirigieron algunas de las críticas más importantes que se hicieron al concepto en el momento en que fue formulado. Al respecto, véase Cardoso (2003 [1970]) y especialmente Villavicencio (1979).

¹²⁹ Si bien la noción de marginalidad parece remitir a la “acumulación de desventajas”, el enfoque seguido aquí propone una mirada transversal centrado en las “oportunidades” que ofrece el régimen de acumulación para absorber fuerza de trabajo. Este aspecto fue destacado por Nun: “Lo que debe quedar claro es que la distinción

Nos aproximamos operativamente a los excedentes de fuerza de trabajo en términos de una “informalidad de subsistencia” o “de supervivencia” (Pérez-Sáinz, 1995; Portes y Haller, 2004). Ello permite distinguir un conjunto de posiciones más vulnerables dentro de la estructura económico-ocupacional, más allá de la heterogeneidad del propio sector microinformal. Retomamos una aproximación propuesta por Salvia (2012) que hemos adaptado en una investigación previa (Poy, 2017b). Se definen como posiciones económico-ocupacionales de “marginalidad económica” o “informalidad de subsistencia” tres situaciones diferentes:

- a) Desocupados marginales (estructurales o “friccionales” de muy bajo nivel educativo). Se considera que este es un indicador de las dificultades para acceder a un empleo tanto en el sector más estructurado o dinámico de la economía como en el sector microinformal. A partir de estos criterios, se busca definir a aquella parte de la fuerza de trabajo que no cumple una función de “ejército de reserva”, tal como fuera apuntado por Nun en la cita referida más arriba.
- b) Beneficiarios de planes de empleo: son aquella parte de la fuerza de trabajo que recibe algún tipo de programa con contraprestación laboral por parte del Estado.
- c) Ocupados en actividades en el sector informal de subsistencia: con la delimitación de este grupo se aspira a definir un sector “refugio”, marginal para el proceso social de acumulación que al mismo tiempo se diferencie del concepto clásico de “sector informal”. El ingreso, en combinación con el tamaño del establecimiento o la ocupación –tomados como criterios de definición del sector informal– actúan como un indicador de la productividad.

Las definiciones operacionales de cada una de estas categorías se presentan en la Figura 3.3. En esta investigación, evaluamos tanto la incidencia que alcanzan los hogares cuyo principal sostén se encuentra en condiciones de marginalidad económica como la prevalencia de aquellas unidades domésticas que disponen de fuerza de trabajo secundaria en tales condiciones de inserción.

[entre una parte funcional de la SPR y otra no funcional] es puramente analítica (...) Sin perjuicio de que estudios concretos puedan determinar quiénes tienen una probabilidad mayor o menor de hallar empleo –por razones de sexo, de edad, de educación, de experiencia, de calificación, de vinculaciones, de localización espacial, etc.– aquí se categoriza a las *relaciones* entre la población excedente y el sistema, y *no a los agentes o soportes mismos* de esas relaciones” (2003 [1969]: 88. Énfasis nuestro).

Figura 3.3. Definiciones operacionales de las posiciones de marginalidad económica o informalidad de subsistencia.

	Tipo de posición	Definición operativa
INFORMALIDAD DE SUBSISTENCIA	Desocupados marginales	Personas que buscan empleo hace 12 meses o más, o personas que buscan empleo hace menos de 12 meses y tienen hasta primaria completa
	Beneficiarios de planes de empleo	Personas que declaran que su ocupación principal es un plan de empleo
	Ocupados en actividades informales de subsistencia	Asalariados no registrados y no asalariados del sector microinformal, ocupados plenos o subocupados demandantes (los primeros trabajan 35 horas o más, y los segundos, menos de 35 horas, pero buscan más carga horaria); cuyo ingreso por su ocupación principal se encuentra debajo del necesario para cubrir las necesidades alimentarias de su hogar (es decir, por debajo de la CBA calculada para la unidad doméstica a la que pertenecen)

Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

3.2.3. Intervenciones sociales del Estado a nivel de los hogares y transferencias monetarias

Según la hipótesis planteada, las capacidades de reproducción económica de los hogares no son independientes de la función desplegada por las intervenciones sociales del Estado. De acuerdo con esta perspectiva, el Estado participa en la reproducción de las unidades domésticas, produciendo intervenciones en clave de formas o modos de “regulación” en el contexto de un régimen social de acumulación.

Las intervenciones sociales del Estado pueden diferenciarse según su injerencia sea preponderante en la distribución “primaria” o “secundaria” del ingreso. Ello permite distinguir entre la “política laboral”, que regula de forma directa las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo; y la “política social”, que participa indirectamente en las condiciones de vida en términos de redistribución (Danani, 2009: 29-32).

Todas las políticas sociales implementadas por el Estado suponen una acción redistributiva, en tanto transfieren ingresos o brindan servicios que podrían convertirse a un valor monetario (en tanto que, en sociedades de mercado, los satisfactores de necesidades pueden ser monetizados). Sin embargo, nuestro interés en esta investigación se concentra en aquellas que transfieren ingresos. La Figura 3.4 presenta, de manera esquemática, los diferentes tipos de intervenciones sociales del Estado y, particularmente, aquellas que transfieren ingresos y son objeto de interés en nuestra investigación¹³⁰.

¹³⁰ Una excepción está constituida por los llamados “programas de empleo”. Ello obedece a una peculiaridad del caso argentino aquí examinado. En los años 2002-2003, la mayor política de transferencia de ingresos a los hogares asumió la forma de un “programa de empleo”. Una parte significativa de sus beneficiarios transitó luego a otros programas de transferencia de ingresos encuadrados en modalidades habitualmente asociadas con

Figura 3.4. Intervenciones sociales del Estado, tipos de políticas y efectos económicos sobre los hogares.

Tipo	Dimensión	Definición	Tipos de políticas	¿Transfieren ingresos?
Política laboral		“Intervenciones de los estados (...), que persiguen el doble propósito de mejorar: a) la empleabilidad y las remuneraciones de las personas con dificultades de inserción en el mercado de trabajo y b) el bienestar de los trabajadores y de sus familias (sin un objetivo explícito ligado al desempeño en el mercado laboral)” (Bertranou y Paz, 2007: 52).	Políticas de capacitación	Sí/No
			Políticas de empleabilidad	Sí/No
			Políticas de salario mínimo	No
			Programas de empleo	Sí
Política social	Políticas de seguridad social	“(…) se constituyen con el fin de proveer certidumbre y asegurar a las personas frente al riesgo de pérdidas de ingresos o shocks de gastos asociados con el retiro en la vejez, invalidez, enfermedad, accidentes, fallecimiento o situación de desempleo” (Curcio, 2011: 33).	Sistema previsional	Sí
			Sistema de asignaciones familiares	Sí
			Seguro de desempleo	Sí
			Sistema de seguro de riesgos del trabajo	Sí
			Transferencias monetarias condicionadas	Sí
	Políticas de bienestar social	Incluye las políticas desplegadas por los distintos niveles estatales en relación con la provisión de servicios colectivos.	Servicios de salud	No
			Servicios educativos	No
			Política de vivienda	No
			Otros servicios públicos	No

Fuente: elaboración propia a partir de Bertranou y Paz (2007), Curcio (2011), Danani (2009) y Filgueira (2015).

En los últimos años, en la Argentina es posible distinguir entre intervenciones sociales “tradicionales”, como el sistema de jubilaciones y pensiones contributivas, el sistema de asignaciones familiares o el seguro de desempleo; y otras políticas más recientes, como las transferencias monetarias condicionadas (Figura 3.5). Entre estas políticas recientes, puede diferenciarse entre aquellas que implican contraprestación laboral (como el Plan Jefas y Jefes, los programas de “Ingreso Social con Trabajo”, como “Argentina Trabaja” o “Ellas Hacen”), y otras que suponen el cumplimiento de condicionalidades (la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y el PROGRESAR).

Un problema metodológico central es que la EPH no ofrece directamente la posibilidad de identificar el conjunto de políticas relevantes que aquí se analizan, y por ello fue necesario tomar una serie de decisiones metodológicas para su estimación. Por consiguiente, en el Anexo III presentamos tales decisiones y los antecedentes en los que se basan.

“políticas sociales”. Para más detalles, véase el capítulo I.

Figura 3.5. Tipología de políticas sociales consideradas.

Tipos de intervención		Nombre de la política / programas incluidos
Sistema previsional (JYP) ^(a)		Jubilaciones / pensiones (contributivas y no contributivas).
Sistema de asignaciones familiares (AAFF)		Sistema Único de Asignaciones Familiares.
Programas de protección contra la pobreza (PPP)	Programas de protección al desempleo (PPD)	Programas de empleo: Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJHD), otros programas de empleo (Argentina Trabaja, Ellas Hacen). Seguro de desempleo ^(b) .
	Programas de asistencia social directa (PASD)	Programa Familias para la Inclusión Social, PROGRESAR, otras transferencias de nivel subnacional no identificables.

Notas: (a) No es posible diferenciar las pensiones no contributivas del resto de los ingresos provenientes por este concepto / (b) Si bien el seguro de desempleo constituye una prestación de carácter contributivo de naturaleza distinta a otros instrumentos de protección al desempleo, su baja incidencia estadística aconsejó este agrupamiento.

Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

3.2.4. La reproducción de las unidades domésticas y su estudio a través del ingreso

Dentro de la complejidad que asume el proceso de reproducción social de las unidades domésticas, esta investigación atiende a su dimensión económica o material. De acuerdo con el enfoque presentado en el capítulo II, la reproducción económica se vincula con la manutención, la satisfacción de necesidades y la reposición cotidiana y generacional de los integrantes de la unidad doméstica. En sociedades de mercado, en los que los satisfactores de necesidades se encuentran mercantilizados, la reproducción económica se encuentra estrechamente relacionada con la disponibilidad de ingresos monetarios que permitan acceder a una serie de bienes y servicios. A su vez, se relaciona con los comportamientos que despliegan los integrantes de los hogares para mejorar sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, el ingreso no constituye una retribución que los hogares reciben por los “factores de producción” de los que disponen en el contexto de la participación en diferentes mercados. En contraste, “el ingreso (...) [es] sobre todo una medida de la ‘participación’ de los hogares particulares en la estructura económico-social y, por lo tanto, en la producción y distribución de la renta nacional” (Salvia, 2012: 156). De esta forma, el estudio de los ingresos familiares cumple un doble papel teórico-metodológico: por un lado, permite aproximarse a la evolución de las condiciones materiales de vida; por otro lado, liga dicha evolución al comportamiento de la estructura económico-ocupacional y a las modalidades de intervención estatal.

Para abordar las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas a través del ingreso familiar apelamos a dos aproximaciones. En primer lugar, consideramos los

montos de ingreso total familiar (ITF) que logran reunir los hogares y su composición a partir de tres fuentes: (a) ingresos laborales, (b) ingresos de políticas sociales y (c) otros ingresos no laborales. Esta aproximación permite examinar de qué modos se alteró la composición de los presupuestos familiares y qué relevancia adquirieron las distintas fuentes de ingreso bajo distintos contextos político-económicos.

En segundo lugar, comparamos el ingreso familiar con los requerimientos de reproducción del grupo doméstico. Para ello, nos valemos de un recurso habitualmente empleado en los estudios sobre pobreza e indigencia: el acceso a una canasta de bienes y servicios que dan cuenta de las necesidades reproductivas de los integrantes del hogar (la “Canasta Básica Alimentaria” o CBA y la “Canasta Básica Total” o CBT). Por un lado, a partir de la comparación del ingreso familiar con la CBT requerida por el grupo doméstico pueden establecerse diferentes niveles o “capacidades de subsistencia”, expresados como múltiplos de tal canasta. Por otro lado, aquellos hogares que no acceden a cubrir el monto de una CBT a partir de sus ingresos familiares experimentan “déficit de capacidades de subsistencia” (DCS). En particular, dado el marco teórico desarrollado en la investigación, prestamos especial atención a aquellos hogares que no alcanzan a cubrir una CBT en función de sus ingresos familiares de fuente laboral: tales hogares experimentan déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L).

La posibilidad que tienen los hogares de asegurarse distintos niveles de ingreso para cubrir sus necesidades está determinada por factores de diverso orden. Nuestro argumento teórico es que los factores estructurales (relacionados con el mercado de trabajo) son dominantes en este sentido, mientras que la política social que transfiere ingresos también desempeñaría un papel relevante, aunque de menor envergadura. No obstante, el estudio de las capacidades de reproducción económica debe abarcar los comportamientos desplegados por los miembros de las unidades domésticas y los determinantes demográficos. Desde este punto de vista, son cruciales el uso de la fuerza de trabajo disponible, la división familiar del trabajo, la capacidad de movilización de recursos, las estrategias residenciales y de cohabitación (visibles en la configuración doméstica) y la capacidad de participar en mecanismos de redistribución por medio de políticas sociales. Además, las capacidades de subsistencia no pueden dissociarse de los requerimientos de los distintos miembros; por ello, un aspecto determinante lo constituye el tamaño y la composición de las unidades domésticas.

A manera de síntesis, en la Figura 3.6 se señalan distintos aspectos de los comportamientos microsociales de los hogares que son considerados en esta investigación¹³¹.

Figura 3.6. Dimensiones de los comportamientos reproductivos de los hogares.

Dimensiones	Indicadores
En relación con el mercado de trabajo	Promedio de activos, ocupados y desocupados por hogar
	Número de perceptores de ingresos laborales por hogar
	Tasa de dependencia económica o laboral ^(a)
	Promedio de horas trabajadas por los ocupados
	Uso económico de la fuerza de trabajo ^(b)
En relación con el sistema de políticas sociales	Número de perceptores de ingresos provenientes de políticas sociales por hogar
Otras dinámicas reproductivas de los hogares	Tamaño promedio del hogar
	Tipo de configuración familiar
	Número de perceptores de otros ingresos no laborales por hogar

Notas: (a) Es el cociente entre el número de miembros del hogar y el número de ocupados / (b) Cociente entre la cantidad de horas disponibles para participar en el mercado de trabajo de los miembros de 18 a 64 años (se estima, para cada uno de ellos, una jornada laboral de 40 hs. semanales) y las horas totales efectivamente trabajadas en ocupaciones remuneradas (se excluyen planes de empleo).

Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

Dentro del conjunto de aspectos apuntados, nos interesa destacar que el ingreso total familiar de los hogares es el resultado del ingreso medio por perceptor y del número de perceptores de ingresos, lo que pone en evidencia la articulación de procesos micro y macrosociales.

- a) El “ingreso medio por perceptor” de cada fuente de ingreso, devela la trama a través de la cual la heterogeneidad ocupacional y las modalidades de intervención por medio de políticas sociales se plasmaron en las condiciones de reproducción de las unidades domésticas.
- b) El “número de perceptores de ingresos” de cada tipo de fuente, complementa la mirada previa al dar cuenta de las capacidades que tuvieron los hogares de maximizar su participación en las distintas fuentes de ingreso por medio de sus miembros. Un incremento del número de perceptores puede expresar un mayor esfuerzo por parte de los hogares por mejorar su balance reproductivo.

Estos aspectos hacen observables diferentes dimensiones consideradas en nuestro problema de investigación y permiten examinar los factores subyacentes a los cambios en el ingreso en

¹³¹ Como indicamos en la Introducción, el hecho de que consideremos los esfuerzos reproductivos desempeñados por los propios hogares no significa que aquellos constituyan el eje de nuestra indagación. Un estudio detallado de las “estrategias” que despliegan los hogares para optimizar sus condiciones de vida hubiese requerido otro tipo de desarrollo teórico-metodológico o, al menos, su complementación.

distintos momentos del tiempo¹³². En este sentido, contribuyen a comprender la trama en la que se organiza la reproducción económica de las unidades domésticas.

3.3. Fuente de datos, ajustes metodológicos y construcción de indicadores

El análisis llevado adelante en esta investigación debió adecuarse a las fuentes de datos disponibles. Nuestro estudio se apoya en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al respecto, debemos realizar dos advertencias. La primera es de orden conceptual: como se advirtió en el capítulo I, la posconvertibilidad tuvo su origen en la devaluación del 2002. Sin embargo, el cambio sustantivo que sufrió el diseño metodológico y muestral de la EPH en el 2003 impidió comenzar allí nuestro estudio. La segunda advertencia remite al contexto histórico de producción de esta investigación: entre el 2007 y el 2015 todos los datos ofrecidos por el INDEC deben ser considerados “con reservas” a raíz de la situación institucional que atravesó el organismo. Ello involucra tanto a la EPH como al conjunto de los insumos necesarios para evaluar las condiciones de vida familiares¹³³.

El proceso de irregularidad institucional que afectó al INDEC entre comienzos del 2007 y diciembre del 2015 (Lindenboim, 2015) nos obligó a tomar una serie de decisiones metodológicas con consecuencias sobre el conjunto de la investigación. La presente sección tiene un doble propósito: por una parte, presentar las características generales de la EPH y, por otra parte, explicitar el conjunto de decisiones adoptadas que contribuyen a poner en perspectiva los resultados obtenidos y sus limitaciones.

En la primera sección, describimos la fuente de datos y algunos problemas convencionales de las encuestas de hogares (principalmente, problemas de truncamiento muestral para captar hogares de altos ingresos y subdeclaración). En la segunda sección, señalamos las decisiones adoptadas con respecto a los ingresos monetarios. En la tercera sección, se aborda la cuestión de la construcción de las canastas de bienes y servicios que se utilizaron para evaluar las capacidades de reproducción material de los hogares.

¹³² Como destacó Cortés (2001: 229), los procesos distributivos se encuentran influidos por la manera en la cual los hogares reaccionan ante una dinámica macrosocial más o menos regresiva. La capacidad de alterar su composición, desplegar fuerza de trabajo secundaria, incrementar su participación en recursos provenientes de la acción estatal o en redes informales y/o familiares, constituyen modos a través de los cuales los hogares condicionan los resultados distributivos en un determinado momento histórico.

¹³³ Entre enero de 2007 y diciembre de 2015, el INDEC fue intervenido. En un reciente comunicado, el organismo advirtió acerca de las reservas necesarias con que debe considerarse la información oficial producida durante ese período. Véase el comunicado en: <www.indec.gob.ar>.

3.3.1. Características de la fuente de datos utilizada y cambios muestrales

La EPH es relevada por el INDEC desde 1973. Su marco teórico original (Elizalde et al., 1974) coincide, en términos generales, con el enfoque adoptado en esta investigación. El objetivo central de la EPH es:

... caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica teniendo peso significativo para su determinación los aspectos sociolaborales. En este sentido, pretende conocer la situación de la población en la estructura social a través de la posición que tienen los individuos y los hogares, núcleos básicos de convivencia en los cuales las personas se asocian. (INDEC, 2003: 4)

La EPH tiene un proceso de muestreo bietápico estratificado. La unidad primaria de muestreo son los radios censales, cuyo listado constituye el marco muestral de la Encuesta. Estos radios censales son estratificados y seleccionados de acuerdo con la probabilidad proporcional a su tamaño (medido por la cantidad de viviendas particulares que incluyen). El criterio de estratificación está ligado a atributos educativos de los jefes de hogar predominantes en un radio censal. En la segunda etapa, se seleccionan viviendas en forma aleatoria dentro de los radios censales (INDEC, 2003).

Hasta el 2003, la EPH se relevaba en dos “ondas” en mayo y octubre de cada año (EPH “puntual”). A partir de entonces, se inició la reformulación que llevó a la actual modalidad “continua”. En la actualidad, la EPH se releva cuatro veces al año de manera trimestral. Si bien siempre existió un esquema de panel, desde la reformulación incluye un esquema de rotación que denominado “2-2-2” (INDEC, 2003): las viviendas de un área ingresan a la muestra y son encuestadas dos trimestres consecutivos, se retiran por dos trimestres y vuelven a la muestra para ser encuestadas durante dos trimestres. Esto permite seguir a un hogar a lo largo de un año y medio.

El concepto de “ingreso corriente” que mide la EPH se refiere a los ingresos monetarios mensuales derivados de fuentes laborales y no laborales. Las primeras aluden a remuneraciones al trabajo asalariado, ganancias empresarias y utilidades derivadas del trabajo por cuenta propia. Las segundas remiten a rentas y transferencias que reciben los hogares de otros agentes económicos, tales como las rentas financieras o inmobiliarias, las jubilaciones y pensiones, las indemnizaciones, becas, donaciones, asistencia social, etcétera. Esta información no contempla los ingresos no monetarios y las ganancias de capital devengadas y no realizadas, así como la renta imputable de la propia vivienda y otros bienes durables. Asimismo, los ingresos captados son netos (“de bolsillo”) sin considerar obligaciones fiscales.

La EPH ha tenido diversas modificaciones en la cobertura temática de los cuestionarios y en las características de la muestra. En lo que respecta a la ventana temporal de esta investigación, a partir del tercer trimestre del 2006, a los 28 aglomerados que se relevaban en la modalidad “continua” se añadieron los aglomerados San Nicolás-Villa Constitución, Viedma-Carmen de Patagones y Rawson-Trelew (que se incorporaron en el 2002 pero continuaban relevándose bajo la modalidad “puntual”). Además, a partir de ese trimestre se amplió la muestra en los aglomerados de menos de 500 mil habitantes, lo que permitió mejorar la precisión de las estimaciones trimestrales. De este modo, la información en la que se basa este libro abarca a 31 aglomerados urbanos del total del país que representan alrededor del 62% de la población total¹³⁴.

Por tratarse de una encuesta por muestreo, la EPH utiliza factores de expansión para realizar estimaciones sobre el total de la población urbana de referencia en los aglomerados relevados. Para ello, se utilizan las proyecciones de población que constituyen modelos predictivos sobre el comportamiento de aquella. Estas proyecciones surgen de cada censo de población, permiten construir los factores de expansión en los períodos intercensales y se revisan al término de cada nuevo censo, lo que puede conducir a modificaciones en los tamaños de la población de referencia. Al mismo tiempo, como se trata de una muestra de viviendas, los resultados de las estimaciones pueden verse afectados por la población residente en dichas viviendas, aun cuando se controle el total poblacional. Por ello se lleva a cabo una “calibración” de los factores de expansión para ajustarlos a ciertos subtotales poblacionales conocidos con base en censos de población y las proyecciones demográficas (INDEC, 2009).

En el 2005, la población de referencia se ajustó a las nuevas proyecciones de población, surgidas del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2001 (INDEC, 2005). A partir del cuarto trimestre del 2013, el INDEC comenzó a actualizar las proyecciones de población a los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Con base en este último, se construyó la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA) el marco muestral del cual se obtienen las viviendas a encuestar, que reemplazó al Marco de Muestreo Nacional de Viviendas (MMNV) utilizado

¹³⁴ Los 31 aglomerados relevados son los siguientes: Gran La Plata, Bahía Blanca - Cerri, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Paraná, Posadas, Gran Resistencia, Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Gran Mendoza, Corrientes, Gran Córdoba, Concordia, Formosa, Neuquén - Plottier, Santiago del Estero - La Banda, Jujuy - Palpalá, Río Gallegos, Gran Catamarca, Salta, La Rioja, San Luis - El Chorrillo, Gran San Juan, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Santa Rosa - Toay, Ushuaia - Río Grande, Aglomerado Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires), Mar del Plata - Batán, Río Cuarto, San Nicolás - Villa Constitución, Rawson - Trelew y Viedma - Carmen de Patagones.

hasta ese momento (INDEC, 2014). Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en períodos anteriores, el INDEC implementó el cambio en la muestra por “porciones”, lo cual condujo a una combinación de factores de expansión según el marco muestral del que provinieran las unidades seleccionadas (lo que fue definido como “ponderación híbrida”).

Como resultado del cambio en la muestra y en las proyecciones poblacionales, se produjo tanto un salto “atípico” en el ritmo de crecimiento de la población de referencia de la EPH como un cambio en su composición por sexo y edad. Dicho salto se explica, principalmente, porque el crecimiento proyectado en 2001 (con el que se calculaban los factores de expansión hasta 2013) fue menor al realmente ocurrido (Arakaki y Pacífico, 2015). Ello puede introducir algunas distorsiones en el análisis que llevamos adelante en la presente investigación.

Si bien se han ensayado algunos esfuerzos por corregir estos sesgos y “reacoplar” los datos de la muestra relevada con el MMNV a la información proporcionada por la MMUVRA, a partir de 2016 el INDEC difundió información acerca de inconsistencias en la MMUVRA que condicionan y relativizan cualquier esfuerzo de corrección. Específicamente, se informó que la nueva muestra tiene problemas de cobertura en algunos aglomerados. De esta forma, la “corrección” de un sesgo podría traducirse en la introducción de otros, además de requerir la alteración del conjunto de los microdatos.

En todos los casos en que se manifestaron este tipo de dificultades, la decisión metodológica aquí adoptada consistió en optimizar la comparabilidad procurando minimizar las decisiones arbitrarias que pudieran afectar las inferencias generadas. No obstante, decidimos realizar ejercicios de estimación de resultados o soluciones alternativas y volcarlas en Anexos de información adicional para evaluar los efectos producidos por los cambios aludidos¹³⁵.

3.3.2. Problemas de captación de ingresos y subdeclaración

Las encuestas de hogares enfrentan una serie de dificultades intrínsecas cuando se trata de la captación de ingresos. Podemos resumir tales dificultades en tres aspectos: en primer lugar, un sesgo de representatividad que remite al recorte muestral; en segundo lugar, la subdeclaración u omisión de respuestas de ingresos; en tercer lugar, la ausencia de suficiente desglose en los cuestionarios para la inclusión de fuentes de ingreso, las que pueden ganar o no importancia en el tiempo sin quedar debidamente registradas por el instrumento de captación (Cortés, 2000b; Salvia, 2012).

¹³⁵ En este sentido, si bien consideramos viable extender el análisis hasta el 2014 –con las reservas mencionadas–, en el Anexo I se presenta un ejercicio de corrección de los factores de expansión tomando en cuenta la nueva información disponible a partir del 2016.

El primero de los problemas se encuentra asociado a lo que se conoce generalmente como “truncamiento” de la muestra y remite a la dificultad para captar a los sectores más altos y más bajos de la estructura social. Un conjunto de mutaciones en la estructura del espacio urbano en los últimos años, como la profundización de la segregación residencial de los sectores de muy altos y muy bajos ingresos, acentúa este tipo de dificultades. Sin dudas, el principal problema enfrentado apunta a la imposibilidad de captar a los grupos sociales más ricos del país. Este efecto de sesgo no puede ser controlado sin tomar decisiones arbitrarias o ajustes globales. De todas formas, como señala Salvia (2012), cabe suponer que este efecto se mantiene relativamente constante en el tiempo, por lo que se trata de un problema de validez, pero no de confiabilidad de las estimaciones.

En cambio, el segundo de los problemas aludidos no necesariamente es estable en el tiempo. La cuestión tiene una doble faceta: por una parte, la omisión de ingresos que se traduce en la no respuesta a ese módulo de la EPH; por otra parte, la declaración de montos de ingreso más bajos que los efectivamente percibidos. Con respecto a la no respuesta, durante el período de EPH “puntual” y, luego, en la EPH “continua” hasta el año 2007, no se realizaban imputaciones de ingresos (Salvia y Donza, 1999). Sin embargo, el INDEC reprocesó las bases de microdatos de la EPH “continua”, de modo que para el período comprendido entre 2003 y 2015 se llevó a cabo la imputación de ingresos a través de *hot deck*. Estas son las bases de datos aquí utilizadas¹³⁶.

El problema de la subdeclaración remite al reporte de montos de ingreso inferiores a los percibidos. Este problema no resulta estable en el tiempo y hay algunos indicios de que se habría profundizado especialmente a partir del año 2008 (Sánchez, Pacífico y Kennedy, 2016). Las correcciones posibles sobre esta cuestión no están exentas de discusiones en la literatura (Llach y Montoya, 1999; Roca y Pena, 2001; Sánchez, Pacífico y Kennedy, 2016). Ello se debe a que, en general, se realizan tomando en cuenta un parámetro externo agregado: usualmente, la media de ingresos que resulta de registros administrativos (en la Argentina, el SIPA) o los datos de la Cuenta Generación del Ingreso de las Cuentas Nacionales. En el contexto de la presente investigación, en la cual interesan transformaciones en las condiciones de vida en clave de desigualdad, este tipo de correcciones puede introducir un sesgo no controlable: corregir sólo el efecto de subdeclaración entre aquellos grupos para los cuales existe un parámetro externo (los trabajadores asalariados registrados del sector privado) sin

¹³⁶ De acuerdo con Donza (2015) la imputación de ingresos no declarados por *hot deck* arroja resultados similares a los que se obtienen mediante otros métodos de imputación.

modificar los ingresos de aquellos para los cuales la EPH es la única fuente disponible de captación¹³⁷. Dada la relevancia de este análisis sobre los datos y las inferencias que se realizan en este estudio, en el Anexo II se presentan los resultados de un ejercicio de estimación tomando en cuenta los datos provenientes del SIPA comparando con la EPH. De acuerdo con este ejercicio, los resultados en términos de desigualdad que ofrecemos aquí deberían ser considerados como el punto mínimo al que la EPH permite acceder.

En cuanto a la subcaptación de ingresos como resultado de una inadecuación entre el cuestionario y los cambios en los modos de proveerse ingresos por parte de los hogares, podemos suponer que haya desempeñado un papel menor durante el período. Sin embargo, un aspecto relevante remite al hecho de que la EPH no registró la expansión de las políticas sociales de transferencias de ingresos a través de modificaciones del instrumento de medición. Sólo existe una pregunta que permite llevar adelante este tipo de análisis en el módulo de ingresos aplicado. Ello comporta una restricción para el análisis aquí presentado, por lo que se describe en el Anexo III el tipo de estrategia desplegada.

3.3.3. Deflación de ingresos y medidas estandarizadas de las capacidades de subsistencia de los hogares

Una cuestión adicional relativa a los ingresos monetarios remite al papel desempeñado por los índices de precios al consumidor, que son el instrumento usualmente empleado para poder deflactar los ingresos corrientes. Hasta diciembre de 2006, el INDEC ofreció datos confiables al respecto, pero a partir de entonces carecieron de credibilidad (Lindenboim, 2015). En este sentido, todos los investigadores han debido recurrir a fuentes alternativas de medición de la inflación para estimar los cambios en el costo de vida. Entre los índices alternativos más utilizados figuran dos: por una parte, el “IPC-7” e “IPC-9 Provincias”, que surgió de una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) y fue continuado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Este Índice sufrió diferentes modificaciones a lo largo del tiempo y a partir del 2014 fue “empalmado” con el nuevo Índice de Precios Nacional Urbano del INDEC (IPCNU). Al mismo tiempo, este índice constituye un promedio de los datos de centros de estadísticas provinciales que mantuvieron la medición de la variación en el costo de vida, pero dichos centros fueron cambiando a lo largo del tiempo. Por otra parte, el Índice de Precios del Estudio GB o

¹³⁷ Otra opción, no menos controvertida, consiste en ajustar toda la estructura distributiva de la EPH a la Cuenta Generación del Ingreso de Cuentas Nacionales. De esta forma, se “replica” la distribución funcional del ingreso a nivel del ingreso disponible de los hogares.

“Buenos Aires City”, relevado por ex técnicos del INDEC, fue utilizado por muchos investigadores a lo largo del período porque mantuvo la modalidad previa a la intervención oficial en cuanto a la medición del IPC. Para esta investigación empleamos este segundo índice¹³⁸.

El ingreso familiar real no brinda los elementos necesarios para caracterizar las capacidades efectivas de reproducción material de los hogares en función de su participación en la distribución del producto social. Para ello, es preciso vincular tal ingreso con una capacidad de satisfacción de necesidades básicas, que se asocia con la reproducción cotidiana y generacional de los miembros del hogar. En este punto, apelamos a una aproximación usualmente empleada en los estudios sobre “pobreza por ingresos”. Se comparan los ingresos disponibles en la unidad doméstica con una “canasta básica de bienes y servicios” (Canasta Básica Alimentaria, o CBA, y Canasta Básica Total, o CBT) necesarios para su reproducción (Feres y Mancero, 2001). Este abordaje permite vincular de manera directa las distintas posiciones de la “matriz económico-ocupacional” anteriormente referida con distintas capacidades de subsistencia de los hogares, e incluir o “aislar” el efecto específico de las otras fuentes de ingreso que reciben los hogares –especialmente, las intervenciones del Estado por medio de transferencias económicas–.

Los inconvenientes señalados para la obtención de una serie confiable de la variación del índice de precios al consumidor reaparecen cuando se trata de valorizar las “canastas” aludidas. Recordemos que la metodología usualmente empleada en la medición de la pobreza monetaria requiere: (1) comparar el ingreso familiar normalizado en términos de necesidades de consumo (las unidades consumidoras o “equivalentes adultos”) con la (2) CBA, la cual debe estar (3) valorizada; o bien con la (4) CBT. Esta última se obtiene multiplicando la CBA por la (5) inversa del “coeficiente de Engel” (ICE), o “relación de Orshansky” (que indica la proporción de gasto no alimentario sobre el gasto alimentario). La CBA es un estándar “normativo”, que recoge los requerimientos calóricos que una unidad consumidora (o “adulto equivalente”) requiere para reproducir su vida realizando actividad física moderada¹³⁹. Dicho estándar se compara con los modos en que una “población de referencia” cubre tales

¹³⁸ Se presenta un análisis en el Anexo IV de las diferencias que introducen los distintos índices de precios considerados.

¹³⁹ En el caso argentino, tal nivel normativo se obtuvo a partir de estudios antropométricos y nutricionales específicos realizados a fines de los ochenta en el contexto de la Investigación sobre la Pobreza en la Argentina (Epszteyn y Orsatti, 1988). Esta estructura fue modificada a partir del 2016, cuando el INDEC procedió a una revisión integral de los insumos requeridos para la medición de la pobreza por ingresos.

requerimientos energéticos. De allí surge una CBA que representa los patrones de consumo de la población¹⁴⁰. Para dicha población de referencia se obtuvo la ICE para poder “expandir” la CBA. En la Argentina, la CBA se fue valorizando a partir de la variación de los precios medios de los productos contenidos en la CBA. Finalmente, sobre la base de la evolución de los precios relativos de los alimentos y el nivel general se fue actualizando la inversa del coeficiente de Engel para el cálculo de la pobreza monetaria.

De esta forma, el abordaje de las capacidades de subsistencia de los hogares requiere dos insumos clave: la valorización de la CBA y la actualización de la ICE en función de los cambios de la estructura de precios relativos. La manipulación de los índices de precios a partir del año 2007 compromete la posibilidad de obtener una medida que esté libre de controversias¹⁴¹. A diferencia de lo que ocurre con la deflación de ingresos monetarios –en que sólo se requiere el nivel general de un índice de precios–, una adecuada medición de este indicador requeriría la utilización de un índice que pueda ofrecer información diferenciada de la evolución de los precios de los alimentos y bebidas.

Aquí hemos explorado diferentes metodologías de estimación. En la metodología finalmente adoptada, utilizamos la CBA “tradicional” del INDEC; es decir, tiene una estructura previa a su modificación en el 2016. Con respecto a su valorización, hasta diciembre del 2006 se siguió la serie informada por el INDEC; entre enero del 2007 y diciembre del 2014, se apeló a la variación del Nivel General del IPC-GB. Por su parte, hasta diciembre del 2013, la ICE surge del INDEC, mientras que para el 2014 se aplicó a la serie previa la variación que surge de la ICE de los informes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2016). En cuanto a la aplicación de las CBA al total de aglomerados (recuérdese que la metodología está realizada para el Gran Buenos Aires) se aplicó la “metodología de transición” del INDEC (INDEC, 2016). Tal metodología consiste en aplicar un coeficiente –basado en la paridad de poder adquisitivo de las regiones de nuestro país– para obtener una CBA válida para cada región¹⁴².

¹⁴⁰ En la metodología tradicional del INDEC desarrollada en los ochenta, la población de referencia fueron los percentiles 21 a 40 de la distribución del ingreso per cápita del Gran Buenos Aires en la Encuesta de Gastos de los Hogares de 1985 y 1986.

¹⁴¹ De hecho, durante el período, pocos temas suscitaban tantas polémicas como las cifras de la pobreza (Calvi, 2015; CESO, 2014; IPPYP, 2014; ODSA, 2014, 2015).

¹⁴² Los valores de la CBA y de la CBT utilizados en esta investigación para cada trimestre y región se exponen en el Anexo IV.

Capítulo IV

Formas de inserción de la fuerza de trabajo de los hogares, desigualdades estructurales y marginalidad económica durante la posconvertibilidad

Introducción

En este capítulo abordamos la participación de la fuerza de trabajo de los hogares en el mercado laboral y caracterizamos el tipo de posiciones económico-ocupacionales a las que accedieron a través de sus integrantes. Desde la perspectiva teórica adoptada, estas formas de inserción económico-ocupacional se revelan cruciales para comprender la evolución de las capacidades de reproducción económica. La heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional, la segmentación del mercado de trabajo y la generación de posiciones de marginalidad económica, constituirían rasgos determinantes de tales capacidades. A nivel de los hogares, operan a partir de las formas de inserción ocupacional de sus miembros. En suma, argumentamos –con Danani (2009)– que “la matriz de las condiciones de vida se encuentra en el trabajo”.

Por tratarse de una unidad colectiva, para abordar la inserción de los hogares en la estructura social o en la estructura económico-ocupacional es frecuente apelar a la posición de alguno de sus integrantes, por lo general, el jefe o el principal sostén (Benza, 2016; Chávez Molina y Sacco, 2015; Dalle, 2012; Maceira, 2016; Torrado, 1992, 2006 [1982]). Esta aproximación supone una restricción cuando se desea hacer inferencias sobre la estructura productiva o la dinámica ocupacional (en tanto sólo se observa a una porción de la fuerza de trabajo); sin embargo, es la más adecuada cuando el interés se dirige a la reproducción de la fuerza de trabajo, dado que los individuos forman parte de una constelación familiar que incide en los comportamientos asociados a la oferta laboral y en las condiciones de vida (Torrado, 2006 [1982]). En esta línea, a lo largo del presente libro analizamos la participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional a través de la forma de inserción del principal sostén del hogar (PSH). Asimismo, dado que los hogares pueden disponer de “trabajadores secundarios”¹⁴³, exploramos qué posibilidades tuvieron de acceder a distintas posiciones económico-ocupacionales considerando, de forma simultánea, al conjunto de la fuerza de trabajo disponible.

¹⁴³ Como se recordará, en el marco de esta investigación los trabajadores secundarios de los hogares son aquellos que no son el principal proveedor del hogar.

El análisis presentado en este capítulo coloca al estudio en diálogo con las investigaciones que han abordado las características de la estructura social y del mercado de trabajo durante la posconvertibilidad. Como señalamos en la Introducción, algunas de ellas enfatizan líneas de “ruptura” en relación con los noventa: se remite al aumento de la población asalariada, a la recomposición de la clase trabajadora calificada y a la expansión de las “clases medias” (Benza, 2016; Dalle, 2012; Dalle et al., 2015; Groisman, 2013; Maceira, 2016; Palomino y Dalle, 2012). Se destaca el aumento del empleo registrado en la seguridad social como característica distintiva de la etapa (Novick, 2006 Palomino, 2007; Palomino y Dalle, 2012). Dentro de esta línea, también se han subrayado algunas rigideces vinculadas con la informalidad laboral y el empleo marginal (Benza, 2016; Maceira, 2016). Otras investigaciones también destacan ciertas líneas de “continuidad” de la estructura social y el mercado de trabajo. Estos autores refieren a la persistencia de un funcionamiento segmentado de los mercados de trabajo (Arakaki, 2015; Beccaria y Maurizio, 2012; Beccaria y Groisman, 2015; Groisman, 2011, 2013; Poy, 2017; Salvia, 2016; Salvia et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Vera, 2011, 2013, 2016). Algunas de estas investigaciones asocian las características de la estructura laboral con el funcionamiento de un capitalismo crecientemente globalizado (Salvia, 2012, 2015).

En tanto la mayor parte de estos estudios ofrecen información relevante sobre las formas de inserción individual en la estructura social del trabajo, han recibido menor atención los modos en que tales inserciones se traducen en los hogares. De acuerdo con nuestro planteo conceptual, la heterogeneidad productiva se habría plasmado en una estructura económico-ocupacional desigual y segmentada para los hogares. Este rasgo estructural hace inteligible el crecimiento de un sector moderno y dinámico y la persistencia de un sector microinformal de baja productividad.

La *hipótesis* que organiza este capítulo postula que durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014), la participación laboral de la fuerza de trabajo de los hogares habría permanecido estrechamente ligada a las condiciones de heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y de segmentación del mercado de trabajo. Si bien se habría evidenciado una recomposición de las oportunidades de empleo en los sectores más dinámicos e intermedios durante los primeros años de la posconvertibilidad (2003-2008), habría sido restringida, en ausencia de cambios estructurales de la economía. Durante el ciclo de crisis, reactivación y estancamiento (2008-2014), los hogares habrían enfrentado una estructura rígida en términos de oportunidades económico-ocupacionales en los sectores más

modernos. Aun cuando en el seno de los hogares pueden coexistir posiciones económico-ocupacionales, una parte de éstos sólo habría conseguido acceder a ocupaciones en el sector informal, en el segmento precario o a posiciones abiertamente marginales, como correlato de las limitaciones estructurales de la demanda de empleo en los sectores más productivos.

El capítulo se organiza alrededor de dos secciones. La primera aborda, en términos agregados, la participación de los hogares en el mercado de trabajo, para lo cual recuperamos indicadores básicos que remiten a la oferta de fuerza laboral. La segunda sección desarrolla un aspecto central de la investigación: el acceso que tuvieron las unidades domésticas a posiciones laborales en distintos sectores económico-ocupacionales y segmentos de empleo a través de sus miembros. Describimos las capacidades que tuvieron de combinar empleos mediante una tipología de modos de inserción. Por último, examinamos los alcances y las características de la informalidad de subsistencia a nivel de las unidades domésticas.

4.1. La participación laboral de la fuerza de trabajo de los hogares durante la posconvertibilidad

El propósito de esta sección es analizar los cambios agregados en la participación laboral de las unidades domésticas, evaluada a partir del uso de la fuerza de trabajo de la que disponen. Con este fin, utilizamos un conjunto de indicadores que remiten a la oferta laboral, la disponibilidad de trabajadores secundarios y los niveles de dependencia económica. De esta forma, buscamos construir un cuadro general en el cual inscribir el acceso de las unidades domésticas a diferentes posiciones económico-ocupacionales. Este primer abordaje permite evaluar la existencia de reajustes en las pautas de participación vinculadas con el mercado de trabajo durante la posconvertibilidad.

Al respecto, cabe reconocer que la participación de los miembros de los hogares en el mercado laboral se encuentra atravesada por aspectos demográficos, económicos, culturales y de género. En términos demográficos, la reducción paulatina del tamaño de los hogares, asociada a la “transición demográfica”¹⁴⁴ (Binstock y Cerruti, 2016; Torrado, 2010), incide sobre la oferta de fuerza de trabajo. Por una parte, la reducción de las tasas de fecundidad y del número de niños por hogar, junto con el incremento de la divorcialidad, conllevan menores demandas de consumo. Por otra parte, implican también una menor disponibilidad de fuerza de trabajo. En términos económicos, las recurrentes crisis que la Argentina atravesó

¹⁴⁴ La “transición demográfica” es entendida a partir de la convergencia de un conjunto de procesos: la caída de la tasa de natalidad y de mortalidad, el aumento de la esperanza de vida, el consecuente envejecimiento poblacional y la consolidación de modelos familiares de menor número de miembros (Torrado, 2010).

desde los setenta impactaron sobre la participación laboral. El desempleo de los jefes de hogar y la insuficiencia de ingresos condujeron al aumento de la participación de las cónyuges y de otros trabajadores secundarios (Esquivel, Faur y Jelin, 2012; Geldstein, 1994; Jelin, 2010; Paz, 2001; Sautu, 1991; Wainerman, 2007). Por último, los cambios en las relaciones de género han atravesado transversalmente estos procesos. Una expresión de aquellos es el aumento de la tasa de actividad femenina y la consecuente mayor presencia de las mujeres en la estructura del empleo total (Águila y Kennedy, 2015; Beccaria, Maurizio y Vázquez, 2017; Binstock y Cerruti, 2016; Cerrutti, 2000; Sautu, 1991; Wainerman, 2007)¹⁴⁵.

Durante la etapa de ajuste estructural en la Argentina (1991-2001), los hogares enfrentaron dificultades para aumentar o incluso mantener su número de ocupados (Beccaria y Groisman, 2005; Salvia, 2012). La tasa de actividad creció más rápidamente que la capacidad de la economía de generar empleos, se incrementaron los puestos de trabajo a tiempo parcial y aumentó el desempleo de los jefes de hogar. Esto se tradujo en una mayor dificultad para responder al ajuste estructural por medio de un incremento significativo en el número de ocupados¹⁴⁶.

Como describimos en el capítulo I, el modelo posconvertibilidad fue dinámico en materia de absorción de fuerza de trabajo. Durante la fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008), la tasa de empleo se incrementó y se redujo el desempleo. A partir de entonces (2008-2014), ambas tasas se mantuvieron estables, aunque hacia el final del período se verificó un incremento de la desocupación como resultado del estancamiento económico¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Estos cambios se encuentran imbricados y se plasman en las dinámicas familiares. La mayor participación femenina en actividades remuneradas junto con una división del trabajo doméstico anclada en roles tradicionales de género, han implicado una creciente “doble carga” para las mujeres (Carrasco, 2013; Wainerman, 2005). Los estudios sobre “economía del cuidado” dan cuenta de la relevancia de estas modificaciones (Carrasco, 2013; Esquivel, Faur y Jelin, 2012; Razavi, 2007).

¹⁴⁶ Los trabajos de Beccaria y Groisman (2005), Donza, Philip, Pla, Salvia y Vera (2008) y Salvia (2012), entre otros, exhibieron evidencias en este sentido.

¹⁴⁷ Al respecto, recordamos los efectos que pueden producirse como resultado de los cambios muestrales descritos en el capítulo III. De todos modos, en términos agregados, los comportamientos observados en la dinámica del empleo resultan razonables a la luz del contexto macroeconómico del año 2014.

Cuadro 4.1. Indicadores generales de la participación laboral de los hogares. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en números promedio por hogar*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (%) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Número de miembros	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	-1,4***	-3,8***	1,7	-3,6***
Número de activos	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	-2,2***	-2,9***	0,2	-4,9***
Número de ocupados ^(b)	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	12,5***	-2,7***	-0,1	9,3***
Tasa de dependencia económica ^(c)	2,4	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	-12,4***	-1,1***	1,8	-11,8***
Número de perceptores de ingresos	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	12,3***	-0,7	0,6	12,1***
Horas trabajadas por ocupado ^(d)	39,2	40,7	40,2	40,3	40,0	38,5	2,5***	-0,3	-3,8***	-1,7**
<i>Principal sostén del hogar</i>	44,4	45,2	43,6	43,8	43,0	41,8	-1,8***	-1,3	-2,8***	-5,9***
<i>Resto ocupados</i>	34,6	35,8	35,7	35,5	35,9	34,2	3,2***	0,7	-4,8***	-1,1***
Índice de uso económico de fuerza de trabajo (%) ^(e)	66,8	72,6	74,4	74,5	74,5	71,1	11,3***	0,1	-4,5***	6,4***

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1 / (b) Excluye ocupados en planes de empleo / (c) Cociente entre número de miembros y número de ocupados / (d) Promedio de horas durante la semana de referencia / (e) Cociente entre la cantidad de horas disponibles para participar en el mercado de trabajo de los miembros de 18 a 64 años (se estima, para cada uno de ellos, una jornada laboral de 40 hs. semanales) y las horas totales efectivamente trabajadas en ocupaciones remuneradas (se excluyen planes de empleo).

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

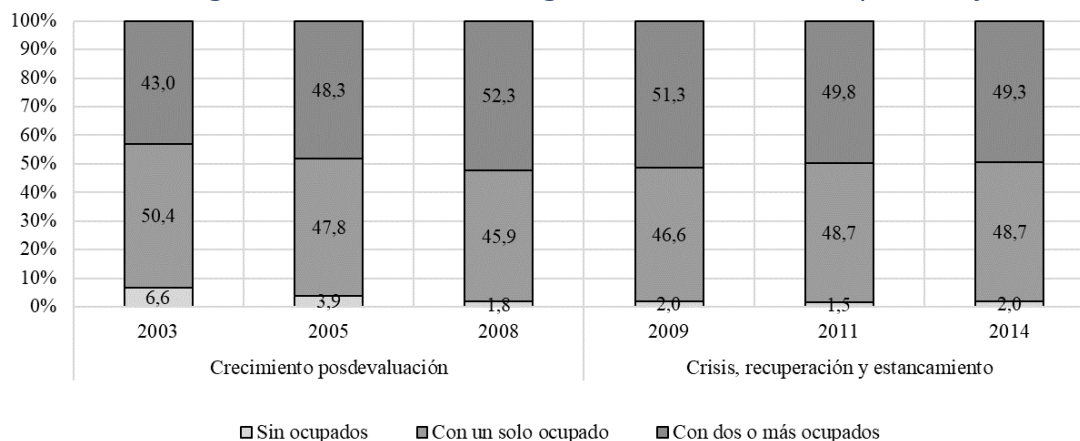
El Cuadro 4.1 aborda diferentes indicadores de la participación laboral de los hogares¹⁴⁸. Entre el 2003 y el 2008 aumentó el número promedio de ocupados por hogar y se redujo la “tasa de dependencia económica”, es decir, la relación entre el número de consumidores (o integrantes) y el número de proveedores laborales. Como se observa en el Gráfico 4.1, estas modificaciones condujeron al incremento de la proporción de hogares que disponían de dos o más ocupados (43% a 52,3%) y a la correlativa retracción de los que sólo disponían de un integrante en el mercado de trabajo (50,4% a 45,9%). Tales resultados indican que los hogares movilizaron trabajadores adicionales, lo que, como indicamos, reconoce determinantes demográficos, económicos y de género. A su vez, el Gráfico 4.2 indica que la tasa de ocupación se incrementó entre la fuerza laboral secundaria, en particular, entre varones y mujeres jóvenes (7,3 y 7,7 pp.) y entre mujeres adultas (10,6 pp.). Finalmente, además de incrementarse el número de ocupados, éstos aumentaron de forma leve su promedio de horas trabajadas (Cuadro 4.1). En suma, durante la fase de crecimiento posdevaluación advertimos una intensificación de la “utilización económica”¹⁴⁹ (es decir, en el mercado) de la fuerza de

¹⁴⁸ Además de presentar la información construida para los distintos años tomados como ventana de observación, los Cuadros incluyen las variaciones observadas entre los periodos identificados (véase el capítulo I para la fundamentación de esta periodización) y la significación estadística de tal variación, obtenida a través de una prueba *t*.

¹⁴⁹ Elaboramos este “índice de uso de la fuerza de trabajo” para aproximarnos a la intensidad con la cual los hogares participan del mercado de trabajo. Se trata de un cociente cuyo denominador es la “disponibilidad de fuerza de trabajo”. Para obtenerlo, se multiplica el número de integrantes de entre 18 y 64 años por una jornada laboral promedio (40 hs. semanales). El numerador es el total de horas efectivamente trabajadas (incluye a los trabajadores familiares no remunerados, pero excluye planes de empleo). El índice involucra una decisión

trabajo disponible en los hogares: hacia el 2008, casi tres cuartas partes del tiempo disponible (74,4%) eran efectivamente utilizadas en el mercado laboral.

Gráfico 4.1. Distribución de hogares según número de ocupados^(a). Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).



Nota: (a) excluye ocupados en planes de empleo.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

A partir del 2008, todos los procesos descritos se estabilizaron. El número promedio de ocupados por hogar presentó oscilaciones, pero se mantuvo en torno al nivel alcanzado previamente, con una leve reducción a partir del 2009 atribuible a la reducción del tamaño de los hogares (Cuadro 4.1).

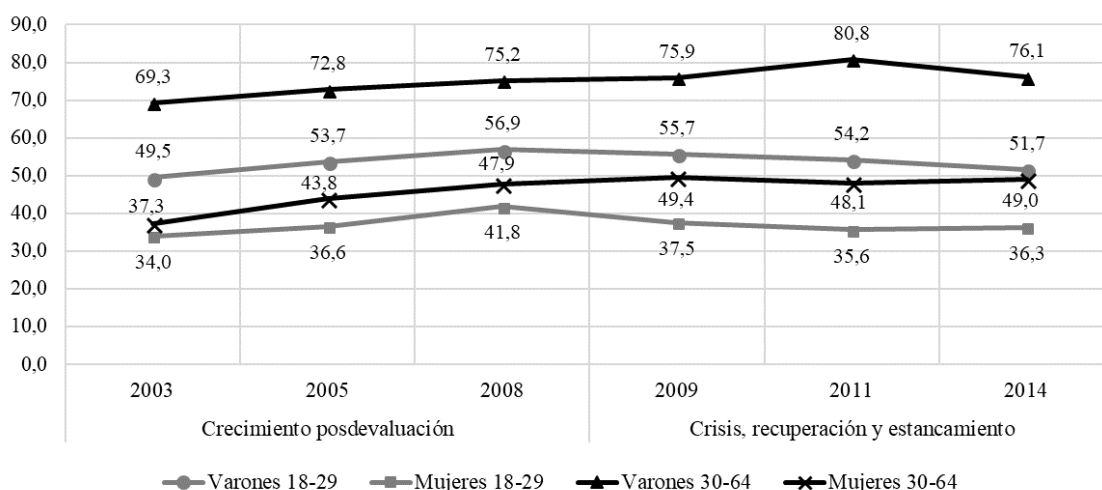
Como se exhibe en el Gráfico 4.1, este proceso también se plasmó en la retracción del porcentaje de hogares que tenían dos o más ocupados (que pasó de 52,3% a 49,3% entre el 2008 el 2014). Las tasas de empleo de la fuerza de trabajo secundaria también se estabilizaron, e incluso se retrajeron entre los más jóvenes, lo que puede originarse en la extensión de los años de estudio (Gráfico 4.2)¹⁵⁰. Incluso constatamos una leve retracción en el promedio de horas trabajadas, tanto por ocupados jefes como por el resto de los miembros; de allí la leve reducción del “uso económico” de la fuerza de trabajo disponible. En conjunto,

arbitraria referida a la “disponibilidad” de fuerza laboral. Asimismo, puede ser superior a la unidad en hogares con sobreocupados plenos (es decir, con trabajadores que laboran más de 40 hs. semanales). Sin embargo, constituye una aproximación al balance laboral de los hogares. Un ejemplo que inspiró este índice se encuentra en Margulis (1989).

¹⁵⁰ En un trabajo reciente, Beccaria, Maurizio y Vázquez (2017) subrayan el estancamiento de la tasa de participación económica femenina. Luego de incrementarse entre los ochenta y los noventa, desde mediados de los 2000 se advertiría una pérdida de dinamismo. Tales datos son convergentes con los reportados por Águila y Kennedy (2015: 107). Si bien aquí nos restringimos al universo de hogares con PSH activo, los datos parecen apuntar en la dirección señalada.

la dinámica observada sugiere que, a partir de la segunda fase de la posconvertibilidad, se consolidó una pauta de participación laboral surgida durante la primera fase¹⁵¹.

Gráfico 4.2. Tasas de empleo^(a) de fuerza de trabajo secundaria^(b) según grupo de edad y sexo. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes de población).



Notas: (a) excluye ocupados en planes de empleo / (b) Son aquellos integrantes del hogar que no son el principal sostén del hogar.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Para concluir esta caracterización, cabe preguntarse por la incidencia que mantuvieron los ingresos provenientes del mercado de trabajo sobre el ingreso total familiar. Al respecto, el Cuadro 4.2 indica que, a lo largo del ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014), tales ingresos representaron casi el 90% del total del ingreso familiar. El resto de las fuentes consideradas (ingresos de políticas sociales y otros ingresos no laborales) mantuvieron una participación significativamente menor¹⁵².

Los resultados presentados en esta sección permiten destacar dos cuestiones claves para el análisis posterior. En primer lugar, durante la posconvertibilidad se incrementó la capacidad de los hogares de disponer de fuerza de trabajo ocupada. Advertimos que este proceso se concentró en el período 2003-2008, en tanto que entre el 2008 y el 2014 se consolidó el patrón constituido en la fase precedente. En segundo lugar, los hogares continuaron siendo

¹⁵¹ Cabe señalar que, en los noventa, según muestra Salvia (2012: 243), los hogares enfrentaron un contexto adverso y no consiguieron incrementar su número de perceptores. Si bien volcaron fuerza de trabajo secundaria al mercado, no siempre consiguieron posiciones ocupacionales adicionales y, en muchos casos, engrosaron el desempleo abierto.

¹⁵² El comportamiento de la distribución del ingreso laboral y sus consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica será objeto de análisis en el capítulo V. Por su parte, la evolución y los efectos de los ingresos del sistema de política social serán abordados detalladamente en el capítulo VI.

altamente dependientes del mercado de trabajo en relación con la generación de ingresos. De allí que los procesos distributivos de origen laboral se revelen cruciales para comprender la evolución de las capacidades de subsistencia económica de las unidades domésticas.

Cuadro 4.2. Composición del ingreso total familiar. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Ingresos laborales	89,4	89,6	88,6	89,3	89,3	88,8	-0,8***	0,7***	-0,5***	-0,6***
Ingresos de políticas sociales	8,3	7,5	8,5	8,0	8,3	9,1	0,2***	-0,2***	0,8**	0,8***
Otros ingresos no laborales	2,3	2,9	2,9	2,7	2,4	2,1	0,7***	-0,5***	-0,3***	-0,2***
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: *** p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

4.2. Heterogeneidad estructural, inserción sectorial económico-ocupacional y segmentos del mercado laboral

De acuerdo con la perspectiva conceptual desarrollada, cabe esperar que las condiciones de heterogeneidad estructural segmenten la demanda de fuerza de trabajo, lo que repercutiría en las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas a las que pertenecen los trabajadores. Desde este enfoque, la demanda de empleo presentaría distintas modalidades: 1) la demanda de los sectores modernos y concentrados; 2) la demanda del sector moderno intermedio o “cuasi formal”; 3) y una demanda residual que queda determinada por la magnitud de la población empleada en el sector microinformal (Salvia, 2012: 210). El tamaño de este último es “residual”: resulta de restar a la oferta laboral que generan los hogares la magnitud de la demanda de los sectores concentrados e intermedios¹⁵³.

Para caracterizar las posiciones económico-ocupacionales a las que accedieron los hogares a través de sus miembros, recuperamos la tipología de inserciones presentada en el capítulo III, que recoge nuestro marco conceptual y tiene significado teórico en el contexto de la tesis de la heterogeneidad estructural. Reponemos el abordaje clásico formulado por el Programa Regional de Empleo para América Latina (PREALC, 1978) en relación con la inserción sectorial económico-ocupacional de la fuerza de trabajo¹⁵⁴. Consideramos como elemento

¹⁵³ Un supuesto subyacente de este enfoque es que un proceso de desarrollo económico implica la absorción por parte de éstos de la fuerza laboral ubicada en el sector de baja productividad (Rodríguez, 2001; Salvia, 2012).

¹⁵⁴ Este enfoque –como señalamos en el capítulo III– ha sido retomado por el conjunto de trabajos individuales y colectivos que desarrolla el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Agustín Salvia.

decisivo el nivel de productividad de las unidades económicas en las que los ocupados se desempeñan; de allí la distinción entre un sector formal, tanto público como privado, y otro microinformal de baja productividad. En la tipología también incluimos aquellos rasgos de las inserciones laborales de los asalariados que remiten a la “segmentación” del mercado para dar cuenta de empleos “secundarios”, no regulados o precarios (Doeringer y Piore, 1970; Fernández Hueriga, 2010; Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]; Neffa, 2008; Solimano, 1988).

A lo largo de este libro definimos la inserción del hogar en la estructura económico-ocupacional a partir de la posición de su principal sostén. Sin embargo, en este apartado retomamos la sugerencia de Torrado (2006 [1982]: 22) de considerar la especificidad de aquellos hogares en los que hay miembros con posiciones ocupacionales diferentes a las del PSH, lo cual ocasiona situaciones “híbridas” o “mixtas”¹⁵⁵.

La *hipótesis de trabajo* que abordamos en esta sección plantea que, si bien cabría esperar un proceso de recomposición del acceso de los hogares a posiciones laborales en los sectores más dinámicos de la estructura económico-ocupacional (mediante su fuerza de trabajo activa), habría estado limitado a los primeros años del ciclo de políticas heterodoxas (2003-2008), mientras que los hogares se habrían enfrentado a una estructura más rígida durante la segunda fase el período (2008-2014). Estos comportamientos expresarían algunos de los obstáculos estructurales del régimen de acumulación argentino, relacionados con su patrón de especialización productiva y la dualidad estructural. Por consiguiente, a manera de balance del período, una parte de los hogares sólo habría conseguido acceder a ocupaciones en el sector informal o abiertamente marginales, con independencia de su mayor o menor capacidad de combinar posiciones laborales.

Esta hipótesis es abordada a lo largo de tres apartados. En el primero exploramos los cambios en la inserción económico-ocupacional de los hogares a partir de la posición del principal proveedor. En el segundo incorporamos al análisis las posiciones ocupadas por los trabajadores secundarios; de este modo, evaluamos los niveles de “homogeneidad” interna (en términos socio-ocupacionales) de las unidades domésticas. En el tercer apartado abordamos los alcances de la informalidad de subsistencia o marginalidad económica.

¹⁵⁵ Este problema ha sido extensamente tratado por los análisis de clases sociales que deben adscribir el hogar a una posición de clase. Torrado (2006 [1982], 1992) ha sistematizado las dificultades metodológicas implícitas en este tipo de análisis.

4.2.1. Posición económico-ocupacional de los hogares: una evaluación a partir de la inserción del principal sostén del hogar

El estudio del acceso de los hogares a distintas posiciones económico-ocupacionales a través de su PSH nos brinda una primera aproximación a su vínculo con la heterogeneidad estructural y la distribución primaria del ingreso. En este sentido, de acuerdo con la *hipótesis* planteada, deberíamos observar que, más allá de un proceso de recomposición inicial, los hogares habrían enfrentado límites a la participación en los sectores más dinámicos de la estructura ocupacional a través de su principal sostén.

Durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014) constatamos una expansión del volumen de demanda de empleo que tuvo entre sus efectos más ostensibles la retracción de la proporción de hogares encabezados por un desocupado o un beneficiario de un programa de empleo (que pasaron de 9,1% a 2,6%)¹⁵⁶ (Cuadro 4.3). Este proceso de absorción se desarrolló en la dirección sugerida por nuestra hipótesis. La reactivación de actividades vinculadas con el mercado interno favoreció la participación de los hogares en unidades productivas del sector formal privado a través de su PSH (se incrementó de 39,2% a 46,2%). Al evaluar las fuentes que explican tal incremento, advertimos el mayor crecimiento de la participación de hogares encabezados por asalariados registrados y, en particular, de los que pertenecían a empresas medianas y grandes. También aumentaron las posiciones en el sector público (de 15% a 18,2%)¹⁵⁷. En contraste, fue menos intensa la reducción de la participación en posiciones del sector microinformal: cerca de una de cada tres unidades domésticas permanecieron ligadas al estrato de baja productividad a través de su PSH durante todo el período (36,7% a 33%).

¹⁵⁶ En este sentido, debe recordarse el carácter masivo que asumió el PJJHD. Ello explica la elevada proporción de hogares encabezados por un beneficiario de programas de empleo durante los años 2002-2003.

¹⁵⁷ En una investigación previa sobre la evolución de la estructura individual de la fuerza de trabajo desde mediados de los setenta (limitada, por disponibilidad de datos, al Gran Buenos Aires), hallamos que, entre 2001 y 2003, el sector formal público y privado perdió 6 pp. de participación como resultado de la crisis y el mayor desempleo (Poy, 2017a: 361). Este dato sugiere que una parte significativa de la expansión aquí observada obedece a un proceso de recuperación de los niveles previos.

Cuadro 4.3. Distribución de hogares según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	39,2	44,1	47,9	46,5	47,7	46,2	8,6***	-0,1	-1,5***	7,0***
<i>No asalariados y directivos</i>	5,2	5,5	5,7	5,7	5,4	4,9	0,4	-0,3	-0,5**	-0,4
<i>Asalariados</i>	34,0	38,6	42,2	40,8	42,4	41,4	8,2***	0,1	-1,0*	7,3***
<i>En empresas medianas y grandes^(b)</i>	14,8	16,7	19,5	18,9	19,6	20,1	4,7***	0,1	0,5	5,3***
Registrados	13,2	15,0	17,9	17,4	18,0	18,6	4,7***	0,1	0,6	5,5***
No registrados	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	0,0	0,0	-0,1	-0,2
<i>En empresas pequeñas^(c)</i>	19,2	21,9	22,7	21,9	22,7	21,2	3,5***	0,0	-1,5***	2,0***
Registrados	12,1	13,8	15,4	15,7	16,1	15,1	3,3***	0,7**	-1,1**	2,9***
No registrados	7,1	8,1	7,3	6,2	6,6	6,2	0,2	-0,7**	-0,4	-0,9***
Sector público	15,0	15,9	17,0	17,1	17,9	18,2	1,9***	1,0**	0,2	3,2***
<i>Empleados del sector público</i>	15,0	15,9	17,0	17,1	17,9	18,2	1,9***	1,0**	0,2	3,2***
Sector microinformal	36,7	35,0	32,9	33,6	32,2	33,0	-3,7***	-0,7	0,8	-3,7***
<i>No asalariados</i>	19,5	19,1	18,0	18,3	17,0	17,2	-1,5***	-1,0**	0,2	-2,3***
<i>Patrones de microempresas</i>	2,0	2,3	2,8	2,7	2,5	2,0	0,9***	-0,4*	-0,5***	0,1
<i>TCP informales</i>	17,5	16,9	15,1	15,5	14,5	15,2	-2,4***	-0,6	0,6	-2,4***
<i>Asalariados</i>	17,2	15,9	14,9	15,3	15,2	15,8	-2,2***	0,2	0,6	-1,4***
<i>En microempresas^(d)</i>	11,9	10,9	10,6	10,9	10,4	11,1	-1,4***	-0,2	0,8**	-0,8*
Registrados	3,3	3,0	3,5	4,0	4,1	4,1	0,3	0,6**	0,0	0,9***
No registrados	8,7	7,9	7,0	6,9	6,3	7,0	-1,6***	-0,7**	0,8**	-1,6***
<i>Servicio doméstico</i>	5,3	4,9	4,4	4,4	4,8	4,7	-0,9***	0,4*	-0,2	-0,6**
Registrados	0,4	0,3	0,6	0,8	0,9	1,2	0,2**	0,4***	0,2*	0,8***
No registrados	4,9	4,6	3,8	3,6	3,9	3,5	-1,1***	0,1	-0,4*	-1,4***
Desoc. y benef. planes de empleo	9,1	5,1	2,2	2,8	2,1	2,6	-6,8***	-0,1	0,5***	-6,5***
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1 / (b) Establecimientos con más de 40 ocupados / (c) Establecimientos con más de 5 y hasta 40 ocupados / (d) Establecimientos hasta 5 ocupados.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Ahora bien, los diferentes períodos y subperíodos identificados revelan comportamientos disímiles con respecto a la evolución de la participación laboral de las unidades domésticas. La fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008) estuvo caracterizada por una elevada elasticidad empleo-producto (Beccaria y Maurizio, 2012). El tipo de cambio competitivo favoreció a las ramas altamente demandantes de fuerza de trabajo –en especial, de baja calificación– y la utilización de la capacidad instalada ociosa (Beccaria y Maurizio, 2012; Beccaria y Groisman, 2015; Fernández Bugna y Porta, 2008; Gasparini, Cruces y Tornarolli, 2016; Groisman, 2011; Panigo y Neffa, 2009). La confluencia de tales elementos determinó una reversión de la dinámica expulsiva que había tenido el mercado laboral desde fines de los noventa.

Durante esta etapa se concentraron las tendencias de recomposición previamente advertidas. Entre el 2003 y el 2008 se redujo la incidencia de hogares cuyo principal proveedor se encontraba desempleado o era beneficiario de un programa de empleo (de 9,1% a 2,2%). De manera simultánea, se incrementó la participación de los hogares en el sector formal privado (entre el 2003 y el 2008, se incrementó de 39,2% a 47,9%) y público (15% a 17%). Asimismo, se retrajo moderadamente la participación en posiciones del sector microinformal (36,7% a 32,9%).

La expansión del porcentaje de hogares que participaban en el sector formal privado se originó en el aumento de posiciones asalariadas (34% a 42,2%). Como destacamos en el capítulo I, una serie de políticas laborales activas propendieron a una mayor regulación del mercado laboral. En especial, se destacaron medidas dirigidas a una mayor simplificación registral y a la recomposición de la contraloría estatal orientada a reducir el fraude laboral. Coincidimos con Beccaria y Maurizio (2012) en que se trata de uno de los elementos más contrastantes con respecto a la dinámica ocupacional de los noventa. En este sentido, observamos que casi la totalidad del crecimiento de posiciones ocupacionales en el sector formal estuvo ligada a empleos registrados, tanto en establecimientos grandes (13,2% a 17,9%) como pequeños (12,1% a 15,4%).

En este período se redujo levemente la proporción de hogares que participaban en el sector microinformal a través de su principal sostén. Ello se debió tanto a una reducción de aquellos cuyo PSH era no asalariado (19,5% a 18%) como asalariado (17,2% a 14,9%). Entre los hogares cuyo PSH era no asalariado, la reducción más importante se originó entre los trabajadores por cuenta propia informales (17,5% a 15,1%), que responden a los rasgos

arquetípicos del autoempleo. Podemos inferir que durante esta etapa perdieron incidencia las inserciones más directamente asociadas a la búsqueda de subsistencia y “refugio” luego de la crisis de la convertibilidad. En el caso de los hogares encabezados por asalariados del sector microinformal, se observó un comportamiento semejante al del sector formal privado: disminuyó la participación relativa de quienes tenían un empleo no registrado y se mantuvo estable la de aquellos que tenían uno registrado.

A partir de los años 2007-2008, algunos de los principales factores que potenciaron el ciclo posdevaluación comenzaron a debilitarse. El ritmo de crecimiento económico se redujo, la inflación propició una apreciación del tipo de cambio y ello derivó en la progresiva reaparición de la restricción externa. Durante este período de crisis, recuperación y estancamiento, reconocimos la intensificación de políticas macroeconómicas dirigidas a promover la demanda interna y a sostener el nivel de actividad. Superada la crisis del 2009, se registró un nuevo *boom* de crecimiento entre el 2010 y el 2011 que luego declinó y se convirtió en un virtual proceso de estancamiento.

Entre el 2008 y el 2011 se mantuvieron los rasgos del ciclo previo en cuanto a la participación de los hogares en la estructura social del trabajo. A partir de la información proporcionada por el Cuadro 4.3, observamos que se incrementó de forma exigua la proporción de hogares cuyo PSH disponía de un empleo registrado en establecimientos pequeños del sector formal (15,4% a 16,1%), en establecimientos del sector microinformal (3,5% a 4,1%) o como trabajadora registrada del servicio doméstico (0,6% a 0,9%). El resto de la estructura económico-ocupacional evaluada a través de la posición del principal sostén de los hogares se mantuvo inalterada con respecto al período posdevaluación.

Entre el 2011 y el 2014, las políticas económicas orientadas a sostener el nivel de actividad no habrían propiciado cambios sustantivos en la demanda sectorial de empleo, al menos con respecto a la absorción de fuerza laboral en los sectores más modernos del sistema económico. Por el contrario, la menor capacidad de absorción laboral en esta etapa se tradujo en las oportunidades a las que accedieron los hogares por medio de su PSH. De hecho, por primera vez en toda la posconvertibilidad, aumentó levemente el porcentaje de hogares cuyo PSH se encontraba desocupado o era beneficiario de un plan de empleo (2,2% a 2,6%). No obstante, éste no fue el único ni el principal rasgo de la evolución durante esta etapa. En tanto que en las fases precedentes habíamos constatado un incremento de la proporción de hogares cuyo principal proveedor se ubicaba en el sector formal privado, en esta fase de estancamiento

económico se observó un comportamiento opuesto (47,7% a 46,2%). En contraste, se mantuvo inalterada la proporción de hogares con PSH en el sector microinformal (32,2% a 33%) o en el sector público (17,9% a 18,2%).

La reducción de la proporción de hogares cuyo PSH pertenecía al sector formal privado se originó en la contracción de posiciones no asalariadas (5,4% a 4,9%) y asalariadas (42,4% a 41,4%). Entre estas últimas, la retracción se debió a la menor incidencia de hogares cuyo PSH tenía un empleo registrado en establecimientos pequeños (16,1% a 15,1%). Por su parte, se incrementó levemente la proporción de hogares cuyo PSH tenía un empleo no registrado en un establecimiento del sector microinformal (6,3% a 7%). El resto de la estructura económico-ocupacional a la que accedieron las unidades domésticas se mantuvo casi inalterada. En síntesis, a lo largo de esta fase, la demanda laboral del sector formal público y privado habría perdido su capacidad de modificar la estructura de posiciones a la que accedían los hogares por medio de su principal proveedor.

El análisis presentado da cuenta de dos dinámicas superpuestas con respecto a las formas de inserción económico-ocupacional de los hogares (evaluadas a través de su PSH) durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014). Por una parte, advertimos una recuperación de la incidencia de aquellos que participaban de posiciones asalariadas en el sector formal público y privado –en especial, de aquellas registradas en la seguridad social–. Ello fue concomitante con la no menos significativa reducción de la proporción de hogares que disponían de un PSH desocupado y con una exigua retracción de los que participaban en el sector microinformal. Por otra parte, un rasgo significativo que emerge del análisis presentado es que, luego de aquella recomposición derivada del cambio de régimen macroeconómico, las transformaciones en la estructura económico-ocupacional se desaceleraron. En este punto, se mantuvo la prevalencia de una demanda laboral dual vinculada a la persistencia de la heterogeneidad estructural.

4.2.2. Inserción laboral de los trabajadores secundarios y configuración de situaciones “mixtas”

Dado que el eje de nuestra indagación son los hogares, cabe complementar el análisis precedente con la caracterización de las formas de inserción económico-ocupacional de otros miembros del hogar. Este examen nos brindará elementos para comprender mejor de qué manera la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y los procesos de segmentación laboral se tradujeron en las unidades domésticas.

Como señalamos, uno de los rasgos del ciclo de políticas heterodoxas fue la expansión de la demanda de empleo y de las chances que tuvieron los hogares de incorporar fuerza de trabajo en el mercado laboral. Al respecto, constatamos una mayor presencia de unidades domésticas con trabajadores secundarios. Por ello, a continuación, analizamos en qué medida los hogares combinaron posiciones económico-ocupacionales. Por consiguiente, el apartado busca evaluar el grado de “homogeneidad” socio-ocupacional de los hogares; en particular, procuramos indagar la capacidad que tuvieron aquellos hogares cuyo PSH se insertaba en el sector microinformal de participar del sector formal público o privado mediante ocupados secundarios.

La posibilidad de que en los hogares se combinen inserciones ocupacionales ha sido reconocida como un aspecto relevante por diferentes perspectivas conceptuales. Desde los estudios del mercado de trabajo, se relaciona dicha posibilidad con el carácter “voluntario” del empleo informal (Maloney, 2004; Perry et al., 2007). Se argumenta que la informalidad ofrece “flexibilidad” a trabajadores secundarios de hogares que ya disponen de un ocupado en el sector formal o en un empleo registrado¹⁵⁸. Desde los estudios de estratificación social también se apunta a la combinación de posiciones de clase. En el caso argentino, algunos investigadores destacan la combinación de ocupaciones en el seno de los hogares y, con base en ello, descartan o relativizan la existencia de una fracción “informal” de la clase trabajadora (Dalle et al., 2015; Elbert, 2015).

Desde el enfoque analítico sostenido en esta investigación, los procesos estructurales ligados a la demanda laboral serían dominantes en la capacidad de acceder a empleos en los distintos sectores económico-ocupacionales. Por consiguiente, cabe suponer que, si bien es posible reconocer la posibilidad de que en el seno de las unidades domésticas se combinen posiciones económico-ocupacionales, una parte de éstas habría permanecido ligada exclusivamente a posiciones en el sector microinformal o en situación de desempleo (incluyendo aquí a beneficiarios de planes de empleo).

Aquí retomamos la centralidad de las “inserciones mixtas” de los hogares a través del estudio de las diferentes posiciones a las que accedieron. Con este propósito, recuperamos la tipología de inserciones –presentada en el capítulo III– que considera de modo simultáneo al principal

¹⁵⁸ Si bien estos autores reconocen también que la informalidad tiene un componente de “exclusión”, un rasgo distintivo de su planteo es el carácter voluntario que implica para algunos individuos, ya sea que no desean someterse a una relación asalariada o que disponen de otro miembro ocupado (Perry et al., 2007).

proveedor y a los ocupados secundarios¹⁵⁹. Al respecto, cabe subrayar que esta tipología otorga centralidad a la inserción laboral en diferentes sectores económico-ocupacionales (formal privado, público y microinformal); por tanto, nos referiremos a los “tipos de inserción sectorial económico-ocupacional” de los hogares a través del conjunto de su fuerza de trabajo activa (lo que incluye a ocupados y desocupados). En este sentido, no informa sobre la calidad de los empleos a los que acceden, aspecto que remite –según el enfoque teórico adoptado– al segmento del mercado en el que participa la fuerza de trabajo asalariada de los hogares.

Figura 4.1. Tipos de inserción sectorial económico-ocupacional del hogar (considerando al conjunto de su fuerza de trabajo activa).

		POSICIÓN PRINCIPAL SOSTÉN DEL HOGAR	
		SECTOR FORMAL PRIVADO O SECTOR PÚBLICO	SECTOR MICROINFORMAL ^(a)
POSICIÓN OCUPADOS SECUNDARIOS	SECTOR FORMAL PRIVADO O SECTOR PÚBLICO	HOGARES EN EL SECTOR FORMAL	HOGARES CON POSICIÓN OCUPACIONAL MIXTA
	SECTOR MICROINFORMAL ^(a)	HOGARES CON POSICIÓN OCUPACIONAL MIXTA	HOGARES EN EL SECTOR MICROINFORMAL

Nota: (a) Incluye desocupados y beneficiarios de planes de empleo.

Fuente: elaboración propia.

Reconocemos cuatro tipos de inserción sectorial económico-ocupacional. Al primer tipo pertenecen aquellos hogares cuyos miembros son todos no asalariados del sector formal privado o asalariados del sector formal público o privado. No incluimos aquí a aquellos hogares que tienen algún miembro desocupado o que es beneficiario de un programa de empleo. El segundo tipo abarca a los hogares cuyo PSH pertenece al sector formal y que cuentan con otros ocupados en el sector microinformal, en situación de desempleo o que son beneficiarios de un programa de empleo. El tercer tipo está integrado por los hogares cuyo PSH pertenece al sector microinformal, es desocupado o beneficiario de un programa de empleo y tienen otros ocupados secundarios en el sector formal (público o privado). Por último, el cuarto tipo involucra a aquellos hogares cuyos integrantes se ubican únicamente en el sector microinformal, son desempleados o beneficiarios de un programa de empleo. En síntesis, tal como se exhibe en la Figura 4.1, el primer y el cuarto grupo son “homogéneos” desde el punto de vista de su inserción sectorial económico-ocupacional, mientras que los dos restantes son “mixtos”.

¹⁵⁹ Cabe notar que aquellos hogares que sólo disponen de un ocupado se ubican, dentro de esta tipología, en la posición que corresponde a su PSH.

En el Cuadro 4.4 se presentan los resultados que dan cuenta de las distintas formas de inserción sectorial económico-ocupacional de los hogares bajo el ciclo de políticas heterodoxas posconvertibilidad (2003-2014), cuando se consideran de forma simultánea las posiciones de toda la fuerza de trabajo activa. Durante este período, se expandió la proporción de hogares que participaban del sector formal público y privado a través de todos sus miembros (35,3% a 46,9%). En cuanto a las posiciones “mixtas”, cabe resaltar la estabilidad de tales modalidades de inserción (25,2% a 24,2%). Entre éstas, resultan más frecuentes las caracterizadas por la presencia del PSH en el sector formal público o privado y otros trabajadores secundarios en el sector microinformal (19% y 18% entre puntas del período), que aquellas en las que el PSH pertenece al sector microinformal y hay otros ocupados en el sector formal público o privado (6,2% en el 2003 y en el 2014). Por último, observamos la retracción de la proporción de hogares que sólo participaban en el sector microinformal y/o que sólo disponían de fuerza de trabajo desempleada o beneficiaria de programas de empleo (39,5% a 29,4%).

Cuadro 4.4. Distribución de hogares según tipo de inserción sectorial económico-ocupacional. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Hogares en el sector formal	35,3	39,8	45,9	44,6	47,3	46,4	10,7***	1,4**	-0,9	11,1***
Hogares con posiciones mixtas	25,2	26,4	25,8	25,2	24,6	24,2	0,5	-1,2**	-0,4	-1,0*
<i>PSH en sector formal y ocupados en sector informal^(b)</i>	19,0	20,1	18,9	19,1	18,4	18,0	-0,1	-0,5	-0,4	-1,0**
<i>PSH en sector informal^(b) y ocupados en sector formal</i>	6,2	6,3	6,9	6,1	6,2	6,2	0,6**	-0,7**	0,0	-0,1
Hogares en el sector microinformal^(b)	39,5	33,8	28,3	30,2	28,1	29,4	-11,2***	-0,2	1,3**	-10,1***
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1 / (b) Incluye desocupados y beneficiarios de planes de empleo.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

La mayor parte de estas modificaciones se registraron durante la fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008). En esta etapa creció el porcentaje de hogares que participaban únicamente del sector formal a través de todos sus miembros (35,3% a 45,9%) y se mantuvieron estables las posiciones “mixtas” (25,2% a 25,8%). A su vez, durante estos años se retrajo la proporción de hogares que sólo participaban en el sector microinformal o que sólo disponían de fuerza de trabajo desempleada o beneficiaria de programas de empleo

(39,5% a 28,3%), lo que puede asociarse principalmente a lo ocurrido con la fuerte injerencia del PJJHD a comienzos del ciclo.

En contraste, durante la etapa de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2014), los procesos descritos se estabilizaron y las modificaciones se hicieron menos ostensibles. Al respecto, podemos diferenciar dos momentos. Entre el 2008 y el 2011 volvió a aumentar – aunque a un ritmo más débil que en la fase previa– el porcentaje de hogares que participaban exclusivamente del sector formal (45,9% a 47,3%)¹⁶⁰. En contrapartida, se redujo levemente la incidencia de los hogares con posiciones “mixtas” (25,8% a 24,6%) y se mantuvo inalterada la proporción de aquellos que participaban exclusivamente en el sector microinformal (28,3% a 28,1%).

En los años finales del ciclo (2011-2014), en cambio, advertimos un comportamiento distinto. Por una parte, se mantuvo estable tanto la incidencia de aquellos hogares que tenían a todos sus miembros en el sector formal público y privado como de aquellos con inserciones mixtas. Por otra parte, aumentó la incidencia de hogares cuyos miembros participaban exclusivamente del sector microinformal, en programas de empleo o en situaciones de desempleo (28,1% a 29,4%).

En síntesis, resulta evidente que el cambio de reglas macroeconómicas durante la posconvertibilidad propició transformaciones en las formas de inserción sectorial económico-ocupacional, al considerar al conjunto de la fuerza de trabajo activa de la que disponían los hogares. La principal expresión de tales cambios fue el incremento de la proporción de unidades domésticas que se insertaban exclusivamente del sector formal público o privado a través de todos sus integrantes. Ahora bien, en línea con la tesis teórica planteada, advertimos también una persistente fragmentación de las modalidades de tales modalidades de inserción sectorial económico-ocupacional: alrededor de un tercio de los hogares participaban, exclusivamente, del sector microinformal (aun considerando al conjunto de su fuerza de trabajo activa). Por añadidura, este patrón no se alteró de manera significativa luego del 2008, cuando el modelo económico empezó a enfrentar diversas restricciones.

El análisis de las formas de inserción sectorial económico-ocupacional realizado hasta aquí no nos brinda información acerca de la calidad de los puestos laborales a los que accedieron los hogares mediante sus miembros ocupados. Si bien anteriormente llevamos adelante tal

¹⁶⁰ La información proporcionada por el Cuadro 4.4 también da cuenta de un empeoramiento relativo durante la crisis del 2009, que se plasmó en la mayor proporción de hogares ubicados en el sector microinformal y la reducción de aquellos que sólo pertenecían al sector formal.

análisis a partir de la posición ocupacional del PSH, no conocemos aún en qué medida las unidades domésticas accedieron a posiciones laborales en distintos segmentos del mercado de trabajo.

De esta manera, nos aproximamos a una dimensión relevante del análisis de la estructura social del trabajo. En efecto, si bien puede abordarse desde distintos enfoques, la teoría de la segmentación del mercado laboral describe un proceso de heterogeneización del colectivo de asalariados (Doeringer y Piore, 1970; Fernández Huerga, 2010; Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]). Al remitir a la constelación doméstica a la que tales trabajadores pertenecen, el análisis de la segmentación se enriquece, puesto que se consideran las condiciones en las que se reproduce la fuerza de trabajo.

Aquí describimos las posibilidades de acceso que, al nivel de los hogares, se registraron con respecto a los empleos en el segmento primario (es decir, a puestos registrados en la seguridad social) a través de sus diferentes integrantes¹⁶¹. Cabe subrayar que la información fue construida para aquellos hogares con PSH activo que dispusieran de al menos un trabajador asalariado. Como se advierte en la última fila del Cuadro 4.5, durante la posconvertibilidad tales hogares representaban alrededor de 8 de cada 10 unidades domésticas con PSH activo.

Si bien entre puntas del período (2003-2014), se incrementó la proporción de hogares con asalariados que disponían de al menos un ocupado en el segmento primario del empleo (65,9% a 76,8%), el comportamiento de los distintos subperíodos revela pautas diferenciadas. Los cambios advertidos se concentraron en la fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008): la proporción de hogares con al menos un ocupado registrado creció de 65,9% a 74,2%. Entre el 2008 y el 2011 volvió a incrementarse la proporción de hogares que tenían al menos un trabajador registrado (74,2% a 76%); en contraste, a partir del 2011, los cambios no resultaron significativos.

De esta manera, durante la posconvertibilidad creció la proporción de hogares que disponían de al menos un trabajador asalariado registrado. No obstante, alrededor de una de cada cuatro unidades domésticas con asalariados no tenían ningún ocupado en el segmento primario del mercado laboral. De igual modo que en el caso de la distribución sectorial económico-ocupacional, este patrón se mantuvo prácticamente inalterado a partir del 2008.

¹⁶¹ Se trata de un tipo de análisis pertinente en tanto que, con frecuencia, los puestos registrados en la seguridad social ofrecen protección no sólo al trabajador sino a los integrantes de su grupo familiar.

Cuadro 4.5. Acceso a empleos en el segmento primario del mercado laboral según tipo de inserción sectorial económico-ocupacional del hogar. Hogares con PSH activo y al menos un asalariado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Hogares en el sector formal	42,8	46,5	51,8	50,6	53,0	52,9				
<i>Con al menos un empleo registrado</i>	36,6	39,5	45,5	45,0	47,2	47,2	8,9***	1,7**	0,0	10,6***
<i>Sin empleos registrados</i>	6,2	7,0	6,3	5,5	5,8	5,7				
Hogares mixtos	32,1	32,0	30,0	29,8	28,5	28,4				
<i>Con al menos un empleo registrado</i>	24,8	24,5	24,3	24,8	23,6	23,8	-0,5	-0,7	0,2	-1,0*
<i>Sin empleos registrados</i>	7,3	7,5	5,7	5,0	5,0	4,6				
Hogares en el sector microinformal	25,0	21,5	18,3	19,7	18,5	18,7				
<i>Con al menos un empleo registrado</i>	4,5	3,6	4,4	5,2	5,3	5,8	-0,1	0,9***	0,5*	1,3***
<i>Sin empleos registrados</i>	20,6	17,9	13,9	14,4	13,2	12,9				
Total de hogares con asalariados	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
<i>Con al menos un empleo registrado</i>	65,9	67,5	74,2	75,0	76,0	76,8	8,3***	1,8***	0,7	10,8***
<i>Sin empleos registrados</i>	34,1	32,5	25,8	25,0	24,0	23,2				
Hogares con asalariados sobre total^(b)	76,0	80,5	83,6	82,7	83,9	82,9				

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / **p-value < 0,05 / *p-value < 0,1 / (b) Porcentaje de hogares con al menos un asalariado sobre el total de hogares con PSH activo.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Un aspecto significativo remite a la desigual capacidad de acceder a empleos en el segmento primario del mercado laboral según la posición sectorial económico-ocupacional del hogar. En este punto, verificamos una pauta de desigualdad consistente a lo largo del ciclo de políticas heterodoxas. Por una parte, entre aquellos hogares que pertenecían al sector formal público o privado a través de todos sus integrantes y entre los que tenían inserciones mixtas, lo más frecuente fue disponer de al menos un empleo registrado. Por otra parte, entre los hogares que pertenecían al sector microinformal a través del conjunto de su fuerza de trabajo activa, la pauta era la inversa: lo más habitual fue no acceder a empleos en el segmento regulado del mercado de trabajo¹⁶². Ello revela –desde una perspectiva centrada en los hogares– la estrecha correlación que mantuvieron los procesos de heterogeneidad estructural y segmentación laboral, y sus consecuencias en términos de articulación de desigualdades ocupacionales.

Los datos presentados en este apartado sugieren que la combinación de inserciones sectoriales económico-ocupacionales en los hogares (es decir, posiciones en distintos sectores

¹⁶² Esto podría formularse alternativamente en términos de una razón de razones (*odds ratio*). En el 2014, un hogar en el sector formal tenía 18 veces más oportunidades de acceder a un empleo registrado que de no acceder, en comparación con aquellos del sector microinformal.

económico-ocupacionales a través de su fuerza de trabajo activa) habrían sido limitadas y que la segmentación advertida mediante el examen de la posición del principal proveedor se habría mantenido aun considerando al conjunto de los integrantes de las unidades domésticas. Según la información proporcionada, la “estrategia” de combinar formas de inserción no habría sido exitosa o no habría estado al alcance de una parte significativa de los hogares. Estos resultados no acompañarían, al menos para una parte significativa de los hogares urbanos, el argumento acerca del carácter “voluntario” de las inserciones en el sector microinformal. En este sentido, se habría verificado una suerte de “efecto Mateo”¹⁶³ en la distribución de oportunidades laborales: los hogares que tenían fuerza de trabajo ubicada en las mejores posiciones de la estructura social del trabajo (ya sea en el sector formal público y privado u otros empleos registrados) habrían dispuesto de ocupaciones homólogas para sus trabajadores secundarios; un proceso contrario se habría constatado entre los hogares que disponían de ocupaciones en el estrato más bajo de la estructura laboral.

Tres elementos harían inteligible la dinámica observada. En primer lugar, los procesos de selección utilizados por las empresas suelen apelar a redes sociales de los propios trabajadores, lo cual opera en los hechos como un mecanismo de “homogamia” laboral (Groisman, 2011; Sconfienza, 2016). En segundo lugar, en el funcionamiento del sector informal es frecuente el solapamiento de unidades domésticas y económicas, lo que explicaría la participación de fuerza de trabajo familiar en una misma unidad productiva (Tokman, 2000). Por último, las características de la marginalidad económica y la intensificación de los procesos de segregación residencial en los años recientes operarían en el mismo sentido (Salvia, 2016)¹⁶⁴.

El estudio de las formas de inserción sectorial económico-ocupacional de los hogares mediante el conjunto de su fuerza de trabajo activa complementa los resultados alcanzados previamente, cuando consideramos la posición económico-ocupacional del PSH. Los datos refuerzan la imagen de una dinámica laboral “dual”. Por una parte, verificamos una expansión

¹⁶³ Este efecto fue planteado por Merton (1968) y apunta a describir la reproducción de las desigualdades. Recibe su nombre de un fragmento del evangelio de Mateo, que señala: “porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más”. Desde entonces, constituye un efecto ampliamente estudiado en las investigaciones sobre desigualdad, ya que caracteriza procesos en los que aquellos mejor posicionados acaparan, a su vez, las mejores posiciones.

¹⁶⁴ En un trabajo previo encontramos que durante la posconvertibilidad mantuvo vigencia una “penalidad” en la participación en empleos de calidad, derivada del tipo de inserción laboral del jefe de hogar entre los ocupados secundarios. Es decir, que —a igualdad de otros atributos individuales— los trabajadores que provenían de un hogar con un jefe informal tenían menores chances de disponer de un empleo formal que los que pertenecían a un hogar con un jefe formal (Poy, 2016).

de la participación de hogares exclusivamente en el sector formal público y privado. Por otra parte, advertimos que casi un tercio (29,4%) de los hogares participaban exclusivamente del sector microinformal (o en situación de desempleo y/o en un programa de empleo) a través de sus integrantes activos. Además, entre estos últimos había una singular propensión a disponer de empleos en el segmento secundario del mercado de trabajo, sin acceder a otro tipo de ocupaciones.

4.2.3. Excedentes de fuerza de trabajo e informalidad de subsistencia

En el capítulo II destacamos la estrecha relación existente entre la heterogeneidad estructural y las características de la demanda laboral. Desde este enfoque teórico, un rasgo crucial de los sistemas económicos atravesados por un patrón de heterogeneidad estructural es que los sectores más concentrados no ocupan al conjunto de la fuerza de trabajo disponible, lo que origina actividades de baja o nula productividad en respuesta a la demanda insuficiente. En los sesenta, la reflexión sobre la marginalidad en clave marxista se orientó a explicar la existencia de una porción de fuerza de trabajo que resultaba excedente para el funcionamiento del capitalismo en América Latina (2003 [1969], 1999; Nun et al., 1968). En el marxismo clásico, la población supernumeraria fungía como “ejército industrial de reserva”, pero el enfoque de la “marginalidad económica” planteó el carácter desmedido de este excedente. Para estos teóricos, existía un excedente estructural de fuerza de trabajo que no sólo no era absorbido por el desarrollo capitalista, sino que tampoco cumplía el papel de abaratar los salarios en el sector más dinámico del sistema económico (Nun, 2003 [1969]).

El enfoque de la marginalidad económica se entronca con la perspectiva de la heterogeneidad estructural y la dinámica del desarrollo desigual (Salvia, 2012). Los sectores económicos más concentrados (hoy globalizados o integrados a las cadenas internacionales de valor) tienen una capacidad limitada de absorber fuerza de trabajo, lo cual origina un excedente estructural de fuerza laboral. Una parte significativa de ese excedente es ocupado por sectores económicos competitivos, pequeños capitales industriales o comerciales que, a su vez, dejan en condición de excedente a otra porción de la fuerza de trabajo.

En su revisión conceptual del planteo de la “masa marginal”, Nun (2003 [1999]) señala dos modos diferentes de entenderla. En un “sentido simple”, incluye a todos los trabajadores que no son ocupados por el capital más concentrado. En un “sentido complejo”, se toma en cuenta la funcionalidad que tiene la fuerza de trabajo ocupada en otros circuitos de acumulación que

no son monopólicos (Nun, 2003 [1999])¹⁶⁵. Según este último sentido (más restringido), la fuerza de trabajo en condiciones de marginalidad se ubicaría en las posiciones más bajas de la estructura ocupacional. Es esta segunda aproximación la que retomamos en esta investigación.

Nos aproximamos a la definición “restringida” de la marginalidad a partir del concepto de “informalidad de subsistencia” (Comas, 2012). Siguiendo a Pérez-Sáinz, entendemos a estas posiciones como un “... tipo de actividades [que] representa –ante todo– un medio de supervivencia; y, en este sentido, informalidad aparece como sinónimo de economía de la pobreza” (1995: 38)¹⁶⁶. Además, incluimos dentro de la definición operativa de marginalidad a otras expresiones de fuerza de trabajo abiertamente excedente, como el desempleo de larga duración y los beneficiarios de programas sociales de empleo (Maceira, 2016; Poy, 2017b; Salvia, 2012). Recordemos que, en términos operativos, consideramos en situación de marginalidad económica a tres modalidades de inserción (véase la tipología detallada en el capítulo III). En primer lugar, a los “desocupados marginales”, es decir, de larga duración o de corta duración pero con muy bajo nivel educativo. En segundo lugar, a los “beneficiarios de planes de empleo”, que declaran que su ocupación principal es un plan de empleo. En tercer lugar, los “ocupados de subsistencia”, asalariados no registrados o no asalariados del sector microinformal en actividades de muy baja remuneración.

Investigaciones anteriores realizadas desde esta perspectiva teórico-metodológica señalaron una intensa expansión de la marginalidad económica durante los noventa (Comas, 2012; Poy, 2017b; Salvia, 2012; Salvia, Vera y Poy, 2015). Al respecto, cabe formular como *hipótesis de trabajo* que durante el período de recuperación posdevaluación (2003-2008) se habría verificado una retracción de las posiciones de marginalidad económica. Sin embargo, durante la fase de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2014) deberíamos observar una persistencia de este tipo de posiciones. En síntesis, deberíamos observar que una parte de los hogares habría quedado ligada, durante el conjunto del período, a la marginalidad económica, tanto a través de su principal proveedor como de su fuerza de trabajo secundaria.

En el Cuadro 4.6 evaluamos la distribución de hogares encabezados por un trabajador en condiciones de marginalidad económica. Durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-

¹⁶⁵ En la década del setenta, el sentido “simple” del concepto de marginalidad fue el que quedó incorporado en la noción más difundida de “sector informal” (Pok y Lorenzetti, 2007). Pasó a denotar a toda la fuerza de trabajo no contratada por empresas dinámicas y productivas.

¹⁶⁶ Según Salvia (2012), se trata de posiciones en el “segmento marginal” del empleo, entendido como un conjunto de actividades extralegales o de indigencia. Estas actividades no cumplen normas relativas al registro formal del empleo y tienen remuneraciones inferiores a los mínimos básicos de reproducción de la fuerza de trabajo.

2014), la proporción de hogares encabezados por un PSH en tales posiciones se retrajo de 16,3% a 8,3%. En este sentido, el crecimiento posdevaluación resultó efectivo en la reducción de las expresiones más abiertas de informalidad de subsistencia: entre el 2003 y el 2008, la proporción de hogares cuyo PSH estaba inserto en posiciones marginales se redujo de 16,3% a 7,1%. Con posterioridad, entre el 2008 y el 2014 no se advirtieron cambios significativos; incluso, entre el 2011 y el 2014 –es decir, en un contexto macroeconómico más adverso– se verificó un incremento de la proporción de hogares cuyo PSH tenía una inserción marginal (7,1% a 8,3%).

Cuadro 4.6. Distribución de hogares según presencia de marginalidad económica del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
PSH no marginal	83,7	88,2	92,9	93,4	92,9	91,7				
PSH marginal	16,3	11,8	7,1	6,6	7,1	8,3	-9,2***	0,0	1,1***	-8,0***
<i>Ocupado informal de subsistencia</i>	<i>10,8</i>	<i>9,2</i>	<i>6,5</i>	<i>6,1</i>	<i>6,3</i>	<i>7,3</i>	<i>-4,4***</i>	<i>-0,2</i>	<i>1,0***</i>	<i>-3,5***</i>
<i>Beneficiario de un plan de empleo</i>	<i>4,8</i>	<i>1,9</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>	<i>-4,4***</i>	<i>0,2**</i>	<i>0,1</i>	<i>-4,1***</i>
<i>Desempleado marginal</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>-0,4***</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,4***</i>
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ****p*-value < 0,01 / ** *p*-value < 0,05 / * *p*-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Cabe señalar una alteración de la participación relativa de los distintos grupos de hogares cuyo PSH se encontraba en situación de marginalidad económica. En particular, entre el 2003 y el 2014 se redujo la proporción de aquellos cuyo PSH era receptor de un plan de empleo (4,8% a 0,7%), mientras que fue menos intensa la reducción de la participación de aquellos encabezados por un ocupado informal de subsistencia (10,8% a 7,3%). En otras palabras, hubo un cambio de composición de aquellos hogares encabezados por un trabajador en condiciones de marginalidad económica.

Resulta relevante complementar el análisis precedente tomando en cuenta al conjunto de la fuerza de trabajo activa de la que disponen los hogares. Así puede evaluarse el alcance de la marginalidad económica y su incidencia en las unidades domésticas. Algunas investigaciones previas (Salvia y Vera, 2012; Vera, 2013) constataron una presencia persistente del segmento

marginal del empleo en la distribución individual de fuerza de trabajo¹⁶⁷. ¿En qué medida se trata de ocupaciones “secundarias” de los hogares?

Para ello, en el Cuadro 4.7 presentamos información acerca de la proporción de hogares que disponían de fuerza de trabajo inserta en posiciones de marginalidad económica. Entre los hogares con fuerza de trabajo inserta en posiciones marginales, distinguimos, a su vez, tres situaciones diferentes: (a) hogares cuyo PSH es marginal y tienen ocupados secundarios también insertos en posiciones marginales; (b) hogares cuyo PSH es marginal y tienen fuerza de trabajo que no comparte tal inserción; (c) hogares cuyo PSH no se encuentra inserto en una posición de marginalidad económica pero que en los que existe fuerza de trabajo secundaria inserta en posiciones marginales.

Cuadro 4.7. Distribución de hogares según presencia de fuerza de trabajo en situación de marginalidad económica. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Hogares sin fuerza de trabajo en situación de marginalidad	65,3	72,2	80,1	80,5	80,9	79,0				
Hogares con fuerza de trabajo en situación de marginalidad	34,7	27,8	19,9	19,5	19,1	21,0	-14,8***	-0,8*	2,0**	-13,7***
<i>PSH marginal y f. de trab. marginal</i>	8,1	5,5	3,0	2,9	2,7	3,4	-5,1***	-0,3	0,7	-4,7***
<i>PSH y no hay f. de trab. marginal</i>	8,2	6,3	4,1	3,7	4,5	4,9	-4,1***	0,4***	0,4*	-3,3***
<i>PSH no marginal y f. de trab. marginal</i>	18,4	16,0	12,8	12,9	11,9	12,7	-5,6***	-0,8***	0,8***	-5,6***
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Al inicio de la posconvertibilidad, casi tres de cada diez unidades domésticas contaban con fuerza de trabajo en situación de marginalidad económica. Dos factores explican la magnitud del fenómeno. Por un lado, la necesidad de dar respuestas “de emergencia” a la crisis implicó la expansión de actividades de subsistencia; a su vez, debemos recordar que el PJJHD alcanzó dos millones de beneficiarios. Por otro lado, la devaluación implicó una brusca retracción de ingresos. Ello provocó que las remuneraciones de muchas ocupaciones cayeran por debajo de los umbrales mínimos. A lo largo de la posconvertibilidad, se verificó una retracción de los hogares con algún miembro en situación de marginalidad, en sintonía con la pauta ya

¹⁶⁷ También Benza (2016: 121) constata, a nivel de la estructura de clases, lo que denomina un “núcleo de trabajadores en posiciones marginales”.

observada a nivel del principal proveedor: la incidencia pasó de 34,7% a 19,9% entre el 2003 y el 2008, volvió a decrecer hasta 19,1% en 2011, y ascendió a 21% en 2014. Ahora bien, aun cuando se advirtió una retracción de las posiciones marginales entre los hogares, uno de cada cinco hogares disponía de fuerza laboral inserta en tales condiciones luego de una década de crecimiento heterodoxo y activas políticas laborales.

La información construida muestra una pauta consistente: algo más de la mitad de los hogares con fuerza de trabajo en situación de marginalidad disponía de ese tipo de ocupaciones exclusivamente por medio de ocupados secundarios. Este resultado sugiere que una parte significativa del empleo marginal observado en la estructura de la fuerza de trabajo individual (Comas, 2012; Salvia, Vera y Poy, 2015; Salvia, 2016; Vera, 2013) corresponde a ocupaciones secundarias de los hogares. Se trataría de ocupaciones de muy baja productividad e ingresos que despliegan los trabajadores “adicionales” como estrategia de generación o complementación de ingresos para atender las necesidades de reproducción de las unidades domésticas. Podríamos suponer que parte de estas actividades son “contracíclicas”, de allí el comportamiento observado.

Si relacionamos la tipología de inserción sectorial económico-ocupacional de los hogares (que evalúa la inserción sectorial del hogar a partir de la consideración simultánea del conjunto de su fuerza de trabajo activa) con la presencia de fuerza de trabajo en situación de marginalidad económica, podemos dimensionar la presencia de unidades domésticas que se encuentran en posiciones muy vulnerables con respecto a su inserción en el mercado de trabajo. El Cuadro 4.8 permite examinar esta articulación. Como ya destacamos, se mantuvieron relativamente constantes las formas “mixtas” de inserción, es decir, la proporción de hogares cuyo PSH se encontraba en el sector formal y había otros ocupados en el sector informal, o a la inversa. En estos casos, alrededor de la mitad tenía fuerza de trabajo adicional en condiciones de marginalidad económica.

Interesa especialmente un grupo de hogares que son vulnerables desde el punto de vista de su participación socioeconómica: aquellos en los que la totalidad de sus miembros pertenecían al sector microinformal y, además, disponían de fuerza de trabajo en condiciones de marginalidad económica. El Cuadro 4.8 indica que, en el 2003, 21,6% de los hogares tenían todos sus miembros en el sector microinformal y, además, fuerza de trabajo en situación de marginalidad económica. Tras los años de reactivación posdevaluación, hacia el 2008, su incidencia se redujo a 10,1%. Desde entonces, se mantuvo relativamente estable: 9,3% en el

2011 y 10,5% en el 2014. En otras palabras, alrededor de una de cada diez unidades domésticas se encontraba en esta situación, sin transformaciones significativas desde mediados de la posconvertibilidad.

Cuadro 4.8. Presencia de fuerza de trabajo en situación de marginalidad económica según tipo de inserción económico-ocupacional del hogar. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Hogares en el sector formal	35,3	39,8	45,9	44,6	47,3	46,4				
Hogares mixtos	25,2	26,4	25,8	25,2	24,6	24,2				
<i>Sin fuerza de trabajo marginal</i>	12,1	14,2	16,1	15,8	14,9	13,7	4,0***	-1,2***	-1,2***	1,6***
<i>Con fuerza de trabajo marginal</i>	13,1	12,2	9,7	9,4	9,7	10,5	-3,4***	0,0	0,8*	-2,7***
Hogares en sector microinformal^(b)	39,5	33,8	28,3	30,2	28,1	29,4				
<i>Sin fuerza de trabajo marginal</i>	18,0	18,2	18,1	20,1	18,7	18,9	0,2	0,6	0,1	0,9*
<i>Con fuerza de trabajo marginal</i>	21,6	15,6	10,2	10,1	9,3	10,5	-11,4***	-0,8**	1,2***	-11,0***
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value <0,1 / (b) Incluye desocupados y beneficiarios de programas de empleo

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

4.3. Síntesis y conclusiones del capítulo

El eje de nuestra investigación son las modalidades de reproducción económica de las unidades domésticas. Desde la perspectiva conceptual desarrollada, las características estructurales del régimen de acumulación son un aspecto crucial de este proceso. Para la amplia mayoría de los hogares, estas características se traducen sobre las condiciones de vida principalmente a través de la inserción de la fuerza de trabajo de la que disponen en determinadas posiciones laborales. De allí que en este capítulo nos hayamos concentrado en las formas de inserción de los integrantes de las unidades domésticas en la estructura económico-ocupacional.

Señalamos que durante el ciclo de políticas heterodoxas aumentaron las oportunidades de los hogares de incrementar su cantidad de miembros ocupados, es decir, se incrementó la utilización económica de la fuerza de trabajo. Esto significa que la reproducción económica de las unidades domésticas pasó a depender del esfuerzo económico-reproductivo de un mayor número de miembros. A su vez, destacamos que los hogares continuaron siendo altamente dependientes de los ingresos provenientes del mercado de trabajo, de allí que el estudio de sus formas de participación resulte clave para abordar su reproducción económica.

A lo largo del capítulo examinamos la hipótesis de que la heterogeneidad estructural del sistema ocupacional configuró una dinámica laboral dual. De acuerdo con este argumento, los años de mayor crecimiento económico de la posconvertibilidad no habrían bastado para disolver este rasgo del sistema ocupacional. Aun cuando en el seno de los hogares puedan coexistir ocupados en distintos sectores económico-ocupacionales, una parte significativa de aquellos no habría accedido a empleos en el sector formal público o privado aun considerando al conjunto de su fuerza de trabajo.

Para estudiar esta hipótesis apelamos al análisis de la inserción de los hogares en la estructura social del trabajo a través de sus diferentes integrantes. Si bien desde la perspectiva de los estudios del trabajo existen investigaciones que dieron cuenta de la importancia de la heterogeneidad estructural en la distribución de la fuerza de trabajo individual (Poy, 2017a; Salvia, 2016; Salvia et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Vera, 2013), han sido menos atendidos los modos en que este proceso se tradujo a nivel de los hogares. En este sentido, los resultados presentados ofrecen algunas claves novedosas acerca de las maneras en que la distribución de la fuerza de trabajo individual se traduce en las unidades domésticas a las que los trabajadores pertenecen.

Al examinar la participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional por medio de su PSH, describimos un proceso de “recomposición” de sus oportunidades laborales. Sin embargo, señalamos que no puede considerarse al período como un ciclo homogéneo. El tipo de crecimiento económico permitió una recuperación de la proporción de hogares que participaban del sector más dinámico a través de su principal sostén. Constatamos que las políticas activas de formalización laboral se tradujeron en un incremento de la proporción de hogares que accedían a posiciones registradas. Sin embargo, estos comportamientos sólo se mantuvieron en los períodos de alto crecimiento (2003-2008): en la fase de retracción económica (2008-2011), los hogares urbanos vieron limitadas sus posibilidades de acceder a posiciones en el sector formal y a posiciones protegidas en la seguridad social.

En este sentido, al término del período estudiado, más de un tercio (35,6%) de los hogares urbanos estaban encabezados por un PSH ocupado en el sector microinformal, desocupado o beneficiario de un programa social de empleo. Si se añaden aquellos hogares cuyo PSH tenía un empleo no registrado en el sector formal, más de cuatro de cada diez (43,3%) estaban encabezados por un trabajador en tales condiciones ocupacionales. Esta significativa

incidencia del empleo en el sector de baja productividad o en posiciones vulnerables a nivel de los principales proveedores constituye uno de los modos directos a través de los cuales la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional participa de la reproducción de las unidades domésticas. Aun cuando el crecimiento económico mostró una capacidad importante para generar empleo en el sector formal, con posterioridad al 2008 hubo escasas oportunidades de mejora para las unidades domésticas.

Podemos aludir a un carácter doblemente “limitado” de la recomposición socio-ocupacional observada: en términos tanto temporales como sociales. En primer lugar, en términos temporales, fue limitada porque quedó restringida a los años más dinámicos del ciclo. El progresivo agotamiento de los pilares que impulsaron la salida de la crisis marcó los límites del cambio estructural del sistema ocupacional. Esto imprimió un ritmo más lento a la expansión de las oportunidades de empleo en el sector formal de la economía para las unidades domésticas. En segundo lugar, en términos sociales, la recomposición fue limitada porque un amplio conjunto de los hogares no pudo acceder a empleos en los sectores económico-ocupacionales más dinámicos. Tales hogares quedaron ligados a actividades en el sector microinformal.

El análisis de la existencia de posiciones económico-ocupacionales disímiles al interior de los hogares permitió complementar estos resultados, en tanto nos ayudó a examinar en qué medida las unidades domésticas lograron participar de distintos sectores económico-ocupacionales al disponer de distintos trabajadores. Los resultados alcanzados convalidaron la existencia de una dinámica dual: al término del período estudiado, alrededor de cuatro de cada diez hogares urbanos participaban exclusivamente de sectores formales e integrados, mientras que otros tres de cada diez sólo accedían a empleos en el sector microinformal. Si bien se verificaron cambios a lo largo de los años, no se alteró la pauta general que da cuenta de procesos estructurales en la dinámica ocupacional.

La insuficiente demanda de empleo en los estratos más modernos da lugar a posiciones marginales al modelo dominante de acumulación. En este sentido, en el capítulo analizamos algunas cuestiones relevantes sobre la dinámica de la marginalidad en el caso argentino. Pudimos constatar un proceso de reducción paulatina de las formas más manifiestas de marginalidad. Advertimos que entre el 2003 y el 2014, el porcentaje de hogares cuyo PSH estaba ocupado en posiciones marginales se redujo de 16,3% a 8,3%. Sin embargo, hubo procesos relevantes por detrás de estos cambios. Descendió más intensamente la proporción

de hogares cuyo PSH era desocupado o beneficiario de un plan de empleo que la de hogares cuyo PSH estaba ocupado en actividades informales de subsistencia. Ello estuvo asociado al menor peso que fueron adquiriendo los programas de empleo en comparación con lo que representó el PJJHD en la crisis de 2001 y 2002.

Planteamos que una parte de las ocupaciones marginales son actividades que llevan adelante trabajadores secundarios de los hogares con el propósito de optimizar o garantizar la reproducción de la unidad. Sin embargo –aun con una definición restrictiva de marginalidad económica–, advertimos que hacia 2014 uno de cada cinco hogares tenía ocupados en posiciones excedentarias. Si tres de cada diez hogares participaban sólo del sector microinformal, uno de ellos tenía, además, fuerza de trabajo en situación de marginalidad económica. Se trata de un núcleo de hogares en posiciones marginales, particularmente vulnerables a la dinámica socioeconómica y a los procesos de empobrecimiento.

Las evidencias presentadas en este capítulo dan cuenta de la vigencia de una dinámica laboral asociada a la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional con amplias consecuencias sobre las unidades domésticas. El análisis evidenció la existencia de “rigideces” en la estructura laboral que se transmiten a los hogares a través de sus miembros ocupados. Estas rigideces se expresan en la existencia de un amplio conjunto de hogares que sólo participan del sector microinformal, en posiciones precarias o abiertamente excedentarias. No obstante, aún no hemos examinado qué implicancias tuvo esta dinámica en términos de capacidades efectivas de reproducción material. No conocemos sus alcances ni los mecanismos a través de los cuales este proceso se transmitió a los hogares. Tal es el propósito del próximo capítulo.

Capítulo V

Heterogeneidad de la estructura ocupacional, ingreso laboral y capacidades de reproducción económica de los hogares

Introducción

La evidencia presentada en el capítulo previo permitió describir los modos en que los hogares participan de la estructura económico-ocupacional a partir de la inserción de su fuerza de trabajo. Los resultados pusieron de manifiesto un escenario en el que una fracción de las unidades domésticas participa de sectores dinámicos del mercado de trabajo y otra lo hace en un sector de microestablecimientos o en actividades de subsistencia. Sin embargo, aún no conocemos en qué medida tales formas de inserción se asociaron con diferentes niveles de ingreso laboral.

El objetivo de este capítulo es examinar de qué maneras las condiciones de heterogeneidad estructural del sistema económico-ocupacional inciden sobre las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas. Con este propósito, apelamos a una doble estrategia. En primer lugar, evaluamos la participación de las unidades domésticas en la distribución del ingreso laboral de acuerdo con su posición en la estructura económico-ocupacional (evaluada mediante la inserción de su principal sostén). Analizamos tanto la pauta emergente de desigualdad de ingresos laborales como los esfuerzos económico-reproductivos desplegados por los miembros de las unidades domésticas para mejorar su nivel de vida. En segundo lugar, relacionamos los niveles de ingresos obtenidos con las capacidades de subsistencia alcanzadas. Para ello, comparamos los ingresos familiares con el valor de una canasta de bienes y servicios adecuada a sus necesidades. Los hogares cuyos ingresos se ubican debajo de tal umbral experimentan déficit de capacidades de subsistencia (DCS). En este capítulo consideramos únicamente en qué medida el ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) bastó para cubrir una canasta de bienes y servicios; por consiguiente, aquellos hogares por debajo del umbral experimentan déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L)¹⁶⁸.

De acuerdo con la *hipótesis* que organiza este capítulo, la heterogeneidad del sistema ocupacional habría condicionado la pauta de distribución del ingreso laboral y, por

¹⁶⁸ Dado que en este capítulo examinamos la participación de los hogares en la distribución del ingreso laboral, el universo se restringe a los hogares que tienen un principal proveedor ocupado. En el capítulo VI, al evaluar las capacidades de subsistencia de los hogares en función del total de ingresos y, en particular, de los provenientes de políticas sociales, se considera a todos los que tienen un PSH activo.

consiguiente, las capacidades de reproducción económica de los hogares. Durante todo el ciclo (2003-2014), los hogares con trabajadores del sector microinformal o del segmento precario habrían experimentado las condiciones más desventajosas en términos distributivos. Un mayor esfuerzo económico por parte de las unidades domésticas, en especial durante la etapa de mayor crecimiento (2003-2008), habría desempeñado un papel de “mediación” sobre estos resultados. Sin embargo, aquellos hogares habrían quedado expuestos, con mayor probabilidad, al riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia a partir de sus ingresos laborales (DCS-L), aun considerando su propio esfuerzo económico-reproductivo.

El análisis aquí presentado se relaciona con los estudios sobre los determinantes de la pobreza monetaria. Aunque existe una diversidad de abordajes posibles, aquí nos enfocamos en los factores explicativos vinculados con la estructura productiva y laboral (Verdera, 2007)¹⁶⁹. En la Argentina los antecedentes al respecto son escasos; sin embargo, se ha señalado una asociación positiva entre la participación en el sector informal y la situación de pobreza del hogar (Beccaria y Groisman, 2009; García Díaz y Woyecheszen, 2011; Mario y García, 2013; Maurizio, 2012). Estos estudios abordan la relación entre inserción laboral y situación de pobreza sin restringirse al análisis del grado en que los ingresos laborales permiten acceder a una canasta de bienes y servicios. Por consiguiente, no toman en cuenta en tal correlación el impacto diferencial de otras fuentes de ingreso y de las propias estrategias de los hogares. De todas formas, constituyen aportes significativos en tanto ligan las capacidades de subsistencia con las características de los mercados de trabajo¹⁷⁰. En este sentido, no conocemos de qué modo la relación entre posiciones económico-ocupacionales y déficit de capacidades de subsistencia se alteró durante las distintas fases político-económicas de la posconvertibilidad ni en qué medida se morigeró mediante los propios comportamientos doméstico-reproductivos.

El capítulo se organiza en torno a tres secciones. En la primera, relacionamos la posición económico-ocupacional de los hogares, evaluada a partir de la inserción de su PSH, con los ingresos laborales obtenidos. Aquí nos proponemos aportar elementos para comprender la

¹⁶⁹ Se ha señalado el carácter polisémico del concepto de “pobreza” y la dificultad para inscribirlo en un marco teórico específico (Feres y Mancero, 2001). Como se señaló, aquí nos referimos al déficit de capacidades de subsistencia, noción que se articula con el enfoque teórico adoptado y hace visible la relación entre el acceso a una canasta de bienes y las capacidades de reproducción económica de los hogares (capítulo II).

¹⁷⁰ En este sentido, durante los últimos años surgió el concepto de *in-work poverty* para referir al universo de los “trabajadores pobres” (Fraser et al., 2011). Esta perspectiva –muy difundida en los países desarrollados– procura examinar las razones por las cuales determinados grupos de trabajadores no alcanzan un nivel de ingresos que los deje fuera del riesgo de pobreza. En América Latina, esta problemática fue extensamente tratada por la perspectiva de la informalidad y el empleo en el sector informal, que aquí retomamos.

reconfiguración del patrón de desigualdad durante las distintas fases de la posconvertibilidad y su vínculo con la heterogeneidad económico-ocupacional. En la segunda sección, descomponemos el cambio del ingreso laboral en función de un efecto “retribución” (o de mercado) y un efecto “perceptor” (que remite al esfuerzo laboral por parte de los hogares). Procuramos articular, así, los procesos macrosociales con la trama microsocial de las condiciones de vida. En la tercera sección, relacionamos la inserción económico-ocupacional del hogar con las capacidades de subsistencia alcanzadas. En particular, examinamos en qué medida la inserción del principal sostén en la estructura económico-ocupacional mantuvo relevancia explicativa en la determinación del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales de los hogares.

5.1. Participación de los hogares en la distribución del ingreso laboral y patrón emergente de desigualdad

Según la perspectiva teórica de esta investigación, las condiciones de heterogeneidad estructural segmentan la demanda de fuerza de trabajo y dan lugar a brechas ostensibles de productividad y remuneraciones entre sectores económico-ocupacionales. Por consiguiente, cabe esperar que dejen su marca sobre el patrón de desigualdad distributiva en los países periféricos. De acuerdo con Bárcena y Prado, tal patrón estaría configurado por una “cadena compuesta por la heterogeneidad estructural, el mercado de trabajo y las instituciones laborales y de protección social”. En tal secuencia, la heterogeneidad estructural sería “el punto de partida fundamental, ya que es el primer eslabón de la cadena de generación de la desigualdad” (Bárcena y Prado, 2016: 37). Mediante la distribución del ingreso laboral, la heterogeneidad del sistema económico-ocupacional repercute sobre los niveles de vida de los hogares. En este sentido, cabe notar que el ingreso no constituye sólo una medida de bienestar material; representa, a su vez, una aproximación a las desiguales posibilidades que tienen los agentes de participar en la distribución del producto social bajo determinadas condiciones estructurales.

En esta sección analizamos la evolución del ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) durante el ciclo de políticas heterodoxas y el patrón emergente de desigualdad. Planteamos como *hipótesis* que, durante el conjunto del período de políticas heterodoxas, la heterogeneidad del sistema ocupacional habría configurado una pauta persistente de desigualdad en la distribución del ingreso laboral. Si bien se habrían registrado mejoras en los niveles de ingresos familiares laborales –en especial, durante la fase posdevaluación, entre el 2003 y el 2008–, los hogares encabezados por trabajadores del sector microinformal o del

segmento precario habrían enfrentado las condiciones más desventajosas en términos distributivos. A manera de balance, no se habría verificado un proceso de convergencia en la distribución del ingreso laboral.

Como primera aproximación a esta hipótesis, el Cuadro 5.1 exhibe la evolución del promedio del ingreso total familiar de fuente laboral del hogar en pesos del cuarto trimestre del 2016, según la posición económico-ocupacional del PSH¹⁷¹. En un marco de fuerte crecimiento del PIB y activas políticas distributivas por parte de las autoridades, entre el 2003 y el 2014, el promedio de ITF-L se incrementó 35,3% en términos reales. Ahora bien, para interpretar los resultados expuestos, debemos recuperar las peculiaridades del período analizado y sus antecedentes inmediatos. Como se detalló en el capítulo I, la devaluación a través de la cual se abandonó la convertibilidad se plasmó en una intensa y veloz reducción de los ingresos familiares. Para comprender la envergadura de este deterioro basta señalar que, de acuerdo con la información proporcionada por la EPH para el aglomerado Gran Buenos Aires –único comparable en toda la serie histórica–, los ingresos totales familiares en mayo del 2003 eran 37% más bajos que en octubre de 1998 (Poy, Vera y Salvia, 2015)¹⁷². Esta retracción constituye del punto de partida desde el cual adquiere sentido la magnitud de la recomposición observada.

Más allá de esta tendencia general, apreciamos un comportamiento diferenciado bajo los diferentes períodos político-económicos examinados. Durante la fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008), el promedio de ITF-L se recompuso de manera intensa (35,3%), lo que implicó una inflexión con respecto al deterioro de las condiciones de vida prevaleciente desde fines de los noventa. En la fase de crisis, reactivación y estancamiento (2008-2014), el ITF-L registró un comportamiento oscilante. Por un lado, entre el 2008 y el 2011, volvió a incrementarse, aunque a un ritmo significativamente menos vigoroso que bajo la fase precedente (7,7%). Por otro lado, entre el 2011 y el 2014, tras la devaluación que marcó el punto más álgido de la restricción externa durante la posconvertibilidad, el ITF-L se desplomó (-7,3%)¹⁷³.

¹⁷¹ Respecto de las medidas utilizadas para deflactar los ingresos en esta investigación, remitimos al capítulo III y al Anexo IV. Asimismo, respecto del posible sesgo de subcaptación de ingresos por parte de la EPH, véase el Anexo II.

¹⁷² Además, este deterioro no fue homogéneo dentro de la estructura social. Según mostramos en una investigación anterior (Poy, 2017a), la crisis político-económica de 2001-2002 y la posterior devaluación afectaron más intensamente a las posiciones laborales en el sector microinformal. Estos resultados son coincidentes con los de Salvia (2012) y Vera (2011).

Cuadro 5.1. Ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) promedio según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en pesos del cuarto trimestre de 2016).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (%) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	19.407	21.536	23.540	24.282	25.237	23.524	21,3***	7,2***	-6,8***	21,2***
No asalariados y directivos	35.863	41.763	39.499	41.225	38.369	37.335	10,1***	-2,9***	-2,7***	4,1***
Asalariados registrados	18.560	20.361	22.915	23.481	25.309	23.225	23,5***	10,4***	-8,2***	25,1***
Asalariados no registrados	12.017	13.682	15.749	15.121	16.330	16.096	31,1***	3,7***	-1,4***	33,9***
Sector público	18.354	23.590	26.387	27.334	29.532	27.329	43,8***	11,9***	-7,5***	48,9***
Empleados del sector público	18.354	23.590	26.387	27.334	29.532	27.329	43,8***	11,9***	-7,5***	48,9***
Sector microinformal	10.382	12.447	14.806	14.927	15.154	14.154	42,6***	2,3***	-6,6***	36,3***
No asalariados	11.868	14.831	17.424	16.923	16.770	15.332	46,8***	-3,8***	-8,6***	29,2***
Asalariados registrados	13.362	15.643	17.167	18.248	19.114	16.517	28,5***	11,3***	-13,6***	23,6***
Asalariados no registrados	7.436	7.952	9.554	9.899	10.488	11.032	28,5***	9,8***	5,2***	48,4***
Total	15.593	18.527	21.091	21.591	22.708	21.059	35,3***	7,7***	-7,3***	35,1***

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Los resultados exhibidos en el Cuadro 5.1 son consistentes con investigaciones previas, realizadas a nivel de la fuerza de trabajo individual, que sugieren que la “recomposición” de las remuneraciones con posterioridad a la crisis no fue homogénea (Arakaki, 2015; Poy, 2017a; Salvia, Vera y Poy, 2015). Durante la posdevaluación (2003-2008), la recuperación de ITF-L fue más intensa entre los hogares cuyo principal sostén pertenecía al sector público (43,8%) o al sector microinformal (42,6%) y menor entre aquellos encabezados por un trabajador del sector formal privado (21,3%). Cabe notar que este último comportamiento se debió, principalmente, a lo ocurrido entre los hogares encabezados por un no asalariado o directivo de establecimientos formales, cuya recomposición de ingresos estuvo muy por debajo del promedio general (10,1%)¹⁷⁴. A su vez, el menor ritmo relativo de mejora del ITF-L entre los hogares encabezados por asalariados registrados del sector formal privado debe remitirse a una mayor heterogeneidad interna de este colectivo: la incorporación de fuerza de trabajo de baja calificación y menores remuneraciones relativas dentro de establecimientos del sector formal privado explicaría tal efecto (Beccaria y Maurizio, 2012; Maceira, 2016). Finalmente, el ritmo más acelerado de recomposición del ingreso laboral entre los hogares

¹⁷³ Cabe notar que entre el 2011 y el 2013 los ingresos familiares de fuente laboral se mantuvieron estables. La reducción observada durante el período 2011-2014 se debe enteramente a los efectos de la devaluación (y la consecuente mayor inflación) de ese último año, que implicó una pérdida significativa del poder adquisitivo.

¹⁷⁴ Dalle (2012) entiende esta pérdida de posiciones relativas de los sectores más altos de la estructura social en términos de una creciente “inconsistencia de estatus”. Al profundizarse la distancia entre posiciones ocupacionales y retribuciones económicas, podría evidenciarse una mayor “movilidad espuria” (Kessler y Espinoza, 2003).

encabezados por un PSH del sector microinformal (42,6%) se debió enteramente a lo ocurrido entre aquellos cuyo PSH era patrón o cuentapropista (47%). Al respecto, cabe recordar que este grupo de trabajadores había sido uno de los más perjudicados durante los noventa y en especial durante la crisis (Poy, 2017a; Salvia, 2012; Salvia, Vera y Poy, 2015); de allí que el efecto de recomposición se revelara más intenso¹⁷⁵.

Durante la fase de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2014), advertimos una pauta distinta. Entre el 2008 y el 2011 se revirtió la tendencia precedente: los hogares encabezados por un trabajador del sector formal, tanto público como privado, fueron los que incrementaron su ITF-L de manera más intensa (11,9% y 7,2%, respectivamente), en tanto que aquellos con un PSH en el sector microinformal mejoraron sus ingresos, pero a un ritmo menos fuerte (2,3%). Los hogares encabezados por asalariados registrados (del sector formal o microinformal) o por empleados del sector público fueron los ganadores en términos de ITF-L (10,4%, 11,3% y 11,9%, respectivamente). A ellos les siguieron los encabezados por asalariados no registrados, tanto del sector formal como microinformal (9,8% y 3,7%). En contraste, perdieron ingresos laborales aquellos cuyo PSH era no asalariado, tanto en el sector formal como microinformal (-2,9% y -3,8%, respectivamente). Finalmente, entre el 2011 y el 2014, la devaluación provocó la pérdida de ingresos familiares de fuente laboral con independencia de la posición del PSH en la estructura económico-ocupacional.

Ahora bien, ¿en qué medida la evolución analizada propició una variación sustantiva en el patrón de desigualdad de ingresos laborales? De acuerdo con la perspectiva conceptual desarrollada, deberíamos observar una insuficiencia de los procesos descritos para disolver la pauta de inequidad asociada a la heterogeneidad estructural del sistema económico-ocupacional. En el caso de que ésta haya mantenido relevancia en la distribución del ingreso laboral, deberíamos observar un patrón de desigualdad ajustado a sus clivajes, más allá de los procesos de recomposición de los niveles de ingresos laborales. En el Cuadro 5.2 evaluamos las brechas de ITF-L según la posición económico-ocupacional del principal proveedor del hogar, tomando como comparación el ingreso laboral promedio de los hogares¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Una porción importante del cuentapropismo informal se desempeña en actividades del pequeño comercio, las reparaciones y construcción residencial, las cuales son procíclicas. Por ello, el aumento del nivel de actividad brinda un escenario favorable para estas actividades.

¹⁷⁶ El ejercicio de comparar las brechas de ingresos familiares es habitual en los análisis de clases sociales (cfr. Benza, 2016; Chávez Molina y Sacco, 2015; Maceira, 2016). Por su parte, la utilización del ingreso promedio como parámetro es frecuente cuando se examina la injerencia de la heterogeneidad estructural, ya que remite a la idea de una “productividad media” de la economía (Salvia, 2012).

Cuadro 5.2. Brechas de ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (*ingreso medio=1*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento		
	2003	2005	2008	2009	2011	2014
Sector formal privado	1,24	1,16	1,12	1,12	1,11	1,12
No asalariados y directivos	2,30	2,25	1,87	1,91	1,69	1,77
Asalariados registrados	1,19	1,10	1,09	1,09	1,11	1,10
Asalariados no registrados	0,77	0,74	0,75	0,70	0,72	0,76
Sector público	1,18	1,27	1,25	1,27	1,30	1,30
Empleados del sector público	1,18	1,27	1,25	1,27	1,30	1,30
Sector microinformal	0,67	0,67	0,70	0,69	0,67	0,67
No asalariados	0,76	0,80	0,83	0,78	0,74	0,73
Asalariados registrados	0,86	0,84	0,81	0,85	0,84	0,78
Asalariados no registrados	0,48	0,43	0,45	0,46	0,46	0,52
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

La lectura integrada de la información permite constatar la significativa estabilidad de tales brechas durante el período de políticas heterodoxas. Luego del ciclo inmediato poscrisis y, en particular, con posterioridad al 2005, las distancias relativas entre los hogares según la posición económico-ocupacional de su PSH se estabilizaron. En línea con la hipótesis planteada, advertimos que, más allá de las eventuales diferencias en los ritmos de variación del ITF-L, entre el 2003 y el 2014, los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal permanecieron en una situación de notoria desventaja en términos distributivos. En particular, aquellos cuyo PSH era asalariado no registrado del sector microinformal experimentaban la situación más desfavorable de la estructura social. Cabría incluir en esta pauta a los hogares encabezados por un asalariado no registrado del sector formal, que consolidaron una situación desaventajada. Durante los primeros años del ciclo, los hogares encabezados por un PSH del sector formal privado redujeron levemente su distancia con respecto al promedio, en tanto que los que pertenecían al sector público a través de su PSH incrementaron su ventaja relativa.

De esta forma, durante la posconvertibilidad advertimos un doble proceso con respecto a la evolución de los ingresos familiares de fuente laboral. Por un lado, tras la devaluación se registró una recomposición que atravesó al conjunto de los hogares. Este perfil de crecimiento económico inducido por las políticas heterodoxas constituye un rasgo característico del

período y contrasta con el que prevaleció durante el ciclo de reformas estructurales, más limitado en términos de bienestar y más concentrado en cuanto a su distribución¹⁷⁷.

Por otro lado, el crecimiento de los ingresos familiares de fuente laboral atravesó el “tamiz” de un patrón de desigualdad económico-ocupacional más rígido. Registramos algunas transformaciones en las distancias entre los hogares según su forma de inserción. Sin embargo, no se disolvió de manera significativa una pauta de desigualdad distributiva asociada a clivajes derivados de la heterogeneidad del sistema económico-ocupacional. La tesis de la heterogeneidad estructural hace inteligible el proceso descrito: el crecimiento económico puede tener efectos positivos sobre los ingresos reales, pero ser insuficiente (o incluso reproducir) para revertir una lógica de desigualdad que tiene, entre sus factores explicativos, la coexistencia de estratos de productividad muy diferenciada¹⁷⁸.

En suma, el tipo de crecimiento económico durante el ciclo heterodoxo favoreció la recomposición de los ingresos laborales de las unidades domésticas e interrumpió la tendencia a la profundización de las brechas de desigualdad, que había caracterizado al ciclo de ajuste estructural de los noventa. En contrapartida, sin la mediación de transformaciones estructurales del sistema económico, fue insuficiente para disolver las distancias funcionales derivadas del patrón de heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional.

5.2. Factores subyacentes al cambio de los ingresos familiares de fuente laboral

Hemos planteado que las condiciones estructurales inciden sobre la reproducción económica de las unidades domésticas principalmente a través del ingreso que éstas obtienen mediante la inserción de su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Sin embargo, el nivel de ingresos familiares de fuentes laboral (ITF-L) no sólo se deriva de factores de mercado. En tanto las unidades domésticas procuran optimizar su balance reproductivo, el volumen de ingresos tiene también, entre sus determinantes inmediatos, los comportamientos que aquéllas despliegan para mejorar sus condiciones de vida. Como señala Salvia (2012), la forma en la cual los hogares responden a los cambios en las pautas de producción y distribución de

¹⁷⁷ Este tipo de crecimiento económico, a menudo llamado “pro-pobre” [*pro-poor growth*] (Hanmer y Booth, 2001), ha caracterizado a distintos países de la región durante los años 2000. Como planteamos en el capítulo I, ello revela que el caso argentino fue expresión de un proceso regional más vasto. Este estilo de crecimiento se tradujo en la reducción de las medidas sintéticas de desigualdad como el coeficiente de Gini (Poy y Vera, 2017).

¹⁷⁸ Lavinas y Simões (2017) señalan un proceso similar en el caso de Brasil y remiten a la reproducción de una matriz de heterogeneidad estructural. La persistencia de brechas estructurales de desigualdad no fue contradictoria con la ampliación de la participación en el mercado de trabajo y el crecimiento económico.

ingresos puede alterar la dinámica de acumulación; en tal caso, “los cambios en la masa de ingresos generados por los hogares pueden tener más de un determinante” (Salvia, 2012: 252)¹⁷⁹.

En esta sección desagregamos los factores subyacentes al cambio del ITF-L anteriormente observado. ¿Qué papel les correspondió a los determinantes más generales del modo en que los mercados retribuyen a la fuerza de trabajo? ¿Qué incidencia cabe reconocer a las propias unidades domésticas y a su capacidad para sostener –y, eventualmente, mejorar– sus condiciones de vida? Aquí evaluamos la *hipótesis* de que la evolución del nivel de ingreso laboral no podría dissociarse de las dinámicas microsociales verificadas a nivel de los hogares. En este sentido, un mayor esfuerzo económico por parte de éstos, en especial durante la etapa de mayor crecimiento (2003-2008), habría desempeñado un papel de “mediación” sobre los resultados distributivos previamente examinados.

5.2.1. El modelo de análisis

Retomamos aquí un modelo de descomposición del ingreso total familiar de fuente laboral que constituye una adaptación de la metodología que Cortés (1995) aplicó a la distribución del ingreso en México¹⁸⁰. Es habitual la descomposición de los cambios en la desigualdad distributiva –empleando algún índice o medida sintética como el coeficiente de Gini o el de Theil (Bourguignon y Ferreira, 2004)– o en la tasa de pobreza –como en el método de Datt y Ravallion (1992)–. Desde una perspectiva complementaria, puede incluirse la descomposición del crecimiento del ingreso entre dos períodos de tiempo¹⁸¹.

En términos formales, el ingreso familiar de fuente laboral (ITF-L) promedio de un grupo de hogares g puede ser escrito del siguiente modo:

$$ITF_{L,g} = Y_L/PER_{L,g} \ NPER_{L,g} \quad (1),$$

Es decir, es el resultado del ingreso medio por perceptor laboral del hogar (Y_L/PER_L) y del número de perceptores del hogar ($NPER_L$). Como demuestra Cortés (1995), cuando estos

¹⁷⁹ En la Argentina, los trabajos de Donza (2015), Donza et al. (2008) y Salvia (2012) constituyen antecedentes del tipo de abordaje propuesto, interesado en la articulación de procesos macro y microsociales.

¹⁸⁰ En el capítulo VI examinamos los cambios en el ingreso total familiar incorporando fuentes no laborales, en especial, aquellas derivadas del sistema de políticas sociales.

¹⁸¹ Además de Cortés (1995) existen otros antecedentes que han aplicado este tipo de enfoque. En Argentina, Donza (2015) aplicó este método, y Salvia (2012) y Vera (2011) aplicaron una metodología similar. En Reino Unido, Brewer y Wren-Lewis (2011) plantean una propuesta semejante.

componentes varían a tasas r y p , respectivamente, el cambio del ingreso entre dos momentos t_0 y t_1 puede escribirse del siguiente modo:

$$\Delta ITF_{L,gt1,t0} = ITF_{L,gt0} (r_L + p_L + r_L p_L) \quad (2)$$

En la ecuación (2), r_L y p_L constituyen las tasas de variación del ingreso medio por perceptor y del número promedio de perceptores de ingresos laborales por hogar, respectivamente. El tercer término constituye una interacción entre ellos y carece de significado analítico (Cortés, 1995). En esta investigación, los diferentes g grupos de hogares se definen por la posición económico-ocupacional del PSH.

La principal ventaja de este tipo de descomposición es su adecuación al marco conceptual aquí desarrollado, al reconocer que el cambio del ingreso familiar resulta de una trama en la que interactúan dimensiones macro y microsociales. De acuerdo con la ecuación (2), podemos examinar qué factores promovieron el cambio del ITF-L y distinguir entre un efecto de “retribución” (r_L) a los ocupados –derivado del funcionamiento del mercado laboral– y un efecto “participación” (p_L) –que recoge el esfuerzo económico realizado por los hogares–.

5.2.2. Articulaciones macro y microsociales subyacentes a la modificación de los ingresos familiares de fuente laboral

Antes de evaluar la hipótesis propuesta, describimos las principales características sociodemográficas de los hogares según la posición económico-ocupacional del PSH. Este análisis brinda una imagen en la que inscribir tanto los recursos disponibles como las limitaciones que habrían enfrentado los hogares para incrementar la participación de su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Con este propósito, en el Cuadro 5.3 presentamos una serie de indicadores que caracterizan a las unidades domésticas.

Los hogares cuyo principal sostén pertenecía al sector formal público y privado resultaban levemente más pequeños que aquellos encabezados por un trabajador del sector microinformal. Sin embargo, cabe advertir algunas especificidades: aquellos cuyo PSH era asalariado no registrado, tanto del sector formal como microinformal, eran más grandes que el promedio de las unidades domésticas. Ello puede atribuirse al hecho de que tales hogares contaban con una mayor presencia de niños menores de 15 años y de familias extendidas (es decir, con presencia de un núcleo familiar y otros miembros). Estos comportamientos explicarían, a su vez, la mayor tasa de dependencia económica, debida a la incidencia del número de consumidores sobre la disponibilidad de proveedores laborales. Cabe notar que la prevalencia de actividades de subocupación horaria en el sector microinformal se habría

traducido, a nivel de los hogares, en una menor utilización económica de la fuerza laboral disponible.

Cuadro 5.3. Indicadores sociodemográficos del hogar según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en número promedio por hogar y porcentajes).

	Número de miembros	Número de menores de 15 años	Familias extendidas (%) ^(a)	Número de ocupados ^(b)	Tasa de dependencia económica ^(c)	Índice de uso económico de la fuerza de trabajo (%) ^(d)
Sector formal privado	3,5	0,9	18,2	1,7	2,4	78,1
No asalariados y directivos	3,2	0,7	9,4	1,8	2,0	80,5
Asalariados registrados	3,6	0,9	18,6	1,7	2,4	78,8
Asalariados no registrados	3,7	1,1	22,5	1,7	2,5	74,3
Sector público	3,4	0,8	17,4	1,7	2,2	73,1
Empleados del sector público	3,4	0,8	17,4	1,7	2,2	73,1
Sector microinformal	3,6	1,0	20,0	1,7	2,4	73,0
No asalariados	3,5	0,9	17,0	1,7	2,3	74,4
Asalariados registrados	3,5	0,9	20,1	1,7	2,4	82,1
Asalariados no registrados	3,8	1,2	24,9	1,6	2,6	66,9
Total	3,6	0,9	18,7	1,7	2,3	75,4

Notas: (a) Se consideran familias extensas y compuestas. Una familia extensa es aquella formada por una familia nuclear más uno o más parientes no-nucleares. Una familia compuesta es aquella formada por una familia nuclear o una extensa más otros no parientes / (b) Excluye ocupados en planes de empleo / (c) Cociente entre número de miembros y número de ocupados / (d) Cociente entre la cantidad de horas disponibles para participar en el mercado de trabajo de los miembros de 18 a 64 años (se estima, para cada uno de ellos, una jornada laboral de 40 hs. semanales) y las horas totales efectivamente trabajadas en ocupaciones remuneradas (se excluyen planes de empleo).

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Al respecto, cabe considerar de qué manera intervienen estos factores sociodemográficos en la participación económica de los hogares. La existencia de un mayor número de miembros podría traducirse en una mayor disponibilidad de fuerza de trabajo secundaria para volcar al mercado laboral. En contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, esto podría implicar la activación laboral de adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, en contraste con lo anterior, una mayor presencia de menores o de adultos mayores, dada la demanda de cuidados que suele traer aparejada, también puede constituir un obstáculo para que los hogares incrementen su participación laboral (en las condiciones dadas por la división sexual del trabajo y por las características de la demanda de empleo). Por consiguiente, los resultados socioeconómicos observados dependerán del ritmo que adopten estas tendencias y de sus desigualdades dentro de la estructura económico-ocupacional.

El Cuadro 5.4 recoge los cambios producidos en el ingreso total familiar de fuente laboral durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014). La primera columna del Cuadro exhibe la tasa de variación del ITF-L entre puntas del período; como ya indicamos, se verificó una

sostenida recomposición de los ingresos (35,1%). La segunda columna presenta la suma de las siguientes tres columnas. En la tercera columna presentamos la contribución de la variación del ingreso medio por perceptor de fuente laboral –es decir, el término r_L de la ecuación (3)– al cambio del ITF-L. En la cuarta columna, la contribución del cambio en el número de perceptores laborales –esto es, el término p_L de la ecuación (3)– a la variación del ITF-L. Por último, la quinta columna del Cuadro 5.4 presenta la contribución atribuible al término de interacción entre los factores precedentes –el término $r_L p_L$ de la ecuación–.

Cuadro 5.4. Cambio en el ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes*).

	ITF-L (Var %)	Aporte (%)			
		Cambio Total ITF-L	r_L	p_L	$r_L * p_L$
Sector formal privado	21,2%	100,0%	70,7%	25,5%	3,8%
No asalariados y directivos	4,1%	100,0%	-78,5%	184,4%	-5,9%
Asalariados registrados	25,1%	100,0%	79,1%	17,4%	3,5%
Asalariados no registrados	33,9%	100,0%	71,0%	23,3%	5,6%
Sector público	48,9%	100,0%	76,7%	17,0%	6,4%
Empleados del sector público	48,9%	100,0%	76,7%	17,0%	6,4%
Sector microinformal	36,3%	100,0%	82,1%	13,8%	4,1%
No asalariados	29,2%	100,0%	87,9%	9,6%	2,5%
Asalariados registrados	23,6%	100,0%	98,3%	1,4%	0,3%
Asalariados no registrados	48,4%	100,0%	73,2%	19,8%	7,0%
Total	35,1%	100,0%	77,7%	17,5%	4,8%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

¿A qué factores puede imputarse la evolución observada por el ITF-L durante el ciclo de políticas heterodoxas? Durante este período, crecieron tanto el ingreso medio por ocupado (r_L) como el número promedio de trabajadores (p_L) del que disponían las unidades domésticas. A nivel agregado, el aporte más relevante al cambio en el ingreso familiar de fuente laboral le correspondió al ingreso medio por ocupado: alrededor de cuatro quintos de la mejora (77,7%) puede atribuirse a este efecto de mercado. En contrapartida, cerca de una quinta parte de la evolución observada (17,5%) resultó del mayor esfuerzo económico-reproductivo desplegado por las unidades domésticas. Este factor tuvo más importancia entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector formal privado, lo que recoge el comportamiento simultáneo de las unidades domésticas más desaventajadas y de las mejor posicionadas: aquellas encabezadas por un asalariado no registrado o por no asalariados o directivos¹⁸².

¹⁸² El comportamiento microsocio observado entre los hogares mejor posicionados de la estructura económico-ocupacional podría apuntar a un cambio de composición. En particular, podría revelar una mayor heterogeneidad

Asimismo, el mayor esfuerzo económico de los hogares jugó un papel relativamente más significativo entre los encabezados por asalariados no registrados del sector microinformal. En resumen, la capacidad de los hogares de incrementar su esfuerzo económico-reproductivo durante el ciclo de políticas heterodoxas fue relevante, aunque débil si se compara con el efecto de mercado recogido en el aumento del ingreso medio por perceptor.

Más allá de los resultados observados durante el conjunto del período, cabe evaluar la distinta relevancia adquirida por los factores que modificaron el ITF-L bajo las diferentes fases político-económicas identificadas. En este sentido, el Cuadro 5.5 recoge los cambios producidos en el ITF-L durante la posdevaluación (2003-2008), en la que se verificó una intensa recomposición de los ingresos familiares de fuente laboral (35,3%). A nivel agregado, el principal aporte correspondió al efecto de retribución (70,2%), es decir, el aumento del ingreso promedio por perceptor. Sin embargo, como señalamos en el capítulo IV, fue durante este período cuando se incrementó más significativamente el número promedio de ocupados por hogar. Ello se debió a la incorporación de fuerza de trabajo secundaria de los hogares. En este contexto, la capacidad de los hogares para incorporar trabajadores adicionales explicó una cuarta parte de la recomposición del ingreso laboral (23,9%).

Con independencia de su posición económico-ocupacional (evaluada a partir de su PSH), todos los hogares incrementaron su promedio de perceptores y ello desempeñó un papel relevante sobre el aumento del ITF-L. Este proceso fue más acusado entre los hogares que pertenecían al sector formal privado o público a través de su PSH que entre los que participaban del sector microinformal. En particular, entre aquellos hogares encabezados por asalariados registrados o por no asalariados del sector formal, el incremento del número de perceptores por hogar fue más relevante que en el promedio.

del grupo de profesionales independientes y de los hogares que conforman.

Cuadro 5.5. Cambio en el ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2008 (*en porcentajes*).

	ITF-L (Var %)	Aporte (%)			
		Cambio Total ITF-L	r _L	p _L	r _L *p _L
Sector formal privado	21,3%	100,0%	60,6%	34,9%	4,5%
No asalariados y directivos	10,1%	100,0%	47,4%	50,2%	2,4%
Asalariados registrados	23,5%	100,0%	63,1%	32,2%	4,8%
Asalariados no registrados	31,1%	100,0%	68,7%	25,8%	5,5%
Sector público	43,8%	100,0%	69,5%	23,4%	7,1%
Empleados del sector público	43,8%	100,0%	69,5%	23,4%	7,1%
Sector microinformal	42,6%	100,0%	75,7%	18,4%	5,9%
No asalariados	46,8%	100,0%	71,8%	21,1%	7,1%
Asalariados registrados	28,5%	100,0%	91,2%	7,0%	1,8%
Asalariados no registrados	28,5%	100,0%	75,6%	20,1%	4,3%
Total	35,3%	100,0%	70,2%	23,9%	5,9%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

El Cuadro 5.6 exhibe los factores subyacentes al cambio de los ingresos laborales en el primer subperíodo de la fase de crisis, reactivación y estancamiento (2008-2011). Durante este período, el ingreso familiar de fuente laboral volvió a incrementarse, aunque a un ritmo menos intenso (7,7%). A diferencia de la fase de crecimiento posdevaluación, el crecimiento del ingreso familiar de fuente laboral se basó, exclusivamente, en un efecto de mercado. En tanto que se incrementó el ingreso medio por trabajador ocupado y, por consiguiente, este factor operó positivamente sobre el ITF-L (136,2%), los hogares redujeron su número promedio de perceptores (-32,8%), lo que impactó de forma negativa en la evolución del nivel de vida. Este proceso puede comprenderse a la luz de la paulatina reducción del tamaño de los hogares y, en consecuencia, del promedio de perceptores por hogar.

Durante este subperíodo, todos los hogares perdieron perceptores (a excepción de aquellos encabezados por no asalariados del sector formal y por asalariados registrados del sector microinformal). Por consiguiente, el ritmo de variación del ingreso medio por trabajador ocupado fue el factor que impulsó los cambios disímiles observados en el ITF-L. En este punto, la mayor variación del ingreso por ocupado entre los hogares encabezados por asalariados registrados del sector formal y entre aquellos cuyo PSH era empleado del sector público, originó su mejor desempeño relativo en esta etapa. A su vez, entre los hogares del sector microinformal que perdieron ingresos –los encabezados por no asalariados–, tal efecto se debió a la reducción del número de perceptores por hogar.

Cuadro 5.6. Cambio en el ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2008-2011 (*en porcentajes*).

	ITF-L (Var %)	Aporte (%)			
		Cambio Total ITF-L	r _L	p _L	r _L *p _L
Sector formal privado	7,2%	100,0%	136,4%	-33,2%	-3,3%
No asalariados y directivos	-2,9%	100,0%	36,2%	64,5%	-0,7%
Asalariados registrados	10,4%	100,0%	124,1%	-21,4%	-2,8%
Asalariados no registrados	3,7%	100,0%	207,1%	-99,5%	-7,6%
Sector público	11,9%	100,0%	121,8%	-19,0%	-2,8%
Empleados del sector público	11,9%	100,0%	121,8%	-19,0%	-2,8%
Sector microinformal	2,3%	100,0%	234,0%	-127,0%	-7,0%
No asalariados	-3,8%	100,0%	-34,4%	132,7%	1,7%
Asalariados registrados	11,3%	100,0%	81,3%	17,1%	1,6%
Asalariados no registrados	9,8%	100,0%	123,3%	-20,8%	-2,5%
Total	7,7%	100,0%	136,2%	-32,8%	-3,4%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Finalmente, el Cuadro 5.7 presenta los elementos que explican el cambio en el ingreso familiar de fuente laboral durante el segundo subperíodo de la fase de crisis, reactivación y estancamiento de la posconvertibilidad (2011-2014). Entre puntas del período, el ITF-L se redujo por primera vez en la posconvertibilidad (-7,3%). Como resultado de la devaluación y la lenta recuperación de los ingresos laborales, la reducción del ingreso familiar de fuente laboral obedeció exclusivamente a la caída de las remuneraciones medias por perceptor (105,4%). En contrapartida, se mantuvo estable el número promedio de perceptores (-5,9%). Esto último puede atribuirse al proceso más general, advertido en el capítulo IV, acerca de la estabilización de un patrón de comportamiento por parte de los hogares con respecto al mercado de trabajo.

En este sentido, la retracción de las remuneraciones promedio por ocupado explicó el comportamiento del ITF-L en todos los hogares y fue de cuantía similar. A lo largo de este período, únicamente los hogares encabezados por asalariados no registrados, tanto del sector formal como microinformal, ampliaron su promedio de perceptores laborales (3,5% y 5,8%), lo que explica la evolución observada por el ITF-L durante este subperíodo.

Cuadro 5.7. Cambio en el ingreso total familiar de fuente laboral (ITF-L) según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2011-2014 (*en porcentajes*).

	ITF-L (Var %)	Aporte (%)			
		Cambio Total ITF-L	r _L	p _L	r _L *p _L
Sector formal privado	-6,8%	100,0%	107,3%	-7,8%	0,6%
No asalariados y directivos	-2,7%	100,0%	248,4%	-159,0%	10,6%
Asalariados registrados	-8,2%	100,0%	91,8%	8,9%	-0,7%
Asalariados no registrados	-1,4%	100,0%	346,4%	-259,2%	12,8%
Sector público	-7,5%	100,0%	106,5%	-7,1%	0,6%
Empleados del sector público	-7,5%	100,0%	106,5%	-7,1%	0,6%
Sector microinformal	-6,6%	100,0%	105,4%	-5,8%	0,4%
No asalariados	-8,6%	100,0%	83,5%	17,8%	-1,3%
Asalariados registrados	-13,6%	100,0%	77,0%	25,7%	-2,7%
Asalariados no registrados	5,2%	100,0%	-11,2%	111,8%	-0,6%
Total	-7,3%	100,0%	105,4%	-5,9%	0,4%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

En suma, de acuerdo con los resultados presentados, podemos concluir que la recomposición del ITF-L no fue ajena a una mayor capacidad de participación laboral por parte de los hogares. No obstante, cabe resaltar dos conclusiones emergentes del análisis previo. Por una parte, a nivel agregado, el comportamiento microsocial de los hogares relativo a la posibilidad de disponer de un mayor número de ocupados se concentró, exclusivamente, en el ciclo de crecimiento posdevaluación (2003-2008). En contrapartida, no desempeñó ningún rol en los años posteriores (2008-2014). En otras palabras, la capacidad de los hogares de incrementar su participación fue “procíclica”, al coincidir con la fase más expansiva de la posconvertibilidad.

Por otra parte, el mayor esfuerzo económico-reproductivo no tuvo, en ningún momento del período, una magnitud comparable a la de los factores de mercado. Si bien es posible concluir que tal esfuerzo fue significativo –y, por tanto, que, sin su mediación, la recomposición del ingreso hubiera sido menos vigorosa– y que operó en la dirección propuesta por nuestra hipótesis, en ningún caso se comparó con la relevancia de procesos ligados a la acumulación y la distribución del ingreso. Por lo tanto, fue insuficiente para disolver el patrón de desigualdad de ingresos que responde a dinámicas estructurales y se vincula con la configuración del mercado laboral.

5.3. Heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales

Hasta aquí, consideramos las variaciones del ingreso familiar de fuente laboral según la posición económico-ocupacional del hogar evaluada a partir de la inserción de su PSH. Este análisis nos proporcionó información relevante acerca del patrón de crecimiento económico y del modo en que los hogares enfrentaron tal contexto. Sin embargo, no sabemos aún en qué medida los ingresos laborales bastaron para satisfacer las necesidades materiales de los hogares, tomando en cuenta los requerimientos de sus integrantes. Tampoco conocemos qué desigualdades se observaron al respecto. Podría ocurrir que los cambios positivos en la distribución del ingreso laboral no hayan bastado –al menos, entre algunos grupos de hogares– para evitar la exposición al déficit de capacidades de subsistencia.

Este análisis es, precisamente, el que llevamos adelante en la presente sección. Alcanzamos aquí un punto crucial, al relacionar las condiciones de heterogeneidad del sistema económico-ocupacional (examinada a partir de la posición del PSH) con las capacidades de subsistencia de los hogares. La *hipótesis* que evaluamos plantea que la heterogeneidad del sistema económico-ocupacional habría tenido amplias consecuencias sobre la reproducción económica de los hogares. Específicamente, aquellos encabezados por trabajadores del sector microinformal o del segmento precario habrían quedado expuestos, con mayor probabilidad, al riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia a partir de sus ingresos laborales (DCS-L), con independencia de su esfuerzo económico-reproductivo y de sus características sociodemográficas. Los cambios ocurridos bajo los distintos ciclos político-económicos identificados (2003-2008 y 2008-2014) no habrían alterado esta pauta general.

De acuerdo con el enfoque teórico adoptado, la reproducción económica de los hogares se relaciona con el acceso a un conjunto de medios de vida que permitan la satisfacción de necesidades materiales de sus miembros. Tales necesidades no son independientes de la estructura demográfica y del ciclo vital de las unidades domésticas. En las sociedades capitalistas, los satisfactores se encuentran mercantilizados, de manera que la reproducción económica requiere de una masa de ingresos que permita acceder a aquellos. Para la amplia mayoría de las unidades domésticas, los ingresos se derivan de la venta de la fuerza de trabajo o del autoempleo de sus integrantes (Borsotti, 1981; Cortés y Cuéllar, 1990; Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]).

Como explicamos en el capítulo III, el umbral de referencia es la Canasta Básica Total (CBT), que surge de expandir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) a partir de la inversa del coeficiente de Engel. Esta CBT se expresa en términos de una unidad consumidora estándar o “adulto equivalente”. Tal cesta de bienes y servicios se valoriza para poder obtener su expresión monetaria y compararla con los ingresos de los que disponen los hogares. De acuerdo con lo planteado, la CBT de un hogar determinado varía en función de su composición, es decir, de la cantidad de unidades consumidoras equivalentes. En esta última sección del capítulo, comparamos los ingresos familiares de fuente laboral (ITF-L) con esta medida estándar, a partir de lo cual podemos aproximarnos al grado en que las remuneraciones laborales alcanzaron para satisfacer las necesidades de los hogares.

Aunque es habitual derivar de esta metodología un análisis dicotómico (es decir, por encima o por debajo del umbral de referencia), aquí definimos distintas capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales, que se expresan como múltiplos de las CBT a las que el ingreso familiar de fuente laboral permite acceder¹⁸³. Ello permite considerar no sólo la proporción de hogares que se ubica debajo del umbral, sino tomar en cuenta la distancia a la cual se encuentran de aquél. Aquí diferenciamos cuatro niveles: (1) con un ITF-L que se ubica por debajo de 0,5 CBT; (2) con un ITF-L que cubre entre 0,5 y menos de 1 CBT; (3) con un ITF-L que cubre entre 1 y 1,49 CBT; (4) con un ITF-L mayor o igual a 1,5 CBT. Aquellos hogares que no alcanzan a cubrir una CBT a partir de sus ingresos laborales enfrentan déficit de capacidades de subsistencia a partir de sus ingresos laborales (DCS-L)¹⁸⁴. En consecuencia, los hogares que se ubican en (1) y en (2) se encuentran en tal situación. Por su parte, aquellos que se encuentran en (3) se ubican en zona de “riesgo” o vulnerabilidad de no cubrir sus necesidades reproductivas a partir del ingreso laboral. Este último umbral permite identificar a aquellos hogares que se sitúan en una situación de “vulnerabilidad” (Cecchini y Martínez,

¹⁸³ La apelación a múltiplos de “líneas de pobreza” para evaluar las condiciones de vida es frecuente en la literatura especializada (Cecchini y Martínez, 2011; CEPAL, 2013). Por su parte, en una investigación para el caso mexicano, Montoya García (2017) utiliza la noción de “niveles de reproducción”.

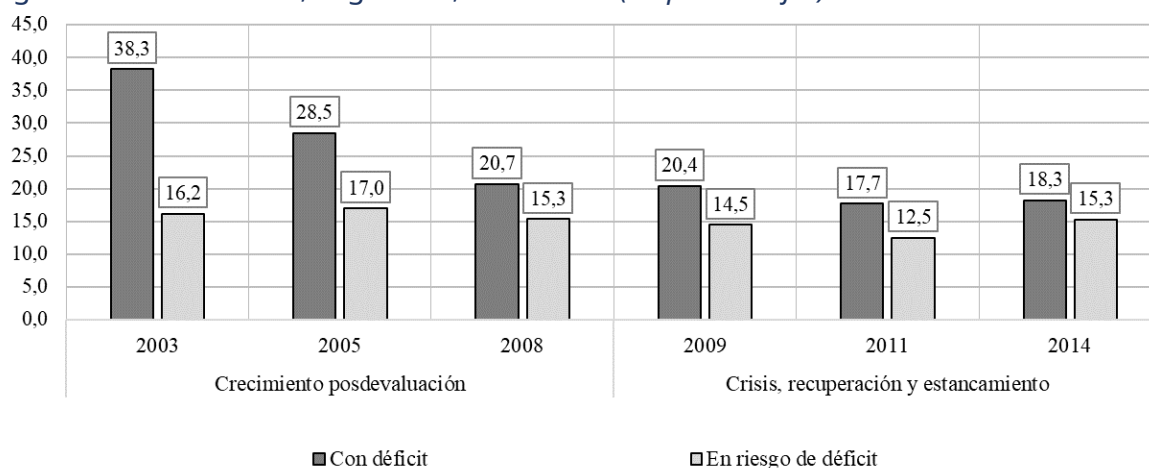
¹⁸⁴ Debemos enfatizar dos supuestos presentes en la metodología implementada. En primer término (algo habitual en los estudios sobre pobreza monetaria), estamos suponiendo que todos los integrantes del hogar aportan el conjunto de sus ingresos laborales a la reproducción de la unidad. Se trata de un supuesto no verificable y que está implícito en el diseño temático de la EPH y, en general, de las encuestas a hogares. En segundo lugar, no estamos considerando –en esta instancia– otros recursos de los que disponen los hogares (en especial, ingresos del sistema de políticas sociales). Ello puede constituir un sesgo, en tanto puede haber integrantes de los hogares que aporten tales ingresos a la manutención familiar. De todas formas, debe tenerse en cuenta que el universo de estudio son los hogares con PSH ocupado. En el capítulo VI se analizan las capacidades de subsistencia incluyendo al conjunto de los ingresos.

2011). Se trata de unidades domésticas que, ante shocks macroeconómicos (por ejemplo, una devaluación) son especialmente vulnerables a no cubrir sus necesidades reproductivas.

5.3.1. Desiguales capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales

El Gráfico 5.1 presenta la proporción de hogares con DCS-L y la de aquellos en situación de riesgo. A nivel agregado, constatamos una pauta consistente relacionada con la evolución del ITF-L previamente observada: durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014), la proporción de hogares con DCS-L pasó de 38,3% a 18,3%. En contraste, la incidencia de aquellos hogares en situación de riesgo se mantuvo estable (16,2% y 15,3%). Esto sugiere que, a lo largo del período, persistió una franja de hogares que se encontraba en el límite de poder garantizar sus condiciones de reproducción económica a partir de ingresos laborales.

Gráfico 5.1. Hogares con déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L)^(a) y en riesgo de experimentarlo^(b). Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).



Notas: (a) Se define como el porcentaje de hogares cuyo ingreso total laboral (ITF-L) se encuentra por debajo de una Canasta Básica Total (CBT) calculada en función de los requerimientos por adulto equivalente / (b) Se define como porcentaje de hogares cuyo ingreso total laboral (ITF-L) se encuentra entre 1 y 1,5 CBT.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

La evolución previa muestra un comportamiento dispar bajo las distintas fases político-económicas. La mayor parte de la reducción de la incidencia de hogares con DCS-L se produjo durante el período de crecimiento posdevaluación (2003-2008), cuando transitó de 38,3% a 20,7%. Entre el 2008 y el 2011 se redujo nuevamente, aunque de forma más leve (hasta 17,7%) y volvió a incrementarse tras la devaluación del 2014 (18,3%). Las oscilaciones advertidas a partir del 2008 sugieren un patrón relativamente consolidado con respecto a las capacidades de subsistencia evaluadas a partir del ingreso laboral. Hacia fines de la posconvertibilidad, un tercio (33,6%) de los hogares con PSH ocupado disponían de ingresos

laborales por debajo de sus requerimientos reproductivos o de una cuantía que los ubicaba en una zona de riesgo.

En este marco, el Cuadro 5.8 presenta las desigualdades en las capacidades de subsistencia alcanzadas por las unidades domésticas a partir de su ingreso laboral, expresadas en múltiplos de CBT, según la posición de su PSH en la estructura económico-ocupacional. La información fue construida considerando años puntuales que delimitan las distintas fases político-económicas identificadas. A nivel agregado, durante el conjunto del ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014), la reducción de la proporción de hogares con DCS-L se debió a la retracción del porcentaje de aquellos situados debajo de 0,5 CBT (16,6% a 6%) y de los que disponían entre 0,5 y 1 CBT (21,7% a 12,2%). Como correlato de estos procesos, y de la relativa estabilidad de la proporción de los ubicados en situación de riesgo, el porcentaje de hogares cuyos ingresos eran superiores a 1,5 CBT pasó de 45,5% a 66,4% (Cuadro 5.8).

Cuadro 5.8. Capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales en múltiplos de CBT^(a) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes de cada posición económico-ocupacional).

	2003				2008				2011				2014			
	<0,50	0,50-0,99	1,00-1,49	≥1,5	<0,50	0,50-0,99	1,00-1,49	≥1,5	<0,50	0,50-0,99	1,00-1,49	≥1,5	<0,50	0,50-0,99	1,00-1,49	≥1,5
Sector formal privado	9,0	19,8	15,5	55,7	2,7	10,7	16,2	70,3	2,8	8,6	12,1	76,4	2,8	9,0	14,6	73,5
No asalariados y directivos	4,3	6,5	5,8	83,4	1,5	0,7	5,0	92,9	1,3	2,6	6,0	90,2	2,7	1,6	6,2	89,4
Asalariados registrados	5,1	20,1	18,1	56,7	1,1	9,1	16,5	73,3	0,9	6,9	11,6	80,6	1,2	7,2	14,6	77,0
Asalariados no registrados	23,1	27,0	13,8	36,2	9,6	23,4	22,1	44,9	11,8	19,8	18,5	50,0	9,8	21,8	20,2	48,2
Sector público	8,9	16,0	18,1	57,0	0,9	7,1	11,7	80,2	0,7	5,5	7,3	86,4	1,1	5,7	10,1	83,1
Empleados del sector público	8,9	16,0	18,1	57,0	0,9	7,1	11,7	80,2	0,7	5,5	7,3	86,4	1,1	5,7	10,1	83,1
Sector microinformal	27,8	26,1	16,1	30,1	16,3	21,4	16,0	46,3	12,1	21,3	16,1	50,6	13,2	20,3	19,2	47,2
No asalariados	26,2	24,3	15,5	34,0	14,3	18,3	13,4	53,9	9,7	19,4	16,0	54,9	11,3	20,6	17,2	50,8
Asalariados registrados	6,0	28,4	22,3	43,3	2,7	14,3	18,7	64,3	1,5	9,9	17,0	71,7	3,8	11,0	19,6	65,5
Asalariados no registrados	36,0	28,0	15,2	20,8	24,7	29,3	19,1	26,8	21,3	30,1	15,8	32,8	21,1	24,6	22,3	32,1
Total	16,6	21,7	16,2	45,5	7,0	13,7	15,3	64,0	5,5	12,2	12,5	69,8	6,0	12,2	15,3	66,4

Nota: (a) evaluadas como la capacidad de cada hogar de acceder, a partir de su ingreso total laboral, a múltiplos de la Canasta Básica Total por adulto equivalente.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

¿En qué medida se advierten pautas diferenciadas de acuerdo con la posición económico-ocupacional? Aquellos hogares que participaban del sector formal privado o público a través de su PSH mostraron los mayores niveles de subsistencia a partir de ingresos laborales durante la posconvertibilidad. Ello se evidencia no sólo en la menor proporción ubicada por debajo del umbral mínimo; también en la mayor distancia con respecto al umbral. En efecto, a partir del 2008, más de 7 de cada 10 hogares disponían de un nivel de ITF-L que les permitía superar 1,5 CBT. Por consiguiente, lograron satisfacer sus necesidades de reproducción a través de su ITF-L y se desplazaron de la zona de vulnerabilidad. Un patrón distinto caracterizó a aquellos hogares cuyo PSH era asalariado no registrado del sector formal privado: a partir del 2008, un tercio permaneció con DCS-L y un quinto en la zona de riesgo.

Los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal siguieron una pauta diferente a la de aquellos del sector formal público y privado. En línea con la hipótesis planteada, luego de la recuperación inicial de sus capacidades de subsistencia –en el 2003, la mitad no accedía a

una CBT a través de su ingreso laboral–, alrededor de un tercio de estos hogares (37,7%, 33,4% y 33,6% en el 2008, el 2011 y el 2014, respectivamente) experimentaban DCS-L. Esta mayor propensión se complementó con una mayor proporción relativa de hogares en situación de riesgo (16%, 16,1% y 19,2% en el 2008, el 2011 y en el 2014, respectivamente). Dentro del sector microinformal, fueron los hogares encabezados por asalariados registrados los que dispusieron de una mejor posición relativa. En contrapartida, aquellos cuyo PSH era asalariado no registrado tuvieron una particular propensión a experimentar DCS-L: en el 2014, casi 5 de cada 10 se encontraban por debajo del umbral considerado y eran 7 de cada 10 si consideramos a los que se ubicaban en situación de vulnerabilidad. En otras palabras, más allá de la evolución positiva de sus niveles de ingresos laborales, estos hogares permanecieron especialmente expuestos al riesgo de no cubrir sus necesidades.

5.3.2. Determinantes del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales

En el análisis de correlación presentado se combinan distintos factores que remiten a las características de los hogares y no podemos descartar que la mayor exposición relativa al DCS-L –verificada, en particular, entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal o era asalariado no registrado del sector formal– se deba a aquéllos y no a la incidencia de mecanismos estructurales derivados de las formas de inserción económico-ocupacional. Por ello, este apartado recoge los resultados previos y ofrece un análisis integrado de los factores que determinan que los hogares no alcancen el umbral mínimo de subsistencia a partir de su ingreso laboral. En este análisis, nos interesa examinar la injerencia de la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional (evaluada a partir de la posición del PSH en tal estructura) en la probabilidad de experimentar DCS-L.

Con este propósito, apelamos a un análisis de regresión logística binaria múltiple (Wooldridge, 2016). Se trata de un procedimiento adecuado cuando la variable dependiente es dicotómica y se quiere evaluar el impacto que tienen diferentes variables independientes en la ocurrencia de un evento. En términos formales, la probabilidad p de que un hogar experimente déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales resulta de:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (3)$$

Donde z asume la siguiente forma:

$$z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n \quad (4)$$

La estimación de los parámetros se realiza mediante el método de máxima verosimilitud. Desde el punto de vista conceptual, la principal variable independiente del modelo es la posición económico-ocupacional del PSH como aproximación al modo en que las condiciones de heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional inciden en la exposición de los hogares al déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales. No obstante, introducimos covariables que nos permiten controlar la relación propuesta por nuestra hipótesis y, a la vez, aportar información relevante sobre factores que inciden en las condiciones de vida familiares. En primer término, incorporamos atributos sociodemográficos, residenciales y educativos: el sexo del PSH, el tipo de configuración familiar (monoparental o no), el número de menores de 18 años presentes en el hogar, el grupo de edad del PSH, su nivel educativo y la región de residencia. En segundo término, introducimos variables laborales: el número de ocupados en el hogar y la rama de actividad en la que se desempeña el PSH. Esta técnica se utiliza para cuatro años que funcionan como ventana de observación (2003, 2008, 2011 y 2014).

En el Cuadro 5.9 se presentan los resultados de la aplicación de este modelo. En los modelos de regresión logística, es habitual reportar las “razones de momios” (odds ratios), que pueden interpretarse en términos de cuánto se incrementa la razón de pertenecer a la categoría de interés de la variable dependiente cuando se incrementa en una unidad la variable independiente. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los modelos de regresión lineal, los coeficientes estimados en una regresión logística se encuentran afectados por la heterogeneidad no observada y las variables omitidas (Mood, 2010)¹⁸⁵. Por ello, cuando se especifican modelos para diferentes años a partir de muestras distintas, resulta más adecuado presentar el “promedio de efectos marginales” (Average Marginal Effects o AME) (Mood, 2010; Norton y Dowd, 2018). Los AME surgen de multiplicar, para cada observación, el coeficiente asociado a cada covariable del modelo y de obtener un promedio de este producto a nivel del conjunto de las observaciones. En este contexto, pueden comprenderse como el cambio promedio registrado en la probabilidad (expresado en puntos porcentuales) de que el hogar experimente DCS-L a partir de un cambio unitario de alguna de las covariables, manteniendo las demás constantes.

En cuanto a la robustez de los modelos estimados, cabe notar que la capacidad explicativa – evaluada mediante el pseudo R cuadrado de McFadden – se mantiene en los diferentes años y

¹⁸⁵ En el Anexo V se presentan los modelos de regresión completos, los coeficientes B y los errores estándar.

es aceptable¹⁸⁶. Por otra parte, como prueba de bondad de ajuste, la capacidad clasificatoria también resulta adecuada y estable¹⁸⁷.

Cuadro 5.9. Determinantes^(a) del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L)^(b). Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (promedio de efectos marginales)^(c).

		2003	2008	2011	2014
Sexo del PSH	Mujer Varón ©	0,00463	0,0549***	0,0402***	0,0369***
Tipo de hogar	Hogar monoparental Hogar no monoparental ©	0,0180	-0,00427	-0,00532	0,0144
Menores en el hogar	Número de menores en el hogar	0,129***	0,0804***	0,0783***	0,0713***
Edad del PSH	Hasta 29 años De 30 a 49 años 50 años y más ©	0,0539*** -0,0560***	0,0510*** -0,0214*	0,00482 -0,0343***	0,0536*** -0,002
Educación del PSH	Hasta primaria completa Secundaria inc o comp. Terciario o univ ©	0,270*** 0,120***	0,174*** 0,0753***	0,0971*** 0,0658***	0,174*** 0,0771***
Región	Gran Buenos Aires Noroeste Noreste Cuyo Pampeana Patagónica ©	0,0626*** 0,189*** 0,206*** 0,149*** 0,0906***	0,0704*** 0,165*** 0,160*** 0,0774*** 0,0580***	0,0542*** 0,108*** 0,145*** 0,0574*** 0,0419***	0,0525*** 0,126*** 0,133*** 0,0852*** 0,0490***
Ocupados en el hogar	Número de ocupados en el hogar	-0,0682***	-0,0760***	-0,0795***	-0,0744***
Posición económico-ocupacional del PSH	No asal. sector formal Asal. No Reg. sector formal Empleado sector público No Asal. sector microinformal Asal. Reg. sector microinformal Asal. No Reg. sector microinformal Asal. Reg. sector formal ©	-0,0512* 0,209*** 0,0167 0,182*** 0,0853*** 0,254***	-0,0494** 0,158*** -0,00165 0,181*** 0,0383* 0,234***	0,00323 0,188*** 0,00417 0,191*** 0,0163 0,235***	0,0137 0,159*** 0,00403 0,191*** 0,0316* 0,184***
Rama de actividad del PSH	Construcción Comercio Servicio doméstico Servicios y otros Industria ©	0,0842*** -0,00468 -0,0434 -0,0144	0,0253 0,0119 0,0348 -0,00259	0,0164 0,00151 0,0705** -0,00643	0,0279* 0,0116 0,0734*** 0,0139
	Constante	0,0646***	0,0168***	0,0242***	0,0148***
	Pseudo R2 de McFadden	0,288	0,349	0,339	0,319
	Aciertos (global)	75,4%	84,3%	86,0%	85,5%
	Aciertos (cat. de interés)	72,6%	66,9%	63,6%	63,2%

Notas: (a) Modelos de regresión logística binaria. Variable dependiente: presencia de ingresos por debajo de una CBT a partir del ingreso laboral / (b) Evaluadas a través del acceso a una CBT en función del ingreso total familiar de fuente laboral / (c) *Average Marginal Effects (AME)*, significancia de los efectos: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

¹⁸⁶ Este coeficiente puede entenderse como el porcentaje en que se reduce la probabilidad de no poder explicar el comportamiento de la variable dependiente.

¹⁸⁷ El análisis de la capacidad clasificatoria requiere evaluar tanto la “especificidad” (casos negativos correctamente clasificados) como la “sensibilidad” (casos positivos correctamente clasificados). Dado que se trata de una distribución binomial, la determinación del *cutoff* es clave para definir esta capacidad. Para ello, se calculó el Índice de Youden, que arroja un resultado óptimo entre especificidad y sensibilidad.

El objetivo principal del modelo propuesto es examinar qué rol desempeña la posición económico-ocupacional del hogar (evaluada a partir de la inserción del PSH) en la determinación del DCS-L. Sin embargo, cabe reconocer la existencia de factores sociodemográficos y socioeducativos de los hogares que también participan, a la manera de factores intervinientes, en la determinación de tal déficit.

Al considerar estas características, advertimos que –con excepción del 2003– aquellos hogares encabezados por mujeres tenían más chances de experimentar capacidades deficientes de subsistencia a partir de ingresos laborales que aquellos encabezados por un varón. En cambio, el tipo de configuración familiar (diferenciando entre aquellos hogares monoparentales y aquellos que no lo eran) no estuvo asociado con una mayor probabilidad de DCS-L. La presencia de menores de 18 años en el hogar incidía de manera positiva y significativa sobre la probabilidad de que el hogar experimentara déficit. En concreto, en los diferentes modelos, tal probabilidad se incrementaba entre 7 y 13 pp. por cada menor de 18 años que se encontraba presente en el hogar.

Otros atributos del hogar fueron relevantes. En primer lugar, la edad del PSH resultó significativa. Entre aquellos hogares encabezados por jóvenes (de hasta 29 años), la probabilidad de experimentar DCS-L se incrementaba cerca de 5 pp. en comparación con los hogares encabezados por un PSH de 50 años y más. En contraste, los hogares cuyo PSH tenía entre 30 y 49 años se encontraban más protegidos que aquéllos. En segundo lugar, la educación del principal proveedor también constituyó una variable relevante en la determinación de las capacidades deficientes de subsistencia a partir de ingresos laborales. Aquellos hogares cuyo PSH sólo había completado la escuela primaria incrementaban su probabilidad de experimentar DCS-L entre 10 y 27 pp., en los diferentes años considerados, con respecto a los encabezados por un PSH con nivel superior. La probabilidad de disponer de DCS-L entre aquellos hogares cuyo PSH tenía secundaria completa o incompleta, por su parte, se incrementaba entre 7 y 12 pp. con respecto al grupo de referencia¹⁸⁸. Por último, recogiendo nuestro planteo teórico, la capacidad de los hogares de disponer de fuerza de trabajo adicional desempeñó un papel relevante y positivo con respecto a sus capacidades de subsistencia. Por cada nuevo ocupado que los hogares lograban disponer, la probabilidad de

¹⁸⁸ Cabe notar que, desde la perspectiva teórica presentada, el efecto de la educación sólo puede interpretarse como una “interacción” con las características laborales de los individuos (en este caso, el PSH). La demanda de empleo prioriza a quienes tienen mayores niveles educativos y ello otorga mejores niveles de ingresos, lo cual, a su turno, impacta sobre las condiciones de vida. Al respecto, véase Salvia (2012) y Salvia y Vera (2015). Para una discusión teórica de la relación entre heterogeneidad estructural y educación, véase Salvia, Robles y Fachal (2016).

experimentar capacidades deficientes de subsistencia a partir de ingresos laborales se redujo entre 7 y 8 pp. Por lo tanto, confirmamos el papel positivo y significativo del esfuerzo laboral de los hogares –a igualdad de otros factores– en las capacidades de subsistencia.

En suma, advertimos la existencia de un perfil sociodemográfico de unidades domésticas que habrían resultado más expuestas a experimentar DCS-L. Los hogares con mayor número de niños, encabezados por mujeres, jóvenes y con bajo nivel educativo, habrían reunido características correlacionadas con el DCS-L. Por su parte, la menor disponibilidad de ocupados secundarios habría acentuado la propensión observada¹⁸⁹.

Ahora bien, ¿qué incidencia tuvo la posición económico-ocupacional del hogar (evaluada a través del PSH), como expresión de la heterogeneidad de la estructura social del trabajo en el déficit de las capacidades de subsistencia? Desde la perspectiva teórica asumida, constituye un aspecto estructural de la participación de la fuerza de trabajo con amplias implicancias en las condiciones materiales de vida de los hogares. El grupo de comparación son los hogares encabezados por un PSH asalariado registrado del sector formal privado.

Entre los hogares que pertenecían al sector formal público y privado a través de su principal proveedor advertimos fuertes contrastes. Los hogares encabezados por no asalariados o directivos en establecimientos del sector privado formal (patrones de establecimientos medianos y grandes, profesionales y directivos), se encontraban relativamente más “protegidos” frente al riesgo de experimentar DCS-L. Sin embargo, este efecto no se mantuvo durante todo el período, sino que se disolvió a partir del 2008. Ello obedeció tanto al empeoramiento relativo que experimentaron los no asalariados del sector formal como a la mejora general de los ingresos que les permitió a los hogares encabezados por trabajadores asalariados registrados del sector privado formal (el grupo de comparación) mejorar su posición relativa. Por su parte, entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector público no verificamos una mayor exposición relativa al DCS-L (lo que se advierte en que los coeficientes estimados no son significativos). En otras palabras, estos hogares se hallaban en una situación similar a la de los hogares encabezados por un trabajador registrado del sector formal privado. En cambio, los hogares encabezados por un asalariado no registrado del sector formal enfrentaron una significativa mayor exposición al DCS-L –a igualdad de otros

¹⁸⁹ Estos resultados contribuyen a la comprensión de las tramas de la pobreza económica. Como señala Eguía (2017: 79), los hogares en situación de pobreza se encuentran atravesados por clivajes de género y edad que articulan distintos procesos de desigualdad. De allí que determinados hogares enfrenten una mayor probabilidad de experimentar déficit de capacidades de subsistencia.

factores— que aquellos encabezados por un asalariado registrado del sector formal. En concreto, entre tales hogares, la probabilidad de experimentar DCS-L se incrementaba entre 16 y 20 pp. con respecto al grupo de comparación.

Entre los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal advertimos una particular exposición a experimentar capacidades deficientes de subsistencia a partir de ingresos laborales que se mantuvo aun controlando otros atributos. Aquellas unidades domésticas cuyo PSH era asalariado registrado del sector microinformal disponían de las mejores condiciones relativas. Entre éstas, la probabilidad de encontrarse en situación de DCS-L se incrementaba entre 4 y 8 pp. con respecto a los hogares encabezados por asalariados registrados del sector formal (incluso, en el 2011, el coeficiente estimado no resultó significativo).

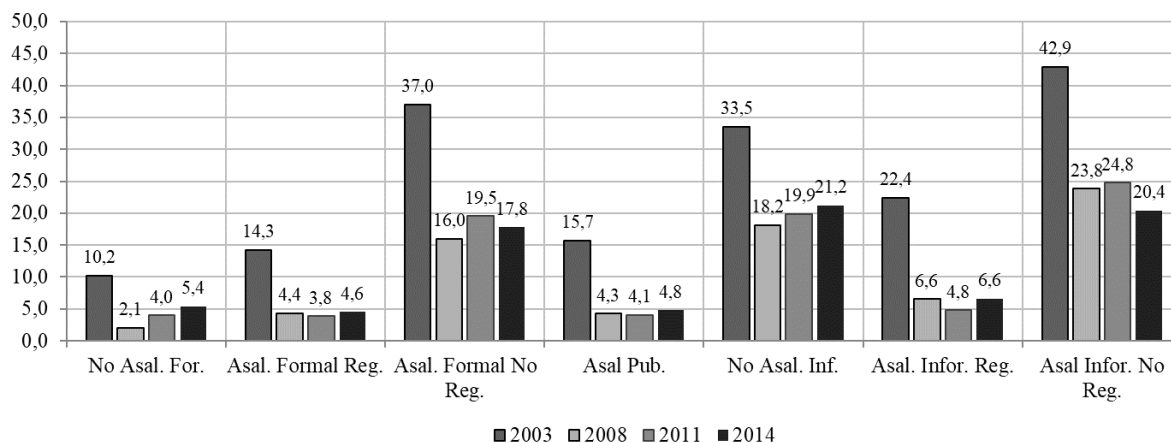
En contraste, aquellos hogares cuyo PSH era no asalariado del sector microinformal disponían de un mayor riesgo de no cubrir una CBT a partir de sus ingresos laborales. Durante el ciclo de políticas heterodoxas, la probabilidad de experimentar déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales se incrementó entre 18 y 19 pp. en comparación con los hogares encabezados por asalariados registrados del sector formal. A su vez, los hogares cuyo PSH era asalariado no registrado del sector microinformal experimentaron las condiciones más desventajosas. Entre estos hogares, la probabilidad se incrementaba entre 18 y 25 pp. con respecto a los hogares del grupo de comparación.

A partir de los modelos especificados, con base en la ecuación (3), calculamos la probabilidad promedio de experimentar DCS-L según la posición económico-ocupacional del PSH, manteniendo constantes las demás características del hogar. Para ello, tomamos los valores modales o medios de las demás covariables introducidas (según sean cualitativas o cuantitativas) y calculamos la probabilidad resultante alterando la categoría ocupacional del PSH. La ventaja de esta aproximación —que complementa la anterior— es que el análisis ya no se realiza en comparación con una categoría de referencia sino considerando las probabilidades estimadas para hogares de diferentes perfiles.

Como se advierte en el Gráfico 5.2, los hogares encabezados por un asalariado no registrado del sector formal, por un no asalariado o por un asalariado no registrado del sector microinformal, mantuvieron una exposición a experimentar DCS-L muy superior a los demás. Es decir que, manteniendo constantes sus demás atributos, estos hogares enfrentaron una pauta más adversa en términos de condiciones de vida que puede atribuirse exclusivamente a

su modalidad de inserción en la estructura económico-ocupacional (evaluada, como se indicó, por la posición de su PSH).

Gráfico 5.2. Probabilidad media^(a) de experimentar déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).



Notas: (a) Obtenida a partir de modelos de regresión logística binaria.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

5.3.3. Un ejercicio de microsimulación del impacto de la heterogeneidad económico-ocupacional sobre el déficit de capacidades de subsistencia

La aplicación de una regresión logística nos permitió reconocer los factores determinantes de que los hogares no alcancen una CBT a partir de su ingreso laboral. En particular, reveló la mayor exposición de los hogares que pertenecen al sector microinformal o a empleos no regulados a través de su PSH a experimentar DCS-L. Sin embargo, si bien hemos reconocido una mayor propensión a encontrarse en tal situación, no hemos cuantificado la magnitud del efecto atribuible a las desigualdades sociolaborales en términos de su impacto sobre los niveles de subsistencia.

Para evaluar los efectos de la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional sobre las capacidades de subsistencia de los hogares a partir de fuentes laborales estimamos la “penalidad” que introduce sobre los ingresos del conjunto de la fuerza de trabajo disponible en las unidades domésticas¹⁹⁰. Con este objetivo, especificamos un modelo de regresión lineal y obtenemos el efecto atribuible a la posición económico-ocupacional sobre el logaritmo del

¹⁹⁰ Existen antecedentes de esta metodología en Beccaria y Groisman (2009), García Díaz y Woyecheszen (2011) y en Mario y García (2013) para algunos años de la posconvertibilidad.

ingreso horario de la ocupación principal de los miembros ocupados del hogar. Este modelo se estimó por mínimos cuadrados ordinarios y tiene la siguiente forma funcional:

$$\ln y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i + \dots + \varepsilon (5),$$

Preparamos un modelo para asalariados y otro para no asalariados, para los años 2003, 2008, 2011 y 2014¹⁹¹. De esta forma, el ingreso horario de los ocupados es resultado de su posición económico-ocupacional y de un vector de características individuales. El “ingreso contrafáctico” sería el que el ocupado tendría si no operara la penalidad atribuible a la posición económico-ocupacional.

El ejercicio de estimación del efecto atribuible a dichas posiciones económico-ocupacionales sobre el DCS-L se realiza comparando la proporción de hogares con DCS-L (\hat{H}), que surge del ingreso pronosticado por regresión, con la proporción estimada a partir de computar un nuevo ingreso familiar de fuente laboral incluyendo el ingreso contrafáctico (H^*). Formalmente:

$$\hat{H} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m m (\hat{y}_i - z_i)^0 (6)$$

Tal que \hat{y} es el ingreso del hogar que resulta de adicionar el antilogaritmo del ingreso horario pronosticado por regresión (por el número de horas trabajadas) más otros ingresos laborales de los miembros del hogar; y siendo z la CBT (calculada en función de la composición por adulto equivalente) correspondiente al hogar i . Por su parte:

$$H^i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m m \hat{y}_i^* (7)$$

De modo que \hat{y}^* es el ingreso contrafáctico de cada uno de los miembros del hogar si no hubiera una penalidad asociada a la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional (manteniendo constantes el resto de los factores).

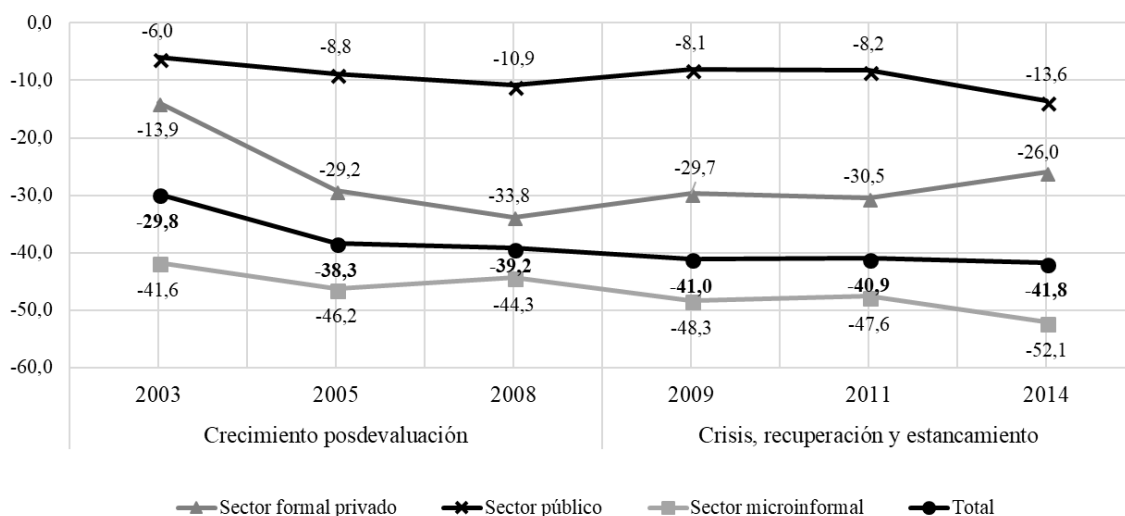
En base a los resultados obtenidos, es posible reconstruir el ITF-L y observar qué ocurriría con la incidencia del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales en caso de no existir una penalidad atribuible a las desigualdades estructurales del sistema ocupacional. Esta visión es complementaria de la que ofreció el modelo de regresión logística anteriormente implementado y permite cuantificar el efecto de las desigualdades estructurales del mercado laboral sobre la incidencia del DCS-L. Cabe aclarar que se trata de una

¹⁹¹ En el Anexo V se presentan las funciones de ingreso completas que fueron estimadas para asalariados y no asalariados.

aproximación limitada, en tanto que no discutimos de qué modos otros atributos (por ejemplo, la educación o la rama de actividad) interactúan con las características estructurales de las inserciones económico-ocupacionales de los miembros de los hogares.

En este ejercicio, evaluamos qué sucedería si las penalidades anteriormente comentadas no existieran. Si analizamos los resultados sobre el total de hogares con PSH ocupado, la supresión contrafáctica se traduce en una reducción de la incidencia de hogares con DCS-L de entre 30% y 40% –según los años considerados– (Gráfico 5.3). Cabe advertir que este efecto se volvió más intenso a lo largo del ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014). Para comprender este proceso, podemos inferir que durante el período inmediato poscrisis la existencia de DCS-L en los hogares parece haber estado muy asociada a otros comportamientos además de lo sucedido en relación con la heterogeneidad económico-ocupacional (por ejemplo, una mayor incidencia del desempleo entre ocupados secundarios). De allí que la sustracción estadística del efecto de esta variable a través de un ejercicio de microsimulación permita constatar su creciente relevancia en la determinación de las condiciones de vida familiares.

Gráfico 5.3. Microsimulación^(a) de la reducción del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L) según posición sectorial económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en variación porcentual).



Nota: (a) Para realizar este ejercicio, se obtiene, en primer lugar, el porcentaje de hogares (\hat{H}) que tienen ingresos laborales estimados por debajo de una CBT. Tales ingresos surgen de la predicción del modelo de regresión lineal para cada uno de los ocupados del hogar. En segundo lugar, se obtiene el porcentaje de hogares con ingresos laborales contrafácticos por debajo de una CBT (H^*). Estos ingresos surgen de suprimir el efecto de penalización atribuible a las formas de inserción económico-ocupacional. La reducción aquí presentada es una comparación entre ambas tasas señaladas.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Asimismo, el Gráfico 5.3 muestra la desigual penalidad enfrentada por los hogares según la posición sectorial del PSH (es decir, distinguiendo entre sectores formal privado, público y microinformal). Entre aquellos cuyo PSH pertenecía al sector formal público, la proporción de hogares con DCS-L se reducía entre 6% y 13% entre puntas del período. Entre los que pertenecían al sector formal privado a través de su PSH, en tanto, la proporción se reducía entre 14% y 26%. En contrapartida, entre aquellos hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal la incidencia del DCS-L se reducía entre 41% y 52% al controlar las penalidades atribuibles a la inserción económico-ocupacional de los miembros ocupados. Estos resultados apuntan en la dirección señalada por nuestra hipótesis, al destacar la existencia de barreras estructurales al proceso de convergencia de las condiciones de vida de los hogares a partir de la distribución del ingreso laboral.

5.4. Síntesis y conclusiones del capítulo

Las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas se encuentran estrechamente ligadas a las formas de inserción laboral de sus integrantes. Por su intermedio, los hogares participan de la distribución del ingreso laboral y obtienen los recursos necesarios para sufragar su reproducción cotidiana y generacional. De esta forma, la demanda laboral

asociada a la heterogeneidad estructural contribuye a definir las capacidades económicas de los hogares. Al mismo tiempo, mediante sus comportamientos doméstico-reproductivos, los hogares inciden sobre sus condiciones de reproducción, operan sobre el patrón distributivo y participan en la reproducción más general del sistema social.

De acuerdo con la hipótesis planteada en este capítulo, la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional habría condicionado la pauta distributiva del ingreso laboral y, por ende, habría incidido sobre las capacidades de reproducción económica familiares. En particular, los hogares encabezados por trabajadores del sector microinformal o en el segmento no regulado habrían experimentado las condiciones más desventajosas en términos distributivos. En este punto, señalamos que una mayor participación laboral por parte de los miembros de los hogares habría actuado sobre esta relación. Sin embargo, habrían quedado expuestos, con mayor probabilidad al riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia a partir de sus ingresos laborales aun considerando tal esfuerzo económico-reproductivo.

Esta hipótesis fue abordada de manera sucesiva a lo largo del capítulo. En primer lugar, planteamos que, si bien se verificaron mejoras sustantivas en los niveles de ingresos familiares de fuente laboral (ITF-L), el patrón distributivo permaneció asociado a las condiciones de heterogeneidad estructural y segmentación laboral. Tras un deterioro significativo, la implementación de políticas heterodoxas provocó un crecimiento sostenido del ingreso familiar de fuente laboral (ITF-L). Esta recomposición fue más intensa entre los hogares que pertenecían al sector público y al sector microinformal a través de su PSH.

Sin embargo, constatamos que, tras los años inmediatos que siguieron a la devaluación, la pauta de desigualdad permaneció significativamente estable. Las brechas de ingreso, evaluadas en función de la posición económico-ocupacional del PSH, resultaron un tamiz rígido a través del cual se filtró el crecimiento del ingreso laboral. Se trata de un mecanismo de asignación estrechamente ligado a la heterogeneidad del sistema económico-ocupacional. En suma, durante la posconvertibilidad constatamos que, si bien no se profundizó la inequidad derivada de la heterogeneidad estructural, tampoco se disolvió su lógica de funcionamiento. Desde este planteo teórico, se entiende que, de no mediar un cambio en la matriz productiva, el crecimiento económico puede coexistir con la heterogeneidad laboral y reproducir el patrón de desigualdad.

En segundo lugar, postulamos que los cambios en los niveles de ingresos no pueden disociarse del papel desplegado por las propias unidades domésticas y su capacidad para disponer de un mayor número de ocupados. Constatamos que alrededor de una quinta parte de la mejora observada en el ITF-L se debió al mayor esfuerzo económico de las unidades domésticas. Este proceso se concentró exclusivamente en la fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008). A partir de entonces (2008-2014), no tuvo ninguna relevancia, no sólo porque el empleo creció a un ritmo inferior, sino porque los hogares redujeron su tamaño relativo y, por consiguiente, estabilizaron su tasa de dependencia económica. De esta forma, si bien los hogares participaron en la configuración del patrón de desigualdad y en la mejora de sus condiciones de vida, su injerencia fue moderada en comparación con los procesos estructurales que organizan la distribución del ingreso laboral.

Estos resultados son convergentes con algunas investigaciones llevadas adelante en otros ámbitos nacionales (Damián, 2004; Montoya García, 2017). Tales estudios destacan que las chances de que los hogares incrementen su participación laboral en contextos de bajo dinamismo económico tendrían limitado impacto –al menos en términos agregados–. En otras palabras, la autoexplotación de la fuerza de trabajo de los hogares para optimizar su balance reproductivo enfrentaría las restricciones del contexto macroeconómico. Este patrón podría explicar el carácter procíclico de la participación laboral que advertimos en este capítulo. En síntesis, la reproducción socioeconómica de los hogares se encontraría estrechamente subordinada a procesos estructurales ligados a los ciclos económicos.

En tercer lugar, señalamos que las condiciones de heterogeneidad estructural incidieron de forma significativa sobre capacidades de subsistencia de los hogares. Aun cuando constatamos un crecimiento sostenido del ITF-L, no bastó para disolver la exposición de los hogares que participan del sector menos estructurado de la economía a experimentar DCS-L. Verificamos un patrón consistente: los hogares que participaban del sector microinformal a través de su PSH resultaron más expuestos no sólo a ubicarse por debajo del umbral mínimo considerado, sino también en una zona de vulnerabilidad en torno a dicho umbral. Al respecto, hallamos una gradación que repone la heterogeneidad del sector informal. Los hogares mejor posicionados fueron los encabezados por asalariados registrados, que disponían de capacidades de subsistencia próximas a los de aquellos hogares cuyo PSH pertenecía al sector formal. En contraste, los hogares más desaventajados resultaron aquellos cuyo PSH era asalariado no registrado del sector microinformal. Alrededor de la mitad de estos hogares no cubría una CBT a partir de sus ingresos laborales. Por último, cabe señalar que los hogares

encabezados por un asalariado no registrado del sector formal disponían de capacidades de subsistencia similares a los de aquellos cuyo PSH pertenecía al sector microinformal. La aplicación de un análisis multivariado de regresión permitió comprobar que esta correlación entre la posición del hogar en la estructura económico-ocupacional (evaluada a partir del PSH) y el déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales se mantuvo con independencia de otros atributos de los hogares.

De este modo, el capítulo ofreció algunas claves sobre lo que Ghosh (2011) denomina “raíces sistémicas de la pobreza”. La heterogeneidad estructural, con sus efectos sobre la demanda sectorial de fuerza de trabajo y las brechas de ingresos, desempeñaría un papel crucial para explicar este proceso. Por una parte, los hogares que acceden a empleos en los sectores económicos modernos, en estratos profesionales o estables, obtuvieron niveles de vida más elevados que el promedio. Por otra parte, los hogares que accedían a ocupaciones en el sector microinformal, en el segmento secundario del empleo o en condiciones de precariedad, quedaron expuestos a un mayor riesgo de no cubrir sus necesidades a partir de sus ingresos laborales. Estas penalidades son independientes de otros atributos; es decir, se trata de un proceso de desigualdad o exclusión estructural, en tanto remite a las condiciones más generales de la demanda laboral a la que acceden las unidades domésticas.

En suma, los resultados alcanzados sugieren la existencia de lo que podríamos denominar dinámicas selectivas de empobrecimiento. Tales dinámicas estarían asociadas a desigualdades estructurales en el mercado de trabajo y se articularían con otros clivajes de desigualdad social (como el género, la edad y factores demográficos). En esta trama, los procesos económico-ocupacionales desempeñarían un rol crucial; en especial, aquellos derivados de una insuficiente demanda de empleo de calidad por parte de los sectores más dinámicos de la estructura productiva.

Capítulo VI

Matriz de intervención social del estado, política social y condiciones de vida en un contexto de heterogeneidad estructural

Introducción

En los capítulos precedentes constatamos la relevancia de las desigualdades estructurales del mercado laboral sobre las condiciones de vida familiares. Por una parte, destacamos el carácter limitado de la recomposición de las oportunidades económico-ocupacionales para la fuerza de trabajo de las unidades domésticas y señalamos que una parte de éstas concentró empleos en el sector microinformal, en condiciones de precariedad o de marginalidad. Por otra parte, advertimos que la mejora de los ingresos laborales atravesó un patrón de desigualdad estructural que condicionó la convergencia socioeconómica a partir de tales fuentes.

Desde el enfoque teórico propuesto, las capacidades de reproducción económica de los hogares reconocen un punto de anclaje central en las formas de inserción económico-ocupacional de la fuerza de trabajo; sin embargo, la intervención estatal mediante políticas sociales también desempeña un rol relevante. ¿Qué capacidad tuvieron estos mecanismos de distribución secundaria –en las condiciones de heterogeneidad estructural prevalecientes– para promover una mayor convergencia social en materia de condiciones de vida? Este capítulo se propone aportar respuestas a este interrogante tomando en cuenta las condiciones estructurales en las que la acción redistributiva del Estado interviene. El objetivo es describir la cobertura de los instrumentos de política social según la posición económico-ocupacional de los hogares (evaluada por medio de la inserción de su PSH) y caracterizar su injerencia sobre las capacidades de reproducción económica a la luz de los procesos socioeconómicos examinados en los dos capítulos previos.

La *hipótesis* que evaluamos en este capítulo postula que durante el ciclo posconvertibilidad (2003-2014) la expansión de la intervención estatal bajo políticas sociales se habría plasmado en el crecimiento de la cobertura de los hogares con trabajadores ubicados en el sector microinformal, en empleos precarios o en posiciones marginales. Los ingresos provenientes de este tipo de fuente habrían adquirido una mayor injerencia en los presupuestos de los hogares situados en tales posiciones económico-ocupacionales, en particular durante el período de menor dinamismo económico (2008-2014). Sin embargo, habrían sido limitados

para excluir a tales hogares del riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia (DCS).

La heterogeneidad estructural de las sociedades periféricas y el tipo de intervención social del Estado se encuentran imbricados; por consiguiente, su distinción es, antes que nada, una estrategia analítica. Por una parte, la heterogeneidad productiva, la segmentación de los mercados y el tipo de demanda laboral condiciona los recursos de los que dispone el Estado (Tokman, 2006). Por otra parte, las intervenciones estatales configuran los mercados laborales, en tanto los recursos que transfieren y su efecto de desmercantilización regulan la participación de la fuerza de trabajo (Cortés y Marshall, 1991; Esping-Andersen, 1990; Gough, 1979; Offe, 1984). En definitiva, coincidimos con Adelantado et al. (1998: 126), para quienes cabe comprender la relación entre estructura y política social en términos de “recursividad”.

Algunos procesos acaecidos durante el ciclo de políticas heterodoxas sugieren la pertinencia del análisis propuesto en este capítulo. Como describimos en el capítulo I, el gasto público social alcanzó su máximo histórico en el 2013, cuando representó 27,6% del PIB. Además, se modificaron o expandieron distintos instrumentos del sistema de políticas sociales: se estatizó el sistema previsional y se expandió su cobertura, se amplió el número de pensiones no contributivas y se extendieron las transferencias monetarias condicionadas¹⁹².

Algunos investigadores destacan la extensión de la seguridad social y plantean una tendencia a la universalización, la reedición del “Estado social” o un modelo de “ciudadanía social”, si bien reconocen ciertas limitaciones en la estructura del mercado de trabajo y en los sistemas de protección (Andrenacci, 2012; Cecchini et al., 2015; Filgueira, 2015; Grassi, 2016). Otros autores también refieren a un nuevo ciclo, pero plantean que no cabe confundir una extensión de la cobertura con la universalización (Danani y Hintze, 2014). Finalmente, otros estudios subrayan la relevancia de la “asistencia social”, vinculada con las transferencias de ingresos a grupos vulnerables (Seiffer, 2013; Seiffer, Kornbliht y De Luca, 2012), y la persistencia de “brechas” persistentes entre grupos sociales (Logiudice, 2016; Messina, 2014, 2015; Pautassi y Gamallo, 2016). Si bien estos estudios dan cuenta del nuevo contexto de la intervención social del Estado durante la posconvertibilidad y constituyen valiosos antecedentes, en

¹⁹² Este último proceso se inscribe en lo que Ferreira y Robalino (2010: 5) denominan “revolución de la asistencia social” [*social assistance revolution*] y abarca a numerosos países en vías de desarrollo. En el caso argentino, un rasgo de las nuevas transferencias monetarias condicionadas es que descansan en el paradigma de la “inversión social” (Adelantado, 2017) y, por consiguiente, contemplan condicionalidades ligadas con el desarrollo del capital humano de los beneficiarios.

general abordan aspectos agregados de las formas de intervención social del Estado o bien las características de su arquitectura institucional, sin profundizar en sus impactos sobre las capacidades de reproducción económica de diferentes grupos de hogares¹⁹³.

Desde la perspectiva teórica planteada, el capítulo busca aportar nuevos elementos para comprender los cambios en la relación entre la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y esta matriz de intervención social del Estado, con respecto a las condiciones de vida familiares. Un abordaje de esta naturaleza requiere considerar de manera articulada los dispares grados de cobertura y los disímiles efectos que la intervención estatal produce sobre las capacidades de reproducción de los hogares según su posición en la estructura socio-ocupacional.

Abordamos la hipótesis propuesta de manera sucesiva a lo largo de tres secciones. En la primera, se describe cómo se plasmaron los cambios agregados del gasto público social a nivel de los hogares. Examinamos qué tipos de instrumentos predominaron según la posición de los hogares en la estructura económico-ocupacional (evaluada a partir de la inserción del PSH). En la segunda sección, analizamos la injerencia de los ingresos de política social en el ingreso total familiar y su contribución al cambio del ingreso bajo distintos periodos del ciclo posconvertibilidad. Por último, la tercera sección examina su incidencia sobre el déficit de capacidades de subsistencia de los hogares.

6.1. Estructura económico-ocupacional e instrumentos de política social

El objetivo de esta sección es describir los cambios en las características y en los niveles de cobertura del sistema de políticas sociales sobre las unidades domésticas. Resulta de interés detectar tanto modificaciones “cuantitativas” –por ejemplo, la expansión o no de la cobertura– como “cualitativas” –es decir, en el tipo de instrumentos al que accedían los hogares– en torno a estos procesos. En esta sección abordamos la *hipótesis de trabajo* de que la expansión del sistema de políticas sociales –en particular, de su componente “no contributivo”– entre el 2003 y el 2014 se habría traducido en la expansión de la cobertura de los hogares ubicados en las posiciones más desaventajadas de la estructura económico-ocupacional.

¹⁹³ Por su parte, la literatura sobre evaluación de impacto de las diferentes políticas sociales que implican transferencias de ingresos (Bustos y Villafañe, 2011; Garganta y Gasparini, 2017; Groisman, Bossert y Sconfienza, 2011; Maurizio y Vázquez, 2014; Maurizio y Dávalos, 2017; Salvia, Tuñón y Poy, 2015) o sobre sus efectos distributivos (Gasparini et al., 2017; Judzik, Trujillo y Villafañe, 2017; Rofman y Oliveri, 2012) no suelen abordar los clivajes socioeconómicos que atraviesan al colectivo de beneficiarios, más allá de la eventual consideración de su posición en la estructura decílica (Bertranou, 2010; Cetrángolo et al., 2017).

En este punto, consideramos cuatro modalidades de intervención social: (1) el sistema previsional de jubilaciones y pensiones (JYP)¹⁹⁴; (2) el sistema de asignaciones familiares (AAFF); (3) los “programas de protección al desempleo” (PPD), que incluyen el seguro de desempleo y los planes de empleo con contraprestación laboral; (4) los “programas de asistencia social directa” (PASD), que incluyen diferentes formas de transferencias monetarias. Las últimas dos modalidades pueden entenderse, de forma genérica, como “programas de protección contra la pobreza” (PPP)¹⁹⁵.

6.1.1. Cambios en la cobertura del sistema de políticas sociales a nivel de los hogares

El crecimiento del gasto público social y la existencia de transformaciones del sistema de políticas sociales constituyen rasgos distintivos de la posconvertibilidad. Sin embargo, se enlazan con cambios previos registrados en la intervención social durante los noventa. Recordemos que, por una parte, el programa de ajuste estructural coincidió con la privatización del sistema previsional y, por otra parte, con la extensión de las políticas de transferencias monetarias de “lucha contra la pobreza”, en especial, bajo la forma de planes de empleo (Danani y Beccaria, 2011; Salvia, Poy y Vera, 2016). A comienzos de los 2000, la respuesta estatal a la crisis fue una expansión sin precedentes de este tipo de instrumentos, a través del PJJHD, que alcanzó cerca de dos millones de beneficiarios (Rofman y Oliveri, 2012).

Por consiguiente, el ciclo de políticas heterodoxas se inició con un renovado protagonismo de la intervención estatal directa en las condiciones de vida familiares¹⁹⁶. No obstante, a partir del 2003 se registró un cambio en el tipo de instrumentos implementados que afectaron al conjunto del sistema de políticas sociales. En primer lugar, se expandió el sistema previsional,

¹⁹⁴ Con respecto al tratamiento de las jubilaciones y pensiones como transferencias sociales, retomamos la propuesta de Rofman y Oliveri acerca de “... considerar al sistema previsional como un esquema de impuestos al trabajo y transferencias, no necesariamente vinculados [entre sí]. Este enfoque es (...) útil (...) en el marco de un diseño como el del sistema argentino, donde la contributividad del sistema es discutible tanto desde el financiamiento (dado que buena parte de los recursos no provienen de aportes de los trabajadores) como de los derechos (dado que muchos de los beneficiarios no tienen una historia de contribuciones completa)” (2012: 116).

¹⁹⁵ Retomamos aquí la delimitación empleada en una investigación previa (Salvia, Poy y Vera, 2016, 2018). Cabe resaltar que esta distinción no refleja aquella entre subsistemas contributivos y no contributivos. Por una parte, dentro de las pensiones se incluyen aquellas de fuente no contributiva. Por otra parte, el seguro de desempleo constituye una prestación de carácter contributivo (Curcio y Beccaria, 2011). Sin embargo, tanto la imposibilidad de distinguir el tipo de pensiones, como la baja incidencia estadística del seguro de desempleo, aconsejaron la conveniencia de este agrupamiento.

¹⁹⁶ La masividad alcanzada por los programas de asistencia al desempleo durante la crisis del 2001-2002 constituye uno de los rasgos que distingue al caso argentino de otros latinoamericanos que, en los 2000, también registraron una expansión del gasto público social (Ocampo y Gómez-Arteaga, 2017). Constituyó el punto más álgido de lo que Grassi, Hintze y Neufeld denominaron “Estado neoliberal asistencialista” (1994: 22).

a través de las “moratorias”, y aumentó la tasa de sustitución por el aumento de los haberes previsionales. En segundo lugar, se incrementaron las pensiones no contributivas y asistenciales, que habían quedado fijas desde los noventa. En tercer lugar, crecieron las transferencias monetarias referidas a la “lucha contra la pobreza”, relacionadas tanto con la activación laboral (como los programas de empleo y las políticas de capacitación) como con la inversión en capital humano. De acuerdo con la información de registros administrativos – expuesta en el capítulo I–, entre el 2003 y el 2014, el número de titulares de programas de protección contra la pobreza y de pensiones no contributivas pasó de 2,4 a 4,4 millones.

El Cuadro 6.1 exhibe los cambios en la cobertura de los distintos instrumentos de política social a nivel de los hogares¹⁹⁷. A lo largo del período posconvertibilidad (2003-2014), la proporción de unidades domésticas que recibían algún tipo de transferencia económica por política social pasó de 40,5% a 48,9% (8,4 pp.). Esta expansión se dio en dos momentos diferenciados. Por una parte, durante el ciclo de crecimiento posdevaluación (2003-2008), la cobertura se extendió de 40,5% a 45,9%. Con posterioridad, bajo la fase de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2014) volvió a incrementarse. Sin embargo, ello ocurrió a ritmos dispares durante el período: entre el 2008 y el 2011, se redujo la proporción de hogares que recibían algún tipo de transferencia proveniente de política social (de 45,9% a 44,7%); entre el 2011 y el 2014 aumentó a un ritmo similar al verificado durante la posdevaluación (de 44,7% a 48,9%). Este comportamiento resulta significativo en tanto que, como mencionamos, hacia fines del 2003, la intervención social estatal había alcanzado un hito a raíz de la implementación del PJJHD. De esta manera, el incremento de las transferencias económicas a los hogares por parte del Estado se desacopló de su carácter de atención a la emergencia social y parece haber originado un nuevo patrón de intervención.

¹⁹⁷ Cabe recordar que se trata de los instrumentos que pudieron ser identificados en función de la EPH. Sobre las restricciones que, en este punto, presenta la fuente de datos, véase el capítulo III. Los procedimientos involucrados en el reconocimiento de estos instrumentos son descriptos en el Anexo III.

Cuadro 6.1. Cobertura del sistema de políticas sociales por tipo de instrumento. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Jubilaciones y pensiones	13,5	14,5	19,4	19,8	19,9	20,3	5,9***	0,5	0,4	6,8***
Asignaciones familiares^(b)	16,2	18,3	21,0	19,1	14,7	18,6	4,8***	-6,3***	3,9***	2,4***
Protección a la pobreza	13,6	11,9	10,0	10,6	15,0	15,4	-3,6***	5,0***	0,4	1,9***
<i>Protección al desempleo</i>	10,9	7,3	2,2	1,7	1,5	1,8	-8,8***	-0,6***	0,3**	-9,1***
<i>Seguro de desempleo</i>	0,6	0,5	0,6	0,8	0,5	0,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,2**
<i>Programas de empleo</i>	10,3	6,8	1,5	0,9	1,0	1,4	-8,8***	-0,5***	0,4***	-8,9***
Programas de asistencia directa	3,2	5,0	8,0	9,3	14,4	14,3	4,8***	6,4***	-0,1	11,1***
<i>AUH^(c)</i>	/	/	/	5,0	11,6	12,2	/	/	0,5	/
<i>Otros programas</i>	3,2	5,0	8,0	4,4	2,7	2,1	4,8***	-5,3***	-0,6***	-1,1***
Total^(d)	40,5	41,9	45,9	45,4	44,7	48,9	5,4***	-1,2***	4,2***	8,4***

Notas: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1 / (b) Sobre el modo en que fueron captadas e imputadas al ingreso total familiar, véase el Anexo Metodológico III / (c) La menor captación de hogares perceptores de AUH en el 2009 se origina en que esta política fue implementada a fines de octubre de ese año, y los microdatos se refieren al cuarto trimestre del año / (d) Es el porcentaje de hogares que recibe al menos un tipo de transferencia sobre el total de hogares; por consiguiente, no surge de la suma de las demás categorías del Cuadro.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

A la evolución agregada subyacen reajustes cualitativos en términos de cobertura. El mayor gasto en funciones de previsión social implicó un cambio en la cobertura a nivel de las unidades domésticas: entre el 2003 y el 2014, la proporción de hogares que disponían de ingresos por jubilaciones o pensiones (JYP) pasó de 13,5% a 20,3%. Esta evolución siguió una pauta consistente con la implementación del PIP: a partir del 2005, se expandió la proporción de hogares que accedían a estos ingresos. Al mismo tiempo, una parte del incremento observado puede atribuirse a la mayor extensión de las pensiones no contributivas. El sistema de asignaciones familiares (AAFF) tuvo una evolución diferente. Entre el 2003 y el 2014, la proporción de hogares cubiertos pasó de 16,2% a 18,6% (2,4 pp.), aun cuando, como sabemos, se verificó una sustantiva expansión del empleo registrado. Este desempeño puede atribuirse a las sucesivas desactualizaciones de los topes mínimos requeridos para poder acceder al cobro de AAFF (CIFRA, 2012). En efecto, entre el 2003 y el 2008, el porcentaje de hogares cubiertos por AAFF se incrementó (4,8 pp.); pero entre el 2008 y el 2011 se retrajo de manera significativa (6,3 pp.), para volver a incrementarse entre el 2011 y el 2014 (3,9 pp.) cuando los topes mínimos se actualizaron.

Otro elemento característico del ciclo de políticas heterodoxas fue la extensión de la cobertura de los programas de protección contra la pobreza (PPP). Entre el 2003 y el 2014, el porcentaje de unidades domésticas alcanzadas por tales instrumentos pasó de 13,6% a 15,4% (1,9 pp.).

Al respecto, advertimos la dispar evolución de los distintos instrumentos que componen a tales intervenciones. La proporción de hogares cubiertos por programas de protección al desempleo (PPD) se redujo de 11% a 1,9%. La mayor parte de esta retracción se verificó en los años iniciales de la posconvertibilidad: entre el 2003 y el 2008, la proporción de hogares cubiertos por PPD se retrajo de 10,3% a 1,5%. Durante estos años, una parte de los beneficiarios del PJJHD transitó al empleo y otra parte se incorporó a nuevos programas de transferencias condicionadas, como el PFIS, o programas de capacitación dirigidos a grupos específicos de trabajadores, como el SCE. En contraste con estas modificaciones, es significativa tanto la estabilidad como la baja incidencia de la cobertura del seguro de desempleo, incluso durante la crisis del 2009¹⁹⁸.

El pasaje del PJJHD a otros programas de transferencias monetarias se vislumbra en la mayor proporción de hogares alcanzados por programas de asistencia social directa (PASD): durante todo el ciclo, pasaron de 3,2% a 14,3%. Esta evolución fue paralela al decrecimiento de la proporción de hogares alcanzados por programas de empleo. A partir de la implementación de la AUH en el 2009, se registró una nueva expansión de la cobertura de instrumentos de asistencia social directa: los hogares alcanzados pasaron de 9,3% a 14,3%. Aquí debemos considerar también los ingresos provenientes de programas específicos, como PROGRESAR, y la extensión de la AUH a mujeres embarazadas (AUE).

6.1.2. Heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y heterogeneidad de la política social

Más allá de la evolución agregada de las diferentes fuentes de ingreso, interesa examinar el acceso de los hogares a instrumentos de política social atendiendo a sus disímiles posiciones en la estructura económico-ocupacional. Aquí consideramos tales posiciones a partir de la inserción ocupacional del principal sostén del hogar (PSH).

De acuerdo con la información exhibida en el Cuadro 6.2, durante la posconvertibilidad (2003-2014), la cobertura del sistema de políticas sociales entre los hogares que pertenecían al sector formal privado a través de su PSH pasó de 38,6% a 47,6% (9 pp.). Este incremento se derivó de una mayor incidencia del sistema previsional y de PPP (en especial, de programas de asistencia directa) y de un bajo dinamismo (entre puntas del período) de las AAFF (Cuadros 6.3, 6.4 y 6.5). Sin embargo, al interior de este grupo de hogares advertimos distintos ritmos de expansión de la intervención social del Estado. Entre aquellos encabezados

¹⁹⁸ Ello da cuenta del bajo poder protectorio de este instrumento y, por consiguiente, su limitada capacidad de incidencia sobre el funcionamiento del mercado laboral en la Argentina.

por no asalariados y directivos o por asalariados registrados, la cobertura creció a un ritmo sensiblemente inferior –en términos absolutos– que entre aquellos encabezados por asalariados no registrados (6,7 pp., 4,3 pp. y 22,5 pp., respectivamente). Entre los primeros, el comportamiento advertido dependió del sistema de JYP y de AAFP. En contraste, entre los últimos, la significativa expansión puede atribuirse a la mayor cobertura de ingresos por JYP (que, en algunos casos, puede presumirse que constituyen pensiones no contributivas) y por PASD.

Cuadro 6.2. Cobertura del sistema de políticas sociales^(a) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(b)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	38,6	40,1	45,6	45,3	41,6	47,6	7,1***	-4,1***	6,0***	9,0***
No asalariados	24,9	26,5	28,5	26,9	29,4	31,6	3,6	0,8	2,2	6,7***
Asalariados registrados	44,7	46,6	50,6	49,0	42,0	49,0	5,9***	-8,6***	7,0***	4,3***
Asalariados no registrados	29,1	28,6	38,0	42,9	47,7	51,6	8,9***	9,8***	3,8*	22,5***
Sector público	53,6	54,7	52,8	51,3	43,3	47,4	-0,7	-9,5***	4,1***	-6,2***
Empleados del sector público	53,6	54,7	52,8	51,3	43,3	47,4	-0,7	-9,5***	4,1***	-6,2***
Sector microinformal	30,2	35,9	42,0	42,6	49,4	51,2	11,8***	7,5***	1,7*	21,0***
No asalariados	27,6	34,4	38,3	38,2	45,6	44,9	10,8***	7,2***	-0,7	17,3***
Asalariados registrados	42,8	49,4	48,0	52,2	45,1	48,4	5,2	-2,9	3,3	5,6*
Asalariados no registrados	30,5	34,5	45,7	45,7	58,1	62,9	15,1***	12,4***	4,8***	32,4***
Desocupados y benef. planes	68,7	60,2	56,4	54,1	55,4	54,8	-12,3***	-1,1	-0,5	-13,9***
Total	40,5	41,9	45,9	45,4	44,7	48,9	5,4***	-1,2***	4,2***	8,4***

Notas: (a) Se presenta el porcentaje de hogares que recibe al menos un tipo de transferencia sobre el total de hogares de cada categoría económico-ocupacional / (b) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Entre los hogares encabezados por un PSH del sector público advertimos dos procesos simultáneos. Por un lado, se consolidaron como los hogares con mayor nivel de cobertura de instrumentos de política social: entre 4 y 5 de cada 10 hogares se encontraban alcanzados por aquéllos. Sin embargo, por otro lado, fueron los únicos que experimentaron una merma en sus niveles de cobertura durante la posconvertibilidad (pasaron de 53,6% a 47,4% entre el 2003 y el 2014). A este comportamiento contribuyó decisivamente la pérdida de acceso a AAFP.

Cuadro 6.3. Cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	12,9	12,7	17,0	18,4	17,9	18,7	4,1***	0,9	0,8	5,8***
No asalariados	17,3	14,9	18,3	19,0	18,1	21,6	1,0	-0,2	3,5*	4,3*
Asalariados registrados	11,5	12,1	15,8	17,3	17,0	17,1	4,3***	1,2	0,2	5,7***
Asalariados no registrados	14,3	13,5	20,7	23,1	21,7	23,6	6,4***	1,0	1,9	9,3***
Sector público	14,2	17,1	19,1	18,2	19,0	16,5	4,9***	-0,1	-2,5**	2,3**
Empleados del sector público	14,2	17,1	19,1	18,2	19,0	16,5	4,9***	-0,1	-2,5**	2,3**
Sector microinformal	14,4	16,0	22,6	22,4	23,3	24,8	8,2***	0,7	1,5*	10,5***
No asalariados	16,0	17,5	23,5	23,6	24,4	24,8	7,5***	0,9	0,4	8,8***
Asalariados registrados	14,5	15,1	16,0	19,0	18,4	21,3	1,5	2,4	2,8	6,7***
Asalariados no registrados	11,9	13,8	23,6	21,8	23,8	26,7	11,7***	0,2	2,9*	14,8***
Desocupados y benef. planes	11,5	11,3	25,6	21,5	21,5	17,7	14,0***	-4,1	-3,8	6,2***
Total	13,5	14,5	19,4	19,8	19,9	20,3	5,9***	0,5	0,4	6,8***

Nota: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value <0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal fueron los que incrementaron de forma más intensa su participación en el sistema de políticas sociales durante la posconvertibilidad (30,2% a 51,2% entre el 2003 y el 2014, es decir, 21 pp.). Ello se debió al efecto articulado de una mayor cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones (tanto contributivas como no contributivas) y de PPP, en particular, de PASD, en un contexto en que los PPD redujeron su relevancia (Cuadros 6.3, 6.4 y 6.5). Entre los hogares encabezados por no asalariados (cuentapropistas y pequeños patrones) o por asalariados no registrados (entre los que son cruciales las trabajadoras del servicio doméstico) se incrementó con mayor intensidad el acceso a este tipo de recursos derivados de la intervención social del Estado. En contraste, el incremento de la cobertura entre los hogares encabezados por asalariados registrados del sector microinformal fue muy inferior (y débil en términos de significancia estadística), si bien alrededor de 4 de cada 10 hogares permanecieron cubiertos, principalmente a partir de AAFD (pero también mediante otros instrumentos).

También se modificó la cobertura entre aquellos hogares cuyo PSH se encontraba desocupado o era beneficiario de un programa de empleo, pero en un sentido distinto al verificado en el resto de los hogares. La reducción de aquellos cubiertos por instrumentos de política social (de 68,7% a 54,8%) es indicativa de un cambio de composición de este grupo (Cuadro 6.2). Al respecto, podemos conjeturar que se transitó de situaciones de desempleo consolidado durante la crisis de la convertibilidad hacia un escenario de desempleo friccional, lo que

implica una mayor heterogeneidad de este grupo de hogares y, en consecuencia, del tipo de cobertura al que accedían.

Cuadro 6.4. Cobertura del sistema de asignaciones familiares según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	22,3	23,5	26,1	23,8	17,6	24,4	3,7***	-8,5***	6,8***	2,1**
No asalariados	6,9	10,9	9,8	8,2	8,8	5,7	2,9*	-1,0	-3,1**	-1,3
Asalariados registrados	32,4	33,0	34,6	31,3	22,5	31,8	2,2*	-12,1***	9,2***	-0,7
Asalariados no registrados	2,4	2,6	4,7	3,5	3,0	4,2	2,3***	-1,7**	1,2	1,8**
Sector público	38,6	39,2	36,6	34,0	26,3	30,9	-2,0	-10,3***	4,6***	-7,7***
Empleados del sector público	38,6	39,2	36,6	34,0	26,3	30,9	-2,0	-10,3***	4,6***	-7,7***
Sector microinformal	4,3	4,9	6,9	6,4	4,8	5,1	2,6***	-2,0***	0,2	0,8*
No asalariados	2,3	2,8	4,2	3,4	2,4	1,9	1,9***	-1,8***	-0,5	-0,4
Asalariados registrados	26,7	34,0	31,8	29,1	21,7	21,7	5,1*	-10,1***	0,0	-5,0*
Asalariados no registrados	1,1	0,4	1,9	1,1	0,6	1,9	0,8*	-1,3***	1,3***	0,8*
Desocupados y benef. planes	0,7	0,1	0,1	2,6	0,1	0,1	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Total	16,2	18,3	21,0	19,1	14,7	18,6	4,8***	-6,3***	3,9***	2,4***

Nota: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Cuadro 6.5. Cobertura del sistema de programas de protección contra la pobreza^(a) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(b)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	6,1	6,5	7,1	7,8	10,3	10,0	1,0**	3,2***	-0,3	3,9***
No asalariados	1,0	1,3	0,7	0,5	2,6	5,3	-0,4	1,9***	2, 7***	4,3***
Asalariados registrados	4,9	4,8	6,0	6,5	7,5	6,3	1,2**	1,5***	-1,2**	1,4**
Asalariados no registrados	12,7	14,3	15,2	18,7	26,8	29,3	2,5*	11,6***	2,5	16,6***
Sector público	6,1	3,2	2,9	4,1	4,2	6,0	-3,2***	1,3**	1, 8***	-0,1
Empleados del sector público	6,1	3,2	2,9	4,1	4,2	6,0	-3,2***	1,3**	1, 8***	-0,1
Sector microinformal	13,2	17,0	16,1	16,8	26,3	26,0	2,9***	10,1***	-0,2	12,8***
No asalariados	10,1	15,8	13,2	13,7	22,3	20,9	3,1***	9,1***	-1,4	10,8***
Asalariados registrados	5,4	6,5	7,2	10,8	13,1	10,9	1,8	5,9***	-2,2	5,5***
Asalariados no registrados	19,7	21,8	24,4	25,1	39,4	42,0	4,7***	15,0***	2,6	22,3***
Desocupados y benef. planes	59,7	50,8	33,8	23,8	40,5	42,3	-25,9***	6,6*	1,9	-17,4***
Total	13,6	11,9	10,0	10,6	15,0	15,4	-3,6***	5,0***	0,4	1,9***

Nota: (a) Incluye programas de empleo, seguro de desempleo y programas de asistencia social directa / (b) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

La expansión cuantitativa de la cobertura del sistema de políticas sociales que transfieren ingresos a los hogares pareciera indicar una tendencia a la “homogeneización”: hemos advertido una tendencia convergente en términos de acceso a instrumentos de política social.

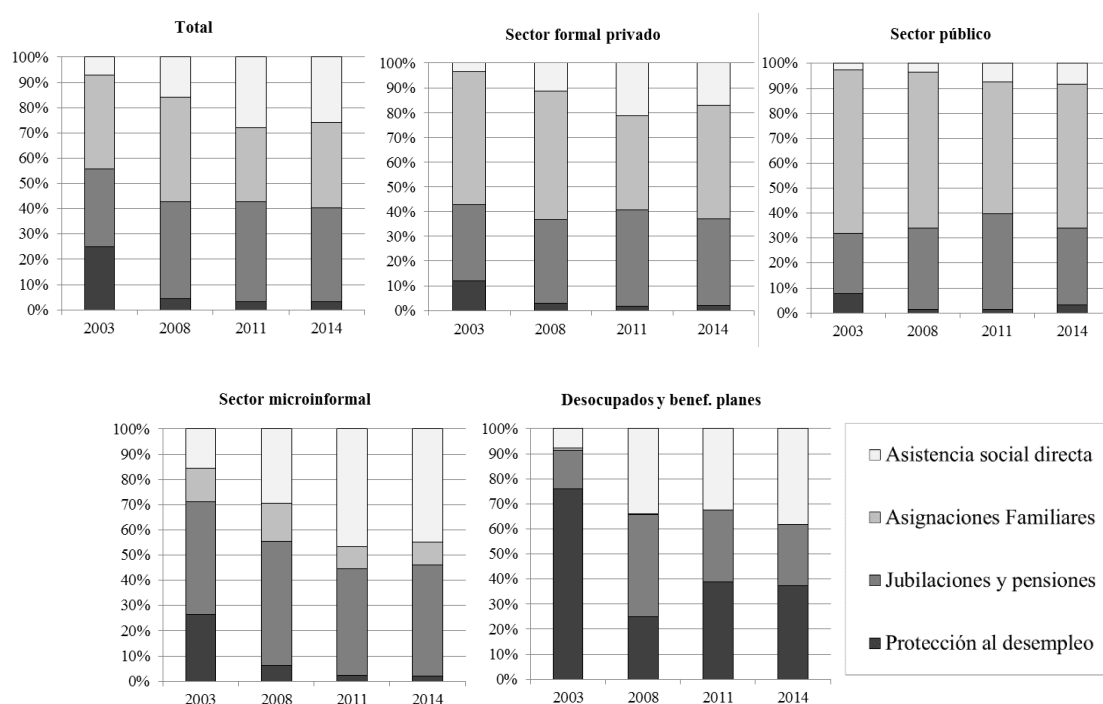
Sin embargo, cabe reconocer que este proceso oculta dinámicas diferentes, en tanto las relaciones de mercado que rigen tal acceso tienen un alcance desigual en los distintos estratos económico-ocupacionales (Bárcena y Prado, 2016).

En efecto, los resultados expuestos expresan una “dualidad” (Cortés, 2013) en materia de intervención social del Estado que, surgida en los noventa y profundizada durante la crisis, se habría mantenido durante el decenio. Por un lado, se mantuvieron y expandieron aquellas políticas sociales dirigidas a hogares vulnerables (como las transferencias monetarias condicionadas o los programas de empleo), asociadas a la “lucha contra la pobreza”. Por otro lado, se mantuvieron, aunque con escaso dinamismo, las políticas más tradicionales, como las AAFF, dirigidas a los hogares con asalariados registrados. En conjunto, la información revela una presencia persistente de la intervención social del Estado en los hogares –aun tomando la crisis de la convertibilidad como punto de partida–, en particular entre aquellos ubicados en las posiciones más vulnerables de la estructura económico-ocupacional. Mientras que durante la crisis de la convertibilidad tal intervención impactó principalmente en aquellos hogares encabezados por un PSH desocupado, en los años posteriores –y con la mediación de un proceso de absorción laboral que ya hemos descrito– tuvo su mayor injerencia entre aquellos encabezados por un trabajador del sector de baja productividad¹⁹⁹.

A modo de síntesis, el Gráfico 6.1 exhibe cuáles eran los instrumentos de política social al que accedían las unidades domésticas según su tipo de inserción económico-ocupacional. En este sentido, advertimos que el aumento cuantitativo de la cobertura fue paralelo con una “heterogeneización” del tipo de instrumentos al que acceden los hogares según su posición económico-ocupacional. En otras palabras, a la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional se le sobreimprimió la “heterogeneidad” de la política social.

¹⁹⁹ Estas tendencias también han sido descritas desde otras perspectivas. En un estudio del Gran La Plata, Eguía y Sotelo (2007) señalan que los programas sociales constituyen recursos valiosos para las estrategias de reproducción económica de los hogares en situación de pobreza estructural. A partir de datos del Conurbano Bonaerense y del Gran Córdoba, Comas (2012) y Freyre y Merino (2016), respectivamente, llegan a resultados similares. Semán y Ferraudi Curto (2016: 156) se refieren a este proceso como una “estatalización” de los sectores populares en la Argentina, derivado del mayor protagonismo de las políticas públicas asistenciales en la vida cotidiana de los hogares.

Gráfico 6.1. Distribución de hogares que reciben políticas sociales por tipo de instrumento según posición sectorial económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados, 2003-2014 (en porcentajes).



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Entre aquellos hogares cuyo PSH estaba ocupado en el sector formal público o privado, fueron dominantes las transferencias por AAFD y por jubilaciones y pensiones. Los programas de empleo y las políticas de asistencia directa tuvieron un menor protagonismo y quedaron estrechamente ligados a los hogares cuyo PSH era asalariado no registrado²⁰⁰. En cambio, entre los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal o por un desempleado, adquirieron significación, además de los ingresos por jubilaciones y pensiones, las transferencias por políticas de asistencia directa (como la AUH) y los programas de empleo.

²⁰⁰ Ello explica la leve expansión, entre el 2008 y el 2014, de la proporción de hogares del sector formal privado que participaban de PASD (Gráfico 6.1).

Alcanzamos aquí un punto relevante de la investigación, al vincular el acceso a recursos provenientes del sistema de políticas sociales con las formas de inserción económico-ocupacional de las unidades domésticas (evaluada a partir de la posición del PSH). En línea con la hipótesis planteada, la percepción de recursos de política social se incrementó más intensamente entre los hogares encabezados por trabajadores de las posiciones más desaventajadas de la estructura económico-ocupacional (en el sector microinformal o en posiciones no registradas del sector formal). Dicho de otro modo, la extensión de la intervención social del Estado implicó que una mayor proporción de hogares –en especial, los ubicados en las posiciones más vulnerables– incorporaran esos recursos a su balance reproductivo.

6.2. La política social y sus efectos sobre los ingresos familiares

El papel de la intervención del Estado sobre la reproducción económica de los hogares puede interpretarse en términos de la “desmercantilización” que produce (Esping-Andersen, 1990, 1999). Este concepto describe el grado en que los instrumentos de política social permiten que individuos y hogares reduzcan su dependencia con respecto al mercado. Una política social incrementa su capacidad de desmercantilización al aportar niveles más elevados de sustitución de ingresos (o de satisfactores de necesidades en especie²⁰¹). Está implícito que, en sociedades capitalistas, la desmercantilización remite a una cuestión de grados, ya que no suele ocurrir una prescindencia completa de los mecanismos de mercado. En este sentido, la influencia de la política social sobre los procesos de mercado es inescindible de la cuantía de las prestaciones que otorga. Esta precisión resulta relevante en aquellos casos en los que las transferencias monetarias involucran una sustitución exigua de ingresos.

El propósito de esta sección es describir la incidencia de los ingresos de política social sobre los ingresos familiares. En principio, la mayor cobertura del sistema –evaluada previamente– no necesariamente se corresponde con una injerencia más significativa sobre el total de ingresos familiares. Podría ocurrir que las otras fuentes de ingreso se incrementen a mayor velocidad y, en ese caso, el resultado sería indeterminado. Asimismo, si los montos transferidos resultan exiguos, su participación en el ingreso familiar puede ser de baja intensidad. En este sentido, según nuestra hipótesis, es de esperar que los ingresos provenientes del sistema de políticas sociales hayan adquirido una mayor relevancia sobre los

²⁰¹ En este sentido, cabe recuperar la distinción presentada en el capítulo III. Reconocemos en la política social la capacidad de “desmercantilizar necesidades” y “desmercantilizar personas” (Danani, 2009), lo que delimita, respectivamente, a las políticas de servicios universales y a las que transfieren ingresos. El presente capítulo se circunscribe a este último eje analítico.

ingresos familiares, en particular, de los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal, precario o en posiciones de informalidad de subsistencia.

Para evaluar esta proposición, la sección se divide en tres apartados. El primero considera la participación de los ingresos de política social en los recursos económicos de los hogares. El segundo evalúa qué rol desempeñaron tales recursos en el cambio de los ingresos familiares durante los distintos períodos de la posconvertibilidad. El tercero considera la injerencia de la política social en el cambio de los ingresos familiares de los hogares en posiciones marginales.

6.2.1. Incidencia de la política social en el ingreso total familiar

Pese al incremento de la cobertura de los instrumentos de política social a nivel de los hogares, los recursos provenientes de las transferencias económicas estatales mantuvieron una participación reducida y estable en el ingreso familiar. De acuerdo con la información recogida en el Cuadro 6.6, entre el 2003 y el 2014, la participación de los ingresos de política social en el ingreso total familiar pasó de 8,3% a 9,1% (0,8 pp.).

Cuadro 6.6. Participación de los instrumentos del sistema de políticas sociales en el ingreso total familiar. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en porcentaje del ingreso familiar).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Jubilaciones y pensiones	4,9	4,9	6,3	5,6	6,0	6,8	1,4***	-0,3	0,8***	1,9***
Asignaciones familiares	1,0	1,2	1,5	1,5	1,0	0,7	0,6***	-0,6***	-0,3***	-0,3***
Protección a la pobreza	2,4	1,3	0,7	0,8	1,3	1,6	-1,8***	0,7***	0,2*	-0,9***
<i>Protección al desempleo</i>	1,7	0,9	0,2	0,2	0,3	0,3	-1,5***	0,1	0,1	-1,4***
<i>Seguro de desempleo</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1**	0,0	0,0	-0,1***
<i>Programas de empleo</i>	1,6	0,8	0,1	0,1	0,2	0,3	-1,5***	0,1	0,1	-1,3***
Programas de asistencia directa	0,7	0,5	0,5	0,6	1,0	1,2	-0,3**	0,6***	0,2	0,5***
<i>AUH</i>	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,0	/	/	0,2***	/
<i>Otros programas</i>	0,7	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	-0,3***	-0,3***	0,0	-0,5***
Total	8,3	7,5	8,5	8,0	8,3	9,1	0,2***	-0,2***	0,8**	0,8***

Nota: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Por una parte, durante el ciclo de crecimiento posdevaluación (2003-2008), se mantuvo estable entre 8,3% y 8,5%; por otra parte, durante la fase de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2014) ascendió levemente hasta 9,1%. ¿Cómo comprender este comportamiento? Ya hemos visto que el gasto público social se incrementó de manera sustantiva durante el período de políticas heterodoxas. Por consiguiente, de los resultados expuestos cabe deducir que la evolución de los demás recursos de los que disponían los

hogares –en especial, de origen laboral– fue tanto o más intensa que la de las transferencias provenientes de políticas sociales²⁰².

Las distintas fuentes de ingreso consideradas mantuvieron un comportamiento disímil. En primer lugar, las jubilaciones y pensiones aumentaron su participación en el ingreso (4,9% a 6,8%). En segundo lugar, las AAFF perdieron participación (1% a 0,7%). En tercer lugar, las políticas de protección contra la pobreza también perdieron injerencia (2,4% a 1,6%) lo que expresa dos movimientos distintos: por un lado, los PPD perdieron significación (1,7% a 0,3%) y, por otro, los PASD ganaron injerencia (0,7% a 1,2%). El comportamiento de los PPP revela la magnitud que el PJJHD mantuvo durante la salida de la crisis de la convertibilidad en los presupuestos de los hogares.

En resumen, durante el ciclo de políticas heterodoxas, la intervención social del Estado incrementó su cobertura sobre los hogares. Desde esta perspectiva, cabe referirse a un crecimiento en “extensión” del sistema de políticas sociales. Sin embargo, tal crecimiento no estuvo acompañado por una mayor “intensidad” en términos de impacto sobre los ingresos familiares.

No obstante, esta conclusión no implica que no se hayan registrado diferencias significativas en la incidencia relativa de estos recursos al considerar las posiciones económico-ocupacionales de los hogares (evaluadas a partir de la inserción de su PSH). El Cuadro 6.7 ofrece información relevante al respecto. En efecto, entre los hogares que pertenecían al sector formal público y privado a través de su PSH, los ingresos por política social se mantuvieron estables durante el conjunto del período posconvertibilidad (1,6 pp. y -1,2 pp., respectivamente). Una excepción fueron los hogares encabezados por asalariados no registrados, entre los cuales se incrementó más fuertemente la injerencia de los ingresos de política social (Cuadro 6.7).

²⁰² Asimismo, cabe no perder de vista que el universo de estudio está conformado por los hogares con PSH activo, de tal modo que excluimos a aquellos inactivos (en especial, jubilados y pensionados). En caso de que fueran incluidos, deberíamos encontrar una mayor injerencia de los ingresos de política social en la masa de ingresos familiares ya que el crecimiento de la función previsional en el total del gasto social resultó superior al de otros recursos (capítulo I).

Cuadro 6.7. Participación de los instrumentos del sistema de políticas sociales en el ingreso total familiar según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos. Argentina, 2003-2014 (en porcentaje del ingreso familiar).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	6,0	5,9	7,8	7,2	6,6	7,6	1,8***	-1,1***	1,0***	1,6***
No asalariados	5,2	5,5	4,4	5,2	5,7	6,8	-0,8	1,3**	1,1	1,6**
Asalariados registrados	5,5	5,7	8,0	7,0	6,0	6,9	2,5***	-2,0***	0,8***	1,4***
Asalariados no registrados	9,3	7,4	11,7	12,1	11,5	13,1	2,3	-0,2***	1,6*	3,8***
Sector público	7,2	6,8	7,6	6,9	6,2	6,0	0,5	-1,4**	-0,2	-1,2***
Empleados del sector público	7,2	6,8	7,6	6,9	6,2	6,0	0,5	-1,4**	-0,2	-1,2***
Sector microinformal	9,7	9,6	10,0	9,9	13,0	14,1	0,3	3,0***	1,2	4,5***
No asalariados	9,2	8,9	8,8	9,0	12,4	13,6	-0,4	3,6***	1,2	4,4***
Asalariados registrados	8,2	8,9	8,1	9,2	9,8	11,3	-0,1	1,7	1,5	3,1***
Asalariados no registrados	11,5	11,9	14,4	12,9	16,8	17,2	2,9	2,4***	0,4	5,7***
Desocupados y benef. planes	50,2	38,8	37,6	38,7	46,5	41,4	-12,6***	8,9***	-5,1	-8,8***
Total	8,3	7,5	8,5	8,0	8,3	9,1	0,2***	-0,2***	0,8**	0,8***

Nota: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal, en cambio, la participación de tales recursos en los presupuestos familiares aumentó de manera más sustantiva (si bien su incidencia se mantuvo reducida frente a las restantes fuentes) que entre los demás hogares (4,5 pp.), en especial durante el primer subperiodo del ciclo de crisis, expansión y estancamiento (2008-2011). Este incremento fue más sustantivo entre los hogares cuyo PSH era no asalariado del sector microinformal o asalariado no registrado (4,4 pp. y 5,7 pp., respectivamente). Finalmente, entre los hogares encabezados por desocupados o beneficiarios de programas de empleo, estos ingresos perdieron significación durante el período (8,8 pp.) lo que se comprende a la luz del cambio de composición de este grupo y la relevancia que había adquirido el PJJHD en el 2003.

6.2.2. La política social y su contribución al cambio de los ingresos familiares

En el capítulo previo examinamos la modificación de los ingresos familiares de fuente laboral durante la posconvertibilidad y las fuentes de dicho cambio. En la presente sección describimos la evolución de los ingresos familiares totales (ITF), procurando cuantificar la incidencia de las transferencias provenientes del sistema de políticas sociales sobre dicha variación. El modelo de análisis se interesa especialmente por el rol desempeñado por los diversos instrumentos de política social en el cambio del ingreso total familiar promedio. De acuerdo con la *hipótesis de trabajo*, los ingresos de política social habrían tenido una injerencia relevante en el cambio de los ingresos familiares de los hogares encabezados por un

trabajador del sector microinformal, en condiciones precarias o de marginalidad, en particular durante la fase de menor dinamismo económico de la posconvertibilidad (2008-2014).

6.2.2.1. El modelo de análisis

En esta sección indagamos acerca de los factores subyacentes al cambio en el ingreso total familiar (ITF) y otorgamos centralidad al rol desempeñado por los ingresos derivados de políticas sociales. Por consiguiente, extendemos el modelo analítico presentado en el capítulo V. En términos formales, el ITF promedio de un grupo de hogares g puede expresarse del siguiente modo:

$$ITF_g = \sum ITF_{k1g} \dots ITF_{kn_g}(1),$$

Donde los subíndices k denotan distintas fuentes de ingreso que componen el ITF de cada g grupo de hogares. A partir de (1), la variación del ITF entre dos momentos del tiempo t_0 y t_1 puede expresarse como:

$$\Delta ITF_{g, t1, t0} = ITF_{k1, g, t0} \Gamma_{k1} + \dots + ITF_{kn, g, t0} \Gamma_{kn} (2),$$

Donde r denota la tasa de variación del ingreso de cada una de las k fuentes de ingreso entre t_0 y t_1 . A partir de (2) se puede reconstruir cuánto aporta cada una de las k fuentes de ingreso a la variación del ITF.

Reconocemos la injerencia de tres fuentes de ingresos familiares. Aquellos provenientes del mercado laboral, los que provienen de políticas sociales y otros ingresos no laborales. Dado el foco de esta sección, desagregamos dentro de los ingresos de políticas sociales, entre diferentes fuentes de ingreso. Así, podemos reescribir (2) del siguiente modo:

$$\begin{aligned} \Delta ITF_{g, t1, t0} = & ITF_{L, g, t0} \Gamma_L + ITF_{PPD, g, t0} \Gamma_{PPD} + ITF_{JYP, g, t0} \Gamma_{JYP} + ITF_{AAFF, g, t0} \Gamma_{AAFF} \\ & + ITF_{PASD, g, t0} \Gamma_{PASD} + ITF_{ONL, g, t0} \Gamma_{ONL} (3), \end{aligned}$$

Donde el subíndice L denota los ingresos laborales, PPD a los provenientes de programas de protección al desempleo, JYP a los de jubilaciones y pensiones, $AAFF$ a aquellos que resultan de asignaciones familiares, $PASD$ a los ingresos por programas de asistencia social directa y ONL a otros ingresos no laborales. Los términos de esta descomposición resultan aditivos, de manera que los efectos derivados del sistema de políticas sociales pueden sumarse entre sí. Asimismo, los términos se interpretan en términos de su contribución al cambio en el ingreso total familiar. Por último, cabe notar que cada uno de los g grupos se define por posición

económico-ocupacional del hogar, evaluada a partir de la inserción de su PSH en la estructura social del trabajo.

6.2.2.2. Instrumentos de política social y cambio del ingreso familiar

El Cuadro 6.8 presenta la descomposición del cambio del ITF durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014). La primera columna exhibe la tasa de variación del ITF a nivel total y para los distintos subgrupos considerados. En la segunda columna, representamos la tasa de variación como el total del cambio a explicar. Las columnas subsiguientes expresan los aportes de las distintas fuentes al cambio en el ingreso total familiar²⁰³. En particular, el interés aquí se localiza en las contribuciones de los distintos instrumentos de política social identificados (PPD, JYP, AAFF y PASD).

Cuadro 6.8. Cambio en el ingreso total familiar según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2014-2003 (en porcentajes).

	ITF (Var %)	Aporte (%)							
		Cambio Total ITF	Ingresos Laborales	Ingresos Políticas Sociales					Otros Ingresos No Laborales
				Total	PPD	JYP	AAFF	PASD	
Sector formal privado	23,1%	100%	85%	15%	-2%	14%	0%	2%	1%
No asalariados y directivos	6,3%	100%	60%	31%	1%	29%	-2%	3%	8%
Asalariados registrados	27,0%	100%	87%	12%	-1%	12%	0%	1%	1%
Asalariados no registrados	38,4%	100%	77%	23%	-4%	18%	0%	10%	0%
Sector público	46,1%	100%	96%	3%	-1%	6%	-2%	0%	1%
Empleados del sector público	46,1%	100%	96%	3%	-1%	6%	-2%	0%	1%
Sector microinformal	44,1%	100%	72%	24%	-3%	21%	0%	7%	3%
No asalariados	35,1%	100%	73%	26%	-3%	23%	0%	6%	1%
Asalariados registrados	30,6%	100%	70%	22%	-2%	21%	-1%	3%	8%
Asalariados no registrados	61,8%	100%	67%	26%	-4%	20%	0%	11%	6%
Desocupados y benef. planes	83,2%	100%	42%	31%	0%	21%	0%	11%	27%
Total	44,6%	100%	87%	11%	-3%	11%	0%	2%	2%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

A partir del Cuadro 6.8 advertimos que la posconvertibilidad implicó una fuerte recomposición del ITF de los hogares (44,6%). Cabe retener que este proceso derivó, de manera predominante, de lo ocurrido en el mercado de trabajo (87%), en tanto que los ingresos por políticas sociales desempeñaron un papel limitado en el cambio total (11%). Por su parte, los ingresos no laborales también desempeñaron un rol positivo, aunque de escasa envergadura (2%).

²⁰³ Por consiguiente, cuando el ITF varía a una tasa negativa, las contribuciones que tengan signo positivo constituyen, en rigor, aportes negativos al cambio del ingreso familiar. En contrapartida, cuando el ITF varía a una tasa positiva, los aportes negativos deben ser interpretados como tales.

Si consideramos las distintas fuentes de ingreso relacionadas con la política social, advertimos que mientras que los PPD contribuyeron negativamente (-3%) –lo cual recoge la menor relevancia de estos programas con posterioridad al PJJHD–, las PASD aportaron de manera positiva (2%) y las AAFF no indujeron cambios relevantes debido a sus oscilaciones durante el período. En este sentido, la mayor parte de la contribución positiva de la política social al ingreso de los hogares provino del sistema de jubilaciones y pensiones (11%).

Sin embargo, la información presentada pone en evidencia el desigual acento de los componentes observados al considerar la posición económico-ocupacional de los hogares. Mientras que 15% del cambio en el ITF de los hogares encabezados por un trabajador del sector formal se debió a estos ingresos (y apenas 3% entre aquellos cuyo PSH pertenecía al sector público) tal injerencia ascendió a 24% entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal (una proporción similar alcanzó entre los hogares cuyo PSH era asalariado no registrado del sector formal) y a 31% entre aquellos encabezados por beneficiarios de programas de empleo o desocupados. En todos los casos, la fuente de ingreso que más intensamente aportó fue el sistema de jubilaciones y pensiones. Por consiguiente –en línea con nuestra hipótesis de trabajo–, la política social incrementó su relevancia en el cambio del ingreso familiar más fuertemente entre los grupos más vulnerables de la estructura económico-ocupacional²⁰⁴.

¿Qué diferencias se registraron en los diferentes periodos de la posconvertibilidad? El Cuadro 6.9 presenta la descomposición del cambio del ITF en la fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008). Durante este período, la recomposición de los ingresos familiares (45,6%), se vinculó centralmente con procesos del mercado laboral (87%) y sólo marginalmente con los ingresos de política social (9%). Los demás ingresos no laborales desempeñaron un rol positivo, pero exiguo (4%). Los instrumentos de política social que contribuyeron positivamente a la mejora del ingreso familiar fueron los provenientes de JYP y de AAFF. En un contexto de retracción del PJJHD y de pérdida de poder adquisitivo de los montos, los PPD aportaron negativamente (-3%) al cambio del ITF y los PASD no tuvieron variaciones significativas.

²⁰⁴ La información del Cuadro 6.8 también indica que los ingresos no laborales cobraron mayor importancia relativa entre los hogares más desaventajados –los encabezados por asalariados no registrados del sector microinformal o por desocupados y beneficiarios de planes de empleo. En general, se trata de ingresos que provienen de redes informales, de recursos que aportan otros miembros que no viven en el hogar, etc. (Alzugaray, 2007; Comas, 2012).

Cuadro 6.9. Cambio en el ingreso total familiar según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2008-2003 (*en porcentajes*).

	ITF (Var %)	Aporte (%)							Otros Ingresos No Laborales
		Cambio o Total ITF	Ingresos Laborales	Ingresos Políticas Sociales					
				Total	PPD	JYP	AAFF	PASD	
Sector formal privado	25,0%	100%	79%	15%	-2%	12%	5%	0%	6%
No asalariados y directivos	10,8%	100%	87%	-3%	0%	-5%	2%	0%	16%
Asalariados registrados	28,6%	100%	77%	17%	-1%	13%	5%	0%	7%
Asalariados no registrados	33,9%	100%	80%	19%	-5%	20%	1%	2%	2%
Sector público	44,1%	100%	90%	9%	-1%	8%	2%	-1%	1%
Empleados del sector público	44,1%	100%	90%	9%	-1%	8%	2%	-1%	1%
Sector microinformal	44,9%	100%	83%	11%	-3%	12%	2%	0%	6%
No asalariados	47,8%	100%	86%	8%	-2%	9%	1%	0%	6%
Asalariados registrados	30,6%	100%	85%	8%	-2%	3%	7%	0%	8%
Asalariados no registrados	35,2%	100%	70%	23%	-7%	26%	1%	2%	8%
Desocupados y benef. planes	64,9%	100%	36%	18%	-36%	48%	0%	6%	46%
Total	45,6%	100%	87%	9%	-3%	9%	3%	0%	4%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

El aporte relativo de los ingresos de política social sobre el ITF fue positivo y levemente más relevante entre los hogares que pertenecían al sector formal privado a través de su PSH (15%) que entre aquellos encabezados por un trabajador del sector público (9%) o del sector microinformal (11%). Entre los hogares cuyo PSH se encontraba desempleado o era beneficiario de un programa de empleo, los ingresos de política social tuvieron un rol activo (18%) en la mejora del ITF; pero entre estos hogares el papel más importante correspondió a otros ingresos no laborales (46%). Ello sugiere –como mencionamos previamente– la creciente heterogeneidad de este grupo de hogares, entre los cuales el protagonismo de la asistencia, que había sido dominante durante la crisis, cedió su lugar a otros tipos de estrategias económicas.

El aporte de los diferentes instrumentos de política social fue similar con independencia de la posición económico-ocupacional del hogar. El papel determinante lo desempeñaron los ingresos por JYP, mientras que, durante esta fase, los PPD contribuyeron negativamente sobre los ingresos familiares. Los ingresos de JYP fueron más significativos para los hogares más desaventajados de la estructura socio-ocupacional: los encabezados por asalariados no registrados del sector formal (20%) o microinformal (26%) o por un desocupado o beneficiario de programas de empleo (48%). Podemos conjeturar que esta significativa relevancia de los ingresos por JYP estuvo vinculada con la “moratoria” y el PIP, que les permitió acceder a un haber jubilatorio a adultos mayores que tenían edad de retiro, pero

carecían de aportes. En contraste, los ingresos de JYP aportaron negativamente entre los hogares de no asalariados y directivos (-5%). Este comportamiento podría atribuirse a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones más altas de la pirámide previsional (Agú, 2015).

Cuadro 6.10. Cambio en el ingreso total familiar según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2011-2008 (en porcentajes).

	ITF (Var %)	Aporte (%)							
		Cambio Total ITF	Ingresos Laborales	Ingresos Políticas Sociales					Otros Ingresos No Laborales
				Total	PPD	JYP	AAFF	PASD	
Sector formal privado	5,1%	100%	127%	-16%	0%	-11%	-12%	8%	-11%
No asalariados y directivos	-2,9%	100%	90%	-40%	0%	-36%	-1%	-3%	50%
Asalariados registrados	7,2%	100%	130%	-21%	0%	-12%	-12%	3%	-9%
Asalariados no registrados	4,6%	100%	67%	8%	-1%	-23%	-4%	36%	25%
Sector público	10,7%	100%	101%	-7%	0%	-3%	-6%	1%	7%
Empleados del sector público	10,7%	100%	101%	-7%	0%	-3%	-6%	1%	7%
Sector microinformal	5,0%	100%	41%	73%	-1%	44%	-5%	35%	-14%
No asalariados	-1,6%	100%	204%	-210%	0%	-138%	10%	-82%	106%
Asalariados registrados	11,6%	100%	87%	24%	1%	25%	-9%	7%	-11%
Asalariados no registrados	15,9%	100%	50%	32%	-1%	11%	-2%	24%	18%
Desocupados y benef. planes	13,8%	100%	40%	111%	131%	-21%	0%	0%	-51%
Total	6,9%	100%	100%	5%	2%	2%	-7%	9%	-5%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Durante el primer subperíodo de la fase de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2011) volvió a incrementarse el ITF, aunque a un ritmo inferior al de la etapa precedente (6,9%) (Cuadro 6.10). Esta evolución obedeció a lo ocurrido con los ingresos laborales (100%) y de política social (5%), en tanto los demás ingresos no laborales contribuyeron negativamente (-5%). La contribución de los distintos instrumentos de política social tuvo características distintas a las verificadas durante la fase de crecimiento posdevaluación: nuevamente las JYP tuvieron una contribución positiva (2%), pero en esta etapa el papel clave correspondió a los PASD (9%), los PPD recuperaron una limitada injerencia (2%), mientras que las AAFF operaron negativamente (-7%)²⁰⁵.

Los ingresos de política social desempeñaron un rol disímil según la posición económico-ocupacional del hogar. Entre los encabezados por un PSH del sector formal o del sector

²⁰⁵ Al respecto, recordemos que en este período las AAFF perdieron capacidad protectora por la desactualización de los topes máximos requeridos para acceder al sistema. Ello no sólo se tradujo en un menor número de hogares que accedían al beneficio; también habría limitado los montos transferidos a los beneficiarios, por las desactualizaciones de las escalas consideradas en un contexto inflacionario.

público, contribuyeron de forma negativa al ITF (-16% y -7%, respectivamente). Ello se originó, principalmente, en una retracción de los ingresos de AAFP (-12% y -6%, respectivamente) y de jubilaciones y pensiones (-11% y -3%, respectivamente)²⁰⁶. No obstante, cabe resaltar que tanto entre aquellos hogares cuyo PSH era no asalariado del sector formal, como entre los encabezados por un asalariado no registrado, los ingresos de política social desempeñaron un papel positivo en el cambio del ITF en este período (40% y 8%): entre los primeros, como resultado de los montos por jubilaciones y pensiones; entre los segundos, por los ingresos de PASD. Esto último puede interpretarse a la luz de la implementación de la AUH con posterioridad a la crisis del 2009.

Entre los hogares que participaban del sector microinformal a través de su principal sostén, los ingresos de política social jugaron un papel incluso más significativo que los de origen laboral y explicaron casi tres cuartas partes del incremento del ITF en este subperíodo (73%). Los ingresos por JYP nuevamente desempeñaron un rol positivo (44%), pero también fueron significativas las transferencias por PASD (35%). Estos efectos fueron más intensos entre los hogares encabezados por no asalariados o por asalariados no registrados.

Precisamente, fue entre los hogares encabezados por no asalariados del sector microinformal que las transferencias de política social “compensaron” el comportamiento adverso del mercado laboral en este período. Por su parte, entre los hogares cuyo PSH era desocupado o beneficiario de un plan de empleo, la recomposición de los montos de programas de empleo fue un elemento crucial en la mejora del ingreso familiar (131%)²⁰⁷. En síntesis, fue durante este subperíodo de la posconvertibilidad (2008-2011) que puede situarse el mayor protagonismo adquirido por las transferencias de política social sobre la mejora de los ingresos de aquellos hogares más desaventajados de la estructura económico-ocupacional. De manera simultánea, constatamos la pérdida de relevancia de tales ingresos entre los hogares del sector formal público y privado.

Durante el período de estancamiento económico de la posconvertibilidad (2011-2014), el ITF decreció por primera vez en el período (-7,1%) (Cuadro 6.11). Tal comportamiento se explicó por lo ocurrido con los ingresos de fuente laboral de los hogares (96%) y por otros ingresos

²⁰⁶ Este proceso podría interpretarse no sólo como resultado de una pérdida relativa de poder adquisitivo de los haberes jubilatorios sino como resultado de una reducción de la proporción de hogares extendidos.

²⁰⁷ En agosto del 2009 se implementó el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (PRIST-AT). Constituyen antecedentes los programas “Agua Más Trabajo” y el “Programa Federal de Emergencia Habitacional”. A su vez, el PRIST-AT estuvo conectado a un plan previo del Ministerio de Desarrollo Social, el “Plan Manos a la Obra” (Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez, 2014). El PRIST-AT representó un incremento sustantivo con respecto a los montos reportados por los programas de empleo prevalecientes.

no laborales (7%), en tanto que las transferencias de política social se mantuvieron estables (3%)²⁰⁸. En este punto, tanto los ingresos por JYP como por PASD tuvieron un papel positivo (5% y 1%, respectivamente) aunque muy limitado.

Cuadro 6.11. Cambio en el ingreso total familiar según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2014-2011 (*en porcentajes*).

	ITF (Var %)	Aporte (%)							
		Cambio Total ITF	Ingresos Laborales	Ingresos Políticas Sociales					Otros Ingresos No Laborales
				Total	PPD	JYP	AAFF	PASD	
Sector formal privado	-6,2%	100%	100%	-8%	-1%	-11%	4%	0%	8%
No asalariados y directivos	-1,2%	100%	210%	-82%	-1%	-97%	29%	-12%	-28%
Asalariados registrados	-7,8%	100%	97%	-4%	-1%	-7%	3%	2%	7%
Asalariados no registrados	-1,2%	100%	101%	-124%	1%	-85%	13%	-52%	123%
Sector público	-8,4%	100%	81%	9%	-1%	5%	7%	-1%	10%
Empleados del sector público	-8,4%	100%	81%	9%	-1%	5%	7%	-1%	10%
Sector microinformal	-5,3%	100%	105%	-8%	1%	-10%	4%	-3%	3%
No asalariados	-7,1%	100%	104%	-4%	1%	-5%	2%	-2%	0%
Asalariados registrados	-10,4%	100%	116%	-3%	1%	-12%	6%	2%	-13%
Asalariados no registrados	3,2%	100%	125%	31%	1%	11%	1%	18%	-56%
Desocupados y benef. planes	-2,4%	100%	-59%	255%	159%	206%	0%	-110%	-96%
Total	-7,1%	100%	96%	-3%	0%	-5%	4%	-1%	7%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

En este sentido, los ingresos de política social desempeñaron un débil papel compensatorio durante el período de restricción económica propiciada por la devaluación. Entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector formal, desempeñaron un rol positivo (8%), cuyo origen radicó principalmente en los montos por jubilaciones y pensiones (11%). Sin embargo, las transferencias por PASD fueron relevantes entre los hogares cuyo PSH era asalariado no registrado del sector formal (52%).

Entre los hogares del sector microinformal, la contribución también fue moderada (8%) y se originó en los mismos instrumentos: jubilaciones y pensiones (10%) y PASD (3%). En cambio, entre los hogares cuyo PSH era desocupado o beneficiario de un programa de empleo, las actualizaciones de los montos de los PPD no bastaron para enfrentar la inflación producida por la devaluación; por ello, los ingresos de política social contribuyeron negativamente a la evolución del ITF (-255%) y sólo fueron parcialmente compensados por las transferencias de PASD (110%).

²⁰⁸ Como la variación del ITF en este período fue negativa, las contribuciones con signo positivo deben entenderse como aportes negativos al cambio verificado por el ingreso familiar.

6.2.2.3. Política social y marginalidad económica

Desde la perspectiva teórica asumida en la investigación, resulta relevante reconocer cuál fue la injerencia de los ingresos provenientes de transferencias por políticas sociales sobre los hogares cuyo PSH se encontraba vinculado a actividades de informalidad de subsistencia o de marginalidad económica. En el capítulo IV constatamos dos aspectos relativos a este grupo: por una parte, su reducción luego de la crisis de la convertibilidad; por otra parte, un cambio cualitativo en términos de composición. Adquirieron mayor significación las inserciones laborales informales de bajos ingresos y perdieron relevancia aquellas asociadas con programas de empleo o desocupación abierta. Aquí nos preguntamos qué papel desempeñaron los ingresos por políticas sociales en el cambio de sus ingresos familiares y cuáles fueron las fuentes que contribuyeron con mayor o menor intensidad.

Cuadro 6.12. Cambio en el ingreso total familiar según posición económico-ocupacional del PSH y descomposición de los factores que lo explican. Hogares marginales, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).

	ITF (Var %)	Aporte (%)							
		Cambio Total ITF	Ingresos Laborales	Ingresos Políticas Sociales					Otros Ingresos No Laborales
				Total	PPD	JYP	AAFF	PASD	
Ocupado informal de subsistencia	67,3%	100%	67%	30%	-5%	20%	0%	15%	3%
Beneficiario de un plan de empleo	150,8%	100%	26%	71%	49%	3%	0%	19%	3%
Desempleado marginal	99,4%	100%	57%	10%	-1%	14%	0%	-4%	34%
Total	92,8%	100%	73%	23%	-8%	17%	0%	14%	4%

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

El ITF de los hogares cuyo PSH se encontraba en situación de marginalidad económica se incrementó de forma significativa (92,8%) durante la posconvertibilidad (Cuadro 6.12), lo cual debe comprenderse a la luz del deterioro registrado durante la salida de la convertibilidad. Cabe notar que incluso entre este conjunto de hogares, tres cuartas partes del cambio observado se originó en los ingresos laborales que estos hogares lograban generar a través de sus estrategias reproductivas (73%) mientras que una cuarta parte (23%) correspondió a transferencias de política social; los ingresos no laborales operaron positivamente, pero tuvieron escasa relevancia (4%). Entre los instrumentos de política social, ante una reducción de la contribución de los PPD (-8%), ganaron centralidad los ingresos por JYP y por PASD (17% y 14%, respectivamente). Ello da cuenta de una metamorfosis en las formas de intervención social estatal sobre los ingresos familiares.

Cabe resaltar la heterogeneidad de este conjunto de hogares encabezados por trabajadores en posiciones marginales, al menos con respecto a su participación en instrumentos de política social y en la relevancia adquirida por éstos sobre sus niveles de ingresos. Entre aquellos hogares encabezados por un ocupado informal de subsistencia o por un beneficiario de programas de empleo, la injerencia de ingresos provenientes del sistema de políticas sociales fue más intensa (30% y 71%, respectivamente). Con respecto a los primeros, se destacan –al igual que a nivel global– los incrementos de ingresos por jubilaciones y pensiones y por PASD (20% y 15%), en un contexto de pérdida de impacto de los PPD (-5%). Por el contrario, entre los hogares encabezados por un beneficiario de programa de empleo, el papel clave correspondió al incremento de los montos de este tipo de instrumentos de intervención (49%), si bien las PASD también desempeñaron un rol positivo (19%). Entre los segundos, en cambio, el papel decisivo correspondió a los programas de empleo (73,7%), si bien las PASD también jugaron un papel significativo (29%). Por último, el crecimiento del ITF de aquellos hogares encabezados por desempleados marginales se vinculó más con los ingresos laborales (57%) –probablemente relacionados con recursos de otros ocupados del hogar– y con otros ingresos no laborales (34%) que con aquellos derivados de políticas sociales (10%). Ello traduce la mencionada relevancia de las redes de relaciones informales extradomésticas en la provisión de recursos económicos.

Los resultados apuntados en esta sección evidencian –en clave con la hipótesis propuesta– que los ingresos provenientes de la intervención social del Estado desempeñaron un papel disímil en el cambio del ingreso total familiar al considerar las formas de inserción económico-ocupacional de las unidades domésticas. La contribución de la política social a la mejora de los niveles de bienestar material fue sustantivamente más relevante entre los hogares encabezados por trabajadores del sector microinformal, precarios o marginales que entre aquellos cuyo PSH pertenecía al sector formal (público y privado). Cabe notar que la política social adquirió una participación más significativa en el cambio del ingreso familiar se verificó durante el período de menor dinamismo macroeconómico de la posconvertibilidad, específicamente, entre el 2008 y el 2011.

6.3. Políticas sociales y capacidades de subsistencia de los hogares

Las secciones anteriores aportaron evidencias acerca de la mayor cobertura del sistema de política social sobre los hogares durante el período de políticas heterodoxas. Se dejó constancia de que esta mayor cobertura no implicó una expansión sustantiva de la injerencia

de los ingresos de política social sobre los ingresos familiares a nivel agregado, aunque sí entre los hogares más desaventajados de la estructura económico-ocupacional.

Aun cuando estos hallazgos dan cuenta de un disímil rol de la intervención estatal en las condiciones de vida familiares, cabe preguntarse: ¿en qué medida el acceso ingresos de política social les permitió a las unidades domésticas cubrir sus necesidades reproductivas? Abordamos la reproducción económica de los hogares como un proceso ligado a la satisfacción de necesidades de sus miembros; por consiguiente, se asocia con el acceso a los recursos monetarios que permitan el acceso a una masa de satisfactores. Al comparar el ingreso total familiar con el valor correspondiente a una CBT, disponemos de una aproximación operativa a este proceso en términos de capacidades de subsistencia de los hogares. Aquellos hogares que no alcanzan a cubrir una CBT a partir de su ingreso total familiar experimentan déficit de capacidades de subsistencia (DCS). Por consiguiente, dar respuesta al interrogante planteado requiere evaluar si los ingresos por política social –dados los demás recursos laborales y no laborales– les permitieron a los hogares alcanzar el equivalente monetario de una CBT.

Cabe señalar que la política social puede tener dos efectos con respecto a las capacidades de subsistencia: por un lado, reducir la proporción de hogares que se ubican en situación de déficit y, por otro lado, reducir la distancia a la que se ubican los hogares con déficit con respecto al umbral considerado (es decir, la “brecha” al umbral)²⁰⁹. En esta sección examinamos el efecto producido por la política social sobre las capacidades de subsistencia de los hogares; en particular, interesa evaluar en qué medida permitieron superar el déficit de capacidades de subsistencia (DCS). Evaluamos la *hipótesis de trabajo* de que, aun cuando la política social habría tenido un efecto positivo sobre los ingresos familiares, habría sido restringida para excluir a las unidades domésticas encabezadas por trabajadores del sector microinformal o precarios del riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia.

Para llevar adelante este análisis, construimos un escenario contrafáctico (Cortés, 2018): estimamos la proporción de hogares que experimentaban DCS a partir de su ingreso total familiar y la comparamos con la proporción de aquellos que se hubieran encontrado en tal situación de no mediar sus ingresos por política social. La diferencia obtenida entre ambas estimaciones puede interpretarse como el “efecto inmediato” (Cortés, 2018) o “sincrónico”

²⁰⁹ En los términos de los estudios sobre pobreza, el primer efecto sería una reducción de la “tasa de recuento”, mientras que el segundo sería una reducción de la “intensidad” (Alkire y Foster, 2007).

(Banegas, 2012) de la política social en la reducción de la proporción de hogares con DCS²¹⁰. De manera complementaria, puede estimarse este efecto inmediato de la política social en la reducción de la brecha con respecto al umbral del valor de una CBT.

En el primer apartado evaluamos el efecto inmediato de los ingresos de política social sobre la proporción de hogares con DCS y sobre la brecha al umbral al nivel agregado. En el segundo apartado comparamos el efecto inmediato tomando en cuenta la posición económico-ocupacional de los hogares (evaluada a partir de la inserción del PSH). El tercer apartado sintetiza los hallazgos y pone en diálogo, a manera de cierre, los efectos de las desigualdades estructurales del mercado de trabajo y de la política social sobre las condiciones de vida familiares.

6.3.1. El efecto inmediato de los ingresos de política social en el acceso a una CBT

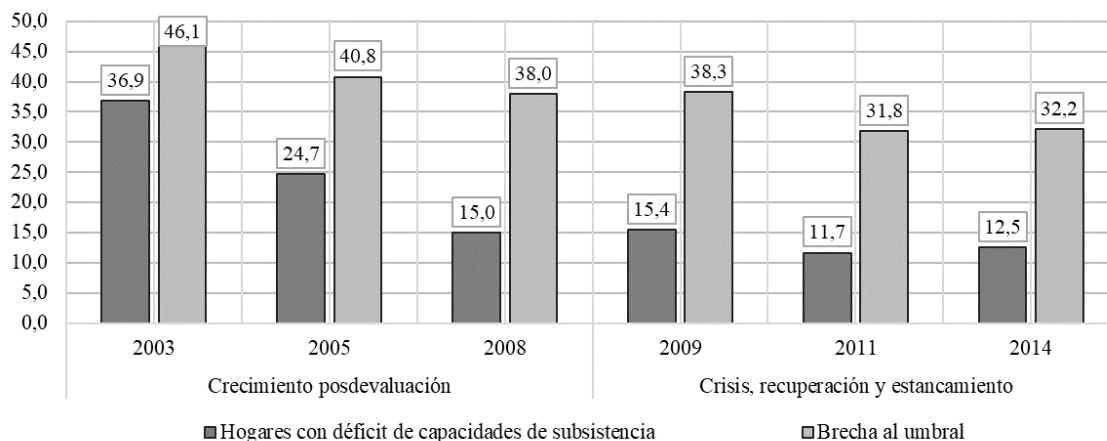
Antes de evaluar los efectos de la política social, corresponde presentar la proporción de hogares que se encontraban en situación de déficit de capacidades de subsistencia a partir de su ingreso total familiar y la brecha promedio con respecto al umbral. Dado que esta última constituye una medida de intensidad del déficit, una mayor brecha implica una mayor distancia con respecto al umbral mínimo considerado (en este caso, el valor monetario de una CBT).

La información que presentamos da cuenta de la reducción de la incidencia de aquellos hogares que experimentaban DCS: durante la fase de crecimiento posdevaluación (2003-2008) pasó de 36,9% a 15%; durante la etapa de crisis, recuperación y estancamiento (2008-2014) volvió a reducirse hasta su menor valor en el 2011, cuando fue de 11,7% y ascendió nuevamente en el 2014, hasta involucrar a 12,5% de las unidades domésticas (Gráfico 6.2). De manera paralela, se registró una reducción de la brecha al umbral, si bien algo menos intensa que la retracción de la tasa de incidencia (pasó de 46,1% a 32,2% entre puntas del período). Una lectura integrada de ambas medidas sugiere que, durante la posconvertibilidad, la reducción de la incidencia de hogares con DCS se dio en paralelo con una más leve retracción de la intensidad del déficit. Asimismo, advertimos que, si bien a partir del 2008

²¹⁰ Se trata de una metodología habitual en los estudios del impacto de la política social en la pobreza monetaria de los hogares. Como destaca Cortés (2018: 127), el análisis del efecto instantáneo implica considerar únicamente qué ocurriría con las condiciones de vida de los hogares si en un momento dado no existieran más transferencias por política social. En este sentido, no se consideran los efectos multiplicadores que la política social tiene sobre las economías locales y, por tanto, sobre otros recursos que tienen los hogares. Además, este análisis no contempla las reacciones que desplegarían los hogares ante un escenario de merma de sus recursos disponibles.

volvió a reducirse la incidencia, lo hizo a un ritmo sustancialmente menor, a la vez que la incidencia se mantuvo estable.

Gráfico 6.2. Hogares con déficit de capacidades de subsistencia (DCS)^(a) y brecha porcentual^(b) con respecto al umbral. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).



Notas: (a) Porcentaje de hogares cuyo ingreso total familiar (ITF) se encuentra por debajo del valor de una CBT calculada en función de los requerimientos por adulto equivalente / (b) La brecha aquí presentada retoma la metodología propuesta por INDEC para la medición de la pobreza (2016). Si a es la CBT promedio de los hogares pobres y b su ingreso promedio, la brecha o distancia c se define como $c=b-a$. La “brecha porcentual” es c/a .

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

En este punto cabe preguntarse: ¿qué papel desempeñaron los ingresos de política social en la reducción del déficit de capacidades de subsistencia? En el Cuadro 6.13 presentamos información acerca del impacto de estos ingresos tanto sobre las chances de experimentar DCS como sobre la brecha al umbral.

En el panel superior del Cuadro se exhibe la proporción de hogares con un ingreso total familiar por debajo de una CBT (es decir, en situación de DCS) y la de aquellos que se encontrarían en tal situación de no contar con los ingresos por políticas sociales. En este sentido, verificamos un efecto positivo de la política social sobre las capacidades de subsistencia de los hogares. En primer lugar, advertimos la estabilidad del impacto absoluto de la política social en la reducción del porcentaje de hogares con ingresos insuficientes para sufragar sus necesidades materiales. En el 2003, los ingresos provenientes de política social reducían 5,3 pp. la incidencia de hogares con DCS; este efecto era 6,1 pp. en el 2014²¹¹. El crecimiento “en extensión” del sistema de políticas sociales, junto con el mantenimiento relativo de su injerencia en los ingresos de los hogares, explicarían este comportamiento. En

²¹¹ Ello es equivalente a afirmar que 5,3% y 6,1% de los hogares, en el 2003 y en el 2014, respectivamente, alcanzaban una CBT a partir de los ingresos de política social.

segundo lugar, si consideramos su impacto relativo, la política social pasó a explicar una parte cada vez más significativa de la reducción del riesgo de experimentar DCS: ante la tendencia decreciente de la tasa observada, el hecho de que se haya mantenido su impacto absoluto se tradujo en un mayor impacto relativo.

Cuadro 6.13. Efecto inmediato de los ingresos de políticas sociales sobre el déficit de capacidades de subsistencia (DCS) y sobre la brecha al umbral. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes y puntos porcentuales).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento		
	2003	2005	2008	2009	2011	2014
ITF < CBT ^(a)	36,9	24,7	15,0	15,4	11,7	12,5
ITF sin políticas sociales < CBT	42,1	29,9	20,7	20,6	17,7	18,6
Efecto políticas sociales (pp.)^(c)	5,3	5,2	5,7	5,2	6,0	6,1
Brecha ^(b) ITF a CBT	46,1	40,8	38,0	38,3	31,8	32,2
Brecha ITF a CBT sin políticas sociales	55,6	50,1	46,8	47,8	45,5	47,9
Efecto políticas sociales (pp.)^(c)	9,5	9,3	8,8	9,5	13,7	15,8

Notas: (a) Calculada en función de los requerimientos por equivalente adulto / (b) La brecha aquí presentada retoma la metodología propuesta por INDEC para la medición de la pobreza (2016). Si a es la CBT promedio de los hogares pobres y b su ingreso promedio, la brecha o distancia c se define como $c=b-a$. La “brecha porcentual” es c/a . / (c) Es el efecto estimado por diferencia de las dos estimaciones puntuales.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

El panel inferior del Cuadro 6.13 presenta los efectos de los ingresos de política social sobre la brecha al umbral. Estos ingresos produjeron un efecto positivo en la reducción de la brecha y, por tanto, en la intensidad del déficit de capacidades de subsistencia. Los ingresos de políticas sociales incrementaron su injerencia en la reducción de la brecha: su impacto absoluto pasó de 9,5 pp. a 15,8 pp. entre puntas del período. De manera consistente con la expansión de la cobertura de estos instrumentos, tal efecto se profundizó con posterioridad al 2009.

En el Cuadro 6.14 ampliamos el análisis contrafáctico previo, al incorporar el efecto inmediato de los diferentes instrumentos de política social en la reducción de la proporción de hogares con DCS. Es decir, se recalcula la proporción de hogares que no accedían a una CBT al restar los ingresos de las diferentes fuentes de política social considerada y se la compara con la proporción observada.

Cuadro 6.14. Efecto inmediato de los distintos instrumentos de política social sobre el déficit de capacidades de subsistencia (DCS). Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en porcentajes y puntos porcentuales*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento		
	2003	2005	2008	2009	2011	2014
ITF < CBT	36,9	24,7	15,0	15,4	11,7	12,5
ITF sin políticas sociales < CBT	42,1	29,9	20,7	20,6	17,7	18,6
Efecto políticas sociales (pp.)^(a)	5,3	5,2	5,7	5,2	6,0	6,1
ITF sin jubilaciones y pensiones < CBT	39,8	27,5	18,1	18,6	14,8	15,8
Efecto jubilaciones y pensiones (pp.)^(a)	2,9	2,8	3,1	3,1	3,1	3,3
ITF sin AAFF < CBT	37,9	25,7	16,3	16,7	12,7	13,6
Efecto AAFF (pp.)^(a)	1,1	1,1	1,3	1,3	1,1	1,0
ITF sin PPP ^(b) < CBT	38,2	25,9	16,0	16,2	13,4	14,3
Efecto PPP (pp.)^(a)	1,4	1,3	1,0	0,8	1,7	1,8

Notas: (a) Es el efecto estimado por diferencia de las dos estimaciones puntuales / (b) Incluye ingresos de programas de protección al desempleo (PPD) y políticas de asistencia social directa (PASD).

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

El principal efecto puede atribuirse al sistema de jubilaciones y pensiones: entre 2,9% y 3,3% de los hogares, en el 2003 y el 2014, respectivamente, alcanzaban una CBT a partir de tales ingresos. El segundo efecto más intenso correspondió a las PPP: entre puntas del período, 1,4% y 1,8% de los hogares accedían a una CBT a partir de estos ingresos. La mayor debilidad de estos instrumentos se registró en el 2009, cuando se verificó un empeoramiento general de otros recursos de los hogares. En tercer lugar, las AAFF tuvieron el menor efecto en la reducción absoluta del déficit de capacidades de subsistencia; sin embargo, al igual que en el caso de las políticas de lucha contra la pobreza, su efecto se mantuvo relativamente constante durante la posconvertibilidad.

6.3.2. Heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y efectos de la política social en las capacidades de subsistencia

En el capítulo V constatamos que aquellos hogares que pertenecían al sector microinformal mediante su PSH mantuvieron una propensión a experimentar déficit de capacidades de subsistencia a partir de sus ingresos familiares de fuente laboral más intensa que los demás hogares. Advertimos también que su mayor concentración en torno al umbral mínimo considerado los dejaba más expuestos a la probabilidad de experimentar tal situación. En este punto, nos interesa evaluar en qué medida las transferencias por política social les permitieron a estos hogares alcanzar un nivel de ingresos suficiente para acceder a una CBT. De acuerdo con el enfoque propuesto, dadas las condiciones de heterogeneidad económico-ocupacional, deberíamos observar un efecto positivo de los ingresos de política social sobre las capacidades de subsistencia de los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal o en

posiciones precarias, pero limitado para disolver su mayor exposición a experimentar déficit de tales capacidades.

Cuadro 6.15. Hogares con déficit de capacidades de subsistencia (DCS) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes sobre el total de hogares de cada posición económico-ocupacional).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento			Var. (pp.) ^(a)			
	2003	2005	2008	2009	2011	2014	08-03	11-08	14-11	14-03
Sector formal privado	23,3	14,9	8,5	8,0	6,2	6,4	-14,7***	-2,3***	0,2	-16,9***
No asalariados	7,1	2,6	1,5	2,2	1,5	2,4	-5,5***	0,0	0,8	-4,7***
Asalariados registrados	19,9	9,7	5,3	4,7	3,5	3,8	-14,6***	-1,8***	0,2	-16,1***
Asalariados no registrados	42,6	37,2	25,0	26,3	20,3	20,3	-17,6***	-4,7***	-0,1	-22,4***
Sector público	19,7	7,4	4,4	3,7	3,1	3,5	-15,3***	-1,3**	0,5	-16,2***
Empleados del sector público	19,7	7,4	4,4	3,7	3,1	3,5	-15,3***	-1,3**	0,5	-16,2***
Sector microinformal	46,6	37,5	27,0	28,4	21,8	22,6	-19,5***	-5,2***	0,8	-24,0***
No asalariados	43,7	34,2	23,1	26,4	18,7	22,1	-20,5***	-4,4***	3,4***	-21,6***
Asalariados registrados	28,0	18,0	8,8	10,8	5,5	8,9	-19,2***	-3,3**	3,4**	-19,1***
Asalariados no registrados	55,7	47,8	40,4	40,2	35,0	30,3	-15,3***	-5,4***	-4,7***	-25,5***
Desocupados y benef. planes	85,0	74,8	57,8	55,7	53,7	57,6	-27,1***	-4,2	4,0	-27,3***
Total	36,9	24,7	15,0	15,4	11,7	12,5	-21,8***	-3,3***	0,9**	-24,3***

Nota: (a) Pruebas *t* para muestras independientes: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

El Cuadro 6.15 presenta la proporción de hogares que no alcanzaba a cubrir una CBT, considerando el conjunto de su ingreso familiar (ITF), según su posición económico-ocupacional (evaluada a partir de la inserción del PSH). Al respecto, se mantienen las principales tendencias verificadas en el capítulo V. Aquellos hogares cuyo PSH pertenecía al sector formal público o privado se encontraron más protegidos ante la probabilidad de experimentar DCS. En contraste, los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal, era asalariado no registrado del sector formal o era desocupado o beneficiario de un plan de empleo, tuvieron una mayor exposición a experimentar DCS. Con posterioridad al 2008, entre un cuarto y un quinto de ellos se encontraba en tal situación. Entre los hogares encabezados por un trabajador de sector microinformal, aquellos cuyo PSH era no asalariado o asalariado no registrado se encontraban más expuestos a reproducir sus condiciones de vida de manera deficiente. Seguían una pauta similar aquellos hogares encabezados por asalariados no registrados del sector formal.

Para examinar el efecto de la política social sobre las DCS, retomamos la metodología anteriormente implementada, pero consideramos sus diferencias en función de la posición económico-ocupacional del hogar (Cuadro 6.16).

Cuadro 6.16. Efecto inmediato^(a) de los ingresos de políticas sociales sobre el déficit de capacidades de subsistencia (DCS) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*en puntos porcentuales*).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento		
	2003	2005	2008	2009	2011	2014
Sector formal privado	4,7	3,9	4,3	4,1	4,5	4,8
No asalariados y directivos	2,4	0,1	0,4	0,9	2,1	1,6
Asalariados registrados	5,0	4,1	4,3	4,2	3,9	4,3
Asalariados no registrados	5,3	5,2	6,6	5,8	8,3	9,0
Sector público	4,4	3,3	3,1	2,8	2,9	2,8
Empleados del sector público	4,4	3,3	3,1	2,8	2,9	2,8
Sector microinformal	5,6	7,2	8,4	7,5	9,2	8,8
No asalariados	5,1	6,8	7,6	6,0	8,9	7,7
Asalariados registrados	5,8	7,1	6,7	5,4	5,5	4,8
Asalariados no registrados	6,3	7,7	10,5	11,0	11,3	12,7
Desocupados y benef. planes	7,7	10,0	16,8	12,1	20,0	17,1
Total	5,3	5,2	5,7	5,2	6,0	6,1

Nota: (a) Es el efecto estimado por diferencia entre la estimación de la proporción de hogares con DCS al considerar todo su ingreso familiar y la proporción recalculada al descontar ingresos de política social.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Al respecto, emergen dos cuestiones relevantes. En primer lugar, entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal, era asalariado no registrado del sector formal, desocupado o beneficiario de un plan de empleo, este efecto absoluto resultó más intenso: por ejemplo, en el 2014, era 8,8 pp., 9 pp. y 17,1 pp., respectivamente, mientras que el efecto promedio, como señalamos anteriormente, fue 6,1 pp. En segundo lugar, el efecto absoluto entre los hogares del sector microinformal se tornó crecientemente relevante durante la posconvertibilidad: en el 2003, 5,6 pp. de los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal accedía a una CBT a partir de los ingresos de política social; en el 2014, tal proporción ascendía a 8,8 pp. Esta profundización fue más intensa incluso entre los hogares cuyo PSH era asalariado no registrado o desocupado o beneficiario de un plan de empleo. En otras palabras, a lo largo del decenio, una mayor proporción de hogares en tales posiciones económico-ocupacionales eludían las DCS a partir de sus ingresos de política social. En contrapartida, cabe subrayar que eran también los más expuestos al riesgo de experimentarlas.

No obstante, estos resultados son menos intensos si consideramos únicamente el efecto de los ingresos de los programas de protección a la pobreza (Cuadro 6.17). Como señalamos, a partir del 2003 se redujo el impacto absoluto de estos instrumentos a nivel agregado y luego volvió a incrementarse (1,8% en el 2014). Esta evolución es consistente con la pérdida de ingresos de

los programas lanzados durante la salida de la crisis de la convertibilidad (como el PJJHD) y con su renovada expansión tras la crisis del 2009 (como la AUH o la AUE).

Cuadro 6.17. Efecto inmediato^(a) de los ingresos de políticas de protección contra la pobreza^(b) sobre el déficit de capacidades de subsistencia (DCS) según posición económico-ocupacional del PSH. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en puntos porcentuales).

	Crecimiento posdevaluación			Crisis, recuperación y estancamiento		
	2003	2005	2008	2009	2011	2014
Sector formal privado	0,6	0,8	0,7	0,6	0,9	1,1
No asalariados y directivos	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Asalariados registrados	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5
Asalariados no registrados	1,5	2,5	2,2	2,3	3,9	4,0
Sector público	0,7	0,5	0,2	0,1	0,3	0,6
Empleados del sector público	0,7	0,5	0,2	0,1	0,3	0,6
Sector microinformal	2,1	1,8	1,7	1,3	3,0	3,0
No asalariados	1,6	1,4	1,4	0,7	2,7	2,1
Asalariados registrados	1,1	0,6	0,7	1,0	0,5	0,9
Asalariados no registrados	3,1	2,8	2,6	2,4	4,6	5,6
Desocupados y benef. planes	2,9	3,4	2,7	1,2	10,6	7,6
Total	1,4	1,3	1,0	0,8	1,7	1,8

Nota: (a) Es el efecto estimado por diferencia entre la estimación de la proporción de hogares con DCS al considerar todo su ingreso familiar y la proporción recalculada al descontar ingresos de programas de protección contra la pobreza. / (b) Incluye ingresos de programas de protección al desempleo (PPD) y políticas de asistencia social directa (PASD).

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Los instrumentos de protección contra la pobreza mantuvieron un bajo impacto sobre las chances de que los hogares accedieran a una CBT durante todo el ciclo posconvertibilidad. Ello sugiere una baja capacidad de “desmercantilización” de este tipo de instrumentos de política social asociada al carácter exiguo de las transferencias entregadas. Este efecto resultó más intenso entre los hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal (2,1 pp. y 3 pp. en el 2003 y el 2014, respectivamente), era asalariado no registrado del sector formal (1,5 pp. y 4 pp. entre puntas del período) o desocupado o beneficiario de un programa de empleo (2,9 pp. y 7,6 pp.).

El análisis articulado de los resultados expuestos marca que el efecto positivo de los ingresos de política social no habría sido suficiente para disolver una dinámica de desigualdad en las condiciones de vida asociada a la heterogeneidad ocupacional. Si bien observamos el carácter positivo de este tipo de ingresos sobre las unidades domésticas y, en especial, entre aquellas cuyo PSH pertenecía al sector microinformal, era asalariado no registrado del sector formal o era desempleado, éstos mantuvieron una mayor exposición al riesgo de no cubrir sus requerimientos en términos de satisfactores de necesidades.

En este punto, cabe preguntarse: ¿en qué medida esta mayor incidencia de DCS se mantiene al controlar diferentes atributos de las unidades domésticas? Para responder este interrogante, indagamos si la posición económico-ocupacional del hogar (evaluada a través de su PSH) mantuvo capacidad explicativa sobre la exposición a DCS entre aquellas unidades domésticas que percibían ingresos de política social.

Cuadro 6.18. Efectos marginales^(a) ^(b) ^(c) de la posición económico-ocupacional del PSH sobre la probabilidad de experimentar déficit de capacidades de subsistencia (DCS). Hogares con ingresos de política social, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (*promedio de efectos marginales*)^(d).

	2003	2008	2011	2014
PSH No asal. sector formal	-0,255***	-0,0556***	-0,0219	-0,0279
PSH Asal. No Reg. sector formal	0,171***	0,154***	0,137***	0,120***
PSH Empleado sector público	0,0358	0,0105	0,0343*	0,0215
PSH No Asal. sector microinformal	0,120***	0,143***	0,158***	0,193***
PSH Asal. Reg. sector microinformal	0,0554	0,000509	0,00629	0,0363*
PSH Asal. No Reg. sector microinformal	0,153***	0,138***	0,160***	0,138***
PSH Desocupado o Benef. planes	0,512***	0,388***	0,302***	0,333***
PSH Asal. Reg. sector formal ©				
Pseudo R2 de McFadden	0,3775	0,3931	0,3342	0,3414
Aciertos (global)	80,77%	89,43%	88,95%	88,77%
Aciertos (cat. de interés)	79,96%	74,43%	69,76%	66,19%

Notas: (a) Modelos de regresión logística binaria / (b) Variable dependiente: probabilidad de que el hogar tenga déficit de capacidades de subsistencia / (c) Variables en la ecuación: sexo, edad y nivel educativo del PSH, tipo de hogar (extenso/no extenso), presencia de menores y número de ocupados en el hogar, región de residencia / (d) *Average Marginal Effects (AME)*, significancia de los efectos: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value <0,1.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC.

Con este fin, en el Cuadro 6.18 presentamos los promedios de los efectos marginales (*Average Marginal Effects, AME*) de la posición económico-ocupacional del PSH –obtenidos a partir de un modelo de regresión logística binaria múltiples como el implementado en el capítulo V– sobre la probabilidad de que el hogar receptor de ingresos de política social experimente DCS, controlando por otras covariables demográficas y socioresidenciales²¹².

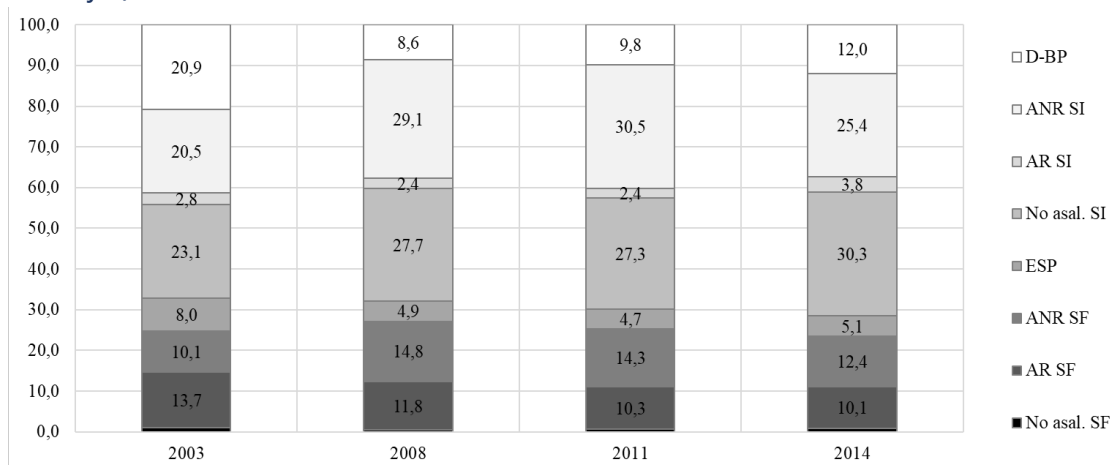
Para los diferentes años tomados como ventana de observación, advertimos una pauta consistente con respecto al efecto de la posición económico-ocupacional del PSH sobre la probabilidad de que los hogares receptores de ingresos de política social no alcancen una CBT. El análisis exhibe que, a igualdad de otros atributos, entre los hogares encabezados por asalariados no registrados del sector formal se incrementaba entre 12 y 17 pp. la probabilidad de experimentar DCS, en comparación con hogares cuyo PSH era asalariado registrado del

²¹² Los modelos completos especificados junto con los estadísticos de bondad de ajuste para cada uno de los años analizados se presentan en el Anexo V.

sector formal. Condiciones similares se advertían entre los hogares encabezados por trabajadores no asalariados del sector microinformal o asalariados no registrados de tal sector. En una situación más adversa (una probabilidad entre 30 y 50 pp. superior a la del grupo de comparación) se encontraban los hogares encabezados por desocupados o beneficiarios de planes de empleo.

Gráfico 6.3. Déficit de capacidades de subsistencia (DCS) por posición económico-ocupacional del PSH.

Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en porcentajes).



Referencias: D-BP: desocupados o beneficiarios de planes de empleo; ANR SI: asalariados no registrados del sector microinformal; AR SI: asalariados registrados del sector microinformal; No asal. SI: no asalariados del sector microinformal; ESP: Empleados del sector público; ANR SF: asalariados no registrados del sector formal privado; AR SF: asalariados registrados del sector formal privado; No asal. SF: no asalariados del sector formal privado.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Así, las dinámicas selectivas de empobrecimiento –que describimos en el capítulo V– originadas en la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional mantuvieron relevancia incluso al considerar la expansión de los instrumentos de política social. En este sentido, el Gráfico 6.3 permite advertir una persistente asociación entre la posición económico-ocupacional de los hogares y la probabilidad de experimentar DCS. En el 2003, casi 8 de cada 10 hogares (77,3%) que experimentaban DCS estaban encabezados por un PSH en el sector microinformal, por un asalariado no registrado del sector formal o por un desocupado o beneficiario de un programa de empleo. En el 2008 y en el 2014 la pauta no había sufrido significativas transformaciones (82,7% y 83,3%, respectivamente).

6.3.3. Heterogeneidad estructural y políticas sociales: simulaciones sobre sus impactos en las capacidades de subsistencia de las unidades domésticas

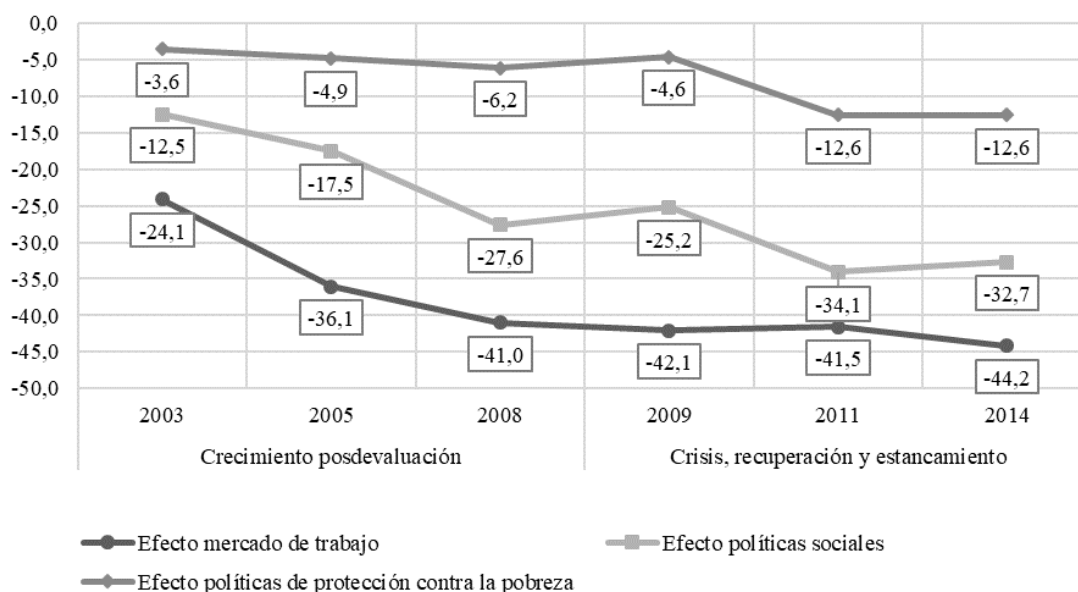
En este apartado planteamos un ejercicio que considera simultáneamente los efectos de las desigualdades estructurales del mercado de trabajo y de la política social sobre las capacidades de subsistencia. Para ello, llevamos adelante simulaciones acerca de su impacto en la reducción del déficit de capacidades de subsistencia. Este ejercicio permite enlazar las diferentes dimensiones analizadas en el último apartado del capítulo V y en el presente apartado.

Para estimar los efectos de las inserciones económico-ocupacionales de la fuerza de trabajo de los hogares sobre la exposición al déficit de capacidades de subsistencia, retomamos las “penalizaciones” asociadas a las remuneraciones de asalariados y no asalariados en función de su inserción laboral (tal como se presentó en el capítulo V)²¹³. Por su parte, estimamos los efectos inmediatos de la política social y de las PPP del modo en que fuera explicado en el apartado anterior: se calcula la tasa de hogares cuyo ITF no cubre una CBT y se recalcula dicha tasa cuando los ingresos familiares son netos de transferencias de política social.

El Gráfico 6.4 muestra la reducción atribuible al efecto de mercado de trabajo, de política social y de PPP sobre la proporción de hogares que experimentan DCS. De no mediar una penalidad originada en las condiciones de heterogeneidad estructural y segmentación laboral, la proporción de hogares con ingresos por debajo de una CBT se hubiese reducido entre 24,1% y 44,2%, entre el 2003 y el 2014, respectivamente. En el caso de la política social, su efecto de reducción era de 12,5% y de 32,7% entre puntas del período. Por último, las PPP tenían un efecto muy inferior, de entre 3,6% y 12,6%, en el 2003 y en el 2014, respectivamente.

²¹³ Cabe señalar que este ejercicio no incluye correcciones a quienes se encontraban desocupados o eran beneficiarios de un programa de empleo.

Gráfico 6.4. Efectos del mercado de trabajo, de la política social y de las políticas de protección contra la pobreza en la reducción del déficit de capacidades de subsistencia. Hogares con PSH activo, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (en variación porcentual).



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Si bien se trata de un ejercicio de simulación, constatamos que los tres efectos se intensificaron a lo largo del tiempo. Las políticas sociales (tanto en términos agregados como las PPP) ganaron en extensión y, por consiguiente, impactaron con mayor intensidad sobre las capacidades de reproducción. En este punto, las PPP mantuvieron un efecto limitado en la reducción de la proporción de hogares con DCS. El efecto de la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional se intensificó porque fueron los hogares del sector microinformal o en condiciones de precariedad laboral los que, con mayor probabilidad, se ubicaron debajo de una CBT: por ello, la supresión contrafáctica de este efecto produce una intensificación de su efecto de reducción.

6.4. Síntesis y conclusiones del capítulo

En el presente capítulo evaluamos el papel desempeñado por la política social en las condiciones de vida de los hogares. Según el enfoque expuesto, consideramos únicamente aquellas intervenciones que transfieren ingresos. Por consiguiente, el foco del capítulo fueron sus efectos sobre los ingresos familiares y, en particular, sobre las capacidades de subsistencia.

De acuerdo con la *hipótesis* evaluada en este capítulo, el ciclo de políticas heterodoxas se habría caracterizado por la expansión del sistema de políticas sociales y por la continuidad – no sin modificaciones– de las políticas de “lucha contra la pobreza”, lo que se habría plasmado en la expansión de la cobertura de los hogares en posiciones más vulnerables en términos económico-ocupacionales (es decir, los encabezados por trabajadores del sector microinformal, precarios o marginales). Por consiguiente, los ingresos de política social habrían incrementado su relevancia en los presupuestos de tales hogares, en particular durante el período de menor dinamismo económico (2008-2014). No obstante, dadas las condiciones de heterogeneidad estructural prevalecientes, tales políticas habrían sido limitadas para excluir a dichos hogares del riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia (DCS).

El incremento del gasto público social durante la posconvertibilidad no se distribuyó de manera homogénea en términos de la cobertura de los hogares. Mientras que se incrementó de forma significativa la proporción de hogares encabezados por trabajadores del sector microinformal o por asalariados no registrados del sector formal que recibían algún tipo de instrumento de política social, en los hogares encabezados por trabajadores del sector formal los cambios fueron de menor envergadura. Este “crecimiento en extensión” del sistema de políticas sociales tuvo su origen en el aumento del sistema de jubilaciones y pensiones (incluyendo las no contributivas) y los programas de asistencia social directa. En tanto, los programas de empleo –una modalidad arquetípica de la asistencia social de los noventa–, perdieron cobertura luego de alcanzar un hito en la crisis de comienzos de los 2000.

Esta tendencia convergente en términos de cobertura podría comprenderse como una “homogeneización” de la intervención social del Estado y tal parece ser la interpretación que abona parte de la literatura especializada (Andrenacci, 2012; Cecchini et al., 2015; Filgueira, 2015; Grassi, 2016). Sin embargo, el análisis en profundidad del tipo de instrumentos al que acceden los hogares según su posición económico-ocupacional revela una “heterogeneización” de la política social que reproduce la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional. En otras palabras, la información presentada sugiere una persistente segmentación del régimen de bienestar argentino.

La expansión de la cobertura del sistema de políticas sociales fue paralela a una participación estable de tales ingresos en los presupuestos familiares. Ello se comprende a la luz del fuerte deterioro que tenían los ingresos laborales a comienzos del período y la masividad que había alcanzado la asistencia social directa. En este sentido, el crecimiento en extensión no estuvo

acompañado por una mayor intensidad global de la participación estatal en el ingreso de los hogares. No obstante, tal participación creció de forma más intensa entre aquellos hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal o era asalariado no registrado del sector formal.

Introducimos un modelo de descomposición del cambio del ITF para examinar qué papel desempeñó la política social en los recursos de los hogares. Podemos concluir que los ingresos de política social mantuvieron un comportamiento contracíclico moderado: entre el 2003 y el 2008 desempeñaron un papel exiguo; incrementaron su relevancia entre el 2008 y el 2011, cuando el ritmo de crecimiento fue menos intenso; y no bastaron para contrarrestar la dinámica de ajuste del 2014. El principal impacto, en términos de las condiciones de vida de los hogares, correspondió a los ingresos por jubilaciones y pensiones. Entre aquellos hogares cuyo PSH pertenecía al sector microinformal o era asalariado no registrado, las políticas de protección a la pobreza volvieron a ganar relevancia a partir del 2008.

En síntesis, los resultados expuestos dan cuenta de la relevancia que mantuvo la dinámica sociolaboral para explicar los cambios en las condiciones de vida, evaluadas a través del ingreso. Durante la posconvertibilidad creció la proporción de hogares que contaban con ingresos provenientes de la intervención social del Estado entre los recursos de su balance reproductivo. Ello derivó de la mayor presencia de política social entre los hogares más desaventajados de la estructura social. Sin embargo, tales recursos no dejaron de representar papeles secundarios ante los procesos relativos al mercado de trabajo.

Desde el punto de vista de las capacidades de subsistencia, las transferencias por política social mantuvieron su impacto absoluto al favorecer que entre 5,3% y 6% de los hogares alcanzaran una CBT con base en dichos ingresos. Este efecto se intensificó entre los hogares cuyo PSH era asalariado no registrado del sector formal, no asalariado o asalariado no registrado del sector microinformal, desocupado o beneficiario de un programa de empleo. Este efecto positivo sugiere una renovada función de intervención social del Estado en las condiciones socioeconómicas dominantes, caracterizadas por la heterogeneidad estructural, la segmentación laboral y la precarización del empleo.

En contrapartida, mostramos el efecto insuficiente de estas formas de intervención, en términos del mayor riesgo de disponer de DCS que enfrentan los hogares del sector microinformal o en condiciones de precariedad laboral. Al describir el universo de hogares que enfrentan capacidades deficientes de subsistencia advertimos que ocho de cada diez se

encuentran encabezados por un trabajador que se inscribe dentro de tales modalidades de inserción económico-ocupacional.

En línea con la hipótesis planteada, concluimos que la política social tuvo injerencia en el sostenimiento de la reproducción social de los hogares que eran vulnerables en términos de su inserción económico-ocupacional. La intensificación de la intervención del Estado en las condiciones de vida familiares, que se había iniciado en la crisis de la convertibilidad, se reinició tras una etapa de latencia bajo la forma de nuevos instrumentos. Sin embargo, si bien resultó positivo, este renovado papel no bastó para disolver la mayor exposición al riesgo de enfrentar el déficit de capacidades de subsistencia por parte de estas unidades domésticas.

Conclusiones

Esta investigación examinó los cambios en los niveles de vida de las unidades domésticas durante un ciclo de políticas heterodoxas en la Argentina. Para ello, se tomaron en consideración las formas de participación en la estructura económico-ocupacional y en los sistemas de política social. Mediante el estudio articulado de la participación de las unidades domésticas en los mecanismos de distribución primaria y secundaria del ingreso, analizamos sus patrones de reproducción socioeconómica, a fin de evaluar la existencia de transformaciones y comprender su sentido.

A partir del tratamiento de este objetivo, la investigación aportó evidencias empíricas a los debates que, tanto en el ámbito académico como en la esfera pública, se interesan por los determinantes de las condiciones de vida y por los mecanismos que generan desigualdad en la sociedad argentina. En particular, ofreció algunas claves para descifrar el entramado de procesos estructurales y microsociales subyacentes a los procesos de empobrecimiento que se reproducen –no sin poca variabilidad histórica– en nuestro país durante las últimas décadas.

Inscribimos el análisis de este tópico clásico de la sociología del trabajo –las condiciones de vida y de reproducción económica– en el particular contexto de la historia político-económica reciente, en el que convergen dinámicas coyunturales y de larga duración. Por una parte, en contraste con el ciclo de ajuste estructural de los noventa, durante los 2000 se verificó un giro hacia políticas macroeconómicas de signo heterodoxo y políticas laborales y sociales de corte redistributivo. Este viraje debe entenderse en un nuevo contexto regional e internacional –la crisis del modelo de ajuste estructural en distintos países de la región y el *boom* de los precios de *commodities*–, así como en el marco de la profunda crisis que azotó a la Argentina a fines de los noventa y que dejó su huella en el ciclo político-económico abierto con posterioridad. Por otra parte, el período estuvo jalonado por la presencia de rasgos estructurales del régimen social de acumulación que fueron delineándose a partir de los setenta y se volvieron más nítidos durante los noventa, tales como la alta concentración económica, la especialización productiva en bienes de bajo valor agregado, la estrecha dependencia con respecto a la exportación de *commodities* y los cíclicos problemas de escasez de divisas (a los que se agregaron otros determinantes además de los clásicos de una estructura desequilibrada).

Es en este marco que la investigación se propuso examinar la capacidad de la reciente dinámica de crecimiento orientada por políticas heterodoxas para promover cambios

sustantivos en los patrones de desigualdad emergentes de la heterogeneidad estructural, así como evaluar, en el escenario socio-ocupacional vigente, el rol desempeñado por las políticas sociales en las condiciones de vida de los hogares y su capacidad para promover una mayor convergencia socioeconómica. La perspectiva teórico-metodológica centrada en la reproducción de los grupos domésticos ofreció una ventana estratégica para observar aspectos de la rearticulación de la relación entre heterogeneidad estructural e intervención social estatal con respecto a las condiciones de vida familiares.

Recordemos que, tanto desde enfoques ortodoxos como heterodoxos, los particulares resultados distributivos y de bienestar verificados en la Argentina y en América Latina durante la última década habrían dependido de un encadenamiento virtuoso de procesos de diferente nivel. Para la perspectiva ortodoxa, la reducción de la desigualdad y la pobreza en la región habría derivado de las reformas inspiradas en el Consenso de Washington, que permitieron aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado mundial, ampliar los niveles educativos de la población (reduciendo, así, las “primas” a la educación) y tornar más “fluidas” las sociedades latinoamericanas. Para la perspectiva neodesarrollista latinoamericana, también es significativa la orientación exportadora, aunque no menos relevante habría sido la promoción del mercado interno y el sostenimiento de la demanda agregada. A su vez, ambos enfoques coinciden en destacar el rol de los programas de transferencias monetarias condicionadas –forma paradigmática de la “nueva” política social– en estos resultados socioeconómicos.

Sin desconocer las mejoras sociales verificadas, este libro puso en tensión tales diagnósticos a partir de los postulados del estructuralismo clásico y del pensamiento crítico latinoamericano, entendidos como herramientas valiosas para reflexionar acerca de los alcances de los procesos identificados. De forma lúcida, Boyer (2014) ha llamado la atención sobre la aparente paradoja que implicaría que, en el continente que supo cobijar a los teóricos de la dependencia y del subdesarrollo, la convergencia social provenga de una inserción subordinada y dependiente en el mercado mundial. Precisamente, la perspectiva teórica recogida sugiere que el crecimiento económico, en ausencia de cambio estructural, es insuficiente para disolver las pautas de desigualdad asociadas a la heterogeneidad estructural, la concentración económica y la especialización productiva. Siguiendo el enfoque estructuralista, ello se debe a que en una economía abierta se reproducen las brechas de productividad derivadas de la desigual concentración del progreso técnico, al tiempo que los sectores dinámicos no logran absorber al conjunto de la fuerza laboral en condiciones productivas y, por consiguiente, se recrea la

“insuficiencia absorbente” del capitalismo periférico. En tales condiciones, la distribución primaria condiciona la distribución secundaria y, por lo tanto, la intervención social del Estado encuentra límites sustantivos.

La hipótesis general que se puso a prueba en la investigación fue que la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación –y su correlato en la incapacidad de los sectores más dinámicos de la economía para absorber al conjunto de la fuerza de trabajo– habría dado lugar a dinámicas persistentes de desigualdad económico-ocupacional y de exclusión o marginalidad, con amplias consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica y el bienestar material de los hogares, restringiendo los procesos de convergencia socioeconómica entre el 2003 y el 2014. Sin embargo, estas dinámicas no habrían impactado de forma directa sobre las condiciones de vida debido a una mediación, de relevancia variable según el momento político-económico del ciclo, de la política social y de los propios comportamientos microsociales de los hogares. Tales elementos habrían desempeñado un papel compensador –aunque limitado, dadas las condiciones estructurales prevalecientes– sobre las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas.

Para tratar esta hipótesis, el capítulo I ofreció un detallado análisis sociohistórico de la posconvertibilidad y sus antecedentes. En primer término, destacamos los principales vectores económicos y sociopolíticos que configuraron las fases precedentes al ciclo de políticas heterodoxas, lo que permitió destacar sus rupturas y continuidades. En segundo término, distinguimos dos grandes períodos dentro del ciclo estudiado: una fase posdevaluación (2003-2008) y otra de crisis, recuperación y estancamiento económico (2008-2014), integrada, a su vez, por dos subperiodos (2008-2011 y 2011-2014). Tal como hemos señalado, el punto de quiebre entre ambas fases correspondió a las crisis del 2008 y del 2009, que interrumpieron la pauta de crecimiento que había caracterizado a la posdevaluación.

De acuerdo con lo abordado en este capítulo, en la primera etapa, las políticas económicas de inspiración neodesarrollista favorecieron una recuperación a partir del tipo de cambio alto y salarios muy deteriorados. La segunda fase coincidió con el agotamiento de los fundamentos de la recuperación posdevaluación y la reaparición de los obstáculos estructurales del patrón de desarrollo argentino. Durante este período, aunque la política económica fue más expansiva, el tipo de cambio se volvió menos competitivo, el crecimiento económico más lento y el mercado laboral perdió dinamismo. A manera de balance general, constatamos que, a pesar de los sustantivos ritmos de expansión económica, el régimen de acumulación

enfrentó limitaciones derivadas de la concentración, la extranjerización y la especialización productiva.

Asimismo, la hipótesis planteada se constituye sobre la articulación de tres líneas conceptuales. Tal como desarrollamos en el capítulo II, en primer lugar, recuperamos una perspectiva amplia que se interesa por las características de un régimen social de acumulación y abordamos la cuestión de las condiciones de vida a partir de distintos aportes teóricos (en especial, de la sociología latinoamericana) que han tematizado la reproducción de la fuerza de trabajo y de las unidades domésticas. Estos aportes teóricos nos permitieron articular planos macro y microsociales, en el seno de los cuales se organiza la reproducción socioeconómica como proceso cotidiano y generacional vinculado con la satisfacción de necesidades. En segundo lugar, dada la relevancia otorgada al tipo de demanda laboral, cuyo eje ordenador es el modelo de acumulación vigente, el marco teórico estructuralista y los enfoques de la segmentación laboral se revelaron cruciales para comprender las dinámicas de la desigualdad que subyacen a la estructura económico-ocupacional en la que participan los hogares. En tercer lugar, recogimos una lectura en clave de economía política de la política social que permitió reponer su papel con respecto a la regulación de la reproducción de la fuerza de trabajo y del conflicto social.

Abordamos la hipótesis general propuesta a través de un diseño teórico-metodológico que procuró examinar, desde una perspectiva cuantitativa de estática comparada, los principales factores que incidieron en las condiciones de vida familiares durante la posconvertibilidad. El tratamiento de esta hipótesis fue desarrollado en los capítulos IV, V y VI; mediante diferentes hipótesis particulares, en cada uno de ellos reunimos evidencias acerca de la relevancia que mantuvieron los procesos de desigualdad estructural en las condiciones de reproducción de los hogares, así como sobre el rol de mediación desplegado por la intervención social del Estado y por los propios comportamientos microsociales de las unidades domésticas. A continuación, recuperamos sucintamente las principales contribuciones de estos tres capítulos e indicamos los aspectos que cabe seguir profundizando en futuros trabajos.

La inserción de la fuerza de trabajo de los hogares en la estructura económico-ocupacional: una dinámica dual asociada a la heterogeneidad estructural

En el capítulo IV analizamos la participación de los hogares en el mercado laboral y caracterizamos el tipo de posiciones económico-ocupacionales a las que accedieron a través

de sus integrantes. Estudiamos las chances que tuvieron de participar en los estratos más dinámicos de la estructura económico-ocupacional (el sector formal público y privado). Dado que los hogares pueden disponer de más de un ocupado, consideramos en qué medida se verificó la coexistencia de posiciones económico-ocupacionales disímiles, lo cual implicó abordar la cuestión de su “homogeneidad” interna. Aquí obtuvimos una serie de conclusiones relevantes que expresan rigideces estructurales del sistema económico-ocupacional y, más específicamente, la vigencia de una dinámica laboral “dual” asociada a la heterogeneidad estructural. Interpretamos esta rigidez a la luz de la ausencia de cambios estructurales en el patrón de desarrollo económico argentino.

Advertimos que se incrementó la utilización económica de la fuerza de trabajo de los hogares, principalmente por una mayor participación de trabajadores secundarios (es decir, que no eran principales proveedores económicos) en el mercado laboral. Esta tendencia se concentró en el primer período estudiado (2003-2008), mientras que, con posterioridad (2008-2014), se estabilizó y no se presentaron nuevas modificaciones. Esto podría indicar que los hogares urbanos alcanzaron límites en términos de la participación económica de sus integrantes, lo cual podría vincularse con el tipo de demanda laboral disponible y con las necesidades reproductivas dentro de las propias unidades domésticas. En particular, recuperando aportes de estudios previos, ello podría remitir a la insuficiente disponibilidad de servicios de cuidado y educación (Beccaria, Maurizio y Vázquez, 2017), factores condicionantes de la oferta de fuerza de trabajo. En cualquier caso, consideramos relevante profundizar en próximas investigaciones cuáles son los determinantes de la participación laboral en el contexto político-económico abierto a partir del 2015, con el propósito de examinar si las tendencias aquí observadas permanecen o se alteran y, eventualmente, comparar diferencias entre grupos sociales.

A su vez, constatamos que el proceso de recomposición de la estructura económico-ocupacional fue limitado en términos temporales y sociales. El proceso de absorción de fuerza de trabajo se plasmó en la drástica reducción de la proporción de hogares cuyo PSH se encontraba desocupado o era beneficiario de un plan de empleo. Asimismo, creció el porcentaje de unidades domésticas que participaban del sector formal público y privado por medio de su principal sostén. Sin embargo, luego del ciclo 2003-2008, estos procesos se ralentizaron y ya no se verificaron cambios sustantivos en la configuración de la estructura económico-ocupacional. En este marco, en el 2014 más de cuatro de cada diez (43,3%) hogares estaban encabezados por un trabajador del sector microinformal, que tenía un empleo

no registrado en el sector formal o que era desocupado o beneficiario de un programa de empleo.

Esta dinámica dual no se altera al considerar la posibilidad de que los hogares dispongan de fuerza de trabajo ubicada en distintas posiciones económico-ocupacionales. En el 2014, alrededor de tres de cada diez hogares (29,4%) sólo disponían de trabajadores en el sector microinformal, en programas de empleo o en situación de desocupación, sin acceder a posiciones del sector formal mediante su fuerza de trabajo. Estos procesos aluden a un límite estructural en la generación de empleos del sector formal. A su vez, se entroncan con otros procesos específicos (relativos a la asignación de las posiciones existentes), como los mecanismos de reclutamiento de las empresas (que suelen apelar a redes de relaciones), la homogamia social, la marginalidad y la segregación espacial urbana. Las evidencias presentadas constituyen aportes a diferentes enfoques y líneas de indagación que están interesadas en los modos en que la estructura social de la fuerza de trabajo se plasma al nivel de las unidades domésticas (Dalle et al., 2015; Elbert, 2015; Groisman, 2011; Maceira, 2016, 2018).

Por último, advertimos que se retrajo la proporción de hogares encabezados por trabajadores marginales, pero se mantuvo elevada la de aquellos que tenían ocupados secundarios en tales condiciones. Por una parte, descendió la proporción de hogares encabezados por desocupados marginales y beneficiarios de planes de empleo; a su vez, se redujo menos intensamente la de aquellos cuyo PSH estaba ocupado en actividades informales de subsistencia. Por otra parte, casi uno de cada cinco hogares (21%) tenían un trabajador en situación de marginalidad económica. Estos resultados constituyen aportes a la literatura que, en la Argentina, viene examinando la cuestión de la marginalidad (Comas, 2012; Salvia, 2012, 2016; Vera, 2016), al sugerir que una parte significativa de tales inserciones corresponde a actividades secundarias que los integrantes de los hogares despliegan a fin de incrementar su volumen de ingresos.

Rigidez del patrón de distribución del ingreso laboral y consecuencias sobre las condiciones de vida familiares

En el capítulo V examinamos de qué maneras las condiciones de heterogeneidad estructural del sistema económico-ocupacional incidieron sobre las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas. Para ello, examinamos la participación de los hogares en la distribución del ingreso laboral según su posición en la estructura económico-ocupacional (considerada a partir de la forma de inserción de su principal sostén). Arribamos

a una serie de conclusiones significativas en torno a los límites del proceso de recomposición de ingresos laborales y a la pauta de desigualdad vigente durante la posconvertibilidad. En particular, sugerimos la existencia de límites estructurales a los procesos de convergencia socioeconómica, que se mantuvieron aun cuando los hogares desplegaron activos comportamientos para mejorar sus condiciones materiales de reproducción.

La recuperación económica posdevaluación atravesó un tamiz de desigualdad estructural rígido. Más allá de algunas diferencias en los ritmos de recomposición observados, las brechas de ingreso asociadas a la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y a la segmentación laboral mantuvieron una notable estabilidad durante el conjunto del período examinado. A lo largo de la década, los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal mantuvieron un ingreso familiar de fuente laboral más de 30% inferior al promedio.

Estos resultados echan luz sobre dos aspectos subrayados por la tesis de la heterogeneidad estructural. En primer lugar, el desarrollo en los países periféricos se caracteriza por ostensibles diferencias de productividad entre sectores, ramas y unidades económicas, con consecuencias directas sobre la demanda laboral y las remuneraciones de la fuerza de trabajo (Pinto, 1976; PREALC, 1978; Salvia, 2012). En relación con este punto, la investigación ha procurado mostrar cómo impactan dichos procesos en las capacidades de reproducción de los hogares a partir de la inserción de su fuerza de trabajo en diferentes posiciones económico-ocupacionales. En este sentido, ha aportado evidencias a las investigaciones que relacionan la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional con la reproducción social (Comas, 2012; Salvia, 2011, 2012, 2016; Vera, 2011). En segundo lugar, tal como predice el estructuralismo, el crecimiento económico puede conducir a expansiones del ingreso disponible, pero en la medida que no está acompañado por procesos de cambio estructural, puede recrear una estructura distributiva estrechamente asociada al patrón de concentración que imprime la heterogeneidad estructural (Salvia, 2012, 2015).

Tal como hemos planteado, la recomposición de ingresos laborales no fue independiente de los comportamientos desplegados por los integrantes de las unidades domésticas para optimizar su nivel de vida. Esta investigación pudo evaluar y cuantificar el aporte de los procesos microsociales al cambio verificado en los niveles de bienestar. Durante el ciclo de políticas heterodoxas, casi una quinta parte (17,5%) de la mejora del ingreso total de fuente laboral se debió a un mayor esfuerzo económico-reproductivo. Mientras que entre el 2003 y el

2008 estos comportamientos tuvieron un mayor impacto, entre el 2008 y el 2014 perdieron relevancia: a partir de entonces, el incremento de los ingresos laborales dependió únicamente de factores de mercado.

En línea con la hipótesis planteada, estos resultados son sugerentes ya que iluminan dos aspectos específicos. En primer término, el efecto atribuible a la participación laboral de los integrantes de los hogares fue reducido frente a procesos de orden macroeconómico (ligados al modo en que el mercado retribuye a los trabajadores). En segundo término, tal participación tuvo un marcado carácter procíclico. En consonancia con las evidencias de estudios referidos a otros contextos nacionales (Damián, 2004; Montoya García, 2017), estos resultados sugieren que la capacidad de las unidades domésticas de incidir mediante una mayor autoexplotación en sus condiciones de vida es limitada a la luz de las restricciones que impone la dinámica global del mercado de trabajo.

En este marco, consideramos que un resultado central de esta investigación es exhibir que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional condicionó las capacidades de reproducción económica de los hogares. Aquellos encabezados por trabajadores del sector microinformal y del segmento no registrado se vieron expuestos en mayor proporción que los demás hogares a experimentar déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L); también se enfrentaron a un mayor riesgo de experimentarlo por disponer de ingresos laborales muy próximos al umbral.

En este sentido, resulta correcto afirmar que la exposición a tal déficit se entrelaza con algunos atributos específicos, tales como la cantidad de niños y adolescentes en el hogar, la edad del PSH o su bajo nivel educativo. En próximas investigaciones nos proponemos profundizar cuáles son los mecanismos que operan detrás de estos determinantes, cuáles son los límites que encuentran los hogares para mejorar su balance reproductivo (en especial, qué interseccionalidades se presentan, entre género, generación y demandas de cuidados) y cuáles son los campos de acción que se abren para la política pública.

Ahora bien, tal como ilustró el análisis de regresión logística, cabe advertir que la incidencia de factores estructurales se mantuvo con independencia de estos atributos específicos de los hogares. Por consiguiente, existen dinámicas selectivas de empobrecimiento relacionadas con la heterogeneidad estructural y la segmentación laboral. A través de una técnica analítica de microsimulación, constatamos que la vigencia de desigualdades estructurales en el mercado de trabajo implicaba entre un 30 y 40% más de incidencia de DCS-L que si tales

desigualdades no se registraran. Investigaciones futuras deberán examinar qué ocurre al incorporar una mirada dinámica sobre estos procesos: estudios de panel pueden revelar si se producen entradas y salidas periódicas de situaciones deficientes en términos de reproducción económica y cuáles son las configuraciones sociolaborales y familiares que participan en dichos procesos.

Políticas sociales y condiciones de vida familiares: alcances y limitaciones

La evidencia presentada en los capítulos IV y V permitió constatar que, durante la posconvertibilidad, la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación argentino se tradujo en una matriz económico-ocupacional desigual con significativas consecuencias sobre las condiciones de vida familiares. En diálogo con estos aportes, el capítulo VI brindó evidencias acerca del rol desempeñado por la intervención estatal mediante políticas sociales en el marco de una estructura económico-ocupacional heterogénea. Consideramos que uno de los rasgos sociopolíticos más novedosos del ciclo posconvertibilidad fue la sostenida expansión del gasto en funciones sociales mediante transferencias de ingresos a los hogares. De acuerdo con esto, el capítulo evaluó cómo impactó este nuevo gasto social sobre las unidades domésticas y qué efectos tuvo sobre sus condiciones de vida, atendiendo a su posición en la estructura económico-ocupacional (evaluada a partir de su principal proveedor).

El aumento del gasto público social no se distribuyó de forma homogénea entre los distintos grupos de hogares; en rigor, identificamos un incremento significativo de la cobertura entre aquellos hogares encabezados por trabajadores del sector microinformal, marginales o precarios. Este proceso resulta significativo al considerar que hacia el 2003 se había registrado un pico histórico en cuanto a la participación estatal en las condiciones de vida familiares. Los resultados obtenidos en este capítulo constituyen un aporte específico al campo de estudios sobre política social, en tanto evidencian la manera en la que se correlacionan la cobertura de prestaciones sociales y la estructura socioeconómica, un aspecto que no suele ser tratado en la literatura especializada o que es sólo estudiado a partir de la distribución decíllica de hogares (como, por ejemplo, Bertranou, 2010; Cetrángolo et al., 2017).

En este sentido, cabe advertir que, si bien el comportamiento descrito podría comprenderse como una creciente homogeneización de la cobertura, en rigor, la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional se reprodujo en el plano de la política social. Por ello,

retomando una noción propuesta por Martínez-Franzoni y Sánchez-Ancochea (2016), cabe reconocer un proceso de “segmentación” persistente que, a nuestro entender, reproduce la “estratificación” (Filgueira, 1998) del régimen de bienestar argentino. Los hogares acceden a mecanismos muy disímiles de transferencias de ingresos, los cuales tienen, a su vez, diseños institucionales y requerimientos diferenciales (como, por ejemplo, el cumplimiento de condicionalidades). En otras palabras, el incremento “cuantitativo” de la cobertura de política social coincidió con su heterogeneidad en términos “cualitativos”.

Un resultado crucial de esta investigación es constatar que los ingresos derivados de la política social tuvieron un papel muy disímil según la posición de los hogares en la estructura económico-ocupacional. En particular, este rol fue más significativo entre los hogares cuyo PSH disponía de las posiciones más desaventajadas de la estructura económico-ocupacional. De acuerdo con las evidencias presentadas, tras una fase de escasa relevancia de tales ingresos (en el período posdevaluación, 2003-2008), pasaron a desempeñar un papel más significativo (en especial, entre el 2008 y el 2011), de modo que compensaron parcialmente el menor dinamismo del mercado de trabajo. El incremento de los ingresos de política social contribuyó con una cuarta parte del aumento de los ingresos familiares de los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal. En el período 2008-2011, tal participación representó tres cuartas partes de la mejora del ingreso familiar. El mayor impacto correspondió al sistema de jubilaciones y pensiones (incluyendo las no contributivas), mientras que los programas de asistencia social directa tuvieron escasa significación. Estos resultados constituyen un aporte novedoso de la investigación, en tanto permiten examinar no sólo los efectos distributivos agregados de la política social (tal como han sido señalados por Gasparini et al., 2017, Judzik, Trujillo y Villafañe, 2017, Rofman y Oliveri, 2012, Salvia, Poy y Vera, 2017, 2018), sino también su disímil rol sobre los presupuestos de los hogares según su posición en la estructura social del trabajo.

Al respecto, cabe insistir en el papel dominante que los ingresos provenientes del mercado laboral mantienen en la determinación de las condiciones de vida. Ello invita a retomar las sugerencias de Salvia (2012) y de Saad-Filho (2015), quienes argumentan que la política social –en particular, los programas de asistencia social– opera como un “subsidio” de la reproducción social de fracciones de trabajadores que resultan excedentarios para los procesos de acumulación hegemónicos. En este sentido, en próximas investigaciones tendremos ocasión de evaluar, desde una perspectiva histórica de mayor duración, en qué medida este

proceso se fue configurando durante los noventa y qué características adquiere en el actual contexto sociopolítico argentino.

Identificamos que la política social enfrenta límites para reducir la incidencia del déficit de capacidades de subsistencia (DCS), aunque su efecto depende estrechamente del tipo de instrumento (y, por ende, del monto de ingresos que transfiere). El análisis del efecto inmediato reveló que la política social mantuvo una injerencia estable durante toda la posconvertibilidad en la reducción de la proporción de hogares que experimentaban DCS. Se trata de un hecho significativo, dada la magnitud que había adquirido la intervención social del Estado a comienzos del período considerado. No obstante, los ingresos de política social no resultaron suficientes para disolver la mayor exposición de los hogares encabezados por un trabajador del sector microinformal, no registrado, desocupado o marginal a reproducirse de manera deficiente durante el período.

Patrones de reproducción económica y modos de regulación social durante un ciclo de políticas heterodoxas

En línea con la hipótesis general planteada, se reunieron evidencias que indican que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional, los procesos de segmentación del mercado de trabajo y la dinámica de la marginalidad económica, constituyen instancias estrechamente asociadas con una pauta relativamente rígida de desigualdad sociolaboral. Los datos informan que esta pauta de inequidad, más allá de una retracción inicial, permaneció casi inalterada durante la posconvertibilidad. A su vez, condicionó los niveles de reproducción de la fuerza de trabajo y, por consiguiente, de las unidades domésticas a las que pertenecen los trabajadores. Hemos señalado que se trata de una desigualdad de tipo estructural: sedimenta con relativa independencia de los atributos de los propios hogares. La persistencia de diferenciales de productividad entre unidades económicas, así como la permanencia de un amplio y heterogéneo sector microinformal, son rasgos duraderos de la estructura económica argentina que se expresan en las condiciones de vida de los hogares y exponen a algunos de ellos al riesgo de una reproducción deficiente, más allá de sus características sociodemográficas, educativas y residenciales e, incluso, del esfuerzo económico-productivo que despliegan.

La rigidez de este patrón inhibe la convergencia socioeconómica. Mientras que una parte de los hogares participa de sectores económicos dinámicos, en mercados regulados, con empleos protegidos e ingresos que permiten cubrir sus necesidades reproductivas, otra amplia franja de

ellos permanecen ligados a ocupaciones en microunidades, sin protección laboral y con ingresos que, o bien no garantizan la satisfacción de necesidades, o bien los dejan expuestos al riesgo de no hacerlo. Allí podríamos situar un elemento estructural crucial que ayude a comprender los procesos recurrentes de empobrecimiento que atraviesan al capitalismo periférico argentino: asociadas a la dinámica cíclica de su patrón de desarrollo, las fases de estancamiento y las abruptas contracciones económicas (que habitualmente suceden a la caída de los términos de intercambio), encuentran a una amplia franja de hogares muy cerca del límite de no alcanzar niveles adecuados de reproducción económica. Es, precisamente, la participación de su fuerza de trabajo en un sector de microunidades o en el segmento no regulado del mercado laboral lo que los deja expuestos a no satisfacer sus necesidades materiales.

Los comportamientos laborales de los integrantes de los hogares se han desenvuelto en la dirección propuesta por nuestra hipótesis –en el sentido de que “mediatizaron” esta pauta de desigualdad–, pero su capacidad para disolver las restricciones estructurales se demostró limitada. Así, la capacidad de volcar más trabajadores al mercado laboral favoreció el incremento de los niveles de ingresos familiares, pero desempeñó un rol modesto en términos cuantitativos y tuvo un marcado componente procíclico. Asimismo, la imagen de acuerdo con la cual las unidades domésticas participan en diferentes estratos económico-ocupacionales a través de sus integrantes no encuentra suficiente sustento empírico o, al menos, refleja sólo parcialmente la realidad socioeconómica argentina: para una amplia fracción de los hogares urbanos, las chances de participar en sectores económicos dinámicos mediante su fuerza laboral, con condiciones de trabajo y remuneración adecuadas, han sido limitadas o estuvieron directamente ausentes durante todo el ciclo. Tales unidades domésticas permanecen ligadas, aun considerando al conjunto de su fuerza de trabajo activa, a un sector microinformal de baja productividad e ingresos.

En este punto, se presentaron evidencias acerca de la renovada injerencia de la intervención social del Estado en las condiciones de vida familiares. Las políticas sociales constituyen uno de los principales instrumentos mediante los cuales el Estado participa en la regulación de la reproducción económica de las unidades domésticas. Recordemos que, de acuerdo con nuestro enfoque teórico, esta intervención puede ser entendida en un doble nivel: por una parte, participa en la reproducción cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo; por otra parte, participa en la reproducción del sistema sociopolítico en el cual se inscribe el proceso de acumulación de capital.

La expansión de los sistemas de política social tuvo consecuencias sobre los niveles de cobertura y sobre el tipo de régimen de política social configurado. La política social adquirió una creciente relevancia en la cobertura de los hogares ligados al estrato de baja productividad o del segmento no regulado y/o marginal del empleo. Si bien desde un punto de vista agregado los recursos provenientes del sistema de política social fueron limitados, adquirieron mayor significación a partir del período de menor dinamismo de la posconvertibilidad. En otras palabras, se constituyeron en un nuevo componente del balance reproductivo de los hogares peor posicionados de la estructura económico-ocupacional.

Estos resultados no pueden desligarse del peculiar contexto histórico en que se encuadra la posconvertibilidad. La profundidad de la crisis a la que condujeron las políticas de reforma estructural se tradujo en una contradicción entre requerimientos de la acumulación y los de legitimación político-institucional. Puede sugerirse que la renovada intervención social del Estado sobre las condiciones de vida de los hogares más desaventajados en términos socio-ocupacionales jugó un papel relevante en la dirección de amortiguar los efectos que los procesos de empobrecimiento tienen sobre el sistema político vigente.

En este sentido, la investigación dio indicios de algunas modificaciones en los patrones de reproducción económica de los hogares, al menos durante el ciclo histórico examinado. Este patrón, que afecta a los sectores más vulnerables desde el punto de vista socio-ocupacional, se encuentra estrechamente asociado a la lógica de funcionamiento de mercados laborales heterogéneos y segmentados, así como a una nueva matriz de intervención bajo política social que consolida una renovada participación en los presupuestos de los hogares vinculados a tales sectores. De modo esquemático, puede señalarse que este patrón de reproducción económica se sintetiza en una activa participación laboral (que, a nivel de la fuerza de trabajo disponible en el hogar, debe conciliar las actividades en el mercado laboral con los requerimientos de cuidado y reproducción) en un sector de microunidades de baja productividad o en el segmento más vulnerable del mercado de trabajo, y en una mayor participación en el sistema público de distribución de transferencias económicas. Si bien estos ingresos no garantizan, en todos los casos, la exclusión con respecto a las capacidades deficientes de subsistencia, constituyen un recurso adicional que los hogares logran incorporar a su balance reproductivo y reducen el grado de deficiencia de los niveles de vida.

Los resultados alcanzados marcan que, al menos en el caso argentino, parece existir una cadena de procesos macro y microsociales que interactúan –no con similar jerarquía

explicativa– en la producción y recreación de un patrón de desigualdad de las condiciones de vida que inhibe la convergencia en materia de bienestar económico. Así, consideramos que la investigación contribuyó a develar un particular modo de articulación entre la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación, la intervención social del Estado y las capacidades de reproducción económica de los hogares en la Argentina.

En términos teóricos, consideramos que los resultados alcanzados constituyen aportes a una línea de reflexión que, con diversos y valiosos antecedentes en el campo académico local, estudia los procesos de regulación y reproducción social otorgando prioridad a procesos económicos y sociopolíticos (Águila y Kennedy, 2015; Cortés y Marshall, 1991; Danani, 2009; Jaccoud et al., 2015; Marshall, 1984; Maceira, 2016; Salvia, 2012, 2016; Torrado, 1992, 2010). En este punto, sostenemos la fertilidad de un enfoque teórico-metodológico que articule los estudios del trabajo con la investigación sobre política social para comprender los cambios en las condiciones de vida. En términos metodológicos y epistemológicos, la investigación intentó hacer visibles las complejas tramas de procesos micro y macrosociales que subyacen a la reproducción económica de los hogares, y la conveniencia de abordar estos planos de forma articulada.

El conjunto de estas evidencias pone de manifiesto que el capitalismo periférico argentino parece reproducirse en condiciones de baja “integración sistémica” (Nun, 2000 [1972]; Salvia, 2007, 2011, 2016). Este atributo, que se vincula con la forma en que se relacionan las partes de un sistema socioeconómico, remite a una peculiar configuración de las relaciones sociales de producción y a la coexistencia de procesos de acumulación hegemónicos, retrasados y de actividades de subsistencia. Esta característica se plasma en la existencia de un amplio sector de microunidades subordinadas y de fuerza de trabajo abiertamente excedentaria en condiciones de subsistencia. Ello origina una distribución desigual de los recursos que se expresa en lo que cabe entender como situaciones de bienestar y sub-bienestar.

La intervención social del Estado mediante políticas sociales suele asociarse con los procesos de “integración” o “cohesión” social. Esta investigación pone de manifiesto que, dado el tipo de integración sistémica prevaleciente, la capacidad estatal para propiciar resultados de convergencia socioeconómica es limitada. La intervención social del Estado no disuelve la pauta de heterogeneidad estructural en términos de condiciones de vida. Más bien, los resultados sugieren una rearticulación entre el régimen de desigualdad emergente de la heterogeneidad laboral y el patrón de incorporación social (o “régimen de bienestar”) en el

sentido de que se sobreimprimen ambas dimensiones a nivel de las capacidades de reproducción de los hogares.

En este sentido, las evidencias de este libro invitan a considerar que, sin la integración de actividades económicas hoy subordinadas, la posibilidad de alcanzar mayores niveles de convergencia socioeconómica se revela limitada. Ello demandaría políticas microeconómicas y mesoeconómicas productivas, tales como la integración de actividades de bajos ingresos a cadenas de valor, implementación de iniciativas de desarrollo económico local, atención a la economía social y popular, entre otras; pero también requeriría de políticas más generales que atiendan al carácter desequilibrado de la estructura productiva argentina y promuevan la superación de la restricción externa, como la redirección de las rentas extraordinarias a la integración productiva, las políticas de desarrollo de proveedores o la promoción de exportaciones no tradicionales. Cabe notar que ninguna de estas iniciativas parecería poder alcanzarse mediante una profundización de mecanismos de libre mercado, al menos en un régimen de acumulación altamente concentrado y extranjerizado como el argentino.

Por su parte, los resultados sugieren que una intensificación de la intervención estatal podría contribuir en la dirección de una mayor convergencia socioeconómica. Las políticas sociales de transferencias de ingresos actuales parecen enfrentar limitaciones para alcanzar este cometido. Al respecto, un incremento sustantivo de los montos otorgados y una revisión de la relevancia de las contraprestaciones (incluso mediante la implementación de un régimen de ingreso ciudadano) podría garantizar, al menos, la cobertura de las necesidades de reproducción económica para los hogares más desaventajados. Sin dudas, la implementación de este tipo de intervenciones no es independiente de la evaluación de su sustentabilidad y, por consiguiente, coloca en agenda la aplicación de las reformas tributarias requeridas para garantizarlas. Y, lo que quizás resulte más relevante, requiere de la construcción de consensos sociales interesados en su implementación.

Referencias bibliográficas

- Abeles, M, Lavarello, P. y Montagu, H. (2013). Heterogeneidad estructural y restricción externa en la economía argentina. En R. Infante y P. Gerstenfeld (eds.), *Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de Argentina* (pp. 23-95). Santiago de Chile: CEPAL-OIT.
- Acosta, S. (2010). *Las PyMI argentinas en el escenario postconvertibilidad* (Boletín Informativo Techint N° 332). Buenos Aires: Techint. Recuperado de: http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2014/09/FOP_IE_1008_Las-PyMI-argentinas-en-el-escenario-postconvertibilidad.pdf
- Adelantado, J. (2017). *Reestructuración de los Estados de Bienestar. ¿Hacia un cambio de paradigma?* (Documento de Trabajo N° 97). Buenos Aires: CIEPP.
- Adelantado, J., Noguera, J., Rambla, X. y Sáez, L. (1998). Las relaciones entre estructura y políticas sociales: una propuesta teórica. *Revista Mexicana de Sociología*, 60 (3), 123-156.
- Agú, E. (diciembre, 2015) ¿En qué medida colaboraron los cambios normativos del SIPA para disminuir la desigualdad de ingresos entre los adultos mayores? *VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani*. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, Argentina.
- Águila, N. y Kennedy, D. (2015). El deterioro de las condiciones de reproducción de la familia trabajadora argentina desde mediados de los años setenta. *Realidad Económica*, 297, 93-123.
- Aguirre, P. (2010). La comida en tiempos del ajuste. En S. Torrado (dir.), *El costo social del ajuste. Argentina (1976-2002)*, tomo II (pp. 51-102). Buenos Aires: EDHASA.
- Alkire, S. y Foster, J. (2007). *Counting and Multidimensional Poverty Measurement* (Documento de Trabajo N° 32). Oxford: Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- Alzugaray, L. (2007). Redes sociales y relaciones comunitarias en Barrio Esperanza. En A. Eguía y S. Ortale (coords.), *Los significados de la pobreza* (pp. 121-132). Buenos Aires: Biblos.
- Amin, S. (1997). *Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society*. Londres: Atlantic Highlands.
- Andrenacci, L. (2012). From Developmentalism to Inclusionism. On the Transformation of Latin American Welfare Regimes in the Early 21st Century. *Journal für Entwicklungspolitik*, 23 (1), 35-57.
- Arakaki, A. (2015). Trabajadores precarios del sector privado. Una evaluación de su volumen, composición y remuneración en la experiencia argentina reciente. En Lindenboim, J. y Salvia, A. (coords.), *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* (pp. 173-210). Buenos Aires: EUDEBA.
- Arakaki, A. y Pacífico, L. (agosto, 2015). La EPH en su laberinto: viejos y nuevos desafíos. *XII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina.

- Arcidiácono, P., Kalpschtrej, K. y Bermúdez, A. (2014). ¿Transferencias de ingresos, cooperativismo o trabajo asalariado? El Programa Argentina Trabaja. *Revista Trabajo y Sociedad*, 22, 341-356.
- Arroyo, D. (2004). Ante el actual escenario latinoamericano. Hacia un nuevo modelo de desarrollo: crecimiento con inclusión social. *Sociedade em debate*, 10 (3), pp. 135-147.
- Arza, C. (2010). La política previsional: de la estratificación ocupacional a la individualización de los beneficios. En S. Torrado (dir.), *El costo social del ajuste. Argentina (1976-2002)*, tomo II (pp. 257-300). Buenos Aires: EDHASA.
- Azpiazu, D., Basualdo, E. y Khavisse, M. (2004). *El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta. Edición definitiva*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Bakker, I. y Gill, S. (2003). *Power, Reproduction and Social Reproduction. Human Insecurity in the Global Political Economy*. Hampshire, Reino Unido.
- Banegas, I. (2012). *La ilusión tecnocrática en la política social: Progresos-Oportunidades*. (Tesis de doctorado). El Colegio de México. Recuperado de: http://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_banegas_gonzalez.pdf
- Baran, P. y Sweezy, P. (1968 [1966]). *El capital monopolista*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Barba Solano, C. (2004). *Régimen de bienestar y reforma social en México* (Serie Políticas Sociales N° 92). Santiago de Chile: CEPAL.
- Barba Solano, C. (2007). América Latina: regímenes de bienestar en transición durante los años noventa. *Caderno CRH*, 20 (50), 197-211.
- Barba Solano, C. y Cohen, N. (2011). Introducción. En C. Barba Solano y N. Cohen (coords.), *Perspectivas críticas sobre la cohesión social*, (pp. 67-86). Buenos Aires: CLACSO.
- Bárcena, A. y Prado, A. (2016). *El imperativo de la igualdad. Por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: Siglo XXI y CEPAL.
- Barrientos, A. y Hulme, D. (2008). *Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution* (Documento de Trabajo BWPI N° 30). Manchester: BWPI.
- Basualdo, E. (2010). *Estudios de historia económica argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bauman, Z. (1998). *Work, Consumerism and the New Poor*. Buckingham: Open University Press.
- Beccaria, L. y Groisman, F. (2005). Las familias ante los cambios en el mercado de trabajo. En L. Beccaria y R. Maurizio (eds.) *Mercado de trabajo y equidad* (pp. 121-170). Los Polvorines: UNGS-Prometeo.
- Beccaria, L. y Groisman, F. (2009). Informalidad y pobreza: una relación compleja. En L. Beccaria y F. Groisman (eds.), *Argentina desigual* (pp. 95-155). Los Polvorines: UNGS-Prometeo.
- Beccaria, L. y Groisman, F. (2015). Informalidad y segmentación del mercado laboral: el caso de la Argentina. *Revista de la CEPAL*, 117, pp. 127-143.
- Beccaria, L. y Maurizio, R. (2012). Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina 1990-2010. *Desarrollo Económico*, 52 (206), pp. 205-228.

- Beccaria, L., Carpio, J. y Orsatti, A. (2000). Argentina: informalidad laboral en el nuevo modelo económico. En J. Carpio, E. Klein, e I. Novacovsky (comps.), *Informalidad y exclusión social* (pp. 139-160). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica-SIEMPRO-OIT.
- Beccaria, L., Groisman, F. y Maurizio, R. (2009). Notas sobre la evolución macroeconómica y del mercado de trabajo en la Argentina 1975-2007. En L. Beccaria y F. Groisman (eds.), *Argentina desigual* (pp. 11-38). Los Polvorines: UNGS-Prometeo.
- Beccaria, L., Maurizio, R. y Vázquez, G. (2017). El estancamiento de la tasa de participación femenina en Argentina en los años 2000. *Desarrollo Económico*, 57 (221), pp. 3-31.
- Beccaria, L., Maurizio, R., Vázquez, G. y Espro, M. (2015). Factors Associated with Poverty and Indigence Mobility in Five Latin American Countries. *Measurement of Poverty, Deprivation, and Economic Mobility*, 23, pp. 71-107.
- Becker, G. (1981). *Treatise on the Family*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bekerman, M. y Vázquez, D. Principales transformaciones de la estructura industrial argentina durante la posconvertibilidad. *Ensayos de Economía*, 26 (48), pp. 35-65.
- Belmartino, S. (2010). Los servicios de atención médica. En S. Torrado (dir.), *El costo social del ajuste. Argentina (1976-2002)*, tomo II (pp. 257-300). Buenos Aires: EDHASA.
- Benza, G. (2016). La estructura de clases argentina durante la década 2003-2013. En G. Kessler (comp.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura* (pp. 111-139). Buenos Aires: Siglo XXI-Fundación OSDE.
- Bertranou, F. (2010). Aportes para la construcción de un piso de protección social en Argentina: el caso de las Asignaciones Familiares. Buenos Aires: OIT.
- Bertranou, F., Cetrángolo, O., Grushka, C. y Casanova, L. (2012). Más allá de la privatización y la reestatización del sistema previsional de Argentina: cobertura, fragmentación y sostenibilidad. *Desarrollo Económico*, 52 (205), pp. 3-30.
- Bertranou, F. y Paz, J. (2007). *Políticas y programas de protección al desempleo en Argentina*. Buenos Aires: OIT.
- Bhattacharya, T. (2017). *Social Reproduction Theory. Remapping Class, Recentring Opression*. Londres: Pluto Press.
- Bienefeld, Manfred (1975). The Informal Sector and Peripheral Capitalism: The Case of Tanzania. *Institute of Development Studies Bulletin*, 6 (3), pp. 53-73.
- Binstock, G. y Cerruti, M. (2016). La población y la estructura social. En G. Kessler (comp.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura* (pp. 37-60). Buenos Aires: Siglo XXI-Fundación OSDE.
- Birdsall, N., Lustig, N. y McLeod, D. (2010). *Declining Inequality in Latin America: Some Economics, Some Politics* (Documento de Trabajo N° 251). Washington: Center for Global Development.
- Bonnet, A. (2007). Argentina: ¿nuevo modelo de acumulación? *Anuario EDI N° 3*, Buenos Aires: AEDI.
- Borsotti, C. (1981). La organización social de la reproducción de los agentes sociales, las unidades familiares y sus estrategias. *Demografía y Economía*, 15 (2), pp. 164-189.

- Bourdieu, P. (1997). El espíritu de familia. En *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción* (pp. 126-138), Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bourguignon, F. y Ferreira, F. (2004). Decomposing Changes in the Distribution of Households Incomes: Methodological Aspects. En F. Bourguignon, F. Ferreira y N. Lustig (eds), *The Microeconomic of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America* (pp. 17-46). Washington D.C: World Bank – Oxford University Press.
- Boyer, R. (2007). *Crisis y regímenes de crecimiento: una introducción a la teoría de la regulación*, Miño y Dávila: Buenos Aires.
- Boyer, R. (2014). *Los mundos de la desigualdad. Un análisis a partir de la teoría de la regulación y una respuesta a Thomas Piketty*. Buenos Aires: Octubre.
- Braun, O. y Joy, L. (1968). Un modelo de estancamiento económico. Estudio de caso sobre la economía argentina. *Desarrollo Económico*, 20 (80), pp. 585-604.
- Breman, J. (1976) A Dualistic Labour System? A Critique of the 'Informal Sector' Concept: I: The Informal Sector. *Economic and Political Weekly*, 11 (48), pp. 1870-1876.
- Bresser-Pereira, L. (2017). La nueva teoría desarrollista: una síntesis. *Economía UNAM*, 14 (40), pp. 48-66.
- Brewer, M. y L. Wren-Lewis (2011). *Why did Britain's households get richer? Decomposing UK household income growth between 1968 and 2008-09* (Briefing Note N° 125). Londres: Institute for Fiscal Studies.
- Bunge, M. (1999). *Buscar la filosofía en las ciencias sociales*. México D.F.: Siglo XXI.
- Bustos, J. M. y Villafañe, S. (2011). Asignación Universal por Hijo. Evaluación del impacto en los ingresos de los hogares y el mercado de trabajo. En AAVV, *Trabajo, ocupación y empleo N° 10* (pp. 175-219). Buenos Aires: SSPTyEL-MTEySS.
- Byrne, D. (2005). *Social Exclusion*. Hampshire: Open University Press.
- Cacciamali, M. C. (2000). Globalizaçã o el processo de informalidade. *Economia e Sociedade*, 14, pp. 153-174.
- Calvi, G. (julio, 2015) Las estimaciones alternativas de pobreza en la Argentina reciente. El estudio de la desigualdad como eje para reducir las controversias. *XI Jornadas de Sociología de la UBA*. Carrera de Sociología, Buenos Aires, Argentina.
- Calvi, G. (julio, 2017) La metodología de medición de la pobreza en Argentina. Ayer y hoy. *XII Jornadas de Sociología de la UBA*. Carrera de Sociología, Buenos Aires, Argentina.
- Camelo, H. (1998). Subdeclaración de ingresos medios en las encuestas de hogares, según quintiles de hogares y fuentes de ingreso. *II Taller Regional Medición del ingreso en las encuestas de hogares*. Buenos Aires: MECOVI.
- Canitrot, A. (1983). *Orden social y monetarismo*, Buenos Aires: CENDES.
- Cantamutto, F. y Wainer, A. (2013). *Economía política de la Convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Cardoso, F. H. (2003 [1970]). Comentario sobre los conceptos de sobrepoblación relativa y marginalidad. En J. Nun (comp.), *Marginalidad y exclusión social* (pp. 141-184), Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

- Carrasco, C. (2013). El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 31 (1), pp. 39-56.
- Castel, R. (2003). *La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?* Buenos Aires: Manantial.
- Castellani, A. (2002). Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la Argentina contemporánea. En AAVV, *Más allá del pensamiento único*, (pp. 81-142). Buenos Aires: CLACSO.
- Castells, M. J. y Schorr, M. (2015). Cuando el crecimiento no es desarrollo. Algunos hechos estilizados de la dinámica industrial en la posconvertibilidad. *Cuadernos de Economía Crítica*, 1 (2), pp. 49-77.
- Castells, M. y Portes, A. (1989). World Underneath: The Origins, Dynamics and Effects of the Informal Economy. En A. Portes, M. Castells y L. Benton (eds.): *The Informal Economy. Studies in Advanced and Less Developed Countries*, Maryland: The John Hopkins University Press.
- Cecchini, S. y Martínez, R. (2011). *Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos*. Santiago de Chile: CEPAL-MFCEYD-GIZ.
- Cecchini, S., Filgueira, F., Martínez, R. y Rossel, C. (2015). *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz [CESO] (2014). *Pobreza e indigencia en Argentina* (Informe Económico Especial N° 2). Buenos Aires: CESO. Recuperado de: http://www.ceso.com.ar/sites/default/files/ceso_pobreza.pdf.
- Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino [CENDA] (2010). *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economía argentina en el período 2002-2010*. Buenos Aires: CENDA-Cara o Ceca.
- Centro de Investigación y Formación de la República Argentina [CIFRA] (2015), *Informe especial. Principales resultados de pobreza e indigencia 2003-2015*. Buenos Aires, CIFRA. Recuperado de: <http://www.cta.org.ar/IMG/pdf/03-ie-noviembre-2015-pobreza.pdf>
- Centro de Investigación y Formación de la República Argentina [CIFRA] (2016), *Informe de coyuntura N° 19*. Buenos Aires, CIFRA. Recuperado de: <http://www.centrocifra.org.ar/docs/I%20C%2019.pdf>
- Centro de Investigación y Formación de la República Argentina [CIFRA] (2012), *Información sobre Asignaciones Familiares e impuesto a las ganancias. Cómo afectan a los trabajadores* (Documento de Trabajo N° 12). Buenos Aires, CIFRA. Recuperado de: <http://www.centrocifra.org.ar/docs/CIFRA%20-%20DT%2012%20-%20Asignaciones%20filiars%20e%20imp%20gananc.pdf>
- Cerrutti, M. (2000). Determinantes de la participación intermitente de las mujeres en el mercado de trabajo del Área Metropolitana de Buenos Aires. *Desarrollo Económico*, 39 (156), pp. 619-638.
- Cetrángolo, O., Curcio, J., Goldschmit, A. y Maurizio, R. (2017). Caracterización general, antecedentes y costo fiscal de eventuales reformas de la AUH. En O. Cetrángolo y J. Curcio y (coords.) *Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la Asignación Universal por Hijo* (pp. 56-95). Buenos Aires: ANSES – Ministerio de Desarrollo Social – UNICEF – IIEEP UBA – CEDLAS – CNCPS.

- Chávez Molina, E. y Sacco, N. (2015). Reconfiguraciones en la estructura social: dos décadas de cambios en los procesos distributivos. En J. Lindenboim y A. Salvia (coords.), *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* (pp. 289-316). Buenos Aires: EUDEBA.
- Chávez Molina, E., Solís, P., y Cobos, D. (2019, en prensa). Class Structure, Labor Market Heterogeneity and Living Conditions in Latin America. *Latin American Research Review*, 54.
- Chayanov, A. V. (1974). *La organización de la unidad económica campesina*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Chena, P. (2010). La heterogeneidad estructural vista desde tres teorías alternativas: el caso de Argentina. *Comercio Exterior*, 60 (2), pp. 99-115.
- Cimillo, Elsa (2000). Empleo e ingresos en el sector informal en una economía abierta: el caso argentino. En J. Carpio, E. Klein, e I. Novacovsky (comps.). *Informalidad y exclusión social* (pp. 175-200), Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica-SIEMPRO-OIT.
- Cimoli, M. y Porcile, G. (2011). *Tecnología, heterogeneidad y crecimiento: una caja de herramientas estructuralista* (Documento de Trabajo N° 119). Paraná: Department of Economics, Universidade Federal do Paraná.
- Cimoli, M., Porcile, G. Primi, A. y Vergara, S. (2005). Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología en América Latina. En M. Cimoli (ed.) *Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en América Latina* (pp. 9-39). Santiago de Chile: CEPAL.
- Coatz, D., García Díaz, F. y Woyecheszen, S. (2010). *Acerca de la dinámica creciente de la heterogeneidad productiva y social en la Argentina: un aporte para repensar las políticas públicas a partir del análisis desde la estructura ocupacional*. (Boletín Informativo Techint N° 332). Buenos Aires: Techint. Recuperado de: <http://www.uia.org.ar/download.do?id=4492>
- Comas, G. (2012). *Marginalidad e informalidad. Un estudio de caso sobre condicionantes estructurales de las trayectorias laborales en una localidad del Conurbano Bonaerense (1994-2008)*. (Tesis de doctorado). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2010). *La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2011). *Eslabones de desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y protección social*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2013). *Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2014). *Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Cortés F. y Rubalcava, R. M. (1991) *Autoexplotación forzada y equidad por empobrecimiento: La distribución del ingreso familiar en México, 1977-1984*. México D.F.: El Colegio de México.

- Cortés, F. (1995). El ingreso de los hogares en contextos de crisis, ajuste y estabilización: un análisis de su distribución en México, 1977-1992. *Estudios Sociológicos* 13 (37), pp. 91-108.
- Cortés, F. (2000a). La metamorfosis de los marginales. La polémica sobre el sector informal en América Latina. En E. de la Garza Toledo (coord.), *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo* (pp. 592-618). México D. F.: El Colegio de México, FLACSO, UNAM, Fondo de Cultura Económica.
- Cortés, F. (2000b), *La distribución de la riqueza en México en épocas de estabilización y reformas económicas*. México D. F.: M. A. Porrúa Grupo Editorial.
- Cortés, F. (2001). Acerca de la reforma y la desigualdad económica. En A. Ziccardi (comp.) *Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales* (pp. 199-244). Buenos Aires: CLACSO.
- Cortés, F. (2018). La relación entre el gasto social y la pobreza a debate. En F. Cortés (coord.). *Temas de política social de México y América Latina* (pp. 117-155). México D.F.: El Colegio de México y Universidad Nacional Autónoma de México.
- Cortés, F. y Cuéllar, O. (1990). *Crisis y reproducción social. Los comerciantes del sector informal*. México D. F.: FLACSO - Porrúa.
- Cortés, R. (2013). Políticas Laborales y Transferencia de Ingresos: ¿estrategias complementarias? *Voces en el Fénix*, 22, pp. 44-51.
- Cortés, R. y Marshall, A. (1991). Estrategias económicas, intervención social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo. *Estudios del trabajo*, 1, pp. 21-46.
- Crompton, R. (1994). *Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales*. Madrid: Technos.
- Cruces, G. y Gasparini, L. (2009). Desigualdad en Argentina. Una revisión de la evidencia empírica. *Desarrollo Económico*, 48 (192), pp. 395-437.
- Cruces, G., Epele, N. y Guardia, L. (2008). *Los programas sociales y los objetivos de desarrollo del Milenio en Argentina* (Serie Políticas Sociales N° 142). Santiago de Chile: CEPAL.
- Cuéllar, O. (1990). Balance, reproducción y oferta de fuerza de trabajo familiar. Notas sobre las estrategias de vida. En F. Cortés y O. Cuéllar (coords.) *Crisis y reproducción social. Los comerciantes del sector informal* (pp. 30-60). México D. F.: FLACSO-Editorial Porrúa.
- Curcio, J. (2011). Descripción del Sistema de Seguridad Social: componentes al cabo de la década del '90 y de la primera década del siglo XXI. En C. Danani y S. Hintze (coords.), *Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina (1990-2010)* (pp. 33-60). Los Polvorines: UNGS.
- Curcio, J. y Beccaria, A. (2011). Sistema de Seguridad Social y mercado de trabajo. Evolución de la cobertura en la Argentina entre 1990 y 2010. En C. Danani y S. Hintze (coords.), *Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina (1990-2010)* (pp. 61-102). Los Polvorines: UNGS.
- Dalle, P. (2012). Cambios recientes en la estratificación social en Argentina (2003-2011). Inflexiones y dinámicas emergentes de movilidad social. *Argumentos* (14), 77-114.

- Dalle, P. (2016). *Movilidad social desde las clases populares. Un estudio sociológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (1960-2013)*. Buenos Aires: CLACSO-IIGG.
- Dalle, P., Carrascosa, J., Lazarte, L., Mattera, P. y Ragulich, G. (2015). Reconsideraciones sobre el perfil de la estructura de estratificación y la movilidad social intergeneracional desde las clases populares en Argentina a comienzos del siglo XXI. *Laboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, 15, pp. 255-280.
- Damián, A. (2004). El crecimiento del empleo y las estrategias laborales de sobrevivencia en México. Apuntes para un debate. *Perfiles latinoamericanos*, 24, pp. 143-168.
- Damill, M., Frenkel, R., y Rapetti, M. (2015). Macroeconomic Policy in Argentina during 2002–2013. *Comparative Economic Studies*, 57, pp. 369-400.
- Danani, C. (2005). *La construcción sociopolítica de la relación asalariada: obras sociales y sindicatos en la Argentina. 1960-2000*. (Tesis de doctorado). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Danani, C. (2009). La gestión de la política social: un intento de aportar a su problematización. En: M. Chiara y M. M. Di Virgilio (orgs.), *Gestión de la política social. Conceptos y herramientas* (pp. 25-52). Buenos Aires: Prometeo-UNGS.
- Danani, C. y Beccaria, A. (2011). La (contra) reforma previsional argentina 2004-2008: aspectos institucionales y político-culturales del proceso de transformación de la protección. En Danani, C. y Hintze, S. (coords.), *Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010* (pp. 103-152). Los Polvorines: UNGS.
- Danani, C. y Hintze, S. (2014). Personas, instituciones y políticas. Reconstrucción y balance de la protección del Sistema de Seguridad Social en la Argentina, 2010-2013. En Danani, C. y Hintze, S. (coords.), *Protecciones y desprotecciones (II): Problemas y debates de la seguridad social en la Argentina* (pp. 363-378). Los Polvorines: UNGS.
- Danani, C. y Lindenboim, J. (2016). Informal Employment and Absence of Job Security: Where Social Inequality Begins, and Where it Leads. *Employment and Policies in Argentina, 2003-2014*. En S. Routh y V. Borghi (eds.), *Workers and the Global Informal Economy* (pp. 155-173). Londres: Routledge.
- Datt, G. y Ravallion, M. (1992). Growth and Redistribution Components in Poverty Measures: A Decomposition with applications to Brazil and India in the 1980's. *Journal of Developments Economics*, 38, pp. 275-295.
- De Ferranti, D., Perry, G., Ferreira, F. y Walton, M. (2003). *Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?* Washington D.C.: Banco Mundial.
- De Soto, Hernando (1987). *El otro sendero*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Denning, M. (2010). Wageless Life. *New Left Review*, 66, pp. 79-97.
- DESAL (1967). *Marginalidad en América Latina: un ensayo de diagnóstico*. Barcelona: Herder.
- Di Filippo, A. y Jadue, S. (1976). La heterogeneidad estructural. Concepto y dimensiones. *El trimestre económico*, 169, pp. 167-214.
- Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. *Desarrollo Económico*, 12 (45), pp. 25-47.

- Dirección de Análisis del Gasto Público y Programas Sociales (2008). *Informe sobre Programas de Empleo Provinciales* (Documento de Trabajo N° 18). Buenos Aires: ex DAGPyPS.
- Doeringer, P. y Piore, M. (1970). *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*. Washington D.C.: Office of Manpower Research.
- Donza, E. (2015). Cambios en las capacidades de consumo en la estructura social urbana. En J. Lindenboim y A. Salvia (coords.), *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* (pp. 317-350). Buenos Aires: EUDEBA.
- Donza, E., Philipp, E., Pla, J., Salvia, A. y Vera, J. (2008). Estrategias familiares y políticas públicas en auxilio del aumento de la desigualdad distributiva durante el período de reformas estructurales y la crisis de la convertibilidad. Gran Buenos Aires 1992-2003. *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, 4, pp. 7-44.
- Donzelot, 2007 [1985]. *La invención de lo social*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Dunlop, J. (1958). *Industrial Labor Relations*. New York: Holt.
- Duque J. y Pastrana, E. (1973). *Las estrategias de supervivencia económica de las unidades familiares del sector popular urbano: una investigación exploratoria*. Santiago de Chile: PROELCE
- Eguía, A. (2017). Miradas sobre la pobreza en la Argentina. *Cuadernos FHyCS-UNJu*, 51, pp. 71-83.
- Eguía, A. y Ortale, S. (2004). Reproducción social y pobreza urbana. *Cuestiones de Sociología*, 2, pp. 21-49.
- Eguía, A. y Sotelo, L. (2007). Los programas sociales como recursos para la reproducción familiar. En A. Eguía y S. Ortale (coords.), *Los significados de la pobreza* (pp. 85-106). Buenos Aires: Biblos.
- Elbert, R. (2015). Informalidad en la estructura de clases de Argentina: ¿es el proletariado informal una nueva clase social? *Revista Pilquen*, 18 (3), pp. 50-65.
- Elizalde, M. L., Pok, C., Botta, A. M. y Villarreal, J. M. (1974). *Encuesta Permanente de Hogares: marco teórico-metodológico de la investigación temática*. Buenos Aires: INDEC-EPH.
- Epszteyn, E. y Orsatti, A. (1988). *Características de una línea de pobreza para Argentina* (Documento de Trabajo N° 8 de la Investigación sobre Pobreza en Argentina). Buenos Aires: INDEC.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Esping-Andersen, G. (1999). *Social Foundations of Post-Industrial Societies*. Nueva York: Oxford University Press.
- Esquivel, V. (2011). La Economía del cuidado: un recorrido conceptual. En N. Sanchís (comp.) *Aportes al debate del desarrollo en América Latina desde una perspectiva feminista* (pp. 20-30). Buenos Aires: Red de Género y Comercio.
- Esquivel, V., Faur, E. y Jelin, E. (2012). Hacia la conceptualización del cuidado: familia, mercado y estado. En V. Esquivel, E. Faur y E. Jelin (eds.), *Las lógicas del cuidado infantil* (pp. 11-44). Buenos Aires: IDES-UNFPA-UNICEF.

- Fajnzylber, F. (1996 [1990]). *Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa*, Santiago de Chile: CEPAL.
- Falappa, F. y Andrenacci, L. (2008) *La política social de la Argentina democrática (1983-2008)*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- Feijóo, M. C. (2001). *Nuevo país, nueva pobreza*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Feldman, S. y Galín, P. (1990). Nota introductoria. En P. Galín y M. Novick (comps.) *La precarización del empleo en la Argentina* (pp. 9-17). Buenos Aires: CEAL-CIAT/OIT-CLACSO.
- Félez, M. (2013) El neodesarrollismo en Argentina frente a sus límites. ¿De la consolidación a la intensificación? *Anuario EDI*, 5, pp. 55-65.
- Félez, M. (2015). ¿Neodesarrollismo a la deriva en la Argentina? Hegemonía, proyecto de desarrollo y crisis transicional. *Márgenes. Revista de Economía Política*, 1 (1), pp. 95-118.
- Félez, M. (2017). Argentina, de la crisis neoliberal a la crisis del neodesarrollo, de Kirchner a Macri. Hipótesis sobre el tiempo que nos toca. En M. Félez y M. O. Pinassi (comps.) *La farsa neodesarrollista y las alternativas populares en América Latina y el Caribe* (pp. 49-70). Buenos Aires: Herramienta.
- Félez, M. y López, E. (2012). *Proyecto neodesarrollista en Argentina. ¿Modelo nacional-popular o nueva etapa del desarrollo capitalista?* Buenos Aires: El Colectivo.
- Félez, M. y Pérez, P. (2007) ¿Tiempos de cambio? Contradicciones y conflictos en la política económica de la posconvertibilidad. En R. Boyer y J. C. Neffa (comps.) *Salidas de crisis y estrategias alternativas de desarrollo. La experiencia argentina* (pp. 319-352). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Feres, J. C. y Mancero, X. (2001). *Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura* (Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos N° 4). Santiago de Chile: CEPAL.
- Fernández Bugna, C. y Porta, F. (2008). El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural. *Realidad Económica*, 233, 17-48.
- Fernández-Huerga, E. (2010). La teoría de la segmentación del mercado de trabajo: enfoques, situación actual y perspectivas de futuro. *Investigación Económica*, 69 (273), pp. 115-150.
- Ferreira, F. y Robalino, D. (2010). *Social Protection in Latin America. Achievements and Limitations* (Policy Research Working Paper N° 5305). Washington D.C.: World Bank.
- Ferreira, F., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L., Lugo, M. y Vakis, R. (2013). *La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Filgueira, C. y Kaztman, R. (1999). *Marco conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructuras de oportunidades*. (Documento de Trabajo CEPAL). Montevideo: CEPAL.
- Filgueira, F. (1998) El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina, eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada. En B. Roberts (comp.) *Ciudadanía y política social latinoamericana*. Costa Rica: Flacso/SSRC.

- Filgueira, F. (2015). Modelos de desarrollo, matriz del Estado social y herramientas de las políticas sociales latinoamericanas. En S. Cecchini, F. Filgueira, R. Martínez y C. Rossel (eds.): *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización* (pp. 49-84). Santiago de Chile: CEPAL.
- Fine, B (2003). *Labour Market Theory. A Constructive Reassessment*. Londres: Routledge / Taylor & Francis.
- Fitoussi, J. y Rosanvallon, P. (2003). *La nueva era de las desigualdades*. Buenos Aires: Manantial.
- Fleury, S. (1997). *Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América Latina*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Fraser, N., Gutiérrez, R. y Peña Casas, R. (2011). *Working Poverty in Europe*. Londres: Palgrave-MacMillan.
- Freyre, M. L. y Merino, F. (2016). El mercado de las políticas sociales y las estrategias de obtención de ingresos de los hogares en gran córdoba (2003-2011). En A. Gutiérrez y H. Mansilla (comps.) *El espacio social de las clases y los instrumentos de reproducción social* (pp. 105-148). Córdoba: UNC.
- Fröbel, F., Heinrichs, J. y Kreye, O. (1980). *La nueva división internacional del trabajo. Paro estructural en los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo*. Madrid: Siglo XXI.
- Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas [FIEL] (2016). *Valorización de la Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total* (Informe N° 87). Buenos Aires: FIEL. Recuperado de: http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/CAN_BAS_1473111893099.pdf
- Fundación Getulio Vargas [FGV] (2010). *Diez Tesis sobre el nuevo desarrollismo*. Recuperado de: http://www.tentheseonnewdevelopmentalism.org/theses_spanish.asp
- Furtado, C. (1971 [1961]). *Desarrollo y subdesarrollo*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Gaggero, A., Schorr, M. y Wainer, A. (2014) *Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo*. Buenos Aires: Crisis y Futuro Anterior.
- García Díaz, F. y Woyecheszen, D. (noviembre, 2011). Heterogeneidad estructural, distribución del ingreso y pobreza. *II Seminario Internacional Movilidad y Cambio Social en América Latina*. La Plata: CIMECS/UNLP-IIGG/UBA.
- García Raggio, A. M. (1998). Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento de la ciudadanía. En E. de Ípola (comp.) *La crisis del lazo social. Durkheim, cien años después* (pp. 20-48). Buenos Aires, EUDEBA.
- García, B., Muñoz, H. y Oliveira, O. (1982). *Hogares y trabajadores en la Ciudad de México*. México D.F.: El Colegio de México-UNAM.
- Garganta, S. y Gasparini, S. (2017). El impacto de la AUH sobre los ingresos de los hogares: Un ejercicio de diferencias dobles. En O. Cetrángolo y J. Curcio y (coords.) *Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la Asignación Universal por Hijo* (pp. 406-418). Buenos Aires: ANSES – Ministerio de Desarrollo Social – UNICEF – IIEEP UBA – CEDLAS – CNCPS.
- Gasparini, L., Bracco, J., Falcone, G. y Galeano, L. (2017). Incidencia distributiva de la AUH. En O. Cetrángolo y J. Curcio y (coords.) *Análisis y propuestas de mejoras para ampliar*

- la Asignación Universal por Hijo* (pp. 244-255). Buenos Aires: ANSES – Ministerio de Desarrollo Social – UNICEF – IIEEP UBA – CEDLAS – CNCPS.
- Gasparini, L., Cruces, G. y Tornarolli, L. (2016). Chronicle of a Deceleration Foretold Income Inequality in Latin America in the 2010s. *Revista de Economía Mundial*, 43, pp. 25-45.
- Geldstein, R. (1994). *Los roles de género en la crisis* (Documento de Trabajo N° 50). Buenos Aires: Centro de Estudios de Población.
- Gerchunoff, P. (2013). Treinta años de economía política en democracia. La crítica, la compasión y la empatía en el método de la historia. *Desarrollo Económico*, 53 (209), pp. 195-222.
- Gerchunoff, P. y Llach, L. (2008). *El ciclo de la ilusión y el desencanto*. Buenos Aires: Emecé.
- Germani G. (1971). *Sociología de la modernización*. Buenos Aires: Paidós.
- Germani G. (1972). Aspectos teóricos de la marginalidad. *Revista Paraguaya de Sociología*, 9, (23), 7-35.
- Germani, G. (1955). *Estructura social de la Argentina*. Buenos Aires: Raigal.
- Germani, G. (1967). La ciudad como mecanismo integrador. *Revista Mexicana de Sociología*, 23, (3), 387-406.
- Gerry, C. (1987). Developing Economies and the Informal Sector in Historical Perspective. *Annals AAPSS*, 493, pp. 100-119.
- Ghosh, J. (2011). Dealing with “The Poor”. *Development and Change* 42(3): 849–858.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (2010). Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. *ALASRU*, 5, pp. 113-134.
- Gillespie, M. (2014). The Family as an Economic Institution: Historical Contingencies and the Great Recession. *International Journal of Sociology of the Family*, 40 (1), pp. 1-26.
- Golbert, L. (2004). *¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados* (Serie Conferencias y Seminarios: Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias). Santiago de Chile: CEPAL.
- Golovanevsky, L. (2007). Vulnerabilidad social: una propuesta para su medición en Argentina. *Revista de Economía y Estadística*, 45 (2), pp. 53-94.
- Gómez Sabaíni, J. y Rossignolo, D. (2014). *La tributación sobre las altas rentas en América Latina* (Serie Estudios y Perspectivas N°13). Santiago de Chile: CEPAL.
- Gordon, D., Edwards, R. y Reich, M. (1986 [1982]). *Trabajo segmentado, trabajadores divididos. La transformación histórica del trabajo en Estados Unidos*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Gough, I. (1979). *The Political Economy of the Welfare State*. Londres: Macmillan.
- Graña, J. M. (2012). *Las condiciones productivas de las empresas como causa de la evolución de las condiciones de empleo: la industria manufacturera en Argentina desde mediados del siglo pasado*. (Tesis de doctorado). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- Graña, J. M. (2015). Los problemas productivos de las empresas y su vinculación con el deterioro de las condiciones de empleo de los trabajadores. En J. Lindenboim, y A.

- Salvia (coords.). *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* (pp. 30-74). Buenos Aires: EUDEBA.
- Graña, J. M. y Kennedy, D. (2008). Empobreciendo a los trabajadores, empobreciendo la acumulación. Producción, distribución y utilización de la riqueza social. En J. Lindenboim (comp.). *Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI* (pp. 207-258). Buenos Aires: EUDEBA.
- Grassi, E. (2016). Un ciclo de reedición del Estado social en la Argentina. La política socio-laboral entre 2003-2015. *Diálogos. Revista Electrónica de Historia*, 17, pp. 127-161.
- Grassi, E., Hintze, S. y Neufeld, R. (1994) *Políticas sociales, crisis y ajuste estructural*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Grassi, Estela (2003) *Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I)*. Buenos Aires: Editorial Espacio.
- Groisman, F. (2011). Argentina: Los hogares y los cambios en el mercado laboral (2004-2009). *Revista de la CEPAL*, 104, 81-102.
- Groisman, F. (2013). Gran Buenos Aires: Polarización del ingreso, clase media e informalidad laboral (1974-2010). *Revista de la CEPAL*, 109, 85-105.
- Groisman, F. (2014). Empleo, salarios y desigualdad en Argentina: análisis de los determinantes distributivos. *Problemas del Desarrollo*, 117 (45), 57-89.
- Groisman, F., Sconfienza, M. E. y Bossert, F. (2012). Políticas de protección social y participación económica de la población en Argentina (2003-2010). *Desarrollo Económico*, 51 (202), pp. 241-262.
- Gunder Frank, A. (1966). The development of underdevelopment. *Monthly Review*, 18 (4), pp. 17-31.
- Gutiérrez Ageitos, P. (2015). *La movilidad laboral a la salida de la convertibilidad*. (Tesis de doctorado). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Gutiérrez, A. (2004). La reproducción en la pobreza (¿y de la pobreza?). El enfoque desde la perspectiva de las estrategias familiares. *Cuestiones de sociología*, 2, 175-183.
- Gutiérrez, A. y Mansilla, H (2016). *El espacio social de las clases y los instrumentos de reproducción social*. Córdoba: UNC.
- Hanmer, L. y Booth, D. (2001). *Pro-Poor Growth: Why do we need it?* Londres, Overseas Development Institute.
- Hareven, T. (1990). A Complex Relationship: Family Strategies and the Processes of Economic and Social Change. En A. Robertson y R. Friedland (eds.) *Beyond the Marketplace. Rethinking Economy and Society* (pp. 215-244). Nueva York: Aldine de Gruyter.
- Harris, O. (1986). La unidad doméstica como unidad natural. *Revista Nueva Antropología*. 8 (30), pp. 199-222.
- Harvey, D. (2007) *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- Hernández Laos, E. (2005). *Mercado laboral, desigualdad y pobreza en América Latina*. México D.F.: Porrúa.
- Hidalgo, A. L. (1998). *El pensamiento económico sobre desarrollo. De los Mercantilistas al PNUD*. Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones

- Hintze, S. (1989). *Estrategias alimentarias de sobrevivencia. Un estudio de caso en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Hintze, S. y Costa, M. I. (2011). La reforma de las asignaciones familiares 2009: aproximación al proceso político de la transformación de la protección. En C. Danani y S. Hintze (coords.), *Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina (1990-2010)* (pp. 153-183). Los Polvorines: UNGS.
- Hussmans, R. (2004). *Measuring the Informal Economy: From Employment in the Informal Sector to Informal Employment* (Documento de Trabajo N° 53). Ginebra: OIT.
- Infante, R. (2011). *El desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe. Ensayos sobre políticas de convergencia productiva para la igualdad*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Infante, R. y Gerstenfeld, P. (2013). *Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de Argentina*. Santiago de Chile: CEPAL-OIT.
- Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas [IPPYP] (2014). *Los números que el gobierno pretende ocultar*. Recuperado de: <https://ipypp.org.ar/descargas/2014/Los%20numeros%20que%20el%20gobierno%20intenta%20ocultar.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] (2003). *La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina*. Buenos Aires: INDEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] (2005). *Cambio de las estimaciones de población en base a las proyecciones definitivas del Censo 2001*. Buenos Aires: INDEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] (2009). *Ponderación de la muestra y tratamiento de valores faltantes en las variables de ingreso en la Encuesta Permanente de Hogares* (Documento de Trabajo Metodología N° 15). Buenos Aires: INDEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] (2016). *La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina* (Documento de Trabajo Metodología N° 22). Buenos Aires: INDEC.
- Iñigo Carrera, J. (2007). *La formación económica de la sociedad argentina*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Isuani, A. (2008). La política social argentina en perspectiva. En G. Cruces, D. Ringold, R. Rofman y J. M. Moreno (eds.), *Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario. Visiones y perspectivas*, (pp. 169-198), Buenos Aires: Banco Mundial.
- Isuani, E., (1991). Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable? Notas sobre la crisis de acumulación. En E. Tenti Fanfani, E. Isuani y R. Lo Vuolo (comps.), *El estado benefactor: un paradigma en crisis*. Buenos Aires: Miño y Dávila/CIEPP.
- Jaccoud, F., Arakaki, A., Monteforte, E., Pacífico, L., Graña, J. y Kennedy, D. (2015). Estructura productiva y reproducción de la fuerza de trabajo: la vigencia de los limitantes estructurales de la economía argentina. *Cuadernos de Economía Crítica*, 1 (2), 79-112.
- Jelin, E. (1984), *Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada*. Buenos Aires: CEDES.
- Jelin, E. (2010). *Pan y afectos. La transformación de las familias*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Jessop (1980 [1977]). Teorías recientes del Estado capitalista. *Críticas de la economía política*, 16-17, pp. 181-222.
- Judzik, D., Trujillo, L., y Villafañe, S. (2017). A tale of two decades: Income inequality and public policy in Argentina (1996-2014). *Cuadernos de Economía*, 36 (72), 261-291.
- Katz, C. (2016). *Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo*. Buenos Aires: Batalla de Ideas-Editorial ALBA Movimientos.
- Kay, C. (1991). Reflections on the Latin American Contribution to Development Theory. *Development and Change*, 22, pp. 31-68.
- Kennedy, D. (2012) *Economía Política de la Contabilidad Social*. (Tesis de Doctorado). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- Kennedy, D. (2015). Las fuentes de compensación desde la perspectiva de la contabilidad social y su rol en el ciclo económico. En J. Lindenboim y A. Salvia (coords.), *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* (pp. 75-106). Buenos Aires: EUDEBA.
- Kennedy, P. (2005). Social Policy, Social Exclusion and Commodity Fetishism. *Capital & Class*, 8, pp. 91-114.
- Kerr, C. (1950). Labor Markets: Their Character and Consequences. *The American Economic Review*, 40(2), 278-291.
- Kessler, G. (2014). *Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Kessler, G. (2016). Presentación. En J. P. Pérez Sáinz *Una historia de la desigualdad en América Latina. La barbarie de los mercados, desde el siglo XIX hasta hoy* (pp. 9-12). Buenos Aires; Siglo XXI.
- Kessler, G. y Espinoza, V. (2003). *Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires*. (Serie Políticas Sociales N° 66). Santiago de Chile: CEPAL.
- Kornblihtt, J., Seiffer, T. y Villanova, N. (2014). De la caída relativa a la caída absoluta del salario real en la Argentina (1950-2013). *Revista Guillermo de Ockham*, 12 (2), pp. 41-50
- Korpi, W. (1980). Social Policy and Distributional Conflict in the Capitalist Democracies: A Preliminary Comparative Framework. *West European Politics*, 3, pp. 296-316.
- Kotz, D. (1994). The Regulation Theory and the Social Structure of Accumulation Approach. En D. Kotz, T. McDonough, y M. Reich (eds.) *Social Structures of Accumulation. The Political Economy of Growth and Crisis* (pp. 85-98). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kulfas, M. (2016). *Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina. 2003-2015*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Lanari, M. E. (2015). Argentina: las implicaciones de las políticas públicas y la regulación laboral sobre el trabajo 2008-2013. *Cuadernos del CENDES*, 32 (89), pp. 1-16.
- Lavinas, L. (2013). The 21st Century Welfare. *New Left Review*, 84, pp. 5-40.

- Lavinas, L. y Simões, A. (2017). Social Policy and Structural Heterogeneity in Latin America: The Turning Point of the 21st Century. *Revista de Economía Contemporánea*, núm. esp., pp. 1-35.
- Lavopa, A. (2008). Crecimiento económico y desarrollo en el marco de estructuras productivas heterogéneas. El caso argentino durante el período 1991-2006. En J. Lindenboim (comp.). *Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI* (pp. 161-206). Buenos Aires: EUDEBA.
- Lewis, A. (1954). Economic Development with Unlimited Supply of Labour. *School of Economic and Social Sciences*, 22 (2), pp. 139-191.
- Lindenboim, J. (2015). Estadísticas y estadistas, una relación difícil. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 4 (8), 32-49.
- Lindenboim, J. y Salvia, A. (2015). *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* Buenos Aires: EUDEBA.
- Lindenboim, J., Kennedy, D. y Graña, J. (2010). El debate sobre la distribución funcional del ingreso. *Desarrollo Económico*, (49) 196, pp. 541-571.
- Lippit, V. (2010). Social Structure of Accumulation Theory. En T. McDonough, M. Reich y D. Kotz (eds.) *Contemporary Capitalism and Its Crises. Social Structure of Accumulation Theory for the 21st Century* (pp. 45-71). Nueva York: Cambridge University Press.
- Llach, J. J. (1978). Estructura ocupacional y dinámica del empleo en la Argentina: sus peculiaridades. 1947-1970. *Desarrollo Económico*, (68), pp. 539-591.
- Llach, J. J. y Montoya, S. (1999). *En pos de la equidad. La pobreza y la distribución del ingreso en el Área Metropolitana de Buenos Aires: diagnóstico y alternativas de políticas*. Buenos Aires: IERAL.
- Lo Vuolo, R. (2009). *Distribución y crecimiento. Una controversia persistente*. Buenos Aires: CIEPP-Miño y Dávila.
- Lo Vuolo, R., Barbeito, A., Pautassi, L. y Rodríguez, C. (1999). *La pobreza... de la política contra la pobreza*. Buenos Aires: CIEPP-Miño y Dávila.
- Logiudice, A. G. (2010, julio). ¿Qué tan lejos del paradigma neoliberal? La política social asistencial de los 2000 en Argentina. *V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política*. Buenos Aires, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política.
- Lombardía, M. L. y Domeniconi, C. (2015). *Incluir para crecer. La inversión nacional entre 2004 y 2014*. Buenos Aires: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
- López, E. (2015). *Los años post-neoliberales. De la crisis a la consolidación de un nuevo modo de desarrollo*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- LópezCalva, L. y Lustig, N (2010) *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?* Washington, D. C.: Brookings Institution Press.
- Lustig, N., López-Calva, L. F. y Ortiz-Juarez, E. (2012). *Declining Inequality in Latin America in the 2000s*. (Policy Research Working Paper N° 6248). Washington D. C.: The World Bank.

- Maceira, V. (2016). Aportes para el análisis de la estructura de clases y la diferenciación social de los trabajadores en el área metropolitana de Buenos Aires en la post-convertibilidad, *Estudios del Trabajo* (52), s/p.
- Mallimaci, F. y Salvia, A. (2005). *Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados*. Buenos Aires: Biblos.
- Mallon, R. y Sourrouille, J. (1976): *La política económica en una sociedad conflictiva, el caso argentino*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Maloney, William. (2004). Informality Revisited. *World Development*, 32 (7), pp. 1159-1178.
- Manzanelli, P. y Basualdo, E. (2016). Régimen de acumulación durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. *Realidad Económica*, 304, pp. 6-40.
- Margulis, M. (1989). Reproducción de la unidad doméstica, fuerza de trabajo y relaciones de producción. En O. de Oliveira, M. Pepin Lehaller y V. Salles (comps.), *Grupos domésticos y reproducción cotidiana* (pp. 189-215). México D.F.: UNAM-COLMEX.
- Marini, R. M. (2007 [1973]). Dialéctica de la dependencia. En R. M. Marini *América Latina: dependencia y globalización*. Bogotá: CLACSO.
- Mario, A. y García, A. (2013). Informalidad laboral, pobreza y regiones. Un análisis desde la coyuntura argentina. En *Revista de Estudios Regionales*, 9, pp. 107-125.
- Marshall, A. (1978). *El mercado de trabajo en el capitalismo periférico. El caso de Argentina*, Buenos Aires: CLACSO-PISPAL.
- Marshall, A. (1984). El "salario social" en la Argentina. *Desarrollo Económico*, 24(93), pp. 41-70
- Marshall, A. (1992). *Circumventing Labour Protection: Non-standard Employment in Argentina and Peru* (Research Series N° 88). Ginebra: ILS-OIT.
- Martínez Franzoni, J. (2008). *Domesticar la incertidumbre en América Latina: mercado laboral, política social y familias*. San José: Editorial UCR.
- Martínez Franzoni, J. y Sánchez-Ancochea, D. (2016). Regímenes de Bienestar en América Latina: tensiones entre universalización y segmentación. En E. del Pino y J. Rubio (eds.). *Los estados de bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva comparada* (pp. 200-220). Madrid: Tecnos.
- Marx, K. (2008 [1867]). *El capital. Crítica de la economía política*, Tomo I, vol. 1. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Marx, K. y Engels, F. (2005 [1844]). *La ideología alemana*. Buenos Aires: Santiago Rueda Editores.
- Maurizio, R. (2012). *Labour informality in Latin America: the case of Argentina, Chile, Brazil and Peru* (Working Paper N° 165). Manchester: BWPI.
- Maurizio, R. y Monsalvo, P. (2017). Evaluación de los impactos de la AUH en el comportamiento laboral de los adultos y en la generación de ingresos. En O. Cetrángolo y J. Curcio y (coords.) *Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la Asignación Universal por Hijo*. Buenos Aires: ANSES – Ministerio de Desarrollo Social – UNICEF – IIEEP UBA – CEDLAS – CNCPS.

- Maurizio, R. y Vázquez, G. (2014). Argentina: efectos del programa Asignación Universal por Hijo en el comportamiento laboral de los adultos. *Revista de la CEPAL*, 114, pp. 121-144.
- Mazzola, R. (2014). *Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- McDonough, T., Reich, M. y Kotz, D. (2010). *Contemporary Capitalism and Its Crises. Social Structure of Accumulation Theory for the 21st Century*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Meillasoux, C. (1981 [1977]). *Maidens, Meal and Money. Capitalism and the Domestic Community*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. *Science*, 159, pp. 56-63
- Mesa-Lago, C. (1998). La reforma estructural de pensiones en América Latina: tipología, comprobación de presupuestos y enseñanzas. En A. Bonilla y A. Conte-Grand (comps.) *Pensiones en América Latina: dos décadas de reforma* (pp. 77-164). Lima: OIT.
- Messina, G. M. (2014). Una evaluación de las políticas de transferencia de ingresos en Argentina entre 2003 y 2011. *RIPS*, 13 (1), pp. 177-201.
- Messina, G. M. (julio, 2015). Continuidades y discontinuidades en el régimen de bienestar argentino en la etapa kirchnerista: ¿promoción de la ciudadanía social o fragmentación de la política social? *XII Congreso de AECPA*. San Sebastián.
- Mészáros, I. (2001). *Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición*. La Paz: Pasado y Presente.
- Mezzerá, J. (1987). Abundancia como efecto de escasez. Oferta y demanda en el mercado laboral urbano. *Nueva Sociedad*, 90, s/p.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2008). *Boletín Estadístico de la Seguridad Social*. Buenos Aires: MTEYSS.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2009). *Boletín Estadístico de la Seguridad Social*, Buenos Aires: MTEYSS.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2012). *Boletín Estadístico de la Seguridad Social*, Buenos Aires: MTEYSS.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2017). *Boletín Estadístico de la Seguridad Social*, Buenos Aires: MTEYSS.
- Minujin, A. y López, N. (1994). Nueva pobreza y exclusión: el caso argentino. *Nueva sociedad*, 131, pp. 88-105.
- Mishra, R. (1981). *Society and Social Policy. Theories and Practice on Welfare*. Londres: Macmillan.
- Montoya García, M. V. (2017). *Los hogares en la crisis: trabajo y condiciones de vida en México, 2008-2010*, México D.F.: UNAM-IIE-CEPAL.
- Monza, A. y López, N. (1995). Un intento de estimación del sector informal urbano en la Argentina. *Desarrollo Económico*, 35 (139), 467-474.
- Mood, C. (2010). Logistic regression: Why we cannot do what we think we can do, and what we can do about it. *European Sociological Review*, 26,1, 67-82.

- Mora Salas, M. (2010). *Ajuste y empleo. La precarización del trabajo en la era de la globalización*. México D.F.: El Colegio de México.
- Moser, C. (1998). The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies. *World Development*, 26 (1), pp. 1-19.
- Moser, Caroline (1978). Informal Sector or Petty Commodity Production? Dualism or Dependence in Urban Development. *World Development*, 6 (9), pp. 1041-1064.
- Murmis, M. y Feldman, S. (1992). La heterogeneidad social de las pobrezas. En A. Minujín (ed.) *Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina* (pp. 45-92). Buenos Aires: UNICEF/Losada.
- Narodowski, P. y Panigo, D. (2010). El nuevo modelo de desarrollo nacional y su impacto en la Provincia de Buenos Aires. *Cuadernos de Economía*, 75, pp. 1-58.
- Neffa, J. C. (1998) *Modos de Regulación, Regímenes de Acumulación y su crisis en Argentina (1880-1996). Una contribución a su estudio desde la teoría de la regulación*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Neffa, J. C. (2008). Las teorías de la segmentación de los mercados de trabajo. En: Eymard-Duvernay, F. y Neffa, J. C. (eds.). *Teorías económicas sobre el mercado de trabajo. III. Análisis institucionalistas* (pp. 139-206). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica-CEIL-PIETTE.
- Nohlen, D. y Sturm, R. (1982). La heterogeneidad estructural como concepto básico de la teoría del desarrollo. *Revista de Estudios Políticos*, (28), pp. 45-74.
- Norton, E. y Dowd, B. (2018). Log Odds and the Interpretation of Logit Models. *Health Service Research*, 53(2), pp. 859-878.
- Novick, M. (2006) ¿Emerge un nuevo modelo económico y social? El caso argentino 2003-2006. *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, 11 (18), pp. 53-78.
- Nun, J. (1987). La teoría política y la tradición democrática. En J. Nun y J. C. Portantiero (comps.) *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*. Buenos Aires: Puntosur.
- Nun, J. (2003 [1969]). La teoría de la masa marginal [Versión original: “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”]. En J. Nun (comp.). *Marginalidad y exclusión social* (pp. 35-140). Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
- Nun, J. (2003 [1999]). Nueva visita a la teoría de la masa marginal [Versión original: “El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal”]. En J. Nun (comp.). *Marginalidad y exclusión social* (pp. 249-300). Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
- Nun, J., Marín, J.C. y Murmis, M. (1968). *La marginalidad en América Latina: informe preliminar* (Documento de trabajo N° 35). Buenos Aires: CIS.
- O’Connor, J. (2009 [1977]). *The Fiscal Crisis of the State*, New Jersey: Transaction Publishers.
- Observatorio de la Deuda Social Argentina [ODSA] (2014). *Un régimen consolidado de bienestar con desigualdades sociales persistentes. Claroscuros en el desarrollo humano y la integración social (2010-2013)*. Buenos Aires: EDUCA.
- Observatorio de la Deuda Social Argentina [ODSA] (2015). *Progresos sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes. Ilusiones y desilusiones en el desarrollo*

- humano y la integración social al quinto año del Bicentenario (2010-2014)*. Buenos Aires: EDUCA.
- Ocampo, J. A. y Gómez-Arteaga, N. (2017). Los sistemas de protección social, la redistribución y el crecimiento en América Latina. *Revista de la CEPAL*, 122, pp. 7-33.
- Offe, C. (1984). *Contradictions on the Welfare State*. Londres: Hutchinson.
- Oliveira, O. y Ariza, M. (2000). Trabajo femenino en América Latina. Un recuento de los principales enfoques analíticos. En E. de la Garza Toledo (coord.) *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo* (pp. 644-663). México D. F.: El Colegio de México, FLACSO, UNAM, Fondo de Cultura Económica
- Oliveira, O. y Salles, V. (1989). Acerca del estudio de los grupos domésticos. Un enfoque sociodemográfico. En O. de Oliveira, M. Pepin Lehaller y V. Salles (comps.), *Grupos domésticos y reproducción cotidiana*. México D.F.: UNAM-COLMEX.
- Oliveira, O. y Salles, V. (2000). Reflexiones teóricas para el estudio de la reproducción de la fuerza de trabajo. En E. de la Garza Toledo (coord.) *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo* (pp. 619-643). México D. F.: El Colegio de México, FLACSO, UNAM, Fondo de Cultura Económica.
- Organización Internacional del Trabajo [OIT] (1972). *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*. Ginebra: OIT.
- Ortiz, R., Schorr, M (2006): La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la ‘década perdida’. En A. Pucciarelli (coord.): *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Palma, J. G. (2014). Theories of dependency. En A. Dutt y J. Ros (eds.) *International Handbook of Development Economics*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Palomino, H. (2007). La instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina: de la precarización a la regulación. *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*. 12 (19), pp. 121-144.
- Palomino, H. y Dalle, P. (2012). El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina: 2003-2011. *Revista de Trabajo*, 8 (10), pp. 205-223.
- Palomino, H. y Trajtemberg, D. (2006). Una nueva dinámica de las relaciones laborales y la negociación colectiva en la Argentina. *Revista de Trabajo*, 2 (3), pp. 47-68.
- Panigo, D. y Neffa, J. C. (2009). *El mercado de trabajo argentino en el nuevo modelo de desarrollo*. Buenos Aires: Dirección Nacional de Programación Macroeconómica.
- Pautassi, L. y Gamallo, G. (2016). *El bienestar en brechas. Un análisis de las políticas sociales en la Argentina de la postconvertibilidad*. Buenos Aires: Biblos.
- Paz, (2005). *La oferta de trabajo de la familia como estrategia para enfrentar cambios adversos en el bienestar del hogar*. (Documento de Trabajo). Buenos Aires: UCEMA.
- Paz, J. (agosto, 2001). Efectos de la situación ocupacional de los jefes de hogar sobre la oferta laboral secundaria. *V Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina.
- Pérez Sáinz, J. P. (1995). Globalización y neoinformalidad en América Latina. *Nueva Sociedad*, 135, pp. 36-41.

- Pérez Sáinz, J. P. (2000). Más allá de la informalidad. Autogeneración de empleo en la modernización globalizada. En AAVV, *Desarrollo Cultural y Gestión en Centros Históricos* (pp. 139-154). Quito: FLACSO.
- Pérez Sáinz, P. y Mora Salas, M. (2004). De la oportunidad del empleo formal al riesgo de exclusión laboral. Desigualdades estructurales y dinámicas en los mercados latinoamericanos de trabajo. *Alteridades*, 14 (28), pp. 37-49.
- Pérez-Sáinz, J. P. (2016). *Una historia de la desigualdad en América Latina. La barbarie de los mercados, desde el siglo XIX hasta hoy*. Buenos Aires; Siglo XXI.
- Perry, G., Maloney, W., Arias, O., Fajnzylber, A., Mason, A. y Saavedra Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and Exclusion*. Nueva York: Banco Mundial.
- Perry, G., Maloney, W., Arias, O., López, H. y Servén, L. (2006). *Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos*. Bogotá: Banco Mundial.
- Picchio, A. (2009). Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas públicas. *Revista de Economía Crítica*, 7, pp. 27-54.
- Picó, J. (1990). *Teorías sobre el Estado de Bienestar*. Madrid: Siglo XXI.
- Pinto, A. (1976). Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de América Latina. *El trimestre económico*, 37 (145), pp. 83-100.
- Piva, A. (2015). *Economía y política en la Argentina kirchnerista*, Buenos Aires: Batalla de Ideas.
- Pok, C. y Lorenzetti, A. (2007). El abordaje conceptual- metodológico de la informalidad. *Laboratorio. Revista de estudios sobre cambio estructural y desigualdad social*, 20, pp. 5-15.
- Polanyi, K. (2011 [1944]). *La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Portes, A. (2000). La economía informal y sus paradojas. En J. Carpio, E. Klein, e I. Novacovsky (comps.), *Informalidad y exclusión social* (pp. 25-49). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica-SIEMPRO-OIT.
- Portes, A. y Haller, W. (2004). *La economía informal* (Serie Políticas Sociales N° 100). Santiago de Chile: CEPAL.
- Poy, S. (2016). Cambios en la participación laboral de los hogares y en los niveles de bienestar económico. Argentina en los años post-reformas (2003-2014)”. *Estudios del Trabajo*, 51-52, s/p.
- Poy, S. (2017a). Heterogeneidad de la estructura ocupacional y segmentación del mercado de trabajo. Gran Buenos Aires, 1974-2014. *Trabajo y Sociedad*, 29, pp. 353-376.
- Poy, S. (2017b). Perfiles sociales de la marginalidad económica: aproximaciones a su evolución en el caso argentino bajo distintos regímenes económicos (1992-2012). *Espacio Abierto*, 26 (1), pp. 5-26.
- Poy, S. y Vera, J. (2017). Mercado laboral, políticas sociales y desigualdad: cambios recientes en perspectiva histórica. Gran Buenos Aires (1974-2014). *Economía UNAM*, 14 (42), pp. 3-23.
- Poy, S., Vera, J. y Salvia, A. (septiembre, 2015). *Cambios en la distribución del ingreso y en los patrones de reproducción social de los hogares del Gran Buenos Aires (1974-2014)*.

- XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Asociación Argentina de Estudios de Población, Salta, Argentina.
- Prebisch, R. (1949). *El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas*, Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Prebisch, R. (1967 [1963]). *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- Prebisch, R. (1970). *Transformación y desarrollo: la gran tarea de América Latina*, México D. F.: Fondo de Cultura Económica y Banco Interamericano de Desarrollo.
- Prebisch, R. (1984 [1981]) *Capitalismo periférico. Crisis y transformación*, México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe [PREALC] (1978). *Sector Informal. Funcionamiento y Políticas*. Santiago de Chile: OIT.
- Przeworski, A. (1982). Teoría sociológica y el estudio de la población: reflexiones sobre el trabajo de la comisión de población y desarrollo de CLACSO. En AAVV, *Reflexiones teórico metodológicas sobre las investigaciones en población*, México: CLACSO-El Colegio de México.
- Rashid, S. (2014). Neoclassical Development Economics. En A. Dutt y J. Ros (eds.) *International Handbook of Development Economics* (pp. 176-188). Cheltenham: Edward Elgar.
- Razavi, S. (2007). *The Political and Social Economy of Care in a Development Context. Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options*. Ginebra: UNRISD.
- Reich, M., Gordon, D. y Edwards, R. (1973). Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation. *American Economic Review*, 63 (2), pp. 359-365.
- Roca, E. y Pena, H. (agosto, 2001). La declaración de ingresos en las encuestas de hogares. *Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina.
- Rodríguez Enríquez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. *Nueva Sociedad*, 256, pp. 30-44.
- Rodríguez, D. y Cooper, J. (2005). *El debate sobre el trabajo doméstico. Antología*. México D. F.: UNAM.
- Rodríguez, O. (2001). Prebisch: actualidad de sus ideas básicas. *Revista de la CEPAL*, 75, pp. 41-52.
- Rofman, R. y Oliveri, L. (2012). Un repaso sobre las políticas de protección social y la distribución del ingreso en la Argentina. *Económica*, 58, pp. 97-128.
- Ros, J. (2014). Classical development theory. En A. Dutt y J. Ros (eds.) *International Handbook of Development Economics* (pp. 111-124). Cheltenham: Edward Elgar.
- Saad-Filho, A. (2015). Social Policy for Neoliberalism: The Bolsa Familia Programme in Brazil. *Development and Change*, 46(6): 1227-1252.
- Salas, C. (2003). Trayectorias laborales entre el empleo, el desempleo y las microunidades en México. *Papeles de población*, 9 (38), pp. 159-194.
- Salvia A., Comas, G., Gutiérrez Ageitos, P., Quartulli, D. y Stefani, F. (2008) Cambios en la estructura social del trabajo bajo los regímenes de convertibilidad y post-devaluación.

- Una mirada desde la perspectiva de la heterogeneidad estructural. En J. Lindenboim (comp.). *Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI* (pp. 115-160). Buenos Aires: EUDEBA.
- Salvia, A. (1995). La familia y los desafíos de su objetivación: enfoques y conceptos. *Estudios sociológicos*, 13 (37), pp. 143-162.
- Salvia, A. (2007). Consideraciones sobre la transición a la modernidad, la exclusión social y la marginalidad económica. Un campo abierto a la investigación social y al debate político. En A. Salvia y E. Chávez Molina (comps.) *Sombras de una marginalidad fragmentada. Aproximaciones a la metamorfosis de los sectores populares de la Argentina* (pp. 25-65). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Salvia, A. (2011). De marginalidades sociales en transición a marginalidades económicas asistidas. En C. Barba Solano y N. Cohen (coords.), *Perspectivas críticas sobre la cohesión social*, (pp. 107-135). Buenos Aires: CLACSO.
- Salvia, A. (2012). *La Trampa Neoliberal. Un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en la Argentina: 1992-2003*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Salvia, A. (2015). Heterogeneidad estructural, desigualdad económica y globalización en América Latina. En E. Hernández Gómez y M. Ramírez Urquidy (coords.), *Bienestar y pobreza en América Latina: Una visión desde la frontera norte de México* (pp. 11-55). Baja California (México): Ediciones Once Ríos.
- Salvia, A. (2016) “Heterogeneidad estructural y marginalidad económica en un contexto de políticas heterodoxas”, en: Salvia, Agustín y Chávez Molina, Eduardo (coords.), *Claves sobre la marginalidad económica y la movilidad social*. Buenos Aires: Biblos.
- Salvia, A. y Donza, E. (1999). Problemas de medición y sesgos de estimación derivados de la no respuesta completa a la pregunta de ingresos de la EPH (1990-1999). *Revista Estudios del Trabajo*, 18.
- Salvia, A. y Pla, J. (2008). *Cambios en el proceso de reproducción social de los hogares del Gran Buenos Aires* (Documento de Trabajo). Buenos Aires: Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social.
- Salvia, A. y Vera, J. (2012). Cambios en la estructura ocupacional y en el mercado de trabajo durante fases de distintas reglas macroeconómicas (1992-2010). *Revista Estudios del Trabajo*, 41/42, pp. 21-51.
- Salvia, A. y Vera, J. (2013) Heterogeneidad estructural y distribución de los ingresos familiares en el Gran Buenos Aires (1992-2010). *Desarrollo Económico*, 52 (207), 427-462.
- Salvia, A. y Vera, J. (2015). Las desigualdades estructurales y el efecto de la educación sobre las oportunidades de empleo pleno. En Lindenboim, J. y Salvia, A. (coords.). *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* (pp. 211-246). Buenos Aires: EUDEBA.
- Salvia, A., Poy, S. y Vera, J. (2016). La política social y sus efectos sobre la pobreza durante distintas etapas macroeconómicas. Argentina, 1992-2012. *Revista Desarrollo y Sociedad*, 76 (2), pp. 165-203.
- Salvia, A., Poy, S. y Vera, J. (2017). Política social y desigualdad en la región del Gran Buenos Aires, Argentina, 1992-2012. *Papeles de Población*, 23, pp. 223-259.

- Salvia, A., Poy, S. y Vera, J. (2018). Políticas sociales, pobreza y bienestar. Argentina: análisis comparado de distintos regímenes socioeconómicos (1992-2012). En F. Cortés (comp.) *Temas de política social de México y América Latina* (pp. 159-231). México D.F.: COLMEX-UNAM.
- Salvia, A., Robles, R. y Fachal, M. (agosto, 2016). Mercado de trabajo, educación y diferenciales de ingresos laborales. Principales tendencias tras dos décadas de políticas económicas diferentes (1992-2014). *VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo*. Buenos Aires, Argentina.
- Salvia, A., Tuñón, I. y Poy, S. (2015). Asignación Universal por Hijo para Protección Social: impacto sobre el bienestar económico y el desarrollo humano de la infancia. *Revista Población & Sociedad*, 22 (2), pp. 101-134
- Salvia, A., Vera, J. y Poy, S. (2015). Cambios y continuidades en la estructura ocupacional urbana argentina. En J. Lindenboim y A. Salvia (coords.), *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014* (pp. 133-172), Buenos Aires: EUDEBA.
- Sánchez, M., Pacífico, L. y Kennedy, D. (2016). *La participación asalariada en el ingreso y su composición según el vínculo laboral*. (Documento de Trabajo N° 21). Buenos Aires: Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo.
- Sautu, R. (1991). Oportunidades ocupacionales diferenciales por sexo en Argentina, 1970-1980. *Estudios del Trabajo*, 1, pp. 47-76.
- Schorr, M. (2012). Argentina: ¿nuevo modelo o ‘viento de cola’? Una caracterización en clave comparativa. *Nueva Sociedad*, 237, pp. 114-127.
- Schorr, M. (2015) Prólogo. En E. López, *Los años post-neoliberales. De la crisis a la consolidación de un nuevo modo de desarrollo*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Schvarzer, J. y Tavonanska, A. (2008). *Modelos macroeconómicos en la argentina: del “stop and go” al “go and crush”*. (Documento de Trabajo N° 15). Buenos Aires: CESP.A.
- Seiffer, T. (2013). Bases de la asistencialización de la Política Social en Argentina (1980-2010). *Documentos de Trabajo Social*, 51, pp. 69-88.
- Seiffer, T., Kornblihtt, J. y De Luca, R. (2012). El gasto social como contención de la población obrera sobrante durante el kirchnerismo y el chavismo (2003-2010). *Cuadernos de Trabajo Social*, 25 (1), pp. 33-47.
- Semán, P. y Ferraudi Curto, C. (2016). Los sectores populares. En G. Kessler (comp.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura* (pp. 141-162). Buenos Aires: Siglo XXI-Fundación OSDE.
- Seoane, J. (2013). Modelo extractivo y acumulación por despojo. En J. Seoane, E. Taddei y C. Algranati (comps.), *Extractivismo, despojo y crisis climática*, Buenos Aires: Herramienta-El Colectivo.
- Shaikh, A. (2007 [1991]). *Valor, acumulación y crisis*. Buenos Aires: Ediciones RyR.
- Singer, P. (1980). *Economía política del trabajo: elementos para un análisis histórico-estructural del empleo y de la fuerza de trabajo en el desarrollo capitalista*. México D. F.: Siglo XXI.

- Soldano, D. y Andrenacci, L. (2005). Aproximación a las teorías de la política social a partir del caso argentino. En: L. Andrenacci (comp.) *Problemas de política social en la Argentina contemporánea* (pp. 17-79). Buenos Aires: UNGS-Prometeo.
- Solimano, C. A. (1988)- Enfoques alternativos sobre el mercado de trabajo: Una evaluación teórica. *Revista Análisis Económico*, 3, pp. 159-186.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury.
- Storper, M. y Walker, R. (1989). *The Capitalist Imperative. Territory, Technology and Industrial Growth*. Nueva York: Blackwell.
- Sunkel, O. (1991). Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro. *Revista Mexicana de Sociología*, 53 (1), pp. 3-42.
- Svampa, M. (2011). Néodéveloppementisme extractiviste, gouvernements et mouvements sociaux en Amérique latine. *Problèmes d'Amérique latine*, 81, pp. 101-127.
- Svampa, M. y Viale, E. (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Sztulwark, S. (2005) *El estructuralismo latinoamericano*, Buenos Aires: Prometeo.
- Therborn, G. (2015). *La desigualdad mata*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tokman, V. (1987). El sector informal: quince años después. *El Trimestre Económico*, 54, 215 (3), pp. 513-536.
- Tokman, V. (2001 [1978]). Las relaciones entre los sectores formal e informal. Una exploración sobre su naturaleza. *Economía. Revista del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú*, 24 (28), pp. 17-73.
- Tokman, V. (2006). *Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social*. (Serie Financiamiento del Desarrollo N° 170). Santiago de Chile: CEPAL.
- Tomada, C. (2014). La trayectoria de una política laboral para la inclusión. *Revista de Trabajo*, 10 (12), pp. 73-80.
- Tornarolli, L. (2018). *Series comparables de indigencia y pobreza: una propuesta metodológica*. (Documento de Trabajo N° 226). La Plata: CEDLAS.
- Torrado, S. (1992). *La estructura social de la Argentina (1945-1983)*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Torrado, S. (2006 [1982]). El enfoque de las estrategias familiares de vida en América Latina. Orientaciones teórico-metodológicas. En *Familia y diferenciación social. Cuestiones de método* (pp. 11-32). Buenos Aires: EUDEBA.
- Torrado, S. (2010). Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura social. En S. Torrado (dir.), *El costo social del ajuste*, tomo I (pp. 22-61). Buenos Aires, EDHASA.
- Trujillo, L. y Villafañe, S. (2011). Dinámica distributiva y políticas públicas: dos décadas de contrastes en la argentina contemporánea. En M. Novick y S. Villafañe (comps.) *Distribución del ingreso. Enfoques y políticas públicas desde el Sur* (pp. 227-261). Buenos Aires: MTEYSS-PNUD.
- Varesi, G. A. (2011). Argentina 2002-2011. Neodesarrollismo y radicalización progresista. *Realidad Económica*, 264, pp. 33-59.

- Vekemans, R. y Venegas, R. (1966). Marginalidad y Promoción popular. *Revista Mensaje*, (166), 218-222.
- Vera, J. (2011). *Desigualdad económica en la Argentina (1992-2010). Incidencia de las persistentes heterogeneidades estructurales del régimen de acumulación*. (Tesis de Doctorado). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Vera, J. (2013). Informalidad y segmentación laboral desde la perspectiva estructuralista. Una aplicación para la Argentina (1992-2010). *Laboratorio. Revista de estudios sobre cambio estructural y desigualdad social*, 25, pp. 11-36.
- Vera, J. (2016). Movilidad ocupacional en la Argentina en un contexto de heterogeneidad estructural. *Cuadernos del CENDES*, 32 (90), 87-109.
- Verdera, F. (2007). *La pobreza en el Perú. Un análisis de sus causas y de las políticas para enfrentarla*, Lima: Fondo Editorial PUCP-IEP-CLACSO.
- Villavicencio, J. (1979). Sector informal y población marginal. En V. Tokman y E. Klein (comps.), *El subempleo en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO-CID.
- Vuskovic Bravo, P. (1993). Los diagnósticos de la pobreza. *Política y Cultura*, 3, pp. 9-22.
- Wacquant, L. (2001). *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Buenos Aires: Manantial.
- Wainer, A. (2017). ¿Fatalidad o causalidad? Límites socio-económicos al desarrollo en la Argentina reciente. *Cuadernos del CENDES*, 34 (95), pp. 39-66.
- Wainer, A. y Schorr, M. (2014a). La economía argentina en la posconvertibilidad: problemas estructurales y restricción externa. *Realidad Económica*, 286, pp. 137-154.
- Wainer, A. y Schorr, M. (2014b). Concentración y extranjerización del capital en la Argentina reciente. ¿Mayor autonomía nacional o incremento de la dependencia? *Latin American Research Review*, 49 (3), pp. 103-125.
- Wainer, A. y Schorr, M. (2015). Algunos determinantes de la restricción externa en la Argentina. *Márgenes Revista de economía política*, 1, pp. 33 – 54.
- Wainerman, C. (2007). Conyugalidad y paternidad ¿Una revolución estancada? En A. Gutiérrez (comp.), *Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política* (pp. 179-222). Buenos Aires: CLACSO.
- Weeks, J. (2001). The Expansion of Capital and Uneven Development on a World Scale. *Capital & Class*, 74, pp. 9-30.
- Weller, J. (2011). Panorama de las condiciones de trabajo en América Latina. *Nueva Sociedad*, 232, 32-49.
- Wood, G. y Gough, I. (2006). A Comparative Welfare Regime Approach to Global Social Policy. *World Development*, 34 (10), pp. 1696-1712.
- Wooldridge, J. (2014) *Introducción a la econometría*. México D.F.: Cengage Learning.
- Zack, G., Schteingart, D. y Favata, F. (noviembre, 2017). Pobreza e indigencia en Argentina (2003-2017): construcción de una serie completa y metodológicamente homogénea. *XIV Jornadas sobre Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina*. Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Anexo metodológico I

Acerca de la muestra de la EPH y sus cambios

A1.1. Cambios recientes en la muestra de la EPH

Como se mencionó en el cuerpo del libro, la implementación de cambios en el marco muestral y en las proyecciones de población de la EPH a partir del año 2013 tienen impacto sobre las estimaciones y la información resultante. A modo de rápido inventario, cabe señalar los siguientes cambios:

- a) Hasta el segundo trimestre del 2013, la muestra de la EPH estuvo conformada únicamente en base a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNVP) 2001 y las viviendas fueron extraídas del Marco de Muestreo Nacional de Viviendas (MMNV).
- b) En el tercer trimestre del 2013 comenzó la “migración” de la muestra, que pasó a seleccionarse a partir de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA) surgida del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV) 2010. Sin embargo, los factores de expansión se siguieron calculando en base a la proyección del CNPV 2001.
- c) En el cuarto trimestre del 2013 y en el primer trimestre del 2014, la encuesta tuvo una estructura de ponderación híbrida, que resulta de la mezcla de las proyecciones resultantes del CNPV 2001 y del CNPHV 2010. El propósito de esta modalidad fue “suavizar” el cambio que resulta de las proyecciones, aprovechando la modalidad continua de la EPH.
- d) A partir del segundo trimestre del 2014, la muestra surge de la MMUVRA y los factores de expansión surgen de las proyecciones del CNPHV 2010.

Como resultado del cambio en la forma de selección de la muestra y en las proyecciones de población para ajustarlas a los resultados del CNPHV 2010, se produjo un comportamiento atípico en el ritmo de crecimiento de la población de referencia de la EPH y un cambio en su composición en términos de sexo y edad. Este comportamiento se explica, principalmente, porque el crecimiento proyectado en el 2001 (con el que se calculaban los factores de expansión hasta 2013) fue menor al realmente ocurrido. Además, luego de cada Censo se lleva adelante una actualización de las “envolventes” de cada aglomerado que se vincula con

el aumento de la “mancha urbana”: ello puede introducir modificaciones en la estructura y tamaño de la población de referencia que va más allá del crecimiento vegetativo²¹⁴.

Ahora bien, en el 2016, el INDEC informó de una serie de deficiencias de la actualización muestral realizada en el 2013. Señaló problemas de cobertura (asociado a las áreas efectivamente cubiertas por el muestreo dentro de los aglomerados) y problemas específicos con las proyecciones en el aglomerado Gran Buenos Aires. A título de ejemplo, en aglomerados como Concordia quedaba fuera el 28,8% de la población, en Gran Paraná 19,9% y en Gran Mendoza 5%. Un problema mayor remite al aglomerado Partidos del Gran Buenos Aires. Además de un moderado problema de cobertura (0,1%), la población de referencia presentada en las bases usuarias es menor a la que surge del último relevamiento censal y de las proyecciones de población. Esto explica que la población en Partidos haya pasado de 10,8 millones a 11,8 millones entre el cuarto trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2016, una variación completamente atípica (de 9,1%)²¹⁵. Los diferentes cambios del marco muestral y de los factores de expansión se sintetizan en la Figura A1.1.

Figura A1.1. Cambios en la muestra, en los factores de expansión y en la calibración de los factores de expansión de la EPH.

Dimensión	Desde III T 2003 a II T 2013	III T 2013	IV T 2013 I T 2014	De II T 2014 hasta II T 2015	De III T 2015 a I T 2016	Desde II T 2016
Muestra	MMNV	MMNV / MMUVRA	MMNV / MMUVRA	MMUVRA	Sin datos	MMUVRA
Factores de expansión	Proyección 2001	Proyección 2001	Híbridos (según muestra de pertenencia de la vivienda)	Proyección 2010	Sin datos	Proyección 2010 y Ajuste a cobertura real de la MMUVRA
Calibración	Por sexo y edad	Por sexo y edad	Por sexo y edad	Por sexo y edad	Sin datos	Sin calibración por sexo y edad

Fuente: elaboración propia.

El organismo oficial no ofreció ninguna solución para los problemas que acarrear los cambios muestrales. En este sentido, las posibles correcciones quedaron a criterio de los usuarios de los microdatos. Se han ensayado diferentes propuestas de corrección (Arakaki y Pacífico, 2015; Calvi, 2017; Tornarolli, 2018; Zack, Scheingart y Favata, 2017). Estas correcciones

²¹⁴ Los cambios en la “mancha urbana” remiten a la modificación de las “envolventes”. Una envolvente es “la línea imaginaria” que delimita una localidad o conjunto de localidades, es decir, un “aglomerado” (INDEC, 2005: 4).

²¹⁵ Un tema adicional con respecto a la muestra de la EPH es que hasta el 2015 se recalibraban los factores de expansión por sexo y edad –un procedimiento habitual que procura reducir las fluctuaciones de muestreo en encuestas de hogares– mientras, con posterioridad, se dejó de aplicar este tipo de procedimiento. Al igual que el reajuste de la población de referencia, ello también contribuyó a alterar la composición de la muestra en términos sociodemográficos.

suelen basarse en la estimación de tasas de crecimiento poblacional entre un período inicial (habitualmente, el cuarto trimestre del 2006, último para el cual el INDEC ofreció información confiable) y un período final, que coincide con el reinicio de las publicaciones del 2016. En términos generales, estas correcciones se proponen generar series consistentes de algún indicador agregado (tasa de pobreza, de indigencia, de actividad, empleo o desempleo, etc.) y evitar fluctuaciones atribuibles únicamente al muestreo.

Cabe señalar que este tipo de correcciones no están exentas de sus propios inconvenientes. En efecto, (a) se asume un comportamiento lineal de la población, lo cual no es correcto, ya que las proyecciones demográficas siguen otra trayectoria; (b) cuando se desea trabajar con los hogares como unidad de análisis (como en la presente investigación), se quiebra la relación entre el factor de expansión del hogar y el del individuo, ya que en la EPH, ambos factores son iguales.

Estas restricciones originan nuevos inconvenientes cuando interesa trabajar a nivel de microdatos y no en la generación de series agregadas. Por ello, en esta investigación no implementamos una corrección de los factores de expansión. Sin embargo, sí se llevó a cabo un ejercicio de corrección para evaluar eventuales diferencias en algunos indicadores expuestos.

A1.2. Ejercicio de ajuste de los factores de expansión

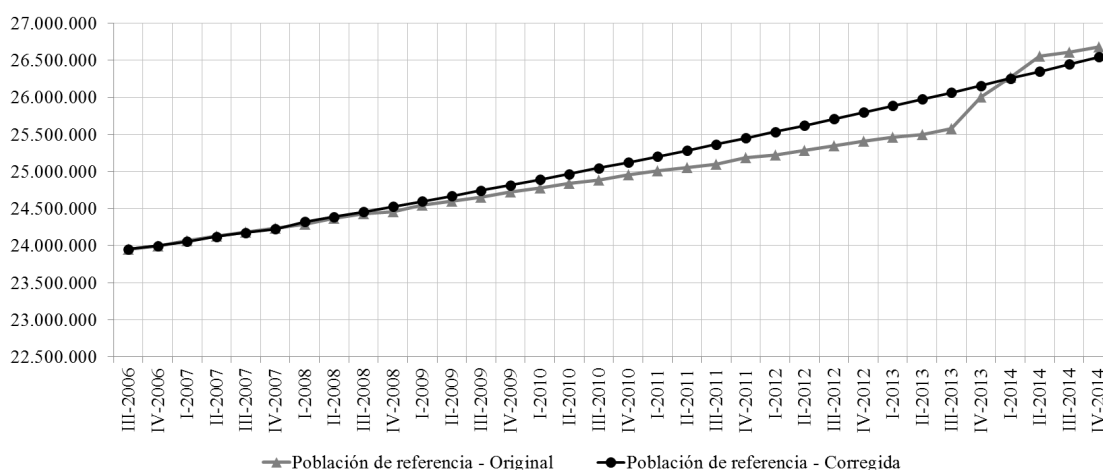
Para llevar adelante este ejercicio de ajuste de los factores de expansión, se procedió del siguiente modo:

- a) A partir de las bases usuarias del cuarto trimestre del 2006 y del segundo trimestre del 2016, se generaron grupos de edad (quinquenios) y sexo para cada uno de los aglomerados relevados.
- b) Utilizando tales períodos como pivotes, se estimó la tasa diaria de crecimiento implícita al punto medio de cada trimestre. Tal tasa es específica para cada grupo de edad y sexo según aglomerado.
- c) A partir de (b) se reconstruyó un nuevo tamaño poblacional para cada trimestre que converge con el correspondiente al segundo trimestre del 2016 informado por el INDEC. La diferencia entre el tamaño así reestimado y el tamaño poblacional de las bases de microdatos originales es el factor de corrección que se aplica a los factores de expansión de las bases originales.

Como se señaló, la corrección realizada sólo es útil para las bases de personas, ya que se quiebra la estructura de los factores de expansión de la EPH (en la que cada individuo tiene el mismo factor que otros miembros de su hogar).

En el Gráfico A1.1 se presenta la evolución de la población de referencia entre el tercer trimestre del 2003 y el cuarto trimestre del 2014 tanto con los factores de expansión originales como con los corregidos.

Gráfico A1.1. Población de referencia según microdatos y según corrección. Argentina, total de aglomerados urbanos, 2006-2014 (en números absolutos).



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC.

Anexo metodológico II

Los ingresos monetarios y su captación a través de la EPH

A2.1. Acerca de las posibilidades de triangulación de datos

En la Argentina, la EPH constituye la única fuente de cobertura nacional y realización periódica capaz para conocer el nivel y la composición de los ingresos familiares. A diferencia de lo que ocurre con datos provenientes de registros administrativos, que sólo capturan a la parte “registrada” de la economía, la EPH permite aproximarse a la situación socioeconómica del conjunto de la población que reside en las áreas urbanas relevadas, a la vez que ofrece la posibilidad de estudiar los determinantes y las pautas que subyacen a los comportamientos observados.

Ahora bien, dada la importancia que revisten estas variables para nuestros propósitos, consideramos adecuado triangular la información de ingresos presentada con la que surge de registros administrativos. Este Anexo tiene como propósito diagnóstica la validez de la información proporcionada por la EPH y señalar las eventuales limitaciones encontradas. La fuente de información que habilita esta triangulación es el registro administrativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, ex Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones – SIJP)²¹⁶.

Los estudios para los años noventa que compararon los ingresos reportados a la EPH con los provenientes del SIJP demostraron una muy reducida diferencia entre ambas fuentes (Roca y Pena, 2001)²¹⁷. Sin embargo, algunos estudios más recientes han encontrado una brecha creciente entre la EPH y la información proveniente de registros administrativos del SIPA (Sánchez, Pacífico y Kennedy, 2016: 38). Este comportamiento es problemático no sólo en términos de validez (no se mide adecuadamente aquello que se quiere medir) sino también de confiabilidad (la captación se altera en diferentes momentos del tiempo).

En esta tarea, enfrentamos dos problemas. En primer término, el limitado soporte común de las fuentes disponibles. Mientras que la EPH cubre al conjunto de la población urbana de algunos aglomerados, el SIPA abarca a los trabajadores asalariados registrados a la seguridad

²¹⁶ Este tipo de estrategia tiene antecedentes en la literatura. En general, se compara con registros administrativos o con datos que surgen de Cuentas Nacionales (Gómez Sabaíni y Rossignolo, 2014).

²¹⁷ Excluimos de estos antecedentes a quienes realizaron comparaciones con Cuentas Nacionales (Camelo, 1998; Llach y Montoya, 1999). Como señalan Roca y Pena (2001), este tipo de comparaciones requiere ajustes relativamente arbitrarios que llevan a modificaciones muy relevantes.

social. Incluso no cubre a todos los trabajadores del sector público. En segundo término, las variables de ingresos relevadas por ambas fuentes son diferentes y requieren una conversión para poder compararse, lo cual afecta en sí mismo el intento de triangulación que busca realizarse.

Por otro lado, en tanto que una parte de la brecha observada puede ser atribuida a problemas internos del relevamiento cambiantes en el tiempo, otra parte puede deberse a modificaciones en la realidad. Entre estos últimos, se destaca el retraso en la actualización del tope mínimo no imponible para el pago del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría (rentas por trabajo de personas físicas). La incidencia de este tributo comenzó a representar una reducción en los hechos de los ingresos salariales de los trabajadores registrados que son visibles en la EPH (porque captura ingresos “de bolsillo”) pero no en el SIPA (que incluye en los valores reportados el monto retenido por los empleadores en concepto de este tributo).

A2.2. Evolución de ingresos de asalariados registrados del sector privado según la EPH y fuentes administrativas

Los datos del SIPA se encuentran disponibles a través de dos organismos. Por una parte, el Ministerio de Economía de la Nación ofrece una serie trimestral y anual a través de procesamientos realizados por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DN CN) para el período 2004-2016. Por otra parte, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ofrece esta información para una serie que se inicia en el año 1995 y continúa hasta 2016 (con periodicidad mensual).

Las variables ofrecidas por estos organismos se detallan a continuación:

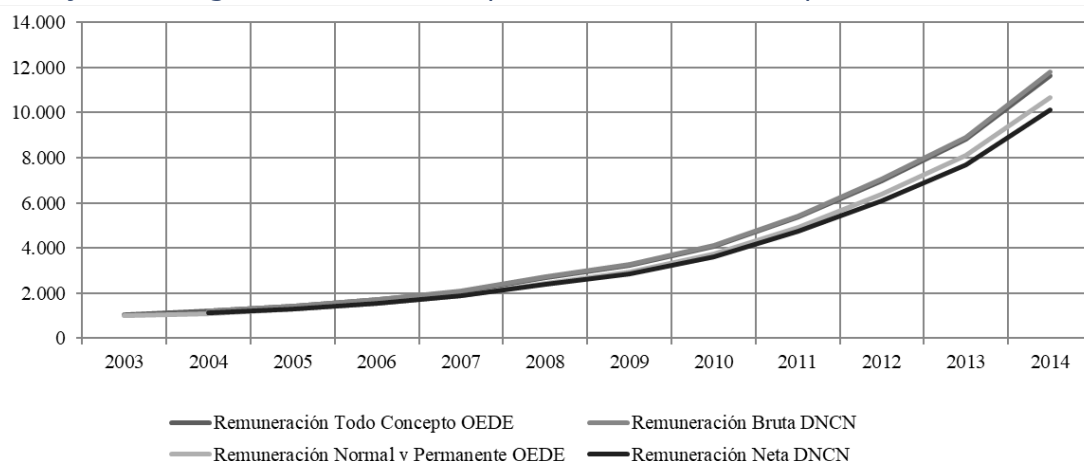
- a. La “remuneración por todo concepto (RTC)”: ofrecida por OEDE. Es la remuneración bruta (es decir, previa a las deducciones por cargas sociales) declarada por la empresa para cada mes. Incluye adicionales de periodicidad no mensual, horas extraordinarias, viáticos, sueldo anual complementario (SAC o aguinaldo) y bonificación por vacaciones. Excluye indemnizaciones.
- b. La “remuneración normal y permanente (RNP)”: ofrecida por OEDE. Es la remuneración bruta (es decir, previa a las deducciones por cargas sociales) declarada por la empresa para cada mes. A diferencia de la anterior, no refleja la influencia del aguinaldo ni de adicionales con periodicidad no mensual (bonificación por vacaciones, premios, becas), ni de las indemnizaciones.

- c. La “remuneración total (RT)”: ofrecida por la DNCN. Es la remuneración bruta declarada por el empleador correspondiente a un puesto de trabajo por todo concepto. Incluye la remuneración imponible (sueldo, SAC, honorarios, comisiones, participaciones en las ganancias, propinas, gratificaciones y suplementos, adicionales con carácter habitual, viáticos y gastos de representación y toda otra retribución percibida por servicios ordinarios y extraordinarios) las cifras no remunerativas y toda aquella remuneración por encima del tope máximo imponible. Excluye las asignaciones familiares.
- d. La “remuneración neta (RN)”: ofrecida por la DNCN. La remuneración neta se obtiene de restar a la remuneración total los aportes personales y se le suman las asignaciones familiares.

En el Gráfico A2.1 se examina la evolución de las cuatro variables de registro disponibles, las dos ofrecidas por el OEDE y las dos de la DNCN. La remuneración por todo concepto de OEDE y la remuneración bruta de la DNCN coinciden a lo largo del período; en tanto la remuneración neta y la remuneración normal y permanente tienden a mostrar una mayor divergencia.

Si queremos comparar la evolución de los ingresos captados por la EPH con la información presentada en el Gráfico A2.1 debemos hacer una serie de transformaciones y tomar decisiones metodológicas. Como destacan Roca y Pena (2001: 3), “lo que metodológicamente y conceptualmente corresponde es indagar sobre la calidad de la declaración de ingresos de conjuntos o subconjuntos de perceptores definidos homogéneamente en las fuentes a comparar”. Por una parte, debemos limitarnos al soporte compartido por ambas fuentes, en este caso, los trabajadores registrados a la seguridad social del sector privado de la economía. Por otra parte, debemos tratar de homogeneizar lo más posible las variables que se pretenden comparar.

Gráfico A2.1. Variables de ingreso seleccionadas según registros administrativos. Trabajadores registrados del sector privado, 2003-2014 (en pesos corrientes).



Fuente: elaboración propia a partir de OEDE-MTEYSS e INDEC-MECON-DNCN.

Con este propósito, comparamos la “remuneración neta” de la DNCN (RN-DNCN) con los datos que surgen de la EPH. Para ello, llevamos adelante la transformación y “adaptación” que se presenta en la Figura A2.1. De esta forma, llegamos a comparar la RN-DNCN con la “remuneración neta” de la EPH (RN-EPH).

Figura A2.1. Homogeneización de variables de ingreso provenientes de la EPH y de registros administrativos.

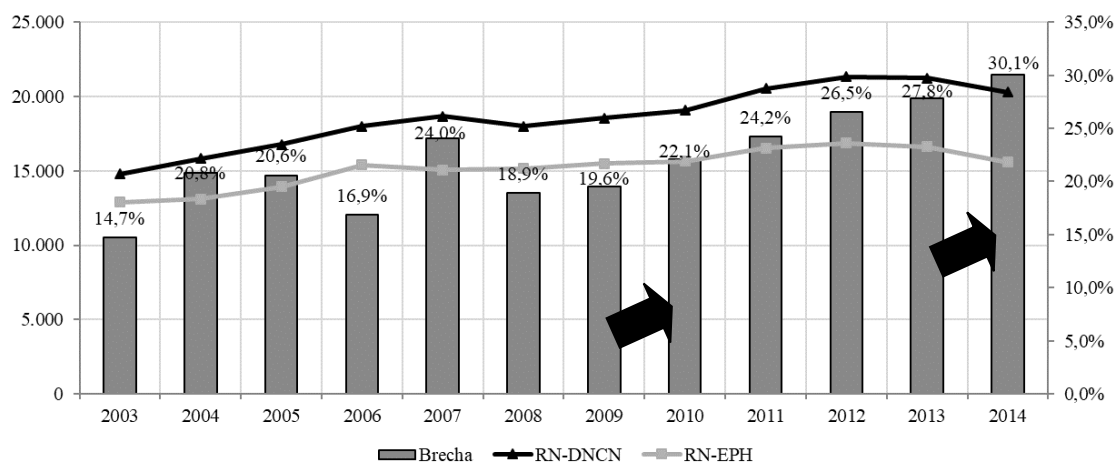
Remuneración neta DNCN	Remuneración “neta” EPH
Incluye: sueldo, aguinaldo, honorarios, comisiones, participaciones en las ganancias, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales con carácter habitual, viáticos y gastos de representación y retribuciones ordinarias y extraordinarias (incluye pagos no remunerativos).	Incluye: monto por sueldos y jornales, asignaciones familiares, horas extras, otras bonificaciones, comisiones, propinas y tickets (p21).
Se suman las asignaciones familiares.	Se incorpora: monto por aguinaldo, otras bonificaciones no habituales, montos por retroactivos.
Excluye: indemnizaciones.	Excluye: indemnizaciones.

Fuente: elaboración propia.

La evolución de estas variables se presenta en el Gráfico A2.2, para el período en el cual ambas fuentes son comparables (“períodos homogeneizados”) y deflactadas para considerar su evolución en términos reales²¹⁸.

²¹⁸ Los ingresos fueron deflactados a partir del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, hasta diciembre de 2006 y a partir de entonces con el IPC-GB, o IPC Buenos Aires City, elaborado por ex técnicos del INDEC. Esto se explica en el Anexo IV.

Gráfico A2.2. Evolución de la RN-DNCN^(a), de la RN-EPH y de la brecha. Asalariados registrados del sector privado, 2003-2014^{(b), (c)}
(en pesos de diciembre de 2016).



Notas: (a) Como la información de DNCN se encuentra disponible a partir del 2004, el dato del 2003 se obtuvo aplicando la tasa de variación de la remuneración normal y permanente de OEDE entre el 2003 y el 2004 (que varía de manera muy similar a la RN de DNCN) al valor observado en el 2004 / (b) Excluye trabajadores del servicio doméstico en hogares particulares / (c) Períodos “homogeneizados”: en el 2003, excluye primer y segundo trimestres; en el 2007, excluye el tercer trimestre.

Fuente: elaboración propia en base a DNCN-INDEC y EPH-INDEC.

Existe una brecha entre la RN-DNCN y la RN-EPH que se mantuvo en torno al 20% entre el 2004 y el 2009 (con la excepción del 2006 y el 2007), comenzó a incrementarse a partir del 2010 y, de forma aún más pronunciada, a partir del 2012. Debemos enfatizar que no cabría esperar un completo ajuste entre estas variables. Ello se debe a que la RN-DNCN es generada a partir de la remuneración bruta, por lo que se descuentan los aportes y contribuciones, pero en el sueldo hay una “porción” que, en realidad, no es percibida “de bolsillo” por el trabajador (tal como lo declararía a la EPH) sino que es retenida por el empleador en concepto de pago de impuesto a las ganancias cuarta categoría.

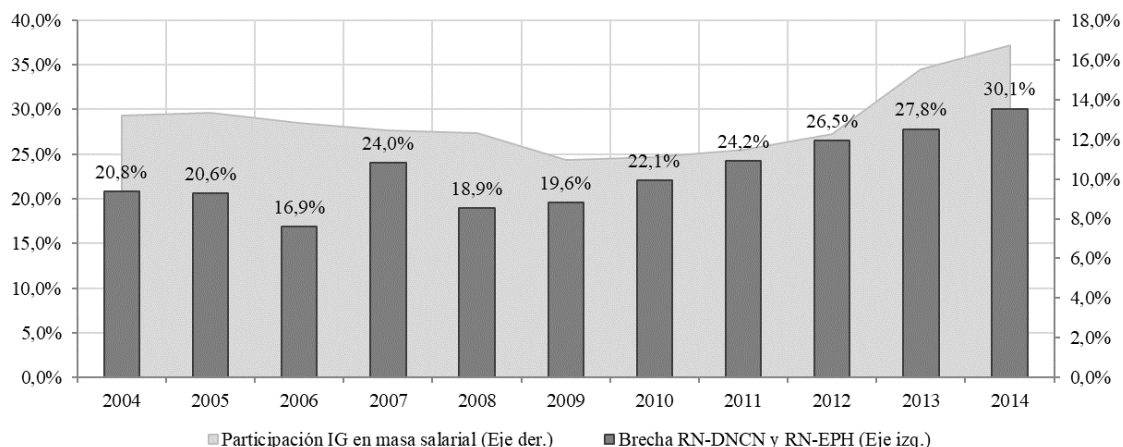
Así, en el análisis de la brecha entre la RN-EPH y la RN-DNCN tenemos dos efectos: (a) un efecto de subdeclaración a la EPH (que puede ser estático o variable en el tiempo); (b) un efecto “de realidad”, que está dado por el cambio en el peso que el impuesto a las ganancias tuvo, especialmente a partir del 2012, cuando se hizo más crítico el atraso en las escalas y en los topes mínimos para tributar.

Precisamente, el Gráfico A2.3 intenta evaluar este segundo efecto, comparando el monto recaudado por el tributo y la masa salarial bruta estimada a partir de datos de OEDE²¹⁹. Se

²¹⁹ Este análisis tiene un mero efecto comparativo, en tanto permite poner en relación la recaudación del impuesto con un parámetro, en este caso, la masa salarial. Sin embargo, la masa de impuesto a las ganancias no

estima que, si el impuesto se lleva una mayor proporción de la masa salarial, hay fundamentos para considerar que se lleva una porción mayor del salario. Al mismo tiempo, si este mayor peso comenzara al mismo tiempo que se amplía la brecha entre la RN-DNCN y la RN-EPH, podría imputarse tal diferencia al efecto impositivo.

**Gráfico A2.3. Brecha entre RN-DNCN y RN-EPH^(a), y participación del impuesto a las ganancias en la masa salarial^(b).
Asalariados registrados del sector privado, 2003-2014^(c)
(en porcentajes).**



Notas: (a) excluye trabajadores del servicio doméstico en hogares particulares / (b) Se obtuvo a partir del concepto “retención” en la recaudación de impuesto a las ganancias (AFIP), y la masa salarial surge de OEDE (remuneración por todo concepto por el número de puestos de trabajo) / (c) Períodos “homogeneizados”: en el 2003, excluye primer y segundo trimestres; en el 2007, excluye el tercer trimestre.

Fuente: elaboración propia en base a AFIP, DNCN-INDEC y EPH-INDEC.

Como se observa en el Gráfico A2.3, hay una mayor presión tributaria en los años 2012-2014 que coincide con la ampliación de la brecha entre RN-DNCN y RN-EPH. No obstante, debemos notar cierta asincronía, pues la brecha comienza a ampliarse entre el 2009 y el 2010.

En síntesis, en la evolución de las variables observadas se “mezclan” dos efectos: por una parte, un efecto de subcaptación por parte de la EPH de la remuneración neta y, por otra parte, un efecto de mayor presión tributaria que, efectivamente, “saca” a los ocupados una mayor porción de su ingreso, ampliándose la brecha entre la remuneración pagada por los empleadores y la efectivamente recibida por los trabajadores. Esta combinación de efectos no

es abonada exclusivamente por trabajadores registrados del sector privado; también habría que computar la contribución de los asalariados del sector público y otras categorías ocupacionales. Para estimar el efecto del impuesto, obtuvimos la recaudación en concepto de impuesto a las ganancias por retención, a partir de los Anuarios Estadísticos de la AFIP, que en general coincide con retenciones de la parte pagadora (Gómez Sabañi y Rossignolo, 2014; Sánchez, Pacífico y Kennedy, 2016). Esta medida es un proxy del total retenido a los trabajadores en concepto de impuesto a las ganancias.

resulta directamente solucionable sin caer en arbitrariedades. En la siguiente sección se propone una alternativa de corrección con el fin de evaluar estos efectos.

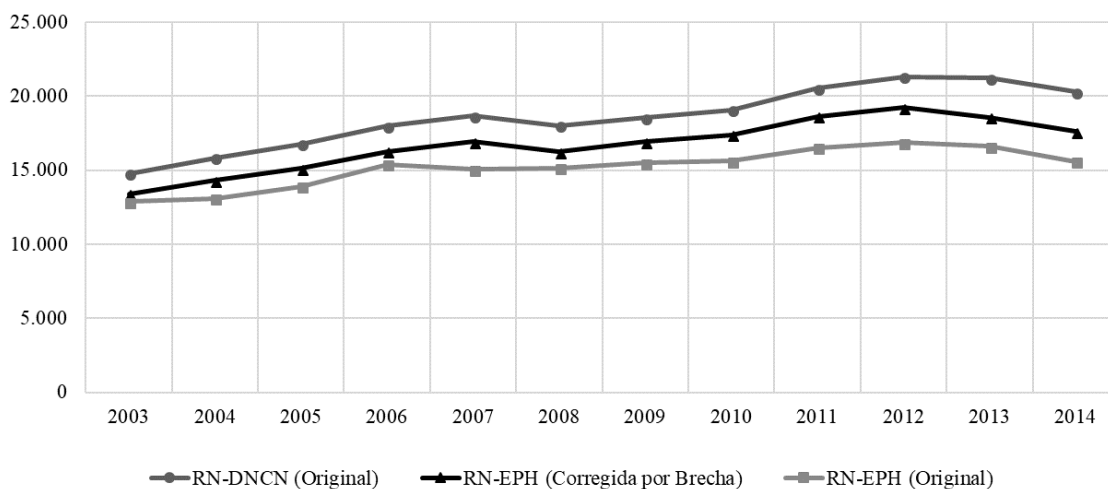
A2.3. Ejercicio de ajuste a los datos de registro administrativo

Aquí detallamos una propuesta de corrección posible para solucionar la brecha identificada. Para ello, es necesario obtener un coeficiente de corrección que se construyó a partir de la siguiente secuencia:

1. Se obtuvo la brecha entre la RN-DNCN y la RN-EPH, construidas según se indicó en la sección anterior (Gráfico A2.2).
2. La masa de impuesto a las ganancias (obtenida como se indicó previamente) fue repartida entre los asalariados registrados. El número de puestos de trabajo (nótese que no es igual al número de asalariados) fue obtenido en base a los datos anuales de OEDE. De allí se obtuvo un promedio pagado mensualmente por cada trabajador en concepto de impuesto a las ganancias.
3. Se restó ese monto obtenido en el paso (b) a la RN-DNCN. Este procedimiento busca aproximar la información de registro administrativo al ingreso de “bolsillo” que habría sido declarado en la EPH.
4. Se recalculó la brecha entre la RN-DNCN (ahora corregida al restar el monto promedio de impuesto) y la RN-EPH. Dicha brecha constituye el coeficiente de ajuste para corregir los ingresos de la EPH.

Los resultados de este ejercicio se exhiben en el Gráfico A2.4. Debemos notar que el ejercicio no es exacto y presenta importantes limitaciones. La más evidente es que el impuesto a las ganancias constituye un tributo a los altos ingresos y se está asignando un promedio de retención a todos los trabajadores como si efectivamente todos estuvieran alcanzados. Por añadidura, como pagan un monto mayor quienes más ganan, y por truncamiento muestral sabemos que son éstos quienes tienen menores probabilidades de estar en la muestra, estamos tratando a la muestra como si ésta representara a todos los que pagan el impuesto. En su conjunto, estos elementos hacen que sólo pueda tratarse a esta estimación como una aproximación.

Gráfico A2.4. RN-DNCN original^(a), RN-EPH original^(b) y RN-EPH corregida por brecha al registro administrativo^(c). Asalariados registrados del sector privado, 2003-2014^(d) (en pesos de diciembre de 2016).



Notas: (a) Es la RN-DNCN original / (b) Es la RN-EPH original / (c) Es la RN-EPH original a la que se multiplica por un factor de corrección. Dicho factor de corrección resulta de la siguiente expresión: Factor de corrección = (Promedio de RN-DNCN - Promedio de Pago por Impuesto a las Ganancias) / RN-EPH. Dicho factor es más “bajo” que la estricta comparación entre RN-EPH original y la RN-DNCN original porque le quita a ésta el efecto de retención de impuesto a las ganancias. (d) Períodos “homogeneizados”: en el 2003, excluye primer y segundo trimestres; en el 2007, excluye el tercer trimestre.

Fuente: elaboración propia en base a DNCN-INDEC, AFIP y EPH-INDEC.

Dada la ausencia de información confiable y válida para los trabajadores del sector público, una opción posible y razonable sería aplicar el mismo tipo de corrección a estos trabajadores. Uno de los problemas que se producen en estos casos es que los trabajadores independientes y los patrones quedan rezagados en la corrección debido a que no hay un parámetro externo que posibilite triangular con esta fuente.

A2.4. Acerca de los sesgos que introduciría un ajuste a un factor externo y de los recaudos a considerar

El ajuste de los microdatos a una fuente de datos externa no está exento de inconvenientes que introducen sesgos en las inferencias realizadas. El primero de ellos es de orden general: se corrige exclusivamente el ingreso de la población para la cual se dispone de un parámetro externo, es decir, los asalariados registrados del sector privado. El resultado es una alteración significativa de la estructura de ingresos de la EPH. Si sólo se trabajara con asalariados, este sesgo sería de menor relevancia, pero al trabajar con el conjunto de la población de referencia, se introduce un sesgo en la estructura observada. Podría argumentarse que es posible proceder a un ajuste del ingreso de patrones y trabajadores por cuenta propia en base a la Cuenta Ingreso de Cuentas Nacionales. Pero ello supondría que los empleadores captados por la EPH son efectivamente los que capturan la porción del ingreso que corresponde al capital en la

distribución factorial. No hay elementos que justifiquen esta pretensión. El segundo inconveniente es de orden coyuntural: hemos mostrado que parte de la subcaptación se deriva de una mayor presión tributaria en los últimos años de la posconvertibilidad. Si bien puede hacerse una corrección agregada de los efectos del impuesto a las ganancias, no se dispone de datos que permitan estimar su efecto en la estructura del ingreso; por ello, se proratea el ingreso en la masa salarial total. Ello no es relevante cuando lo que interesa es el promedio de la distribución o la masa salarial total. Pero cuando nos interesan las diferencias entre grupos, este aspecto cobra relevancia.

En función de estos criterios, la decisión aquí adoptada fue trabajar con los ingresos derivados de los microdatos. El fundamento de nuestra decisión radica en el interés por examinar diferencias entre grupos ocupacionales. En este sentido, debemos realizar una advertencia: las diferencias observadas a favor de los asalariados registrados en esta investigación, en todos los casos, deberían ser consideradas una estimación de mínima.

Anexo metodológico III

Identificación de ingresos provenientes de Políticas Sociales en la EPH

A3.1. Presentación

Como indicamos en el capítulo III, la EPH presenta algunas limitaciones para identificar adecuadamente a las políticas sociales que involucran transferencias de ingresos. El propósito de este Anexo es presentar con detalle los procedimientos implicados en la identificación y en la estimación de tales fuentes. La Figura A3.1 exhibe las distintas intervenciones sociales que son objeto de análisis y sus modos de captación.

Figura A3.1. Intervenciones sociales del Estado, nombre de la política y posibilidades de captación.

Tipo de intervención social	Nombre de la política	Tipo de identificación
Programas de empleo	Plan Jefas y Jefes de Hogar, otros programas de empleo (Argentina Trabaja, Ellas Hacen)	Directa (pp07e)
Seguro de desempleo	Seguro de desempleo	Directa (v4_m)
Sistema previsional ⁽¹⁾	Jubilaciones / pensiones (contributivas y no contributivas)	Directa (v2_m)
Asignaciones familiares	Sistema de asignaciones familiares	Estimación
Programas de asistencia social directa y otros programas	Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo	Indirecta (a partir de v5_m)
	Programa Familias para la Inclusión Social, PROGRESAR, otras transferencias de nivel subnacional no identificables	Indirecta (a partir de v5_m)

Notas: (1) No es posible diferenciar las pensiones no contributivas del resto de los ingresos provenientes por este concepto.

Fuente: Elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

A3.2. Ingresos por programas de empleo

La EPH tiene una pregunta que identifica si la ocupación principal es un programa de empleo (pp07e). Adicionalmente, para el caso del PJJHD, tuvo tres preguntas que permitían identificar si un respondente cobraba dicho programa. Tales preguntas se mantuvieron hasta el 2010 (pj1_1, pj2_1 y pj3_1).

Dados los propósitos de esta investigación, estos montos de ingreso se computaron como ingresos provenientes de políticas sociales, excluyéndolos, por tanto, de los ingresos laborales en caso de que el beneficiario declarara ser ocupado. Cuando el beneficiario era desocupado o inactivo y declaraba cobrar el PJJHD, se asignó el monto declarado en v5_m como monto del programa.

A3.3. Ingresos por seguro de desempleo

Al igual que en el caso de los programas de empleo, es posible reconocer de manera directa en los microdatos de la EPH los ingresos por el “seguro de desempleo” de base contributiva. Existe una pregunta en el módulo de ingresos (v4_m) que interroga por el monto percibido en el mes de referencia por tal concepto.

A3.4. Ingresos del sistema previsional

La EPH tiene una pregunta que interroga de manera directa por la percepción de ingresos provenientes de jubilaciones y pensiones (v2_m). No obstante, tal identificación presenta algunas restricciones. En primer lugar, no es posible diferenciar entre quienes perciben ingresos por pensiones contributivas y quienes reciben pensiones no contributivas. Ello constituye un elemento relevante en tanto que, como vimos en el capítulo I, tales pensiones tuvieron una singular expansión durante el período. En segundo lugar, no es posible diferenciar entre quienes pudieron jubilarse a partir de la “moratoria” previsional y quienes lo hicieron sin acceder a tal programa, lo cual limita las inferencias posibles acerca del impacto de la política implementada.

A3.5. Ingresos por el sistema de Asignaciones Familiares (AAFF)

Las Asignaciones Familiares contributivas (AAFF) no pueden diferenciarse en los microdatos de la EPH. Su estimación requirió resolver dos cuestiones simultáneas: la identificación de aquellos que tienen derecho a percibir este tipo de fuente y la determinación del monto del beneficio que corresponde según su nivel de ingresos. Para ello, llevamos adelante las siguientes tareas:

- a) Se circunscribió el universo de los posibles beneficiarios a los asalariados registrados (excepto servicio doméstico) que vivían en hogares en los que había menores dependientes a cargo (de 0 a 17 años);
- b) Se reconstruyeron los topes salariales y las escalas vigentes al momento de realizarse el relevamiento. Dada la imposibilidad de identificar en la EPH el nivel jurisdiccional de los trabajadores del sector público y de reconstruir topes y escalas que varían localmente, ello implicó tratarlos como si fueran ocupados del sector privado. Esto introduce un sesgo medición, pero resultó inevitable.
- c) Dado que la EPH mide el ingreso salarial de “bolsillo” (pp08d1) calculamos el salario bruto. Se estimó si los asalariados en relación de dependencia eran posibles

perceptores de AAFP de acuerdo con los topes vigentes. En aquellos hogares en los cuales había más de un posible beneficiario, se tomó en cuenta sólo a uno de ellos. Esto puede introducir un sesgo en la medición, pero lo asumimos por no poder subsanarse. En hogares ensamblados o extensos, uno de los miembros puede cobrar AAFP por hijos/as que, o bien no viven en el hogar, o bien viven, pero no son hermanos de otros menores en el hogar. Esta dificultad es la más severa, y procede de la imposibilidad de identificar adecuadamente núcleos secundarios al interior del hogar a partir de la EPH. A los beneficiarios identificados se les asoció el monto de la prestación según su nivel de ingresos y el número de menores dependientes que hubiera en el hogar.

- d) De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) de 2015, alrededor de 8,6% de los asalariados que están en condiciones de cobrar AAFP no lo hacen por no disponer de los papeles necesarios, por no haber realizado el trámite o por otros motivos. Se procedió a identificar a estos casos en la base de datos de la ENAPROSS y se generó una base apareada con los casos de la EPH. Se trató a estos últimos como si tuvieran valor perdido y se estimó por un método multivariado de imputación la probabilidad de que no cobraran, aunque pudieran hacerlo. A partir de la probabilidad pronosticada se seleccionó a los casos que, pudiendo acceder al salario familiar, no lo hacen.
- e) A partir de información de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Ministerio de Trabajo, así como de un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA, 2012), se determinó el número de beneficiarios del sistema de Asignaciones Familiares para el período 2005-2014 (datos disponibles). Las cifras no resultaron siempre compatibles entre sí. El número de titulares se tomó como criterio externo para la triangulación con lo que arrojaba la estimación en base a la Encuesta Permanente de Hogares.
- f) Identificados los casos beneficiarios del sistema de AAFP, procedimos a incorporar el monto del beneficio al ingreso del hogar. Las únicas dos investigaciones que, según nuestro conocimiento, han llevado adelante un análisis de estas características (Bertranou, 2010; Rofman y Oliveri, 2012), suman el monto de AAFP al declarado en la EPH. Dado estos antecedentes, en esta investigación procedimos de tal manera.

A3.6. Ingresos por políticas sociales y por programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social

Los ingresos por política social que reciben los hogares se capturan en la EPH a partir de la pregunta v5_m, que interroga por el “Monto por subsidio o ayuda social (en dinero) percibido en ese mes”. Dada la diversidad de programas de transferencias de ingresos que no pueden ser identificados de manera directa, debimos considerarlos de manera conjunta, sin posibilidad de diferenciación (como se explicó en el cuerpo del texto y, en especial, en el capítulo III).

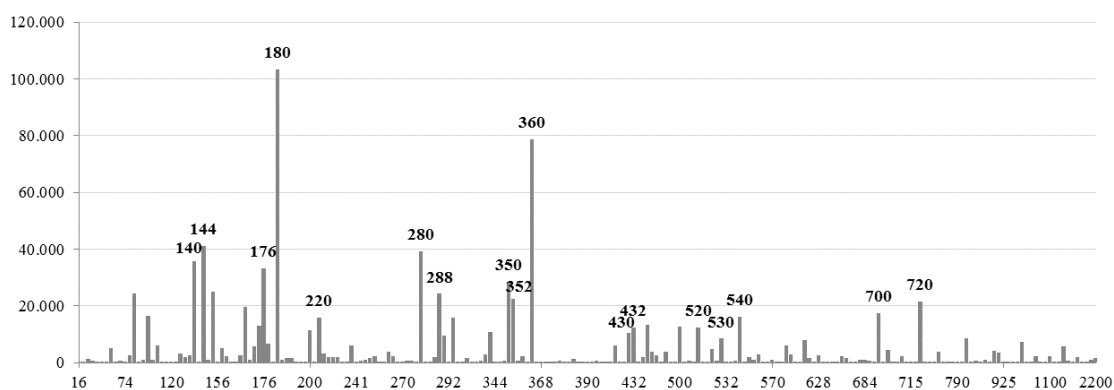
Sin embargo, por la magnitud que reviste, consideramos relevante identificar a los beneficiarios y los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para ello, debimos tomar una serie de decisiones metodológicas.

- a) Circunscribimos el universo de potenciales beneficiarios a aquellos que declaraban un monto en la variable v5_m y que vivían en hogares en los que hubiera niños y adolescentes menores de 18 años²²⁰. Los titulares del beneficio no podían ser trabajadores registrados, excepto que pertenecieran al servicio doméstico (excluidos del sistema de Asignaciones Familiares e incluidos en el sistema de AUH a partir de la Ley 26.844/13) o que fueran trabajadores temporarios (empleos con tiempo de finalización).
- b) Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% del valor de la Asignación, abonándose el restante 20% a fin de año, cuando demuestran haber cumplido con las condicionalidades que impone el programa. Esto implica que los beneficiarios del programa pueden declarar tanto el monto correspondiente al 80% como al 100% del beneficio según fecha de liquidación del 20% retenido.
- c) Dadas las fechas en las que se actualizan los montos de la Asignación, decidimos tomar en cuenta tanto el valor vigente al momento del relevamiento como el valor del período inmediatamente anterior. Esta decisión tuvo que ver con un factor de orden empírico, en tanto se observó que en los diferentes años, en la pregunta v5_m una porción importante de los respondentes señalaba montos del año inmediatamente anterior (Gráficos A3.1 y A3.2);

²²⁰ Si bien puede ocurrir que haya un beneficiario que cobre por un menor que no resida en el hogar, la imposibilidad de definir núcleos secundarios en los hogares, así como la necesidad de usar una medida indirecta por falta de una pregunta específica sobre este beneficio, sugirieron que este sesgo era un problema menor frente a la sobre captación de beneficiarios.

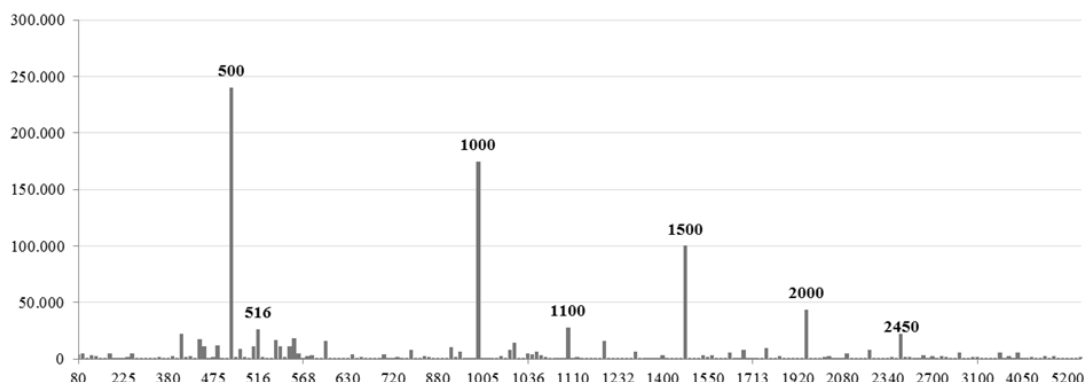
- d) Se introdujo un factor de “redondeo”, asumiendo que los beneficiarios no declaran el monto exacto percibido sino una aproximación. Lamentablemente, este factor no es estático en el tiempo, sino que, como consecuencia de la aceleración de la inflación, se habría vuelto más intenso a lo largo del tiempo. Esta es la principal diferencia con los trabajos de Bustos y Villafañe (2011) y Maurizio y Vázquez (2015) quienes, si bien aplican una metodología similar a la aquí presentada, pueden ser más restrictivos con los montos que definen como indicativos por cuanto se limitan al análisis del año 2010 –donde la inflación fue menor y el efecto “redondeo”, cabe presumir, menor en términos nominales–. Esto puede apreciarse al comparar el Gráfico A3.1, que remite a 2010, con el Gráfico A3.2, correspondiente al año 2014.
- e) Con base en lo anterior, definimos una tabla con los valores del beneficio, y un límite inferior y superior máximo de lo que se consideraba adecuado como correspondiente a la percepción de la Asignación Universal por Hijo (Figura A3.2). Estos márgenes surgieron tanto de los valores aproximados por redondeo –tal como se explicó– como del propio análisis de los histogramas de los montos declarados y los puntos de corte de los datos.

Gráfico A3.1. Montos declarados en la variable v5_m – “Monto por subsidio o ayuda social (en dinero) percibido en ese mes”. Total de aglomerados, cuarto trimestre de 2010 (*en pesos corrientes*).



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC.

Gráfico A3.2. Montos declarados en la variable v5_m – “Monto por subsidio o ayuda social (en dinero) percibido en ese mes”. Total de aglomerados, cuarto trimestre de 2014 (en pesos corrientes).



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC.

Figura A3.2. Montos del beneficio de la AUH, proporción a cobrar y márgenes superiores e inferiores para su identificación.

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
Margen inf.	124	160	156	200	196	250	240	300	348	400	495	600
Beneficio	144	180	176	220	216	270	272	340	368	460	515	644
Margen sup.	164	200	196	240	236	300	292	360	388	480	535	700

Nota: para cada uno de los años, se procedió a identificar los valores que correspondían también al año inmediatamente anterior.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC.

El resto de los programas de asistencia social directa y otras intervenciones equivalentes no pudieron ser adecuadamente diferenciados, debido a la imposibilidad de capturarlos exclusivamente a partir del ingreso declarado. Por consiguiente, fueron tratados de manera agregada.

Anexo metodológico IV

Deflación de ingresos y Canastas utilizadas

En este Anexo se describen los procedimientos utilizados para deflactar los ingresos corrientes percibidos por los hogares y las decisiones involucradas en la determinación de una “Canasta de bienes y servicios” que se empleó para evaluar las capacidades de subsistencia.

A4.1. Deflación de ingresos monetarios

La cuestión del cambio de los ingresos monetarios de los hogares entre dos momentos supone necesariamente la utilización de algún índice de precios que permita deflactar los mismos para volverlos comparables. Uno de los problemas registrados durante el período que abarca esta investigación se refiere a la conocida manipulación que sufrió el Índice de Precios al Consumidor a partir del año 2007 (Lindenboim, 2015). Desde entonces, la posibilidad de deflactar y, por ende, trabajar con los ingresos monetarios reales supuso apelar a algún índice alternativo al oficial.

En el período bajo estudio existen dos índices ampliamente utilizados por los investigadores con este propósito²²¹. En primer lugar, el denominado “IPC Buenos Aires City” o IPC-GB, fue elaborado por los ex técnicos del INDEC desplazados del área que tenía a su cargo la medición de la evolución de los precios. Este índice continuó con la metodología elaborada previamente. En segundo lugar, un índice construido a partir de la variación de precios informada por diferentes Direcciones Provinciales de Estadística fue lanzado inicialmente por CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino) y continuado luego por CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina). Este índice es conocido como IPC-9 Provincias²²².

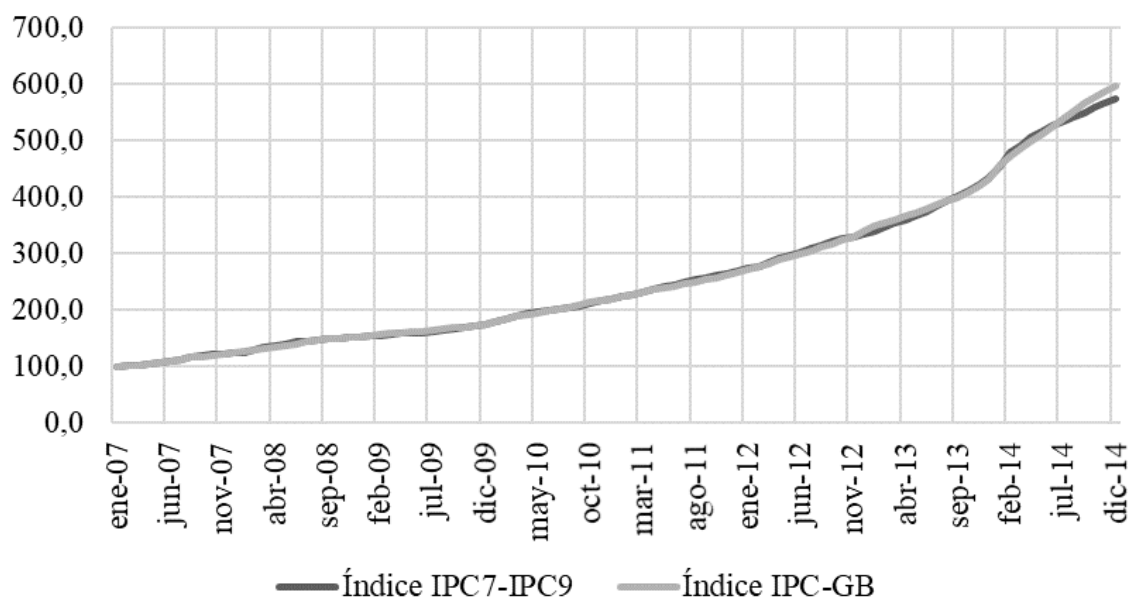
Aquí utilizamos el primero de los índices referidos. Para evaluar el posible sesgo que introducimos al tomar tal decisión, se compara la evolución del Índice IPC-GB y del Índice

²²¹ También existieron otros índices de precios que intentaron aproximarse a la evolución real de la inflación en el período. Uno de los casos más difundidos, a partir del 2011, fue el llamado “Índice Congreso”, elaborado por el Congreso de la Nación a partir de un promedio de los índices elaborados por consultoras privadas. Éstas también proveyeron medidas alternativas al índice oficialmente difundido por el INDEC.

²²² Inicialmente, a partir de 2007, se construyó un índice de 7 provincias: Jujuy (S.S. de Jujuy), Neuquén (Neuquén), Entre Ríos (Paraná), Chubut (Rawson-Trelew), Salta (Salta), La Pampa (Santa Rosa) y Río Negro (Viedma). En 2011, dos provincias dejaron de publicar sus índices (Entre Ríos y Río Negro). A partir de entonces, CIFRA (2012) señala que se recalculó el índice en base a la información de 9 provincias: Jujuy (S.S. de Jujuy), Neuquén (Neuquén), Chubut (Rawson-Trelew), Salta (Salta), La Pampa (Santa Rosa), Misiones (Posadas), San Luis (San Luis), Santa Fe (Santa Fe y Rosario) y Tierra del Fuego (Ushuaia).

IPC-9 Provincias. Como se observa en el Gráfico A4.1, las diferencias entre ambas evoluciones son mínimas.

Gráfico A4.1. Evolución mensual del Índice de Precios 9 Provincias y del IPC-GB Nivel General. Años 2007-2014 (*en base enero 2007=100*).



Fuente: elaboración propia a partir de IPC-GB y CIFRA-CTA.

A4.2. Acerca de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total utilizadas

Como se indicó en el cuerpo del texto, el análisis de las capacidades de subsistencia se llevó adelante mediante una aproximación usualmente asociada a los estudios de pobreza. Esta aproximación consiste en comparar los ingresos familiares con una canasta de bienes y servicios (Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total) en función de los requerimientos de una unidad consumidora equivalente. Los inconvenientes con los índices de precios aludidos previamente se repiten aquí, en tanto que aquéllos son insumos para la valorización periódica de la CBA y la CBT.

Si bien aquí exploramos diferentes metodologías de estimación, al momento de redacción apelamos a la CBA tradicional del INDEC, es decir, previa a la revisión integral reciente (INDEC, 2016), en particular, teniendo en cuenta la inexistencia de consensos académicos suficientes sobre cómo deflactar la nueva CBA del 2016 a los años precedentes. En este sentido, también se apeló a las tablas de equivalencias vigentes con anterioridad a la reciente revisión.

Con respecto a su valorización, hasta diciembre del 2006 se siguió la serie informada por el INDEC; entre enero del 2007 y diciembre del 2014, se apeló a la variación del Nivel General del IPC-GB. Por su parte, hasta diciembre del 2013, la inversa del coeficiente de Engel (ICE) surge del INDEC, mientras que para el año 2014 aplicamos la variación que surge de la ICE de los informes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2016).

Por último, en cuanto a la aplicación de las CBA al total de aglomerados (recuérdese que la metodología está realizada para el Gran Buenos Aires) se aplicó la “metodología de transición” del INDEC (INDEC, 2016). Tal metodología consiste en aplicar un coeficiente – basado en la paridad de poder adquisitivo– para obtener una CBA válida para cada región.

En los Cuadros A4.1 y A4.2 se presentan los valores corrientes de la CBA y de la CBT, respectivamente, que fueron utilizados para cada una de las regiones que componen la muestra de la EPH.

Figura A4.1. Canasta Básica Alimentaria por adulto equivalente según región (*en pesos corrientes*).

	GBA	NOA	NEA	Cuyo	Pampeana	Patagonia
IV 2003	105,1	92,5	94,6	93,5	98,8	108,3
IV 2004	108,3	95,3	97,5	96,4	101,8	111,5
IV 2005	123,4	108,6	111,1	109,8	116,0	127,1
IV 2006	130,9	115,2	117,8	116,5	123,0	134,8
IV 2007	165,4	145,6	148,9	147,2	155,5	170,4
IV 2008	205,4	180,8	184,9	182,8	193,1	211,6
IV 2009	234,3	206,2	210,9	208,5	220,2	241,3
IV 2010	294,0	258,7	264,6	261,7	276,4	302,8
IV 2011	356,7	313,9	321,0	317,5	335,3	367,4
IV 2012	449,8	395,8	404,8	400,3	422,8	463,3
IV 2013	571,1	502,6	514,0	508,3	536,8	588,2
IV 2014	800,0	704,0	720,0	712,0	752,0	824,0

Fuente: elaboración propia a partir INDEC, IPC-GB y FIEL (2016).

Figura A4.2. Canasta Básica Total por adulto equivalente según región (*en pesos corrientes*).

	GBA	NOA	NEA	Cuyo	Pampeana	Patagonia
IV 2003	229,7	202,1	206,7	204,4	215,9	236,6
IV 2004	238,5	209,9	214,7	212,3	224,2	245,7
IV 2005	266,5	234,5	239,9	237,2	250,5	274,5
IV 2006	285,7	251,4	257,1	254,3	268,6	294,3
IV 2007	356,1	313,4	320,5	316,9	334,7	366,8
IV 2008	453,3	398,9	408,0	403,4	426,1	466,9
IV 2009	526,4	463,2	473,8	468,5	494,8	542,2
IV 2010	635,0	558,8	571,5	565,2	596,9	654,1
IV 2011	788,3	693,7	709,5	701,6	741,0	811,9
IV 2012	1.004,5	884,0	904,1	894,0	944,2	1.034,6
IV 2013	1.298,3	1.142,5	1.168,5	1.155,5	1.220,4	1.337,2
IV 2014	1.779,8	1.566,2	1.601,8	1.584,0	1.673,0	1.833,2

Fuente: elaboración propia a partir INDEC, IPC-GB y FIEL (2016).

Anexo Metodológico V

Cuadros de información complementaria

A5.1. Resultados completos de regresión logística binaria

Se detallan aquí los resultados completos del modelo de regresión logística binaria múltiple que evalúa los determinantes del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L).

Cuadro A5.1. Determinantes^(a) del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L)^(b). Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (coeficientes y promedio de efectos marginales)^{(c) (d)}.

	2003		2008		2011		2014	
	B	AME	B	AME	B	AME	B	AME
PSH mujer	0,0298 (0,0913)	0,00463 (0,0142)	0,514*** (0,111)	0,0549*** (0,0121)	0,412*** (0,121)	0,0402*** (0,0121)	0,360*** (0,104)	0,0369*** (0,0109)
PSH varón ©								
Hogar monoparental	0,115 (0,116)	0,0180 (0,0182)	-0,0418 (0,134)	-0,00427 (0,0136)	-0,0569 (0,134)	-0,00532 (0,0125)	0,142 (0,125)	0,0144 (0,0129)
Hogar no monoparental ©								
Número de menores en el hogar	0,832*** (0,0351)	0,129*** (0,00442)	0,782*** (0,0353)	0,0804*** (0,00306)	0,830*** (0,0376)	0,0783*** (0,00313)	0,715*** (0,0329)	0,0713*** (0,00283)
PSH hasta 29 años	0,336*** (0,119)	0,0539*** (0,0191)	0,456*** (0,134)	0,0510*** (0,0152)	0,0475 (0,138)	0,00482 (0,0140)	0,505*** (0,133)	0,0536*** (0,0145)
PSH 30 a 49 años	-0,366*** (0,0977)	-0,0560*** (0,0149)	-0,213* (0,112)	-0,0214* (0,0113)	-0,365*** (0,117)	-0,0343*** (0,0111)	-0,0207 (0,102)	-0,00200 (0,00984)
PSH 50 años y más ©								
PSH con hasta primaria completa	1,620*** (0,110)	0,270*** (0,0182)	1,629*** (0,135)	0,174*** (0,0143)	1,040*** (0,139)	0,0971*** (0,0130)	1,671*** (0,135)	0,174*** (0,0141)
PSH con secundaria inc o comp.	0,784*** (0,0959)	0,120*** (0,0143)	0,833*** (0,119)	0,0753*** (0,00999)	0,751*** (0,124)	0,0658*** (0,0105)	0,890*** (0,120)	0,0771*** (0,00971)
PSH terciario o univ ©								
Región Gran Buenos Aires	0,426*** (0,133)	0,0626*** (0,0189)	0,798*** (0,125)	0,0704*** (0,0105)	0,661*** (0,137)	0,0542*** (0,0108)	0,613*** (0,120)	0,0525*** (0,00999)
Región Noroeste	1,210*** (0,136)	0,189*** (0,0200)	1,614*** (0,119)	0,165*** (0,0112)	1,178*** (0,134)	0,108*** (0,0114)	1,287*** (0,115)	0,126*** (0,0105)
Región Noreste	1,307*** (0,148)	0,206*** (0,0222)	1,574*** (0,127)	0,160*** (0,0126)	1,496*** (0,142)	0,145*** (0,0134)	1,344*** (0,127)	0,133*** (0,0126)
Región Cuyo	0,968*** (0,144)	0,149*** (0,0214)	0,866*** (0,143)	0,0774*** (0,0130)	0,695*** (0,159)	0,0574*** (0,0133)	0,930*** (0,134)	0,0852*** (0,0123)
Región Pampeana	0,606*** (0,129)	0,0906*** (0,0184)	0,674*** (0,116)	0,0580*** (0,00947)	0,526*** (0,130)	0,0419*** (0,00978)	0,576*** (0,113)	0,0490*** (0,00918)
Región Patagónica ©								
Número de ocupados en el hogar	-0,439*** (0,0481)	-0,0682*** (0,00734)	-0,739*** (0,0615)	-0,0760*** (0,00605)	-0,843*** (0,0728)	-0,0795*** (0,00659)	-0,746*** (0,0637)	-0,0744*** (0,00598)

Cuadro A5.1. Determinantes^(a) del déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L) (cont.)^(b). Hogares con PSH ocupado, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (coeficientes y promedio de efectos marginales) ^{(c) (d)}.

	2003		2008		2011		2014	
	B	AME	B	AME	B	AME	B	AME
PSH No asal, sector formal	-0,382*	-0,0512*	-0,770**	-0,0494**	0,0501	0,00323	0,183	0,0137
	(0,232)	(0,0295)	(0,379)	(0,0199)	(0,304)	(0,0198)	(0,300)	(0,0233)
PSH Asal, No Reg, sector formal	1,261***	0,209***	1,431***	0,158***	1,805***	0,188***	1,508***	0,159***
	(0,133)	(0,0225)	(0,147)	(0,0187)	(0,171)	(0,0210)	(0,143)	(0,0174)
PSH Empleado sector público	0,115	0,0167	-0,0210	-0,00165	0,0644	0,00417	0,0560	0,00403
	(0,124)	(0,0181)	(0,166)	(0,0130)	(0,170)	(0,0111)	(0,150)	(0,0109)
PSH No Asal, sector microinformal	1,107***	0,182***	1,583***	0,181***	1,828***	0,191***	1,727***	0,191***
	(0,114)	(0,0186)	(0,118)	(0,0143)	(0,143)	(0,0154)	(0,122)	(0,0141)
PSH Asal, Reg, sector microinformal	0,552***	0,0853***	0,435*	0,0383*	0,239	0,0163	0,398**	0,0316*
	(0,202)	(0,0326)	(0,225)	(0,0215)	(0,237)	(0,0168)	(0,197)	(0,0167)
PSH Asal, No Reg, sector microinformal	1,507***	0,254***	1,925***	0,234***	2,111***	0,235***	1,681***	0,184***
	(0,152)	(0,0262)	(0,153)	(0,0222)	(0,181)	(0,0237)	(0,152)	(0,0195)
PSH Asal, Reg, sector formal ©								
PSH - Rama construcción	0,517***	0,0842***	0,238	0,0253	0,168	0,0164	0,280*	0,0279*
	(0,166)	(0,0273)	(0,155)	(0,0166)	(0,188)	(0,0185)	(0,152)	(0,0153)
PSH - Rama comercio	-0,0297	-0,00468	0,114	0,0119	0,0159	0,00151	0,120	0,0116
	(0,125)	(0,0197)	(0,135)	(0,0140)	(0,158)	(0,0150)	(0,141)	(0,0136)
PSH - Rama servicio doméstico	-0,282	-0,0434	0,323	0,0348	0,659***	0,0705**	0,683***	0,0734***
	(0,216)	(0,0326)	(0,243)	(0,0272)	(0,249)	(0,0283)	(0,219)	(0,0250)
PSH - Rama servicios y otros	-0,0917	-0,0144	-0,0255	-0,00259	-0,0688	-0,00643	0,144	0,0139
	(0,121)	(0,0190)	(0,133)	(0,0135)	(0,153)	(0,0144)	(0,138)	(0,0132)
PSH - Rama industria ©								
Constante	-2,740***		-4,085***		-3,723***		-4,214***	
	(0,211)		(0,233)		(0,248)		(0,235)	
Observaciones		9.311		13.981		13.345		14.002
Pseudo R2 de McFadden		0,288		0,349		0,339		0,319
Aciertos (global)		75,4%		84,3%		86,0%		0,855
Aciertos (cat, de interés)		72,6%		66,9%		63,6%		63,2%

Notas: (a) Modelos de regresión logística binaria. Variable dependiente: presencia de ingresos por debajo de una CBT a partir del ingreso laboral / (b) Evaluadas a través del acceso a una CBT en función del ingreso total familiar de fuente laboral / (c) *Average Marginal Effects (AME)*, significancia de los efectos: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value <0,1. / (d) Errores estándar entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

A5.2. Modelos de regresión lineal sobre el ingreso horario de asalariados y no asalariados

Aquí se presentan los modelos especificados sobre el ingreso horario de los trabajadores asalariados y no asalariados. Cabe recordar que en el capítulo V estos modelos fueron utilizados para un ejercicio de microsimulación que, posteriormente, se retomó en el capítulo VI.

Cuadro A5.2. Determinantes^(a) del logaritmo del ingreso horario de la ocupación principal^{(b)(c)}. Asalariados, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014.

	2003	2005	2008	2009	2011	2014
Es PSH	0,222*** (0,013)	0,188*** (0,011)	0,216*** (0,009)	0,190*** (0,009)	0,240*** (0,009)	0,217*** (0,009)
Varón	0,012 (0,013)	0,038*** (0,011)	0,062*** (0,010)	0,031*** (0,009)	0,027*** (0,010)	0,020** (0,009)
Edad	0,033*** (0,002)	0,039*** (0,002)	0,026*** (0,002)	0,031*** (0,002)	0,031*** (0,002)	0,026*** (0,002)
Edad al cuadrado	0,000*** (0,000)	0,000*** (0,000)	0,000*** (0,000)	0,000*** (0,000)	0,000*** (0,000)	0,000*** (0,000)
Hasta primaria completa	-0,633*** (0,017)	-0,578*** (0,015)	-0,568*** (0,012)	-0,569*** (0,012)	-0,461*** (0,013)	-0,471*** (0,012)
Hasta secundaria completa	-0,431*** (0,014)	-0,386*** (0,012)	-0,358*** (0,010)	-0,338*** (0,010)	-0,335*** (0,010)	-0,290*** (0,010)
Sector público	0,064*** (0,017)	0,128*** (0,015)	0,139*** (0,012)	0,143*** (0,012)	0,199*** (0,012)	0,172*** (0,011)
Sector microinformal	-0,135*** (0,018)	-0,145*** (0,016)	-0,147*** (0,013)	-0,156*** (0,013)	-0,113*** (0,014)	-0,187*** (0,013)
No registrado	-0,260*** (0,015)	-0,331*** (0,013)	-0,295*** (0,011)	-0,300*** (0,011)	-0,284*** (0,011)	-0,235*** (0,011)
Construcción	-0,040 (0,030)	0,016 (0,023)	0,028 (0,019)	0,013 (0,020)	-0,043** (0,020)	0,068*** (0,019)
Comercio	-0,096*** (0,021)	-0,075*** (0,017)	-0,100*** (0,014)	-0,074*** (0,015)	-0,101*** (0,015)	0,015 (0,014)
Servicio doméstico	0,175*** (0,029)	0,118*** (0,024)	0,000 (0,021)	0,073*** (0,021)	-0,059*** (0,022)	0,046** (0,021)
Servicios	0,060*** (0,019)	0,035** (0,015)	0,050*** (0,013)	0,034** (0,013)	0,001 (0,014)	0,029** (0,013)
Área Gran Buenos Aires	-0,096*** (0,035)	-0,159*** (0,030)	-0,246*** (0,022)	-0,205*** (0,022)	-0,213*** (0,023)	-0,189*** (0,020)
Noroeste	-0,509*** (0,040)	-0,512*** (0,033)	-0,619*** (0,025)	-0,543*** (0,025)	-0,530*** (0,026)	-0,482*** (0,023)
Noreste	-0,541*** (0,044)	-0,555*** (0,037)	-0,610*** (0,029)	-0,549*** (0,029)	-0,613*** (0,030)	-0,484*** (0,027)
Pampeana	-0,255*** (0,036)	-0,206*** (0,030)	-0,281*** (0,023)	-0,258*** (0,023)	-0,234*** (0,024)	-0,224*** (0,021)
Cuyo	-0,416*** (0,041)	-0,364*** (0,035)	-0,438*** (0,027)	-0,403*** (0,027)	-0,428*** (0,028)	-0,399*** (0,025)
Constante	0,872*** (0,062)	1,111*** (0,055)	2,089*** (0,045)	2,152*** (0,046)	2,626*** (0,049)	3,409*** (0,045)
R2 del modelo	0,364	0,407	0,395	0,391	0,365	0,353

Notas: (a) Modelos de regresión lineal. Variable dependiente: logaritmo del ingreso horario de la ocupación principal / (b) ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1. / (c) Errores estándar entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

Cuadro A5.3. Determinantes^(a) del logaritmo del ingreso horario de la ocupación principal^{(b)(c)}. No asalariados, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014.

	2003	2005	2008	2009	2011	2014
Es PSH	0,532*** (0,031)	0,406*** (0,027)	0,529*** (0,022)	0,416*** (0,022)	0,402*** (0,023)	0,446*** (0,022)
Varón	-0,004 (0,033)	0,153*** (0,029)	0,050** (0,024)	0,162*** (0,024)	0,100*** (0,025)	0,129*** (0,024)
Edad	0,023*** (0,005)	0,031*** (0,005)	0,009** (0,004)	0,008** (0,004)	0,008 (0,005)	-0,004 (0,004)
Edad al cuadrado	0,000*** (0,000)	0,000*** (0,000)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)
Hasta primaria completa	-0,541*** (0,044)	-0,617*** (0,037)	-0,535*** (0,031)	-0,543*** (0,030)	-0,500*** (0,033)	-0,502*** (0,032)
Hasta secundaria completa	-0,196*** (0,040)	-0,343*** (0,034)	-0,269*** (0,028)	-0,249*** (0,027)	-0,284*** (0,029)	-0,280*** (0,028)
Sector microinformal	-0,554*** (0,045)	-0,532*** (0,038)	-0,534*** (0,031)	-0,532*** (0,030)	-0,425*** (0,032)	-0,500*** (0,033)
Construcción	0,085 (0,057)	0,054 (0,050)	0,054 (0,039)	0,135*** (0,040)	-0,020 (0,041)	0,133*** (0,040)
Comercio	-0,242*** (0,045)	-0,175*** (0,040)	-0,186*** (0,032)	-0,103*** (0,033)	-0,221*** (0,034)	-0,068** (0,034)
Servicios	0,240*** (0,046)	0,190*** (0,041)	0,126*** (0,033)	0,231*** (0,034)	0,120*** (0,036)	0,244*** (0,035)
Área Gran Buenos Aires	-0,073 (0,115)	-0,116 (0,101)	-0,217*** (0,064)	-0,209*** (0,065)	-0,118* (0,066)	-0,091 (0,064)
Noroeste	-0,542*** (0,123)	-0,642*** (0,107)	-0,742*** (0,071)	-0,674*** (0,072)	-0,557*** (0,073)	-0,386*** (0,072)
Noreste	-0,622*** (0,132)	-0,784*** (0,116)	-0,866*** (0,079)	-0,767*** (0,080)	-0,712*** (0,080)	-0,615*** (0,080)
Pampeana	-0,201* (0,116)	-0,292*** (0,103)	-0,321*** (0,065)	-0,340*** (0,067)	-0,285*** (0,068)	-0,173*** (0,066)
Cuyo	-0,420*** (0,126)	-0,537*** (0,110)	-0,459*** (0,075)	-0,480*** (0,075)	-0,500*** (0,076)	-0,359*** (0,074)
Constante	0,940*** (0,177)	1,186*** (0,163)	2,435*** (0,124)	2,476*** (0,120)	3,064*** (0,136)	3,827*** (0,127)
R2 del modelo	0,293	0,342	0,345	0,327	0,296	0,290

Notas: (a) Modelos de regresión lineal. Variable dependiente: logaritmo del ingreso horario de la ocupación principal / (b) ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1. / (c) Errores estándar entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año.

A5.3. Resultados completos de regresión logística binaria sobre déficit de capacidades de subsistencia en hogares beneficiarios de políticas sociales

Se detallan aquí los resultados completos del modelo de regresión logística binaria múltiple que evalúa los determinantes del déficit de capacidades de subsistencia en los hogares perceptores de ingresos de políticas sociales (capítulo VI).

Cuadro A5.4. Determinantes^(a) del déficit de capacidades de subsistencia^(b). Hogares con PSH activo beneficiarios de políticas sociales, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (coeficientes y promedio de efectos marginales) ^{(c) (d)}.

	2003		2008		2011		2014	
	B	AME	B	AME	B	AME	B	AME
PSH mujer	0,0854 (0,138)	0,0111 (0,0179)	0,105 (0,186)	0,00812 (0,0145)	0,288 (0,198)	0,0245 (0,0173)	0,413** (0,175)	0,0337** (0,0146)
PSH varón ©								
Hogar monoparental	-0,438** (0,176)	-0,0551*** (0,0213)	0,100 (0,201)	0,00781 (0,0160)	-0,175 (0,228)	-0,0141 (0,0178)	-0,0206 (0,196)	-0,00161 (0,0154)
Hogar no monoparental ©								
Número de menores en el hogar	0,873*** (0,0544)	0,113*** (0,00540)	0,743*** (0,0514)	0,0570*** (0,00325)	0,674*** (0,0509)	0,0557*** (0,00375)	0,758*** (0,0483)	0,0596*** (0,00354)
PSH hasta 29 años	0,933*** (0,209)	0,123*** (0,0274)	0,699*** (0,233)	0,0553*** (0,0184)	1,060*** (0,231)	0,0906*** (0,0204)	0,993*** (0,228)	0,0765*** (0,0175)
PSH 30 a 49 años	0,378** (0,169)	0,0478** (0,0210)	0,295 (0,201)	0,0214 (0,0143)	0,511** (0,201)	0,0388*** (0,0147)	0,683*** (0,190)	0,0491*** (0,0128)
PSH 50 años y más ©								
PSH con hasta primaria completa	1,883*** (0,203)	0,257*** (0,0258)	2,129*** (0,277)	0,150*** (0,0176)	1,647*** (0,288)	0,118*** (0,0171)	1,524*** (0,285)	0,112*** (0,0181)
PSH con secundaria inc o comp.	1,019*** (0,182)	0,128*** (0,0214)	1,258*** (0,255)	0,0698*** (0,0117)	1,230*** (0,277)	0,0790*** (0,0144)	0,955*** (0,267)	0,0605*** (0,0144)
PSH terciario o univ ©								
Región Gran Buenos Aires	0,482** (0,205)	0,0599** (0,0248)	0,526** (0,215)	0,0354** (0,0142)	0,630*** (0,232)	0,0443*** (0,0156)	0,234 (0,208)	0,0177 (0,0154)
Región Noroeste	0,988*** (0,198)	0,127*** (0,0244)	1,289*** (0,195)	0,102*** (0,0143)	1,031*** (0,217)	0,0794*** (0,0150)	0,384* (0,198)	0,0299** (0,0149)
Región Noreste	1,009*** (0,214)	0,130*** (0,0269)	1,368*** (0,206)	0,110*** (0,0160)	1,213*** (0,233)	0,0971*** (0,0180)	0,564** (0,223)	0,0456** (0,0179)
Región Cuyo	0,588*** (0,225)	0,0736*** (0,0278)	0,372 (0,234)	0,0242 (0,0152)	0,774*** (0,247)	0,0564*** (0,0177)	0,0973 (0,234)	0,00715 (0,0171)
Región Pampeana	0,464** (0,191)	0,0575** (0,0230)	0,379* (0,198)	0,0247** (0,0125)	0,584*** (0,218)	0,0407*** (0,0142)	0,102 (0,199)	0,00751 (0,0145)
Región Patagónica ©								
Número de ocupados en el hogar	-0,316*** (0,0756)	-0,0409*** (0,00960)	-0,402*** (0,0971)	-0,0308*** (0,00720)	-0,688*** (0,103)	-0,0569*** (0,00811)	-0,743*** (0,0896)	-0,0584*** (0,00691)
PSH No asal. sector formal	-4,098*** (1,076)	-0,255*** (0,0224)	-1,761* (1,031)	-0,0556*** (0,0182)	-0,591 (0,753)	-0,0219 (0,0233)	-0,822 (0,870)	-0,0279 (0,0225)
PSH Asal. No Reg. sector formal	1,151*** (0,245)	0,171*** (0,0377)	1,792*** (0,250)	0,154*** (0,0248)	1,753*** (0,280)	0,137*** (0,0236)	1,629*** (0,236)	0,120*** (0,0207)
PSH Empleado sector público	0,265 (0,189)	0,0358 (0,0258)	0,189 (0,316)	0,0105 (0,0181)	0,620** (0,310)	0,0343* (0,0184)	0,423 (0,296)	0,0215 (0,0161)
PSH No Asal. sector microinformal	0,831*** (0,210)	0,120*** (0,0308)	1,697*** (0,217)	0,143*** (0,0188)	1,927*** (0,249)	0,158*** (0,0196)	2,234*** (0,202)	0,193*** (0,0197)
PSH Asal. Reg. sector microinformal	0,403 (0,293)	0,0554 (0,0417)	0,00963 (0,346)	0,000509 (0,0183)	0,134 (0,374)	0,00629 (0,0180)	0,662* (0,351)	0,0363* (0,0220)
PSH Asal. No Reg. sector microinformal	1,044*** (0,267)	0,153*** (0,0407)	1,660*** (0,264)	0,138*** (0,0260)	1,943*** (0,277)	0,160*** (0,0239)	1,795*** (0,227)	0,138*** (0,0207)
PSH Desocupado o Benef. planes	3,364*** (0,233)	0,512*** (0,0284)	3,346*** (0,371)	0,388*** (0,0563)	2,925*** (0,383)	0,302*** (0,0518)	3,155*** (0,301)	0,333*** (0,0442)
PSH Asal. Reg. sector formal ©								

Cuadro A5.5. Determinantes^(a) del déficit de capacidades de subsistencia (cont.)^(b). Hogares con PSH activo beneficiarios de políticas sociales, total de aglomerados urbanos, Argentina, 2003-2014 (coeficientes y promedio de efectos marginales)^{(c) (d)}.

	2003		2008		2011		2014	
	B	AME	B	AME	B	AME	B	AME
PSH - Rama construcción	0,828*** (0,303)	0,112*** (0,0417)	0,502* (0,256)	0,0395** (0,0199)	0,291 (0,254)	0,0249 (0,0217)	0,406* (0,238)	0,0299* (0,0174)
PSH - Rama comercio	0,0550 (0,211)	0,00705 (0,0271)	0,394 (0,243)	0,0302* (0,0182)	0,0703 (0,241)	0,00574 (0,0196)	0,200 (0,232)	0,0141 (0,0161)
PSH - Rama servicio doméstico	0,436 (0,384)	0,0575 (0,0517)	0,940** (0,384)	0,0809** (0,0362)	0,851** (0,364)	0,0813** (0,0379)	1,413*** (0,331)	0,128*** (0,0333)
PSH - Rama servicios y otros	0,100 (0,185)	0,0129 (0,0237)	0,00954 (0,250)	0,000674 (0,0177)	-0,0826 (0,235)	-0,00652 (0,0187)	0,399* (0,225)	0,0293* (0,0159)
PSH - Rama industria ©								
Constante	-4,496*** (0,357)		-6,218*** (0,495)		-5,904*** (0,467)		-5,834*** (0,436)	
Observaciones		4.581		6.927		6.435		7.203
Pseudo R2 de McFadden		0,378		0,393		0,334		0,341
Aciertos (global)		80,8%		89,4%		89,0%		88,8%
Aciertos (cat, de interés)		80,0%		74,4%		69,8%		66,2%

Notas: (a) Modelos de regresión logística binaria. Variable dependiente: presencia de ingresos por debajo de una CBT a partir del ingreso total familiar / (b) Evaluadas a través del acceso a una CBT en función del ingreso total familiar / (c) *Average Marginal Effects (AME)*, significancia de los efectos: ***p-value < 0,01 / ** p-value < 0,05 / * p-value < 0,1. / (d) Errores estándar entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la EPH-INDEC correspondientes al cuarto trimestre de cada año